

Vanesa Coscia

¿Entre el diálogo y la confrontación? Luchas sindicales desde una perspectiva comunicacional

Christian Dodaro, Santiago Marino, María Graciela Rodríguez

Normalidad, excepción y oportunidades. Dinámicas culturales y políticas en el caso del activismo audiovisual (Argentina 2002-2004).

Marcela Perelman

Narrativas en disputa sobre violencia y protesta.

Agustín Nieto

Amotinados. Ira obrera en la industria pesquera argentina, 1997-2007

Ana Natalucci

Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008

Dossier

Juan Diez

Más allá de las palabras. Las transformaciones recientes del proyecto político zapatista

Melina Deledicque y Daniel

Contartese

Movimientos sociales en Bolivia. Las Juntas Vecinales de El Alto entre la institucionalidad y la rebelión.

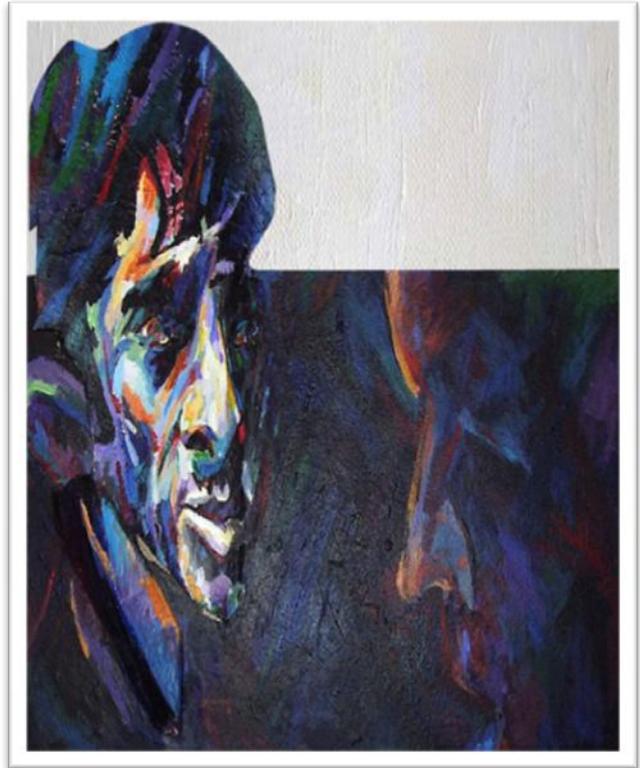
Silvana Lado y Adriana Olivera

Biopolítica habitacional. Una mirada sociológica a los sujetos como blancos de los servicios habitacionales.

INVITADO

José Nun

Sobre el concepto de masa marginal



Nº 23 “La protesta social hoy”

Revista Lavboratorio n° 23, año 10, Revista del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con el apoyo del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el auspicio de SEDECA (Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias).

ISSN: 1515-6370

Director Responsable: Eduardo Chávez Molina

Representante Legal: Agustín Salvia

Editor: Astor Massetti

Secretario de Redacción: Ernesto Philipp

Comité Editorial: Agustín Salvia, Eduardo Donza, Eduardo Chávez Molina, Astor Massetti, Ernesto Philipp, Enrique Andriotti Romanin, María Laura Canestraro, Gabriel Calvi.

Base de datos en que está referenciada Lavboratorio:

- Dialnet
- Latindex

Los artículos, ensayos, reseñas de libros y otros trabajos nacionales y extranjeros publicados en la Revista Lavboratorio, son seleccionados por el Cuerpo de Árbitros de la Revista, detallados al final del presente ejemplar, de acuerdo a la calidad de las mismas según pautas orientadoras del número. Están protegidos por el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, y su reproducción en cualquier medio, incluido electrónico, debe ser autorizada por los editores. Los textos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no comprometen necesariamente la opinión del Instituto de Investigaciones Gino Germani, ni del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Colaboraciones y Comentarios:

Revista Lavboratorio, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Uriburu 950 6° piso oficina 21, Cdad. de Buenos Aires (1114).

e-mail: lavbor@mail.fsoc.uba.ar

Diseño, diagramación e impresión: Ediciones Suárez, Julio A. Roca 4091, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires (7600), <http://www.edicionessuarez.com.ar>.

Ilustración de tapa: gentileza de Andrea Sanmartín.

Revista de circulación gratuita, solicítela al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Uriburu 950 6° piso oficina 21, Cdad. de Buenos Aires (1114), o al Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3350, 2° Nivel.

Autoridades

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Decano Prof. Federico Schuster.

Vice Decana Prof. Damián Loreti.

Director Instituto de Investigaciones Gino Germani: Dr. Julián Rebón.

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Decana Mg. Cristina Amanda Rosenthal

Vice Decana Dra. María del Carmen Coira

Coordinador Departamento de Sociología: Enrique Andriotti Romanin.

Comité de referato de n° 23

Almir al Kareh (Universidad Federal Fluminense)

Astor Massetti (IIGG/UBA/UNMdP)

Diego Domínguez (IIGG/UBA)

Eduardo Chávez Molina (IIGG/UBA/UNMdP)

Eduardo Donza (IIGG/UBA)

Enrique Romanin (UNMP)

Ernesto Meccia (UBA)

Ernesto Phillip (IIGG/UBA)

Ezequiel Ipar (UBA/UNMdP)

Federico Lorens Valcarce (IIGG/UBA/UNMdP)

Fortunato Mallimaci (CEIL-PIETTE)

Gabriel Calvi (UBA)

Gabriel Vommaro (UNGS)

Gabriela Merlinsky (IIGG/UBA)

Gabriela Wyczykier (UNGS)

Germán Pérez (IIGG/UBA)

Leandro Sepúlveda (Univ. of Middlessex, Inglaterra)

Marcelo Gómez (UNQui)

María Laura Canestraro (UNMdP)

Mario González (Univ. Bolivariana, Chile)

P. José Meisegeier (SEDECA)

Pedro Tsakoumagkos (UBA, UNLu, GESA-UNCo)

Contenido

¿Entre el diálogo y la confrontación? Luchas sindicales desde una perspectiva comunicacional	8
Vanesa Coscia	
Normalidad, excepción y oportunidades. Dinámicas cultural y política en el caso del activismo audiovisual (Argentina 2002-2004).	25
Christian Dodaro , Santiago Marino, María Graciela Rodríguez.	
Narrativas en disputa sobre violencia y protesta	43
Marcela Perelman	
Amotinados. Ira obrera en la industria pesquera argentina, 1997-2007	63
Agustín Nieto	
Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales	90
Ana Natalucci,	
Sobre el concepto de masa marginal	109
José Nun	
Más allá de las palabras. Las transformaciones recientes del proyecto político zapatista	120
Juan Diez	
Movimientos sociales en Bolivia. Las Juntas Vecinales de El Alto entre la institucionalidad y la rebelión.	134
Melina Deledicquey Daniel Contartese	
Biopolítica habitacional. Una mirada sociológica a los sujetos como blancos de los servicios habitacionales.	149
Silvana I. Lado , Adriana B. Olivera	

Presentación

El número 23 de *Laboratorio* es una recuperación y también una celebración, en el sentido de que hemos vuelto al papel luego de 7 años de haberlo abandonado. Con el apoyo del Fondo de Ciencia y Tecnología (FONCYT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta iniciativa académica del equipo Cambio Estructural y Desigualdad Social, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, retoma la senda de la “revista”; formato tradicional en las Ciencias Sociales para divulgar experiencias y trabajos científicos, tanto de investigadores nacionales como latinoamericanos principalmente.

Otro aspecto sustantivo es la consolidación de un cuerpo de árbitros permanentes que han colaborado con mucha energía y entusiasmo para calificar la gran cantidad de artículos enviados al presente número. El agradecimiento a todos ellos y ellas, que han seleccionado los mejores artículos.

Un punto aparte es el apoyo a esta iniciativa de recuperación, que proviene de la carrera y el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, carrera reabierto luego de 31 años, después del cierre doloroso y cruento de la última y esperemos “última” dictadura militar en el país. Carrera que da sus primeros pasos, con un plantel docente joven, y con un plantel de estudiantes entusiastas,

recuperando día a día una carrera que tuvo entre sus docentes a Enrique Pecoraro y Roberto Carri, entre otros.

También, en este entramado de recuperación, un lugar destacado ocupa el investigador Agustín Salvia, director del Equipo Cambio estructural y Desigualdad Social, con su continuo aliento y experiencia para proseguir este espacio de divulgación.

Y no puede estar ausente, en tono de homenaje, un agradecimiento particular a José Nun, “el sociólogo” abogado y economista, por acercarnos un artículo sobre la conceptualización de la masa marginal, y reactualizar continuamente el debate sobre la exclusión en América Latina, fuente de argumentación sobre muchos aspectos de los movimientos sociales emergentes hace más de una década.

En sus más de diez años de vida *Laboratorio* se ha preocupado por interpretar los cambios coyunturales que se han observado en nuestro país desde la óptica de la investigación empírica y de la reflexión de los más prestigiosos investigadores del medio local e internacional. Nuestro número 23 se sitúa en una temática particular: la protesta social. Sus enfoques no escapan a un contexto actual de disputa por el espacio político y económico, en el marco de confrontación social luego de la discusión por la ley 125 de retenciones móviles agropecuarias a la exportación de soja, y actualizadas hoy a través de la implementación de la asignación universal por hijos destinadas a paliar las situaciones de pobreza en el país, que han

reconfiguraron el escenario de la protesta en la Argentina.

Bajo esos parámetros, la confrontación política a través de nuevos actores, y el uso remozado de nuevos instrumentos de protesta colectiva, (el cine documental, internet, los diarios alternativos, la calle, el corte de ruta, la barricada y el cordel, entre otros) recupera un debate que actualiza continuamente la mirada de las ciencias sociales sobre esta problemática.

Los diferentes autores que aquí se presentan, también recuperan no sólo tradiciones de análisis sobre la coyuntura nacional, sino también reactualizaciones de debates, y que desde perspectivas disímiles citan continuamente, como foco inspirador, el legado teórico de Charles Tilly.

Como planteaba Salvador Aguilar, en un escrito de homenaje a Charles Tilly de la *editorial hacer* de Barcelona: *“...introdujo muchos más avances duraderos. Uno, la consideración de que los actores organizados no disponen de un arsenal ilimitado y a voluntad de recursos para la protesta y que dependen para ello de las tradiciones culturales heredadas desde dentro del conflicto. Esta idea, manejada ya por investigadores previos, la transformó Tilly en un concepto robusto y sistemático que está en el origen de muchos estudios posteriores que esclarecen la cuestión: la noción de repertorios de acción colectiva, definidos por él como relativamente deliberado. Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la*

filosofía abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha.”

Es en la protesta donde la gente aprende a organizarse, a ser solidaria en la acción, a compartir su tiempo y su presente, pero también a romper ventanas, atacar policías cuando estos emprenden con furia la disuasión de la ocupación callejera, a derribar casas deshonradas como las “madres del paco”, a escenificar marchas públicas, hacer peticiones, a mantener reuniones formales u organizar espacios de propaganda.

Esta escenificación de la “contienda política” se actualiza diariamente, en cada movimiento social que clama particularmente su destino, en cada demanda particular por cambiar los ejes de la distribución de la riqueza, del poder y la cultura dominante.

Laboratorio recupera ese sentido de discusión, casi en tono de arenga, y que expresa la plural perspectiva de análisis en que se presentan, priorizando una razón académica, y una democrática forma de expresar el desarrollo de la ciencia social, a través de un instrumento de divulgación creado por la universidad pública.

Diciembre 2009, Los editores.

¿Entre el diálogo y la confrontación? Luchas sindicales desde una perspectiva comunicacional

*Vanesa Coscia*¹

Resumen

A partir del 2004, en Argentina, las luchas sindicales volvieron a la escena pública y los medios masivos se constituyeron en actores políticos claves en la construcción de estos acontecimientos. En este sentido, el presente artículo analiza de qué modo son representados los gremios y los dirigentes sindicales en Clarín, el líder de la prensa gráfica nacional, a partir de dos ejes de análisis. El primero trabaja sobre la tensión entre piqueteros y gremios tradicionales, como expresiones del conflicto social; el segundo focaliza en las relaciones entre gremios denominados “dialoguistas” y “confrontativos”.

Palabras claves: lucha sindical, medios de comunicación, gremios y movimientos sociales

Summary

Since 2004, in Argentina, the trade unions fights got back to the public scene and the mass media were important political actors in that process. In that sense, this article analyzes the representations of trade unions and their leaders produced by Clarín - the main Argentinian newspaper-, focusing on two issues. First, the tension between the social movement called “piqueteros” and the traditional trade unions as expressions about social conflict. On the other hand, the links between trade unions called “dialoguers” and the ones called “fighters”.

Key words: Trade Union struggle, media, unions and social movements

Recibido: 18.07.2009 Aprobado: 27.10.2009

¹ Conicet/IDES. Doctoranda Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Introducción

A la luz de las luchas sindicales que adquirieron visibilidad en los medios masivos en Argentina a partir del año 2004, en este artículo nos proponemos analizar las estrategias mediáticas puestas en juego por Clarín, el líder de la prensa gráfica nacional, para representar a los sindicatos, a los dirigentes gremiales y a las protestas. A partir de lo cual, nos preguntamos ¿Cuáles son los modos en que las nociones de *trabajadores ocupados*, *desocupados*, *diálogo*, *confrontación* y *conflictividad* fueron (re)configuradas en la superficie mediática?²

En esta investigación trabajamos sobre dos ejes de análisis en torno a la representación del actor sindical tradicional, particularmente, la Confederación General del Trabajo (CGT). El primero de estos ejes se vincula con los significados que le asigna Clarín al movimiento sindical en contraposición con el movimiento piquetero, teniendo en cuenta el pasaje, mencionado por Svampa (2005), de una matriz centrada en lo territorial a una matriz sindical. El segundo eje focaliza en la relación entre gremios que denominamos “dialoguistas” y “confrontativos”³, teniendo en cuenta sus diversos posicionamientos respecto de la protesta y la conflictividad social.

² Agradezco las lecturas, sugerencias y comentarios de Adriana Marshall y María Graciela Rodríguez a las versiones preliminares de este trabajo.

³ Aquí se incluyen tanto a gremios tradicionales de la CGT como a las denominadas “nuevas formaciones sindicales”, es decir, agrupaciones opuestas a sus cúpulas, con dirigencias de izquierda y que, en su mayoría, provienen de comisiones gremiales internas tales como los delegados de subte, trabajadores del hospital Garrahan y trabajadores telefónicos.

El período de análisis seleccionado comienza en el año 2004 y finaliza en el 2007 con el fin del mandato del presidente Néstor Kirchner. Durante este período se asistió a un proceso de crecimiento económico con recuperación del empleo y aumento de la inflación, con una dinamización de los reclamos salariales y la negociación colectiva. En este marco, se dio inicio a una nueva etapa de acción sindical que, después de más de diez años de aletargamiento obrero, puede considerarse como un punto de inflexión para reflexionar sobre los modos en que los medios masivos representan al actor gremial. En este sentido, los interrogantes que se intentarán responder en estudio son ¿Cómo se caracteriza a los sindicatos tradicionales y sus posicionamientos ante el conflicto social? ¿Cómo se representa a los gremios de la CGT: a sus dirigentes peronistas y a aquellos gremios que tienen entre sus filas dirigentes de izquierda? ¿Cómo se construye a estas “nuevas” formaciones sindicales provenientes de comisiones internas, enfrentadas a las cúpulas oficiales?

Desde dónde pensar a los medios de comunicación

En la actualidad, los medios de comunicación masiva se constituyen en uno de los espacios más relevantes en lo que atañe a la (re)configuración de imaginarios sociales y subjetividades. En este marco, asumen un rol de retransmisores de los conocimientos y de las “verdades oficiales” en la permanente búsqueda por construir consensos sociales. Tienden a señalar lo que debe y lo que no debe hacerse, calificar lo “normal” y lo “anormal”, e intentar así normalizar comportamientos sociales. En este sentido, cobra importancia su incidencia en la vida cotidiana de los individuos, a través de

los discursos que vehiculizan como “verdades inmutables” bajo la noción de “objetividad periodística”. Considero con Bourdieu que “las categorías de percepción, los sistemas de clasificación, es decir, las palabras, los nombres que construyen la realidad social tanto como la expresan, son la apuesta por excelencia de la lucha política” (1996:84). Estas formas de nominación, este poder simbólico de los medios de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo, contribuyen a la conformación de un sentido común hegemónico, presentado como el único posible.

En este trabajo reconocemos el carácter político de los procesos comunicacionales y consideramos a la cultura como espacio de disputa de significados, de una lucha por quién define lo legítimo y lo que no lo es (Hall, 1984 y 1998). Además, concebimos a los medios masivos, no como plataformas neutrales por donde circulan discursos, sino como actores sociales y políticos con incidencia en los conflictos sociales (Borrat, 1989). Es por esta razón que se toma a los discursos mediáticos como *narrativas de control*, en tanto la narrativa “no es un fenómeno de comunicación fijo y estable sino más bien parte de un terreno complejo y cambiante de sentido que constituye el mundo de lo social”. Simultáneamente, la noción de control supone que “la construcción social de la realidad incluye una lucha entre las distintas maneras de ‘fijar’ sentidos. Como tal, la construcción social de un sentido es inevitablemente un proceso político” (Mumby, 1997; 14 y 18 respect.).

Siguiendo esta línea de razonamiento, se utiliza también la categoría de *cadena asociativas* que se constituyen en la superficie mediática (Laclau y Mouffe, 1987) a partir de las

cuales es posible analizar las dinámicas de producción de sentidos sociales. En este marco, y en relación con el tema gremial, se focaliza como dijimos al principio en cuáles son los significados que recorren a las denominaciones de *sindicatos, negociación, diálogo, confrontación, protesta, dirigentes sindicales* y cuáles son las atribuciones que se les asignan en cada caso.

Metodología de análisis

La metodología utilizada en este estudio supone una combinación de herramientas socio-semióticas y de análisis de contenido⁴, privilegiando la mirada cualitativa para dar cuenta de las interrelaciones discursivas y las articulaciones socio-comunicacionales en la superficie mediática.

Para analizar las representaciones de *Clarín* sobre los sindicatos a partir de los dos ejes de análisis planteados (sindicatos y piqueteros/gremios “dialoguistas” y “confrontativos”), se seleccionaron en total 111 noticias correspondientes al período 2004-2007⁵. Para el primer eje de análisis se trabajó con 31 noticias que hacían referencia a la oposición entre gremios y piqueteros; y para el segundo con 80 notas sobre conflictos sindicales encabezados por gremios de la CGT y por nuevas formaciones sindicales (en el primer caso, 23

⁴ Para ello se tuvieron en cuenta los análisis de Verón (1987ayb) y Martín Barbero (1989) así como los aportes realizados por Martini y Luchessi (2004) y Ford (1994) sobre la importancia de los criterios de noticiabilidad, fuentes, modalidades discursivas y casuística.

⁵ El relevamiento se hizo a partir de la revisión exhaustiva de las noticias correspondientes a dicho período y se excluyeron del estudio aquellas que no respondían, estrictamente, a los ejes de análisis planteados. Por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las noticias sobre protestas piqueteras donde no hubiera referencia a la tensión entre sindicatos y piqueteros.

noticias sobre el conflicto de petroleros y 14 sobre la protesta en Aerolíneas Argentinas y Austral; y en el segundo caso, 20 noticias correspondientes al conflicto del Hospital Garrahan y 23 a protestas de subtes).⁶

A partir de esta selección, se utilizó una matriz de análisis puesta a prueba en trabajos previos (Coscia, 2007a; 2007b, y 2008a) para catalogar dichas noticias. Esta matriz comprende tres dimensiones⁷:

- Formal: sección en la que aparecen las noticias, géneros utilizados, fotografías, caricaturas, aparición en chistes, inclusión de gráficos y mapas, series discursivas, cintillos de titulación.
- De contenidos: criterios de noticibialidad, formas de jerarquización y construcción de la noticia; identificación de las causas que provocaron los conflictos, duración, intensidad y atribución asignada a la temática; cambios/virajes en las formas de representación.
- De los actores: identificación de los principales actores representados en la noticia y sus formas de caracterizarlos: privilegio de fuentes, interlocutores de cada grupo –gobierno, sociedad, sindicato y empresa-, exaltación o invisibilización de

⁶ Si bien *Clarín* también representó otros conflictos sindicales en el período mencionado, en este estudio se seleccionaron cuatro casos para ejemplificar continuidades y diferencias entre las protestas encabezadas por nuevas formaciones sindicales y las protagonizadas por gremios pertenecientes a la CGT.

⁷ Estas dimensiones fueron extraídas de una matriz elaborada en el marco del proyecto UBACyT S043: "Del evento al acontecimiento: Memoria popular y representaciones mediáticas", Facultad de Ciencias Sociales, UBA, bajo la dirección de la Dra. María Graciela Rodríguez, en el que participé como investigadora.

discursos, identificación de líderes, personalización de la noticia, la figura del *tercero damnificado*, la construcción de "victimas"/"victimarios".

Por otra parte, es preciso resaltar que en este trabajo no se realizó una ponderación entre notas editoriales, crónicas o notas de opinión, sin desconocer que se trata de diferentes niveles de jerarquización. La nota editorial es "la voz del diario", donde se puede visualizar claramente la postura que asume el medio en los conflictos. Como menciona Borrat (1989), comentar un tema es conferirle un rango más elevado que el de aquellos que solamente son narrados. En una crónica aparece más velada la postura del diario y en una nota de opinión el medio toma distancia, poniendo la opinión en palabras de otro aunque la elección de la fuente no es casual y responde a la representación que el medio busca transmitir y reforzar. No obstante, considero con Mattelart que analizar, por ejemplo, solamente la función interpretativa del área editorial, "deja en la sombra el material donde la ideología –al parecer ausente- actúa más eficazmente a través de su carácter difuso que tiene nombre de objetividad" (1970:80).

Además, se tuvo en cuenta no sólo la tematización, es decir, la inclusión de temas en la agenda mediática, sino el modo de construcción de la noticia y la atribución asignada a sucesos y actores: los medios no sólo señalan "qué" es lo que debe pensarse sino que le confieren una atribución/valoración a la noticia y a los actores implicados en ella⁸. Según Zald (1999) la tendencia predominante es

⁸ Para ampliar sobre los conceptos de *agenda temática* (el *qué* de la noticia) y *agenda atributiva* (el *cómo* de la noticia) en la prensa gráfica, ver Martini y Luchessi (2004).

que los temas conflictivos permanezcan muy poco tiempo en las agendas. Sin embargo, aún en los casos en que se incluye un tema conflictivo durante varios días, esto no determina ni garantiza mayor nivel de información⁹. Se ha argumentado que la lógica que predomina en este tipo de medios masivos es la de la *espectacularización*, es decir, la apelación a la dimensión emocional del lector a partir de la cual se intenta domesticar el desorden y volverlo consumible como espectáculo (Imbert, 2002).

Clarín ¿el gran diario argentino?

Además de los análisis restringidos a comprender los mecanismos discursivos que se conforman en la superficie mediática sobre determinadas temáticas (en este caso, sindical), consideramos con Bourdieu (1997) que es imprescindible conocer y tener en cuenta quiénes son los propietarios de los diarios analizados y qué lugar ocupan estos grupos, poderosos *holdings* empresarios, en la estructura general de medios y en la estructura económica y política del país. En este sentido, identificar a los propietarios de los medios puede dar ciertos indicios sobre los intereses a los que responden en sus coberturas.

A partir de los años '90, los grandes medios masivos sufrieron un

⁹ Como sostengo en trabajos previos (Coscia, 2004 y 2007a) en el caso de las representaciones sobre protestas de trabajadores de subtes y telefónicos o, incluso, de piqueteros la jerarquización del conflicto guardó relación con el objetivo de despolitizar y estigmatizar las acciones colectivas de lucha, sin reponer los procesos históricos del conflicto. En consecuencia, podríamos pensar que los medios representan los conflictos, en este caso gremiales, como algo patológico y, por lo tanto, "negativo", es decir, como una deficiencia en el sistema que debe corregirse, normalizarse.

proceso de fuerte concentración y profundas transformaciones en su estructura de propiedad, pasando a conformar *holdings multimédios empresarios*¹⁰. Un rasgo a destacar es la continuidad, desde los '90 hasta los últimos años, de este proceso de concentración horizontal y vertical, luego de que se renovaran las licencias de los principales grupos multimédios por 10 años más, en mayo de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.¹¹

El diario seleccionado para este análisis es *Clarín*, el matutino nacional de mayor circulación del país según las mediciones del Instituto Verificador de Circulaciones (I.V.C.). Dicha selección responde además a que es uno de los medios de comunicación que posee el multimedio Grupo Clarín, holding que tiene una composición accionaria en la cual el 82% es de G C Dominio (Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda) y el restante 18 % es de Goldman Sachs S.A.¹²

¹⁰ Para ampliar sobre los procesos de concentración en el marco de la economía política de medios ver Mastrini y Becerra, 2001.

¹¹ Es preciso destacar que el 10 de octubre de 2009 se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de desconcentrar la propiedad de los medios, descentralizar la producción de contenidos, fomentar un uso plural del espectro e incluir a las minorías parlamentarias en el control de las políticas comunicacionales. Medidas que implicarían, en última instancia, que los multimédios vieran limitado su espacio en el mercado de las comunicaciones. Para ampliar sobre las características y controversias que suscitó el proyecto y su posterior sanción ver Aruguete, 2009 y Mastrini, 2009

¹² Estos datos, que corresponden al período analizado, fueron extraídos del mapa de medios publicado en http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/mapa_medios/clarin.htm, 30 de Marzo de 2009.

Los medios gráficos que controla este multimedio son el diario deportivo *Olé*, 75 % de *La Razón*, Revista *Genios* y Revista *Elle* entre otras revistas. En televisión tiene la licencia de Canal 13 (Artear SA), las señales de cable Volver, Todo Noticias (TN), TyC Sport y posee la empresa de cable Multicanal. Además, controla el 30 % de la productora Pol-Ka y parte de Patagonik Film Group. En cuanto a emisoras radiales tiene Radio Mitre (AM 790), La 100 (FM 100) y GEN (FM 101,5). En sociedad con el diario *La Nación* controla la empresa CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación) que maneja el diario *La Voz del Interior* (Córdoba) y *Los Andes* (Mendoza). También es propietario, junto con el Estado y el diario *La Nación*, de Papel Prensa S.A. (36,9% del Grupo Clarín; 36,9% diario *La Nación* y 26,2% Estado Nación), la mayor planta de producción de papel prensa del país.

El diario se presenta a su público bajo el cintillo: "Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos". Su formato, tabloide, se imprime en su mayoría a color y su tapa se caracteriza por un titular grande en la parte superior de la página, una foto de otra noticia en la parte inferior y una pequeña columna que anuncia otras informaciones. Sus secciones habituales, en orden de aparición y nivel de jerarquía, son en este período (2004-2007): El País (política y economía nacional) El mundo (política internacional), Sociedad (temas sociales a nivel nacional), La Ciudad (temas sociales y culturales de Capital Federal y de Gran Buenos Aires), Policiales, Deportes y Espectáculos. Además, el diario tiene dos editoriales: una principal ubicada en las páginas centrales del diario y la otra "Del editor al lector" ubicada en la

página 2 que se especializa en temas coyunturales. A la derecha de esta última, puede visualizarse una columna denominada "semáforo" en la que hay 4 o 5 noticias breves, acompañadas de fotos de rostros del protagonista, un corto título y el color de la luz del semáforo que, para *Clarín*, corresponde atribuir a la conducta de ese personaje.

En cuanto a las secciones en las que se ubican, específicamente, las noticias sobre la temática gremial, la mayoría son colocadas en "El país" (política y economía nacional) que es la primera sección de este diario y, por tanto, una de las más jerarquizadas. Sin embargo, la mayoría de los conflictos gremiales, cuando no hay intervención del gobierno, se trasladan a las secciones de información general como "Sociedad" o "La Ciudad", lo que supone un fuerte desplazamiento en la jerarquización de esos temas. Es decir, la noticia pasa de estar ubicada entre las primeras 10 páginas del diario a estar entre las páginas 40 y 50. Y además pasa de ser construida como una cuestión de política y economía a ser tematizada como un acontecimiento de información general, junto a los problemas del tránsito y los temas culturales.¹³

Clarín está dirigido a un lector de clase media e intenta establecer una relación horizontal con el ciudadano y, por elevación, hacer una crítica o propuesta a las instituciones sociales y al gobierno, en el período analizado. Sus títulos se caracterizan por ser informativos, explicativos, y utiliza un lenguaje coloquial para llegar a su lector

¹³ Para ampliar sobre las implicancias despolitizadoras de este tipo de desplazamientos de zonas "duras" (política y economía) a zonas "blandas" (temas de la ciudad, sociales, culturales) en conflictos gremiales, ver Coscia (2008a).

modelo: “la gente”¹⁴. Además, *Clarín* construye un contrato de lectura a través del cual busca la cercanía, la ilusión de feedback comunicacional con su interlocutor. Esto lo realiza a través de, por ejemplo, la inclusión del mail personal del periodista que publica las notas principales y también las mencionadas “puntos de vista” o “en foco” (pequeñas notas de opinión que remiten al tema principal de la noticia). Específicamente, luego del 2003 el nuevo diseño de *Clarín* tuvo como uno de sus objetivos promover un cambio de imagen que apuntara a reforzar la función fáctica, es decir, aquella que prioriza el contacto con el destinatario.¹⁵

Sindicatos: ¿De donde vienen, adonde van?

Hacia el año 2004 el espectro sindical tradicional lo componía la CGT oficial con Rodolfo Daer como secretario general y la CGT disidente con Hugo Moyano a la cabeza. Paralelamente la CTA, que había nacido como opositora en los '90, continuaba constituyéndose como central alternativa (sin personería gremial) aunque a partir del 2003, con la asunción del gobierno de Kirchner, mantuvo una postura ambigua y muchos de sus dirigentes optaron por acompañar política y partidariamente al mandatario.¹⁶

Para comprender la manera en que se conformaron ciertos discursos mediáticos en torno a los sindicatos tradicionales durante el período 2004-2007 debe reponerse cuál es el contexto previo del que vienen dichos sindicatos señalando algunas particularidades, posicionamientos y lógicas de negociación.

En los '90, con el avance neoliberal, los sindicatos se debilitaron en tanto grupo de presión en la puja distributiva. Su adaptación al modelo del neoliberalismo incluyó, sobre todo por parte de los sindicatos de la CGT oficial, la transformación en un “sindicalismo empresario” que adquirió ciertos rasgos entre los que se cuentan la personificación directa de capital a través de la creación de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y de los Programas de Propiedad Participada (PPP) en las empresas privatizadas. Este proceso configuró un nuevo escenario en el que se combinó el ofrecimiento histórico de servicios por parte de los sindicatos con una lógica de explotación de algunos de esos servicios a modo de negocio empresarial, sumado al enriquecimiento personal de las cúpulas sindicales burocráticas y a la transformación de dirigentes sindicales de representantes de los trabajadores en sus empleadores.¹⁷

¹⁴ En el análisis posterior se explicará la importancia del término gente, en contraposición a la noción de “pueblo” tal como lo señala Sarlo (2001).

¹⁵ Para ampliar sobre las particularidades que adquirió el re-diseño de *Clarín* a través del análisis de las cuestiones formales involucradas, ver Marino y Rodríguez (2007)

¹⁶ Para ampliar sobre los orígenes, objetivos y características de la CTA ver Armelino (2005). En este estudio no se analizarán las representaciones de *Clarín* en torno a la CTA y sus dirigentes.

¹⁷ Para ampliar sobre este tema del *sindicalismo empresario* en los '90, ver Murillo (1997 y 2005) y Coscia (2008b) en lo que respecta a la adquisición de capital por parte de importantes sindicatos pertenecientes a la CGT, el detalle de cuáles fueron las organizaciones sindicales implicadas y cuál fue el porcentaje accionario de capital involucrado. Ver Palomino (2005) y Campione (2002) para analizar los efectos de esta nueva fisonomía sindical, reflexionar sobre sus especificidades y sus consecuencias para los trabajadores

Por otra parte, el aumento del desempleo, la pérdida de puestos de trabajo, el incremento de la pobreza y la flexibilización en los contratos laborales, redundaron en que el sindicato dejara de ser expresión y motor del conflicto social y el movimiento piquetero “ganara las calles” y se convirtiera en principal dinamizador de los reclamos de los trabajadores, pero de los desocupados.

Es importante mencionar, en torno a la difícil (re)construcción de solidaridades entre trabajadores ocupados y desocupados, que las relaciones entre sus respectivas organizaciones fueron complejas desde los inicios. Durante los '90, la CGT no fomentó lazo alguno con los piqueteros. En cambio, la CTA buscó tender puentes con ellos. Hasta Hugo Moyano, desde el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA)¹⁸, intentó un acercamiento aunque efímero ya que en la II Asamblea Piquetera del 2001 los desocupados le impidieron hablar.

Luego de la crisis de 2001 y posterior al 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, se insinuaron nuevas formaciones sindicales que hicieron explosión a fines de 2004, principios de 2005 y que en el marco del “corrimiento hacia la normalidad institucional” (Svampa, 2005) tanto desde el gobierno,

¹⁸ El MTA se formó hacia 1994 y lo conformarían los gremios pertenecientes a la CGT disidente, liderados por Juan Manuel Palacios (de Unión Tranviarios Automotor –UTA), y Hugo Moyano (del Sindicato de Choferes de Transporte de Carga –Camioneros-). El MTA estuvo compuesto por más de 15 organizaciones sindicales. Entre ellos, se cuentan la Asociación del personal de aeronavegación (Azafatas -Alicia Castro-), Molineros, Papeleros, Periodismo, Docentes privados, músicos, farmacia, dragado y balizamiento, visitantes médicos. Para ampliar, ver Fernández, 1997.

como desde la CGT y sus históricos dirigentes (incluido el mismo Moyano) se avaló e impulsó el aislamiento del movimiento piquetero. Esta época coincide, además, con una revitalización de la dinámica sindical (en el 2005 se triplicó la cifra de conflictos sindicales respecto de 2004), incremento de luchas por aumentos salariales, recategorizaciones y aumentos de firmas de convenios colectivos de trabajo (CCT). Para dar un ejemplo el promedio de CCT firmados en los '90 fue de aproximadamente 200, mientras en los últimos años -2005 al 2007- la cifra se quintuplicó, llegando a más de 1000 CCT homologados (Palomino, 2008). En ese marco, nuevas expresiones sindicales conformadas por delegados combativos, comisiones internas por fuera de los sindicatos tradicionales o de las centrales reconocidas volvieron a ganar el espacio público.

Narrativas en acción

a) ¿Sindicatos vs. piqueteros?

En este apartado se da cuenta de los modos en que *Clarín* representó a los gremios en su vinculación con el movimiento piquetero. Para ello, se seleccionaron 31 notas que fueron ubicadas en su sección “El País”. Si bien algunas noticias sobre piqueteros se ubican en la sección Ciudad (que son aquellas que hacen eje en el corte de calle y en el consecuente perjuicio al usuario) todas las que hacen referencia a la relación de los piqueteros con los gremios están ubicadas en la sección de política y economía, es decir, en las primeras páginas del diario y, por lo tanto, como se dijo, altamente jerarquizadas.

La mayoría de estas noticias no son acompañadas con imágenes de dirigentes: sólo 2 de 31 tienen fotos de

Pitrola o Castells como referentes piqueteros. En este caso, las imágenes que predominan son las de las infografías y mapas sobre los cortes de las calles, las de manifestaciones que muestran banderas de agrupaciones políticas y, cuando son de planos más cercanos, se muestra a grupos de piqueteros con rostros cubiertos, con palos en sus manos y con epígrafes tales como

“**Amenazantes:** Piqueteros durante el corte de la ruta 3 en San Justo. Ahora estudian un plan de lucha”

(Página 10, Epígrafe de foto, El País, 21 de febrero de 2004).

Esta selección de los tipos de fotografías podría significar, *a priori*, que no se personaliza la noticia en los dirigentes piqueteros y que el énfasis está puesto más bien en la peligrosidad del movimiento colectivo. Peligrosidad que se extiende desde sus modos de vestir en las marchas y las banderas políticas que llevan, generalmente rojas, hasta la metodología de lucha que defienden.

Para reforzar el tema del “desgaste” del movimiento piquetero *Clarín* le dio voz y espacio a líderes sindicales tradicionales como Daer y Moyano. Este mecanismo que resalta la oposición piqueteros/gremios coloca a los dirigentes tradicionales de la CGT como referentes de una sociedad “más normal”, más institucional, más *legítima*, al tiempo que *Clarín* cataloga al movimiento piquetero como parte de un modelo social y político que debe suprimirse y superarse.

En palabras de Moyano, en relación con los piqueteros:

La sociedad los rechaza y el reclamo que realizan pasa a un segundo plano, prácticamente se vuelve ilegítimo" (...) “El movimiento obrero organizado es irremplazable y el movimiento

piquetero está agotado; la sociedad ya comienza a rechazarlos. (Página 10, El país, 16 de julio de 2004).

En palabras de Daer, los piqueteros son:

Compañeros que están usados por la hambruna y la desesperanza por dirigentes políticos (...) sectores que no tienen presencia electoral y tienen esta forma de hacer política. (Página 20, El país, 15 de febrero de 2004)

En palabras de Rueda, dirigente de la Sanidad, al descalificar el accionar piquetero:

Estamos trabajando con ideas y propuestas, no con destrucción ni con caras encapuchadas (...) Me opongo al método extorsivo de los que presionan con una marcha para que se los reciba. (Página 13, El País, 10 de agosto de 2004. El resaltado es del diario)

En este mismo sentido, los discursos de los gobernantes fueron retomados por el medio, como fuentes oficiales y de alta jerarquía, para apoyar la creación de un consenso antiprotesta.

Nestor Kirchner los acusó –a los piqueteros- de tener “actitudes represivas” y “métodos extorsivos” (Página 11, El país, 21 de Febrero de 2004)

En efecto, tal como lo menciona Svampa (2005), el gobierno nacional se encargó de enfatizar la contraposición entre movilización callejera y “normalidad institucional”, desembocando no sólo en una imagen estigmatizante de las movilizaciones, sino en la denuncia de una democracia cada vez más “acosada” por las agrupaciones piqueteras. Así, en la superficie mediática, esta *normalidad institucional* fue encarnada en los sindicatos tradicionales de la CGT, a quienes *Clarín* terminó

“convirtiéndolos” en los únicos actores válidos para negociar en la puja distributiva. Además, se les asignó una atribución “positiva” en tanto síntoma de recuperación económica frente a los piqueteros que fueron asociados al “viejo modelo” de la década del ’90.

En consecuencia, los piqueteros que conformaron movimientos sociales informales, por fuera de los canales institucionales tradicionales, fueron representados por *Clarín* como “clases peligrosas”. En palabras de Svampa, se trató de “un discurso periodístico que vehiculiza una cierta lectura político-cultural que coloca el acento (...) en la peligrosidad de los sectores populares” (2005:285).

“El titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, salió ayer al cruce de las declaraciones de los líderes piqueteros duros en contra de la dirigencia sindical y afirmó que “quieren ingresar a los gremios por la ventana con sus actos violentos (...) Eso es un acto violatorio de la democracia que existe en las organizaciones sindicales” (Página 10, El País, Recuadro, 21 de febrero de 2004. El subrayado es mío)

“Pitrola es uno de los piqueteros que ya anunció su intención de dar pelea en los gremios. Intentará quedarse con el sindicato de los gráficos”. (Página 10, El país, Recuadro, 21 de febrero de 2004)

De este modo, *Clarín* se hace eco y refuerza, a través de sus propias editoriales, esta posición “antipiquetera” a través de un discurso pedagógico en el que caracteriza como irracionales a los dirigentes de los desocupados:

Los dirigentes piqueteros deben conducir la protesta por senderos racionales (Página 2, Editorial del “Editor al Lector”, 19 de febrero de 2004)

Hasta acá puede verse como a través de muchas voces o del recurso de

polifonía regulada¹⁹, apelando a fuentes de alta jerarquía, lo que predomina es un único discurso: el hegemónico que pretende colocar a los piqueteros como “amenazantes de la paz social”²⁰. Simultáneamente, se legitima a los sindicatos tradicionales como los canales correctos de negociación y se contraponen la “dureza” piquetera, a los gestos “dialoguistas” y “conciliadores” del movimiento sindical con el gobierno de Kirchner.

“Piqueteros: acto en el Congreso y amenaza de mayor dureza” (Página 9, El país, 26 de febrero de 2004).

Al desafiar a los piqueteros, Moyano buscó agradar al Presidente. (Página 2, Editorial “Del editor al Lector, 16 de julio de 2004)

Kirchner apuesta a los sindicatos para que ocupen el lugar de los piqueteros (Página 7, El país, 26 de julio de 2004)

En este punto, es preciso resaltar que el gobierno es representado ambigüamente en este tipo de noticias. Para *Clarín* actúa “correctamente” cuando le pone freno a la protesta de piqueteros o de gremios pero se convierte en débil e ineficiente cuando se abstiene de reprimirlos y es desbordado por los conflictos. Asimismo, esta ambigüedad se puede trasladar a la compleja representación de la figura de Néstor Kirchner que al tiempo que es posicionado como parte de un consenso antiprotesta, es

¹⁹ El concepto de polifonía regulada, en tanto dispositivo de enunciación, se refiere a la estrategia a través de la cuál los medios masivos radicalizan la heterogeneidad constitutiva del discurso y logran neutralizar cualquier voz divergente (Luchessi-Cetkovich, 2002), para reforzar el discurso hegemónico.

²⁰ Para un análisis detallado de los modos en que otros diarios como *La Nación* también representaron las protestas piqueteras como peligrosas, criminalizando sus reclamos ver Coscia, 2004 y Settani, 2005.

construido como “oportunista” en relación a distintos actores sociales. Así lo muestra uno de los chistes que incluye Clarín que, a su vez, podría tener un correlato en la noción de líder político peronista que busca armonizar los intereses conflictivos de los diversos sectores sociales.

-Hay un guiño de Kirchner a los sindicatos

-Guiña el ojo a los sindicalistas, a los políticos, a la policía y a los piqueteros. ¿Cuánto gastará en colirios? (Página 5, El País, “Guiños” Por Landrú, 13 de agosto de 2004)

En resumen, y parafraseando a Svampa, la puja política llevó a los actores más poderosos, entre ellos los grandes medios de comunicación, a (re)actualizar el estigma de la barbarie asociado a la representación de lo que la autora denomina *nuevas clases peligrosas*, en el marco de la fórmula *sarmientina*: civilización (sindicatos tradicionales) o barbarie (piqueteros). En este caso, los bárbaros son los que están por fuera de lo institucional: son los piqueteros pero también, como se verá en el próximo apartado, son aquellos dirigentes sindicales y gremios “confrontativos” que llevan adelante protestas gremiales y que, generalmente, están enfrentados a las cúpulas sindicales tradicionales.

b) ¿Diálogoistas o confrontativos?

Las noticias seleccionadas para desarrollar esta sección son 80 en total: 43 correspondientes a conflictos sindicales encabezados por *nuevas formaciones sindicales* (trabajadores del Hospital Garrahan y subtes) y 37 por protestas de gremios alineados con la CGT (trabajadores petroleros y de Aerolíneas Argentinas).

En un primer acercamiento a la representación de estos conflictos puede

señalarse que, en general, las coberturas hacen hincapié en el *tercero damnificado* por la protesta con eje en la antinomia *huelguista/usuario*.²¹ La falta de atención de niños, en el caso del Garrahan, pasajeros de transporte público y aéreo que no pueden viajar en el caso de subtes y de Aerolíneas Argentinas y la población en general, en el caso de petroleros, ante el posible desabastecimiento de gas y combustible.

En el caso del Hospital Garrahan, 16 de las noticias analizadas (de un total de 23) son acompañadas de imágenes. La mitad de ellas corresponde a carteles sobre el paro y fotos de los pasillos vacíos del hospital y la otra mitad son fotografías que tienen como protagonista a Gustavo Lerer, uno de los dirigentes de ATE que encabezó la medida de fuerza a quien se lo nomina con calificativos como “duro” y “troskista”, entre otros adjetivos que refieren a las agrupaciones de izquierda.

‘Son todos troskos’ dijo sobre la conducción gremial del Garrahan otra fuente del gobierno porteño. (Página 43, La Ciudad, 27 de abril de 2005)

Gustavo Lerer, delegado sindical. **En nombre de Trosky** (...) el líder de la huelga en el Garrahan desnudó su

²¹ Dicha antinomia hace hincapié en la oposición entre la figura de trabajador organizado que hace huelga y el individuo atomizado, representado como uno de los principales perjudicados por la medida de fuerza. “El usuario, el hombre de la calle, el contribuyente son literalmente personajes, es decir, actores promovidos a papeles de superficie, cuya misión consiste en preservar la separación esencialista de las células sociales que, como se sabe, fue el primer principio ideológico de la revolución burguesa” (Barthes, 1980: 138).

filiación troskista sindical. (Página 2, semáforo en Rojo, 19 de agosto de 2005. El resaltado es del diario)

En estos casos, *Clarín* caracterizó la pertenencia ideológica-partidaria de los líderes vinculados a partidos de izquierda, atribuyéndoles una carga negativa al asociar sus métodos combativos y rebeldes a los que se presumen propios de la izquierda argentina. En este sentido, estos dirigentes fueron representados como triplemente ilegítimos: por no pertenecer a la CGT oficial, por estar enfrentados a las cúpulas sindicales tradicionales y, además, por ser de izquierda, “salvajes” y altamente politizados (y, podríamos agregar, por no alinearse con las filas peronistas).

En el caso de las protestas de los trabajadores de subtes se analizaron 20 noticias en las que *Clarín* hizo hincapié en el perjuicio a los pasajeros que no pueden viajar y también se representó a los delegados de subterráneos como actores ilegítimos, por no tener personería gremial, ser de izquierda y estar en desacuerdo con la cúpula sindical (UTA).²²

El gremio no tuvo el control del conflicto e intervino recién después, cuando la situación amenazaba desbordarse (...) El gobierno estimula negociaciones orgánicas, antes que “brotes” conducidos por sectores que están enfrentados o disienten con las dirigencias sindicales. (Página 2, Editorial “Del editor al lector”, 13 de febrero de 2005)

Los delegados que encabezaron la medida de fuerza en los subtes pertenecen a un grupo identificado con partidos de izquierda y opuesto a la

conducción de UTA. (Página 44, La Ciudad, 9 de diciembre de 2004)

Este hincapié en la fractura del gremio se contrapuso a la solidez de la empresa, que apareció representada como un todo unificado y sin fisuras. Dicho énfasis es consistente con el hecho de que, como ha sido planteado en la literatura especializada, en general los medios masivos son los primeros en señalar cualquier contradicción en el seno de los trabajadores en conflicto para debilitarlos frente a la empresa (Villanueva-Vacchieri, 1985). Esta operación también puede advertirse en la construcción de las noticias sobre el conflicto petrolero donde se resalta la interna gremial y se remarca que el gremio está alineado a la CGT pero que tiene, entre sus integrantes, dirigentes de izquierda que son denominados “delegados disidentes”, “opositores”, “grupos de ultraizquierda”.

Los gremios de Santa Cruz y Chubut militaron siempre a la izquierda de la conducción nacional (...) La diferencia entre la CGT y los delegados disidentes está en la raíz ideológica de la metodología de los disidentes que puede derivar en picos de violencia irracional. (Página 2, Editorial “Del Editor al Lector”, 8 de febrero de 2006)

Mario Navarro, el jefe de la protesta en Las Heras: Un opositor en el gremio petrolero. (Página 5, El país, 8 de febrero de 2006)

En el caso de trabajadores de Aerolíneas y Austral, (gremios que también están en la CGT), de las 14 noticias analizadas, 10 son acompañadas por fotos que muestran también, al igual que en el caso del Garrahan y subtes, imágenes del perjuicio a terceros ocasionado por la huelga. De esta manera, la agenda pública ingresa al discurso mediático a través del carácter dramático y espectacular de los efectos de la medida

²² Para un análisis en profundidad sobre la representación mediática de las protestas de subterráneos (2004-2005) y la tensión en la *identidad partidaria* de sus delegados ver Coscia (2007b).

de fuerza, sin jerarquizar las causas ni los procesos históricos sobre el conflicto gremial-político.

Además, la mayoría de estas noticias (Garrahan, subtes y Aerolíneas) son ubicadas en secciones “blandas”, es decir, de información general (La Ciudad o Sociedad), si bien en algunos casos son desplazadas a la sección El País. Esto último ocurre, en general, cuando se incluye en la noticia la intervención del gobierno. En el caso del conflicto de petroleros en el sur las 23 noticias analizadas fueron ubicadas en la sección El País, lo que podría deberse a la proximidad, posicionamiento e intervención del gobierno de Kirchner en este conflicto.

En este punto, podríamos afirmar que existen ciertas continuidades en los tipos de construcción de las noticias sobre protestas encabezadas tanto por *nuevas formaciones sindicales* como por gremios de la CGT: en el eje en el tercero damnificado, en la fisura interna del gremio, en la ausencia de reposición de causas y de procesos históricos de los conflictos. Además, los gremios de la CGT que realizan medidas de fuerza no sólo son tildados de “duros y belicosos” sino que parecen ser representados como algo “patológico”, es decir, como un desvío en la conducta “contenedora” en torno a la protesta sindical que *Clarín* le asigna a la tradicional CGT.

Pese a la actitud belicosa de algunos gremios que la integran – como los pilotos y técnicos aeronáuticos - la CGT tiene demasiada sintonía con el presidente como para estar cerca de declararle la guerra. (Página 10, El país, 4 de diciembre de 2005)

En la Casa Rosada prefieren los “buenos oficios” de Moyano. (Página 4, El País, 28 de marzo de 2006)

El gobierno siempre apostó a que los conflictos gremiales fueran canalizados a través de la CGT. Lo que sucede es que en muchos casos los trabajadores en conflicto no responden a las estructuras sindicales tradicionales. (Página 11; El país, 20 de abril de 2005)

Resulta interesante analizar el mecanismo por el cual la CGT oficial y sus dirigentes sindicales tradicionales son representados por *Clarín* en tanto “conciliadores” cuando hay un otro (piqueteros, nuevas formaciones) que se opone a ellos en situaciones de desborde de la conflictividad social. Esta operación también se puede ejemplificar con la representación del conflicto petrolero en Santa Cruz, en el que el líder cegetista, Hugo Moyano, fue representado como uno de los que destrabaron el conflicto en pos de la “armonía social”

Julio De Vido, el ministro de Planificación, y Carlos Tomada, el de Trabajo, se juntaron ayer con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Los funcionarios tuvieron una participación activa en las negociaciones que destrabaron el conflicto en la provincia patagónica (...) El Gobierno ha vuelto a conceder protagonismo al líder camionero para neutralizar la demostración de poder brutal, con el asesinato de un policía, que hicieron los sindicalistas de izquierda. (Página 5, El país, 15 de febrero de 2006, el resaltado es del diario)

Por lo tanto, podríamos afirmar que *Clarín* va construyendo a los actores protagonistas de protestas sindicales como “duros” o “blandos”, “belicosos” o “pacíficos”, “conflictivos” o “conciliadores” de acuerdo con cada situación. De este modo, y bajo similares estrategias mediáticas, se estigmatizó a los piqueteros, a las nuevas formaciones sindicales y a gremios “belicosos” de la CGT que llevaron adelante protestas homologando sus metodologías de

lucha, resaltando la atribución de “duros” y legitimando, simultáneamente, a los sindicatos tradicionales que no realizan medidas de fuerza.

En este punto, podríamos hacer dos señalamientos. El primero es que la noción de *diálogo/negociación* es la que *Clarín* privilegia para atribuir a los sindicatos legitimidad y “normalidad”. Por el contrario, la noción de *confrontación/lucha* es la que privilegia para estigmatizarlos y construirlos como “brotes”, como gremios “confrontativos”, ya sea que se trate de nuevas formaciones sindicales como de gremios que están dentro de la CGT.

Por otro lado, *Clarín* enfatiza que lo que comparten piqueteros, nuevas formaciones gremiales y gremios que protestan de la CGT es que tienen dirigencias o participantes de izquierda en sus organizaciones. En este sentido, podría pensarse que *Clarín* privilegia las nociones de diálogo y alianza de clases, característica del peronismo tradicional para representar a los sindicatos como legítimos. Por el contrario, para criminalizar a los gremios que protestan, se exaltan las nociones de confrontación y lucha de clases, características de las tendencias sindicales clasistas y más cercanas a posiciones ideológicas de izquierda.

Los delegados del Garrahan superaron la barrera de contención de sus propios sindicatos. Y su compromiso político-ideológico los enreda en exigencias de máxima de las que muchas veces no pueden salir. (Página 2, Editorial “del editor al lector”, 21 de abril de 2005)

Se reproducen las demandas salariales y demasiados conflictos van adoptando la metodología piquetera. (Pag.27, Panorama Empresarial, Opinión de Eduardo Van Der Kooy, 12 de febrero de 2006. El resaltado es del diario)

En la analogía entre piqueteros y huelguistas es interesante analizar también un chiste de Fontanarrosa que publica *Clarín* en página 2 en el que se ve a un supuesto enfermero con barbijo que entra a una habitación donde está un enfermo y su hijo. El enfermo le dice al hijo

Como no me voy a preocupar mi hijito...con todos estos paros y protestas en los hospitales yo ya no sé si ése es un enfermero o un piquetero. (Página 2, 30 de abril de 2005)

Es en este sentido que la homologación de la metodología de lucha gremial a la metodología piquetera es representada como “preocupante” y “peligrosa”. El eje está puesto en que el conflicto, sea encabezado por un gremio o por piqueteros, puede conllevar “preocupantes” consecuencias para el ciudadano común.

En resumen, podríamos afirmar que los líderes sindicales tradicionales son “normales” y *legítimos* para *Clarín* frente a nuevas o viejas expresiones sindicales que tienen fuerte contenido político confrontativo, con integrantes de izquierda y con la toma de medidas de acción directa que desbordan la armonía social. Esto es, *Clarín* tiende a catalogar a la CGT como legítima y necesaria en tanto cumpla su función de dialogar, y de destrabar o contener los conflictos sindicales.

Algunas reflexiones preliminares

A partir del análisis realizado es posible señalar una serie de reflexiones en torno a los desafíos que enfrentan los sindicatos en el plano simbólico, en relación con lo que, en este caso *Clarín*, intenta vehiculizar.

En primer lugar, podemos afirmar que predomina una representación que tiende a ser *legítima* y “normal” de los sindicatos cuando *Clarín* le atribuye a la CGT, que se

enmarca en los parámetros institucionales, la función de bogar por la paz social y contener las protestas sociales. Así, la tendencia al *diálogo* y a la *negociación* entre los sectores sociales en pugna (encarnada en los dirigentes sindicales tradicionales de la CGT) fue representada como “lógica” y deseable en momentos de beligerancia social. En este caso, la estabilización de sentidos responde a que para Clarín, lo lógico y razonable en el terreno sindical está puesto en serie con aquello que se aleja del conflicto, que acuerda en lugar de cuestionar, que supone alianza de clases (como es el caso del peronismo) antes que lucha de clases (como es el caso del clasismo o de la izquierda).

Por el contrario, *Clarín* tiende a *deslegitimar* y criminalizar a las agrupaciones gremiales que están por estar fuera de lo institucional, por su tendencia a protestar, por tener dirigentes de izquierda y contribuir a la proliferación del caos social. Como se analizó, estos atributos fueron asignados tanto a piqueteros como a gremios “confrontativos” (dentro de los que incluimos tanto a nuevas formaciones sindicales como a gremios “belicosos” de la CGT) a través de similares estrategias mediáticas. Por lo tanto, las nociones de protesta y conflictividad intentaron ser “fijadas” por el diario como indicios de caos y de “anormalidad” social.

A partir de estas observaciones podríamos pensar que la asignación de determinados atributos a los sindicalistas y la tendencia a la construcción de lecturas preferenciales sobre ellos actúan como mecanismos de control que, coincidiendo con Mumby (1997), tienen como eje las permanentes luchas políticas por la fijación de significaciones y por el fortalecimiento del sentido común hegemónico.

Bibliografía

- Armellino, Martín (2005) “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA”, en Naishtat, F Schuster, F. Nardacchione, G. et al (comps.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva*, Buenos Aires, Prometeo.
- Aruguete, Natalia (2009), “Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De la concentración a la pluralidad”, en *Le Monde Diplomatique Ed. Cono Sur*, No. 119 mayo, pp. 8 y 9.
- Barthes, Roland (1980) “El usuario y la huelga” en *Mitologías, México, Siglo XXI*.
- Bourdieru, Pierre (1997) *Sobre la televisión*, Barcelona, Anagrama.
- Bourdieu, Pierre. (1996), *Cosas dichas*, Barcelona, Gedisa.
- Borrat, Héctor (1989) *El periódico, actor político*, Barcelona, Gustavo Gili.
- Campione, Daniel (2002) “Estado, dirigencia sindical y clase obrera”, *Fundación de investigaciones sociales y políticas*, Buenos Aires.
- Cetkovich Bakmas G. y Luchessi, L (2002) “Integración, exclusión y criminalización de la pobreza”. Ponencia en II Encuentro de Facultades de Comunicación Social del Cono Sur. FELAFACS. Santiago de Chile.
- Coscia, Vanesa (2008a) “Usuarios vs. Trabajadores: Construir y jerarquizar como formas de politizar/ despolitizar reclamos laborales en los medios masivos” en *Cuadernos del IDES n° 13*, Buenos Aires, IDES.
- Coscia, Vanesa (2008b): “Estrategias de negociación del actor sindical en los '90” en *Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad*, UNR, Rosario.
- Coscia, Vanesa (2007a) “Visibilidad e invisibilidad: la representación mediática de la protesta gremial” en *Revista Question n° 14*, UNLP, La Plata.
- Coscia, Vanesa (2007b) “La influencia de la identidad partidaria en la

- representación de los actores protagonistas de conflictos sindicales” en Actas de la VI Biental Iberoamericana de Comunicación, Escuela Ciencias de la información, UNC, Córdoba.
- Coscia, Vanesa (2004) “La representación de los piqueteros en el diario La Nación”. Ponencia presentada en I Jornadas Académico-curriculares, Carrera de Ciencias de la Comunicación. FSOC-U.B.A., Buenos Aires.
- Fernández, Arturo (1997) Flexibilización laboral y crisis del sindicalismo, Buenos Aires, Espacio.
- Ford, Anibal (1994) Navegaciones. Comunicación, cultura y crisis, Buenos Aires, Amorrortu.
- Hall, Stuart (1984) "Notas sobre la deconstrucción de lo popular" en Samuel, R. (ed.) Historia popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica
- Hall, Stuart. (1998) “Significado, representación, ideología; Althusser y los debates postestructuralistas” en Curran, J., Morley, D., Walkerdine V. (comp.) Estudios culturales y comunicación, Barcelona, Paidós
- Imbert, Gerard (2002) “Azar, conflicto, accidente, catástrofe: figuras arcaicas en el discurso posmoderno”, Trama y Fondo Revista de Cultura, Madrid
- Laclau, Ernesto- Mouffe, Chantal (1987) Hegemonía y estrategia socialista, Madrid, Siglo XXI.
- Marino, Santiago y Rodríguez, María Graciela (2007) “La delgada línea roja: viejos contratos en el nuevo Clarín” en Fronteras Globales. Cultura, política y medios de comunicación, Buenos Aires, La Crujia.
- Martín Barbero, Jesús (1989) "De cómo el acontecimiento se convierte en narración-leyenda" en Procesos de comunicación y matrices de cultura. Itinerario para salir de la razón dualista, México, FELAFACS-Gustavo Gilli
- Martini, Stella y Luchessi, Lila (2004) Los que hacen la noticia, Periodismo, información y poder, Buenos Aires, Biblos.
- Martini, Stella (2002) “Agendas policiales de los medios en Argentina: La exclusión como un hecho natural” en Goyol Sandra y Kessler Gabriel (comp) Violencias, Delitos y Justicias en la Argentina, Buenos Aires, Manantial.
- Mastrini, Guillermo (2009) “Confusiones inoportunas” disponible en <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini> 20 de noviembre de 2009.
- Mastrini Guillermo y Becerra, Martín (2001) “50 años de concentración de medios en América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización en escala”, en Quirós Fernández, F. y Sierra Caballero, F. (eds.): Globalización, comunicación y democracia. Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura, Sevilla, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones
- Mattelart Armand (1970): "Los medios de comunicación de masas. La ideología de la prensa liberal", en Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago de Chile.
- Mumby, Dennis (1997) Narrativa y control social. Perspectivas críticas, Buenos Aires, Amorrortu.
- Murillo, María Victoria (2005) Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas en América Latina, Madrid, Editorial Siglo XXI.
- Murillo, María Victoria (1997) “La adaptación del sindicalismo de mercado en la primera presidencia de Menem”, en Desarrollo Económico, 37 (147).
- Palomino, Héctor (2008) “Los trabajadores y los nuevos desafíos en la sociedad actual” Ponencia presentada en Coloquio Internacional La construcción del Estado Social en la Argentina, Buenos Aires, IDAES-UNSAM.
- Palomino, Héctor (2005) ‘Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas

sindicales, en Nueva Historia Argentina, Dictadura y Democracia, compilado por Juan Suriano, Tomo X, Buenos Aires, Sudamericana.

Sarlo, Beatriz (2001) "Ni esencia ni sustancia" en Tiempo Presente. Notas sobre el cambio de una cultura, Buenos Aires, Siglo XXI.

Settani, Sebastián (2005): De la pueblada a los grupos que violan permanentemente la ley: la representación de los piquetes construida por La Nación. Tesis de grado, Carrera Ciencias de la Comunicación Social. FSOC-UBA, mimeo.

Svampa, Maristella (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus.

Verón, Eliseo (1987a) La Semiosis Social, Buenos Aires, Gedisa

Verón, Eliseo (1987b) Construir el acontecimiento, Buenos Aires, Gedisa

Villanueva Graciela y Vacchieri Ariana (1985) "La persistencia del unísono. La prensa Antiobrera" en Revista La Bizca N°1, Buenos Aires.

Zald, Mayer (1999) "El acceso a la agenda pública y a la agenda del gobierno" en Movimientos Sociales: Perspectivas comparadas, Madrid, Istmo.

Normalidad, excepción y oportunidades. Dinámicas cultural y política en el caso del activismo audiovisual (Argentina 2002-2004).

*Christian Dodaro*²³, *Santiago Marino*²⁴, *María Graciela Rodríguez*²⁵.

Resumen

En este trabajo convergen nuestras de reflexiones, intercambios, diálogos vinculando las acciones de productores culturales, las dinámicas político-sociales y el mercado de la cultura. Tomamos como caso testigo los grupos de activismo audiovisual (acaso conocidos también como de cine militante) en Argentina durante el período 1999-2004. Allí nos preguntamos si la acción político-militante por sí sola, por su propia fuerza, era capaz de modificar (aunque sea en parte) la normativa nacional, o si, por el contrario, estas modificaciones se habían visto potenciadas por el marco de un momento socio-histórico y cultural particularmente lábil y empático para los cambios. Asumíamos allí que la modificación normativa se relacionaba con las acciones beligerantes que habían llevado los grupos de activismo audiovisual. Y sin embargo, conjeturamos que ellas solas no habrían podido incidir, como lo hicieron, ni en el plano normativo ni en el presupuestario del Estado.

Palabras claves: activismo audiovisual, protesta social, cine documental,

Summary

In this work ours reflections, exchanges, dialogs and debates linking the actions of cultural producers, the political-social dynamics and the market of the culture. We take the case of audio-visual activism (perhaps known like militant cinema) in Argentina during the period 1999-2004. There we ask if the action politic-militant alone, for his own force, can modify (partly at least) the national regulation, or if, on the contrary, these modifications had met promoted by the frame of a moment historical and cultural associate particularly empathic for the changes.

We were assuming there that the normative modification was related to the belligerent actions taken by groups of audio-visual activism. And nevertheless, we surmise that alone they might not have affected, since they did it, neither in the normative plane nor in the budgetary one of the State.

Key words: Audio-visual activism, social protest, documentary cinema

Recibido: 21.07.2009 Aprobado: 07.11.2009

²³ Doctorando en Ciencias Sociales, Fsoc. UBA. Becario Conicet

²⁴ Doctorando en Ciencias Sociales, Fsoc. UBA. Becario UBA

²⁵ Doctora en Ciencias Sociales, Fsoc. UBA. Investigadora Idaes UnSam

Introducción

Hace unos años, a partir de tres investigaciones autónomas, convergimos en una serie de reflexiones, intercambios, diálogos y debates que culminaron con la puesta en común de un trabajo que vinculaba las acciones de productores culturales, las dinámicas político-sociales y el mercado de la cultura. El trabajo (Cfr. Dodaro, Marino y Rodríguez, 2009), tomaba como caso testigo los grupos de activismo audiovisual (acaso conocidos también como de cine militante) en Argentina durante el período 1999-2004. Allí nos preguntamos si la acción político-militante por sí sola, por su propia fuerza, era capaz de modificar (aunque sea en parte) la normativa nacional, o si, por el contrario, estas modificaciones se habían visto potenciadas por el marco de un momento socio-histórico y cultural particularmente lábil y empático para los cambios.

Partimos de un dato: en 2004 fue modificado un artículo de la Ley de Cine, una modificación que pasó desapercibida para la mayoría de la población, pero que sin embargo ha abierto la posibilidad a los productores audiovisuales de obtener recursos materiales para la realización de cortos documentales. A partir de este dato asumíamos que la modificación normativa se relacionaba con las acciones beligerantes que habían llevado los grupos de activismo audiovisual. Y sin embargo, conjeturamos que ellas solas no habrían podido incidir, como lo hicieron, ni en el plano normativo ni en el presupuestario del Estado.

Este dilema nos llevó a la necesidad de discriminar,

analíticamente, las peculiaridades del contexto en que se motorizaron esos cambios, así como a revisar el papel de Estado en tanto posee los medios para resolver cuestión (Oszlak y O'Donnell, 1984). Respecto de estas dinámicas, nos resultó útil distinguir el tipo de cuestión puesto en juego en el proceso que analizamos. Las políticas estatales, entendidas como el conjunto de acciones (u omisiones) que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado, están organizadas alrededor de un conjunto de temas, y son sensibilizadas en relación con una cuestión, que es lo que concita el interés, la atención y la movilización de otros actores del tejido social. Puesto que una cuestión es un asunto socialmente problematizado, genera procesos sociales tanto como expresa necesidades y demandas. Y aunque su ciclo vital tiene origen al constituirse como tal, su resolución no necesariamente coincide con la solución del problema. Por eso mismo, para llevar adelante el análisis, comenzamos con el período previo al surgimiento de la cuestión, teniendo en cuenta las motivaciones y causas de los actores involucrados, tanto como los procesos sociales tejidos alrededor del origen, tratamiento y eventual resolución de esa cuestión.

Para el caso que nos ocupa, la cuestión se centraba en la necesidad de garantizar financiamiento para la realización de cine documental, desconocido por la regulación hasta entonces. Las políticas de Estado parten o bien de una necesidad dentro del propio Estado, o bien de una carencia expresada por un actor –no el Estado, sino de la sociedad civil, o del mercado-interesado. Se transforma en tal al convertirse en un asunto problematizado por la sociedad. O por una parte de ella.

Y en el caso que trabajamos, el actor de la sociedad civil que aquí denominamos videoactivistas consiguió, por sus acciones y su gestión, transformar su interés en cuestión, al presionar sobre los procesos de toma de decisiones. Una vez vuelto cuestión, aquel problema tuvo resolución (el cual, siguiendo Oszlack y O'Donnell, no necesariamente implica la solución del problema) con la decisión tomada por el agente estatal pertinente y dar entonces una política que resuelve (sin que – necesariamente- solucione) la cuestión. Asimismo, el caso analizado nos exigió indagar en las acciones de los propios activistas, porque entendemos que estas acciones habían comenzado mucho antes del momento de modificación de la normativa, con un lento pero indetenido trabajo de horadación de los consensos, para aprovechar tácticamente la ocasión favorable.

Una vez realizada la indagación, el trabajo nos condujo a señalar la relación entre dos temporalidades diferentes: una extendida, medible en décadas, correspondiente a la acción sostenida de los grupos de producción cultural; y otra corta, coyuntural, medible en meses, que posee sin embargo una onda expansiva capaz de 'abrir' las posibilidades de efectivización de los cambios.

Ahora bien, enfocado el caso y señalada la confluencia de temporalidades divergentes, nuestra siguiente inquietud se orientó a revisar la literatura académica sobre la relación entre las acciones de los activistas y la dinámica política-cultural, para reevaluar las implicancias de un caso que, si bien pequeño, habilita a discutir con esos estudios. Inicialmente, nos movía la preocupación de encontrar un marco conceptual que nos permitiera dar cuenta de las acciones de los grupos de productores culturales, observar a la vez

las modificaciones y/o persistencias en el campo de lo decible, y registrar el rol del Estado en la resolución de la cuestión en clave de cambios efectivos en los marcos normativos. Revisando un conjunto de estudios relacionados con la intervención estratégica de grupos de la sociedad civil, nos dimos cuenta de que nuestro caso exigía repensar algunos de sus presupuestos. En este trabajo, quisiéramos presentar los resultados del diálogo que el caso investigado permite realizar con esos presupuestos.

Para ello, comenzaremos por repasar brevemente el análisis del recorte empírico ya realizado, para continuar luego con el punteo de los elementos centrales del diálogo que proponemos. Sobre el final, intentaremos asentar algunas notas que nos parecen relevantes para incorporar en futuros intercambios sobre el tema.

El activismo audiovisual en la Argentina de las últimas décadas.

En la Argentina, 1989 implica un año de viraje en la orientación política, social y cultural, al menos por tres razones: por un lado porque tras la hiperinflación, la tasa de pobreza llegó ese año al 27%, incrementándose la brecha de riqueza con niveles de marginalidad nunca antes vistos en la Argentina; en segundo lugar porque a partir de ese año se ponen en escena los cambios en los modos de protesta social y de reconversión de los colectivos políticos, con los saqueos a supermercados, la explosión de los cortes de ruta, los escraches, y otros repertorios de protesta social; por último, aunque no por eso menos importante, el viraje de 1989 coincide, en términos de construcción de sentidos, con la privatización de los medios masivos de comunicación y el comienzo del proceso de consolidación de los trusts de información y entretenimiento

que extenderían su cartera de negocios hacia el cine, la TV por cable y la conexión de Internet.

No será sino hasta diciembre de 2001 que las condiciones de profundización de la crisis (una conjunción de factores sociales, económicos, financieros y políticos) se darán cita en unas jornadas que sacudieron a la sociedad en su conjunto. No vamos a dar cuenta de ese proceso aquí; sólo sirva la referencia para sostener que en 2002, y luego de lo ocurrido en diciembre de 2001, se abre un ciclo de protesta que se extiende entre diciembre de 2001 y enero de 2004 (Svampa, 2004). En ese breve lapso, contemporáneamente a la fuerte presencia pública de movimientos cívico-políticos emergentes alrededor de 1989 (Zibecchi, 2003), un sector que adquirió una particular visibilidad y que logró además producir modificaciones efectivas en la dimensión 'material' de la producción cultural, es el de los colectivos de activismo audiovisual. Nos referimos, concretamente, a un conjunto de realizadores documentales que, desde la mitad de la década de 1990 fueron recuperando las prácticas del cine militante de Argentina de las décadas de 1960 y 1970.

Trabajamos el período de producción documental que se extiende de 1992 a 2004 para poder dar cuenta del trabajo previo de estos colectivos, así como de las acciones efectivizadas durante el ciclo de protesta. Los resultados de sus acciones son observables en distintas escalas: desde la incidencia recíproca entre el cine comercial, la televisión y el videoactivismo en relación con el propio lenguaje audiovisual; o la creación, en el mismo transcurso de la acción, de nuevos marcos culturales de valoración en el interior de los grupos (Melucci, 1987; 1996); hasta las

modificaciones efectivas ocurridas en el marco presupuestario y en el legal. No obstante, en este trabajo focalizamos, antes que sobre los dos primeros puntos, sobre los circuitos de producción, distribución y exhibición, así como sobre la conformación de públicos, la circulación y la proclamación en festivales internacionales, y sobre los cambios concretos producidos en la legislación local en relación con la política de promoción de la industria fílmica a raíz de las acciones de los grupos de activismo audiovisual.

Una breve historia

En la etapa que se extiende desde 1993 hasta 2001, las acciones de los activistas audiovisuales consisten en documentar las tempranas manifestaciones contra el modelo neoliberal. Un segundo circuito de circulación se centra en otros espacios de militancia, tales como sindicatos y gremios de base, experiencias de exhibición en donde nacen los primeros acercamientos de posiciones y objetivos políticos entre los grupos realizadores sin encuadre partidario, y los movimientos de protesta. Así, paralelamente, los realizadores van conformando un informal circuito de espacios de exhibición alternativa. En esta etapa los videoactivistas no trabajan de manera conjunta e incluso algunos no se conocen entre sí. Un punteo de sus producciones permitirá conocer parte de su derrotero previo a la conformación de redes.

El Grupo de cine Boedo films produce *No crucen el portón* (1992) y desde ese momento se dio una experiencia oscilante entre la distribución independiente a través de canales alternativos tales como fábricas, comedores, centros culturales y espacios de organización sindical, la búsqueda de financiación estatal y la

apertura de espacios de exhibición. Otro grupo, Alavío, a partir de su militancia barrial en el conurbano junto al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), realizó El rostro de la dignidad, memoria del MTD de Solano (2000). El Movimiento de Documentalistas, entre los que se destaca la productora Luz de Giro, llevó a cabo seis producciones que narraban distintas experiencias de ocupaciones de empresas en articulación directa con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Por su lado, Cine Insurgente comenzó en 1995 la producción de l'hachumyajay ("Nuestra manera de hacer las cosas" en idioma wichi). La proyección de esta película incluía un posterior debate en las comunidades indígenas. En mayo de 2001 surge Ojo Obrero, desde el núcleo de los militantes del Polo Obrero, una de las fracciones del movimiento piquetero alineada con el troskismo. Filmaron en esa fecha Piqueteros, un fantasma recorre la Argentina, documental pensado para informar "sobre la situación revolucionaria argentina en las ciudades más importantes del mundo". Contraimagen tiene un origen similar al de Ojo Obrero, con la diferencia de que su militancia se halla relacionada con el PTS. Sus videos privilegian las temáticas relacionadas con luchas sindicales.

La primera acción en la que los distintos realizadores documentales unificaron esfuerzos fue la Red Audiovisual de Información Popular Raymundo Gleyzer. Comienza en 2000 con el objetivo explícito de problematizar la asimetría existente entre los grupos independientes y los medios comerciales. La creación de esta red anticipa la posterior agrupación en colectivos de grupos de realizadores,

experiencia que será clave durante el período de excepción de 2001-2002.

Otra acción que anticipa la formación de redes es la organización, por iniciativa del grupo de Cine Insurgente, del Ciclo de Cine Piquetero que se llevó a cabo entre el 6 y el 12 de diciembre de 2001. En los textos de difusión planteaban que "Los piquetes y los movimientos de desocupados tomaron el lugar preeminente que tuvieron las huelgas y los sindicatos en etapas anteriores de la lucha del pueblo" y que "este surgimiento, como no podía ser de otra manera, tiene su expresión a nivel de los creadores de imágenes que resisten". En este ciclo se exhibieron filmes, todos del género documental, como Matanza, Diablo Familia y Propiedad, La Resistencia, Agua de Fuego, El Rostro de la Dignidad, Salta y Piqueteros. Un Fantasma recorre la Argentina realizados por distintos grupos. El ciclo tuvo un promedio de 200 espectadores por sala. Estas primeras acciones en la que se unificaron los esfuerzos, anticipan la conformación en redes o colectivos que se dará a partir de 2002.

Redes y festivales durante el ciclo de protesta (2002-2004)

Como mencionamos, lo más destacado de este período es la articulación en red que se produce entre los distintos grupos de realizadores. Además de préstamos de equipos, los grupos colaboraban en la realización y circulación de materiales en crudo para diversas ediciones colectivas. En enero de 2002 se conformó Argentina Arde (AA), una red que agrupó a la mayoría de los colectivos fílmicos existentes. Hasta fines de 2002, cuando dejó de funcionar, AA coordinó las producciones audiovisuales de varios grupos, con el propósito, en sintonía con la propuesta de la Red Raymundo

Gleyzer, de contrainformar sobre los distintos ámbitos de participación asamblearia y sus acciones concretas. Así, AA se dio como objetivo:

...apuntar el lente allí donde los medios de comunicación (comprometidos con sus propios intereses empresariales) no lo hacen, o lo tergiversan todo... capaz de llegar a una huelga, un corte de ruta o una movilización y mostrarla tal cual es, aportando para difundirla y para que los medios no puedan ocultarla más.

Ya desde las primeras reuniones, AA funcionaba en asamblea y contaba con varias comisiones. De la comisión de video, integrada por Ojo Obrero y Contraimagen, dejaron de participar estos grupos un tiempo después, por no poder articular las lógicas de integración partidaria con la participación en asambleas. Además de que estos grupos no pudieron conjugar el método deliberativo con sus orientaciones partidarias, se produjo una incompatible caracterización de la situación política y de las maneras en que AA debía intervenir. A pesar de esta confrontación, AA editó cinco video-informes trabajados de manera colectiva, que consisten en una selección de cortometrajes realizados por diferentes grupos que integraban la red y que dan cuenta de episodios ocurridos hasta el mes de junio de 2002. Los documentales se exhibieron, durante el 2002, en asambleas, universidades, barrios, bibliotecas y fábricas tomadas, generando incontables cantidades de exhibiciones en espacios alternativos, con gran participación y muchas horas de debate.

En 2001 también surge Adoc, un colectivo que funcionó hasta mediados de 2003, y que adoptó la forma de un plenario abierto, donde las decisiones se votaban en asamblea y se informaban a través de boletines electrónicos a quienes no podían participar. En forma

colectiva Adoc realizó Un nuevo cine por un nuevo país (2002), una producción documental multipremiada nacional e internacionalmente que narra los sucesos del 19 y 20 de diciembre a través del montaje de las imágenes producidas por los grupos de videoactivistas que formaban parte de la agrupación. Una de las estrategias adoptadas por Adoc fue la de exhibir las realizaciones en circuitos de premiación internacional. Así, en febrero de 2003, las producciones documentales encontraron su lugar en la última edición del Festival de Cine de Berlín, bajo el rótulo de Cine Piquetero. Además, obras hechas por grupos integrantes de Adoc llamaron la atención de Peter Schumann, desde hace años el encargado de seleccionar las películas que se exhiben en el conocido evento.

La capacidad de agenciamiento de estos colectivos se debió, efectivamente, a la fuerza adquirida por la asociación en red. Pero, además, la propia acción de los colectivos se vio favorecida por las temáticas sobre la crisis que parecían recuperar los medios de comunicación durante el ciclo de protesta. Así, la visibilidad obtenida por el videoactivismo durante 2002 y 2003, vinculada con tópicos referidos a la crisis, superó la cobertura que habitualmente tiene en los medios masivos, los cuales, como nunca antes, se mostraron receptivos a este formato. A partir de diciembre de 2001, se produjo una apertura temática hacia zonas que hasta entonces ingresaban con dificultad en la agenda de los medios. Así, el suplemento Zona de Clarín dedicó, en 2002, tres notas al tema (los días 22 y 29 de agosto y el 6 de setiembre). Acerca de los nuevos realizadores, en una de ellas se afirma: Son la otra cara del denominado "nuevo cine argentino" que suele mostrar

jóvenes superados por la realidad que los circunda, deambulando de aquí para allá en la ciudad. El "cine piquetero" no, todo lo contrario: imágenes de lucha, de organización. Como si fueran la parte humana de los titulares de los diarios, un efecto retroactivo de las noticias que bombardeaban la televisión en los 90: "Se cerró una fábrica en Lanús", entonces la cámara cuenta, día a día, la vida de ese hombre que hasta hacía poco tenía un trabajo y podía mantenerse.

En 2003, Página 12 publicó cerca de 24 notas sobre el tema. Entre ellas resalta la titulada "Los excluidos generaron este cine con su lucha", del 12 de Febrero, que trata sobre la exhibición de estos documentales en Berlín. En la nota, Blejman afirma que estas películas "reflejan las luchas sociales en el país, y retoman la estética que marcó al cine político en los '60 y '70". Ese mismo año, un tiempo después, Página 12 publica una nota donde se anuncia el ciclo "El cine que surge de las luchas", de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el cual, según se afirma, "sirve para graficar la multiplicidad de un movimiento surgido al calor de las demandas populares".

La cobertura en los medios de la producción del documental colaboró en configurar, culturalmente, la oportunidad política ya abierta e instaló un horizonte de posibilidades cuyo resultado más visible se dio en 2004. Ese año se producen y exhiben en salas comerciales 16 documentales que de distintas formas ponen en escena tópicos sociales de la Argentina.

Paralelamente, los colectivos se dieron la tarea de participar en los debates que se estaban dando en relación con el financiamiento de las producciones documentales.

Conformado como red, Adoc intervino políticamente en procura de cambiar la normativa vigente. En 2001 se opuso a las intenciones del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de promulgar un reglamento para el documental, cuyas pautas de producción iban a ser elaboradas por la productora Cine Ojo de Carmen Guarini y Marcelo Céspedes, quienes de manera discrecional monopolizaban la distribución de subsidios a la realización documental. Las acciones de intervención en el debate, no sólo impidieron la aprobación de esa regulación a través de marchas y movilizaciones, sino que obligaron al INCAA a realizar un concurso de fomento al documental, con un jurado elegido entre los productores documentales en asamblea (en lugar de que esa tarea fuera asignada a Guarini y Céspedes) para promocionar la producción de trece proyectos.

Finalmente, y como resultado de ésta y otra serie de intervenciones políticas, en 2004 se modificó un artículo de la Ley Nacional de Cine por el cual el formato documental es incluido en la promoción estatal. Con la Resolución N° 0658/04 se crea el Plan de Fomento del Instituto de 2004, en el cual se incluye por primera vez este formato y se agrega el aliciente de que el proyecto pueda ser presentado en formato digital abaratando los costos.

Recapitulando, estos grupos, agrupables dentro del activismo cultural, echaron mano de estrategias diversas en procura de modificar efectivamente la normativa sobre la producción audiovisual. Por un lado, la experiencia anterior al ciclo de protesta les permitió ensayar diversas estrategias de acción concreta. Más adelante, en el ciclo que se abre entre 2001 y 2004, los productores audiovisuales ya asociados

en redes, abonaron las pantallas de circuitos de exhibición alternativos y de algunas salas periféricas con documentales vinculados con la desigualdad social y la crisis. Paralelamente, y aún con desparejos resultados, algunos de estos cortos ganaron varios premios y menciones en festivales, especialmente internacionales, lo que señala la búsqueda de un interlocutor más allá del ámbito nacional que les proveyó de prestigio y reconocimiento en el ámbito local. Estas producciones fueron realizadas sin apoyo económico del INCAA, organismo que, por ser del Estado, juega un papel central en la delimitación de lo decible, subvencionando y/o fomentando algunos proyectos fílmicos y desalentando otros. Otra estrategia de autopromoción fue la creación de redes de acción colectiva (Diani, 1998). Conformados como redes, estos grupos participaron de diversas reuniones con las autoridades de la gestión del INCAA que, en respuesta a estas acciones decide encarar una estrategia de promoción y subvención del cine documental, asistiendo económicamente y a través de sus salas de exhibición a algunos largometrajes. Finalmente, el formato documental es incluido en la promoción estatal en el año 2004. En ese sentido, si bien la situación de los activistas audiovisuales no se ha logrado revertir en su totalidad, la batalla por modificar parte del marco normativo ha avanzado unos pasos con un gesto ‘arrancado’ al Estado.

Oportunidades dobles: políticas y también culturales.

A partir de aquí proponemos entablar un diálogo con algunos marcos categoriales para afinar algunas definiciones. En este sentido, una de las primeras cuestiones que surgen se

corresponde con la propia definición de movimiento social. En el caso concreto de los grupos de activismo cultural, consideramos necesario señalar un sesgo que descarga a estos grupos de la trascendencia política habitualmente atribuida al movimiento social. El énfasis de las teorías tradicionales se orienta a considerar que los movimientos sociales se movilizan centralmente en ocasión de la formulación de valores comunitarios. De ahí que se haya producido un viraje teórico hacia la comprensión de las acciones de los movimientos en términos estratégicos y no sólo de identidad (Zald, 1999). Sin embargo, en el caso de la Argentina, o incluso de otros países de América Latina, muchas agrupaciones se resisten a ser conceptualizadas como movimiento social. En los contextos político-culturales donde la sociedad civil es un actor debilitado, sugerimos que el activismo cultural puede ser conceptualizado, con McAdam, como la formación de “grupos centrados en la movilización de recursos” (1999:478). Habiendo asentado esta distinción, hemos encontrado algunos ejes interesantes en relación con la noción de marcos estratégicos. Esta idea implica la formulación de problemas que se le presentan a los movimientos sociales, y también a los grupos centrados en la movilización de recursos, en sociedades con relativa estabilidad institucional y problemas de distribución de recursos materiales más o menos resueltos. McAdam, por ejemplo, define a estos marcos de acción como los “esfuerzos estratégicos concientes de los grupos que conforman un movimiento para dotarse de sentido a sí mismo y a los problemas que les preocupan” (1999:476). De ahí que sus interrogantes centrales sean sobre los procesos de difusión de la palabra de los movimientos sociales, así como de las

tácticas internas y externas de los grupos de intereses (McCarthy, Smith y Zald, 1999). En sociedades como las nuestras, por el contrario, los contextos, económicos, sociales y culturales en el marco de los cuales se desarrollan los procesos, son diferentes. Y la distancia entre las organizaciones de la sociedad civil y los actores que intervienen en los espacios decisorios y/o que pueden interpelar políticamente a aquellos que toman decisiones, no sólo es mayor sino que es un espacio atravesado por complejos juegos de desigualdades económicas y diferencias culturales y sociales. De hecho, no es casual que el caso presentado aquí, y las reflexiones que nos ocasionaron, se enmarquen ambos en el período del último ciclo de protesta.

En este sentido, cobra relevancia la cuestión de las diversas temporalidades a las que están expuestos los grupos de activistas, que se encuentran en permanente estado de beligerancia cultural. En un bellissimo texto, Reguillo (2004) le advierte a Marcos sobre la existencia de al menos tres temporalidades distintas con las cuales el movimiento zapatista tendrá que lidiar: la interna del propio movimiento (asamblearia, reflexiva, de toma de decisiones); la externa de la sociedad civil (que regresa a su cotidianidad luego de ver, nuevamente, frustradas sus esperanzas de cambio); y la velocísima temporalidad de las agendas mediáticas (que corren detrás de noticias espectaculares y cuyas primicias son tan fugaces como efectistas). A estos tres niveles de temporalidad, habría que agregarle la propia del Estado, y la de las agendas gubernamentales, dinamizadas por tiempos específicos de los juegos políticos.

Otro señalamiento se relaciona con el lugar asignado a la cultura en relación con los marcos estratégicos. Entendida como una suerte de 'almacén' desde donde los sujetos extraen repertorios para tramar sus acciones confrontativas, Zald (1999) señala que los marcos de un movimiento son los que guían al movimiento al recurrir al stock cultural de una sociedad para definir formas de organización y de protesta. En línea con los desarrollos de Tilly (2000), estos aportes nos parecen esenciales para comprender las formas que adoptan, históricamente, los repertorios de las acciones de protesta. Sin embargo, nuestros análisis ubican a la cultura no sólo como un lugar de partida, sino también de llegada. De partida porque entendemos que en sociedades con bajos niveles de democratización en la distribución del poder, el motor de los cambios es, en primer lugar, la acción cultural. La existencia de zonas blandas (de Certeau, 1999) en la cultura, es lo que habilita a los grupos sin voz a intentar su modificación y, en ese tren, a luchar por obtener autoridad, legitimidad y poder. El mismo acto de producción señala hacia el deseo y la necesidad de ciertos grupos de ocupar un lugar ocupado por otros, y por eso mismo disputable. Simultáneamente, decimos que también es un lugar de llegada, porque consideramos que aquello que los grupos en estado de beligerancia cultural producen, van modificando, aunque no siempre de modos 'resplandecientes' o duraderos, los consensos establecidos.

Paralelamente, y en la misma sintonía, entendemos que, en el caso presentado, no se trató de un momento de apertura de oportunidades sólo políticas, sino que ésta fueron también culturales, porque en parte fue la dinámica cultural la que hizo permeable

la circulación de tópicos habitualmente desatendidos por las agendas mediática, pública y gubernamental. Focalizando sobre las acciones estratégicas, Zald señala que “las oportunidades políticas y de movilización son el resultado de un proceso de rupturas culturales que hacen aflorar a la superficie contradicciones que habían estado allí, latentes, desde hacía tiempo. Estas contradicciones permiten re-estructurar quejas e injusticias, así como las posibilidades de actuación” (1999:378-379). La constatación de que las oportunidades políticas tienen un componente cultural insoslayable, parece comprender privilegiadamente, en la versión de Zald, a las decisiones de los grupos respecto de la definición de la oportunidad política. Y aunque compartimos la afirmación de que los componentes culturales alimentan las capacidades estratégicas de los grupos, interesa aquí llamar la atención también sobre los cambios que los contextos recogen como resultado de las acciones de los grupos de producción cultural. En el caso presentado, si bien los videoactivistas, desde un punto de vista estratégico, supieron observar las rearticulaciones hegemónicas del momento particular del ciclo de protesta, y actuar en consecuencia, a la vez operaron efectivamente, con sus acciones, sobre el contexto cultural: tópicos, temáticas y narrativas emergían como sumatoria de la acción cultural.

Nuevamente, esta dimensión se vuelve más relevante aún cuando se pone en consideración la cuestión de las temporalidades en juego: por un lado, la lentitud con que las acciones de los grupos productores de cultura producen cambios, y, por el otro, la velocidad con que, en ocasiones, se generan modificaciones políticas de alto voltaje rupturista. “Cuando cambian los temas conflictivos incluidos en las agendas”,

como sucedió entre el 2002 y el 2004 en Argentina, “se crea una oportunidad política para aquellos grupos que quieren resaltar los problemas cuya solución propugnan” (McCarthy, Smith y Zald, 1999:426). En este caso, el concepto de oportunidades políticas de Tarrow (1997) ilumina un elemento del proceso, justamente, el de la temporalidad veloz, el de la excepcionalidad política, el de la ruptura de certidumbres. El lento y rutinario proceso de acciones culturales en la larga temporalidad, que va dejando marcas y acumulando fuerza simbólica a través de una escala de acción mínima, es también un elemento crucial. En nuestras investigaciones constatamos que las oportunidades políticas que se dieron entre 2002 y 2004, se encontraron con la experiencia sedimentada y acumulada de las acciones de unos sujetos que ya estaban en estado de beligerancia cultural. El conjunto de oportunidades culturales se compatibilizaron con un proceso ininterrumpido, acumulativo y sedimentable de producción cultural. Dicho en otras palabras, la temporalidad, más lenta, y más larga también, de los procesos provenientes del estado de beligerancia cultural, ‘se topó’ en esos años con un momento de apertura política, lo que Gamson y Meyer (1999) denominan la gran oportunidad. De hecho el activismo audiovisual comienza unos años antes de esta gran oportunidad, aunque el impacto de su funcionamiento redituó, más tarde, en la consecución de logros materiales.

Las tácticas empleadas antes de la apertura de un ciclo de protesta no pueden ser consideradas irrelevantes de cara a los logros concretos: su efectividad se da también en el plano de una horadación lenta y constante de las estructuras simbólicas. Y es que un

grupo en estado de beligerancia cultural teje una trama simbólica y material, de resultas de la cual la gran oportunidad permite la apertura de un juego de interlocución que ya viene siendo horadado persistentemente (aunque desde posiciones desfavorables) en el momento en que éste se vuelve extremadamente vulnerable a los cambios. De ahí que creemos que las acciones estratégicas, por sí solas, difícilmente puedan modificar la administración de los recursos del Estado, al menos en los países de nuestra región. Y que las acciones de beligerancia cultural producen, por acumulación lenta pero poderosa, modificaciones en el campo de lo autorizado a decir en una coyuntura (gramscianamente) específica de la historia.

Otro elemento que surge del caso presentado, y que permite cierto grado de generalización, es que, cuando los sujetos en estado de beligerancia cultural son colectivos de artistas y no sólo 'grupos de interés' de la sociedad civil, los vínculos entre ellos y la cultura va por otros andariveles. Y esto es así porque la importancia dada a la producción cultural condiciona las relaciones que estos grupos establecen con la industria cultural y con el mercado de la cultura (Baranchuk, 2007). Estos colectivos tienen como meta la producción cultural y, por eso, ubican a esta producción 'por delante' de la obtención de beneficios y no por detrás. Paralelamente, las acciones más decididamente estratégicas de estos grupos, también apuntan a legitimar sus productos culturales en circuitos donde se disputa el prestigio del campo del arte. Los canales para la erosión son aquí dobles: las acciones concretas de denuncia, y los modos de acumulación de capital simbólico en circuitos artísticos que otorgan legitimidad a las

intervenciones estético-políticas en la ciudad. Por lo tanto, los grupos orientados por la producción cultural no siempre se proponen estratégicamente convocar a los medios de comunicación para lograr visibilidad y acceder a un espacio en las agendas, acción que sí toman en cuenta en la actualidad, intencionalmente, los movimientos sociales. De modo que la obtención de visibilidad no es siempre, ni necesariamente, un objetivo intencionalmente buscado, sino que forma parte de la propia dinámica interna de su producción.

Al focalizar sobre el gesto instrumental, no se pretende sin embargo restarle valor simbólico a las producciones, ni mucho menos juzgar su calidad. Lo que se crea en este caso, es un modo particular de actuación de estos grupos que, al culturalizar sus prácticas políticas, intentan convertir al arte y a la cultura en un campo político. Y al politizar sus prácticas culturales, renuncian a su propio rol de legislar sobre los parámetros del gusto y se asumen como mediadores culturales entre el arte y las demandas ciudadanas. En el caso de los grupos de videoactivismo, por ejemplo, la circulación de los filmes en festivales de cine internacionales permite dos cosas: una visibilidad en las secciones de crítica cultural de los medios, tanto de circulación nacional como regional e internacional, con lo cual podría decirse que ingresan al juego de la interlocución 'por la puerta de atrás'; y la chance de recibir un premio que legitime, artísticamente, los esfuerzos destinados a la producción cultural. Lo que interesa resaltar es la especificidad de los espacios donde se ponen en juego algunas acciones estratégicas de los grupos de producción cultural.

De hecho, las acciones de obtención de visibilidad son homologables a un proceso de comunicación externa. En este proceso, son invocados los dispositivos de la cultura, explícita o implícitamente. Los sujetos producen acciones rupturistas que ‘golpean’ la rutina de sentidos estabilizados: un barco ambientalista impidiendo cuerpo a cuerpo que un buque pesque; una manifestación de minorías sexuales; una performance artística en el frente de una institución pública. El objetivo de estas acciones rupturistas es, por un lado, obtener reputación (Bailey, 1971); y por el otro, ingresar a las agendas: mediática, pública, gubernamental. El reconocimiento social así adquirido incide en la reputación que implica, más que la mera visibilidad, la obtención del derecho a ser juzgado con los mismos estándares morales que el resto de la sociedad. Esto implica que las demandas pueden ser sostenidas en el tiempo sólo si se posee reputación porque a partir de ella se conformarán interlocutores válidos dentro de un universo de sentidos legítimos. En ese sentido, las temáticas (locales o globales) que marcan las demandas, señalan tanto hacia la diversidad de escalas de acción (Jelin, 2003), como a la identificación de diferentes interlocutores. En la rutinaria armadura de estos procesos (de ruptura, de búsqueda de reputación, de calificación o descalificación por parte de la opinión pública, de ingreso en diversas agendas), los grupos van incidiendo sobre las agendas. Se trata de una batalla, a largo plazo, por el sentido de lo decible, de lo creíble y de lo realizable.

Las acciones destinadas al repliegue reflexivo, son homologables a acciones de comunicación interna. En estos procesos, los grupos se repliegan

para darse a sí mismos un tiempo de intercambio sobre dos clases de tópicos: estratégicos e identitarios. La mayor parte de las veces, ambos se dan en simultáneo. Es en este sentido que Melucci (1994) plantea que la misma acción colectiva forma parte de los mecanismos de conformación de identidades y, por eso mismo, reintroduce marcas en la acción. Lo cierto es que, desde el punto de vista de los cambios subjetivos, el aspecto identitario de las acciones reflexivas, tiene un componente de agenciamiento. Como señala Ortner (2005), la posibilidad de agencia supone que el sujeto internaliza “una serie de circunstancias en las que se encuentra, reflexiona sobre ellas y, finalmente, reacciona contra ellas” (46). Las instancias de reflexividad se asocian, también, a los procesos asamblearios que algunos grupos se dan a sí mismos como parte de la conformación de un nuevo ‘contrapoder’, como es el caso del zapatismo analizado por Reguillo (2004), o el caso de HIJOS. La beligerancia cultural no es ‘algo que está afuera’ del grupo y que éste adquiere. Es un estado. Un grupo se encuentra en estado de beligerancia cultural. Tampoco se trata de una condición espasmódica, sino que posee una dimensión temporal, aún cuando los análisis suelen opacar los momentos de repliegue e interesarse sólo por los momentos de luminosidad de las acciones (Jelin, 2004).

Entonces, una diferencia crucial puede inferirse del uso de los dispositivos de la cultura: una cosa es el caso de grupos con vocación artística y/o estética los cuales, por el contrario, ubican a sus propias producciones estéticas como objeto de los dispositivos culturales especializados (críticos de arte, catálogos, circuitos artísticos, etc.); otra cosa es la

realización de acciones colectivas (como sería un corte de ruta) para convocar a los medios de comunicación provocando su noticiabilidad.

Simultáneamente, en los últimos años han surgido grupos que invierten ambas situaciones y les dan otro signo: producen acciones de intervención estética sobre el espacio público que provoca la convocatoria mediática. Por ejemplo, el grupo Etcétera, que en febrero de 2002 invitó a la población a llevar su propia materia fecal, o la de un amigo, familiar o mascota, para arrojarla contra unas tapas de inodoro que simulaban blancos con la cara de los miembros de la Corte Suprema de la Nación. Esta performance ocurrió en las escalinatas mismas del Congreso de la Nación, en el centro simbólico de la Ciudad de Buenos Aires, en el mismo momento en que adentro la cámara de diputados debatía el presupuesto económico para el año en curso. La repercusión mediática permitió que el concepto de la acción se expandiera hacia otros puntos del país, donde fue imitado (Vázquez, 2007).

Es verdad que el logro de los productores de bienes culturales no modifica radicalmente los problemas derivados de la situación económica y social porque sus acciones no distribuyen de otro modo la riqueza. En todo caso, se trata de una victoria moderada que pretende re-incidir en la sociedad para que, a su vez se den públicamente discusiones que apunten a resolver los problemas estructurales. Y todo esto, ambiciosamente, sin descuidar los elementos estratégicos de las acciones, porque, concretamente, de lo que trata la acción de los grupos de activismo cultural, es de influir sobre lo político para conseguir que se modifique parte o la totalidad de una política pública (Mc Adam, 1999).

Ya mencionamos que la propia acción grupal permite la construcción subjetiva de la posibilidad de agenciamiento, de reflexionar sobre las condiciones de existencia. Desde un punto de vista objetivista, las acciones de agenciamiento efectivo pueden pensarse como aquellas que implican relaciones de participación y de acceso (Grossberg, 2003). En tanto soporte de la acción, y en tanto acción política con objetivos concretos acerca de la utilización del poder en forma diferencial, esta modalidad de agenciamiento apunta a re-distribuir el acceso a los recursos en disputa. La calidad de los recursos puede variar: material (medibles en dinero, subsidios, planes, etc.); simbólica (reconocimiento cultural, difusión, prestigio, etc.); o normativa (derechos, modificaciones legales, etc.). E implica en un alto grado, al menos en sociedades con bajos niveles de democratización, el acceso a las esferas decisorias del Estado.

Visibilidad, repliegue y agenciamiento

Nuestra intención, como nos propusimos demostrar, no es desechar estas líneas conceptuales, sino producir un diálogo que, al mismo tiempo que discuta la centralidad del elemento estratégico, reponga analíticamente el análisis de las modificaciones en la dinámica que produce oportunidades políticas y culturales. Y esto porque entendemos que es necesario observar tanto las acciones de los sujetos como las dinámicas generadas en la dimensión de la cultura donde esos sujetos actúan. Por eso sostenemos que la dimensión cultural es un elemento crucial en cada situación específica, aún cuando la temporalidad de los procesos de acumulación simbólica sea diferente de la temporalidad del campo político (Reguillo, 2004; Jelin, 2003, 2004). Por

eso mismo, nos interesa, también, pensar en las mallas que se van haciendo en el campo de la cultura, y que terminan colaborando en los procesos de sedimentación de los sentidos de una sociedad particular (Grimson, 2004) y más aún de los sujetos que deciden, en algún momento iniciar una acción disruptiva. Ello debido a que son esos sedimentos desde donde surgirán los repertorios que pondrán en juego.

Estamos ante la presencia de un fuerte componente cultural, que se trama, se mezcla, y se interpenetra con los componentes ‘puramente’ políticos (si es que acaso alguno de ellos existiera en estado puro). Por un lado, las acciones de los grupos en estado de beligerancia cultural exceden la pura puesta en escena de una actuación (García Canclini, 1995), de un hacerse ver, de un ‘estilo’; por el otro, navegan por carriles independientes de las redes de la política estrictamente partidaria o institucional. Las acciones de beligerancia cultural sólo son distinguibles, como se intento señalar, en una dimensión analítica. Así, las acciones de agenciamiento efectivo conectan, paralelamente, con los cambios en la dinámica político-cultural, con la efectividad para obtener reconocimiento social, y con el contexto específico de la sociedad en la que esos gestos se insertan. Hay grupos donde el gesto instrumental es el que motoriza las acciones, mientras que otros tienen procesos regulados por principios exógenos sistemáticos. En algunos casos se trata de ‘olfatear’ las mejores oportunidades para disputar recursos, y en otros, por ejemplo, la visibilidad adquirida resulta de una situación aleatoria. Según las especificidades con que cada grupo combinan los tres tipos de acciones, el análisis permitirá dar cuenta de momentos con diversas

acentualidades, y no de ‘modelos’ de cuya jaula analítica no se puede salir.

Finalmente, sostenemos entonces que cuando un grupo se encuentra en un estado de beligerancia cultural, pone en juego distintos elementos: acciones rupturistas, un discurso herético, gestos instrumentales, búsqueda de reconocimiento social y/o procesos internos de construcción de identidad. La matriz utilizada para el análisis ha sido probada en el caso del videoactivismo y también en otros con los cuales fue comparado. Los resultados obtenidos muestran heterogeneidades en las combinaciones posibles, pero dentro de un rango acotado de acciones tipificables analíticamente. A pesar de que es necesario continuar la exploración para ajustar y sofisticar la reconstrucción empírica, consideramos que los análisis comparativos realizados hasta ahora en base a esa matriz, nos han permitido avanzar en algunas reflexiones y discusiones preliminares.

Concretamente, si los elementos presentados plantean diferencias en cuanto a decisiones estratégicas, nos interesa también iluminar aquellos aspectos culturales que dan cuenta de la terquedad, la fortaleza o la resistencia para modificar el campo social.

Pero también es menester señalar que las acciones estético-comunicacionales generadas por los grupos de activismo audiovisual junto a diversos movimientos sociales han intentado producir nuevos repertorios de acción colectiva y contribuir en los procesos de conformación de las identidades colectivas de los grupos junto a los que trabajaron (Melucci, 1995; 2002).

Las acciones de los activistas anteponen la instrumentalidad a la

valoración dentro de los campos de legitimación estéticos en los que se inserten. Dicha instrumentalidad puede tener distintos objetivos pero implica que las dimensiones estéticas deben ser pensadas desde una articulación con sujetos partícipes de alguna acción colectiva y poseen una intencionalidad comunicativa.

En este sentido proponemos, desde la observación concreta realizada, profundizar las propuestas que entienden la acción colectiva desde una lógica política del conflicto, articulada desde sus componentes discursivos. Naishtat sostiene que las acciones de protesta, de disrupción, de intervención, son vistas como disputas realizadas en el campo agonal y polifónico de fuerzas ilocutarias que componen la opinión pública y tienen por objetivo la interpelación de los públicos (2005: 30). Pero tal como hemos trabajado a ello debe sumarse que existen dispositivos de enunciación social, de los cuales los medios masivos y la industria cultural son uno de los más importantes, que regulan y deciden sobre el acceso al citado campo agonal.

Este planteo permite continuar los aportes de Melucci, quien sostiene que la acción social no puede analizarse solamente dentro de las contradicciones estructurales, sino que tiene que considerarse como una orientación intencional que se establece dentro de un sistema de oportunidades y coerciones. El citado sociólogo italiano considera la acción colectiva como resultado de intenciones, de recursos y de límites, dentro de un sistema de oportunidades y restricciones.

Teniendo en cuenta estos aportes, nuestro trabajo pretende avanzar sobre las acciones mediante las cuales, a pesar de condiciones objetivas adversas (económicas, legales, técnicas,

etc.) los activistas producen discursos capaces de generar nuevas formas de identificación y también sobre los intentos -y pequeños logros- por producir modificaciones tanto en el espacio de lo que es legítimo decir, como en los dispositivos desde los que se hace posible decirlo y construir de modo colaborativo-negociado, narrativas identitarias en los grupos junto a los que trabajan.

La agenda de investigación está marcada. Esperamos que estos apuntes colaboren en promover discusiones e intercambios que enriquezcan las distintas perspectivas analíticas.

Bibliografía

- Auyero, J. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Benas, L. (2004). *La cultura como herramienta de lucha, estudio del caso "La fábrica cultural", el centro cultural de Impa*. Tesina de licenciatura en Ciencias
- Baley, F: (1971) *Gift and poison: the politics of Reputation*, Oxford: Basil Blackwell.
- Baranchuk, M. (2007) "Mercado Cultural e industrias de la comunicación y la cultura: en la búsqueda de algunas distinciones clasificatorias" en En Luchessi, L. y Rodríguez M. G. (comp.) *Fronteras globales. Cultura, política y medios de comunicación*. Buenos Aires: Prometeo.
- Basualdo, E. (2001). *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Buenos Aires: UNQ/FLACSO/IDEP.
- Calhoun, C. (1999). *El problema de la identidad en la acción colectiva*. En Auyero, J. (Comp.) *Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana*, pp. 285-212. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

- Campo, J. (2006): "Extensión o Comunicación", Tesina inédita.
- Campo, J., Dodaro, C. y Vázquez, M. (2005). "Cine militante, una revisión histórica del concepto" en IX Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación Las (Trans)formaciones de las subjetividades en la cultura contemporánea. Reflexiones e intervenciones desde la comunicación, Villa María, 22 al 24 de setiembre de 2005.
- de Certeau, M. (1999) [1974]. La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva Visión.
- De Carli, G. (2005). Desterrados, furtivos, presentes, visibles. *Zigurat* 5(5): 80-71.
- Diani, M (1998). "Las redes de los movimientos sociales: una perspectiva de análisis" en Ibarra, P. y Tejerina, B (eds.) Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Trotta, Madrid, 1998.
- Dodaro, C. & Salerno, D. (2003). Cine 'militante': repolitización, nuevas condiciones de visibilidad y marcos de lo decible. Ponencia presentada en las Segundas jornadas de jóvenes investigadores, IIGG, Buenos Aires, 2-3 de Octubre.
- Dodaro, C., Marino, S., & Rodríguez, M. G. (2005): "La acción colectiva y el cine documental militante en Argentina: una relación conflictiva", en *Making OurMedia: Mapping Global Initiatives Toward a Democratic Public Sphere*, Hampton Press, San Francisco.(2009)
- Dodaro, C., Marino, S., y Rodríguez, M. G. (2007) "Argentina: el caso del cine documental militante durante el ciclo de protesta 2001-2004" ponencia presentada en el V Congreso Europeo de Latinoamericanistas, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), Simposio: La acción pública no gubernamental (APNG) en América Latina: su impacto político, social y económico. Abril de 2007. Bruselas
- Fransoni, M. (2007). Fasinpat. Estrategias de comunicación: uso y apropiación de dispositivos. Tesina de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Fsoc. UBA
- Gamson, W. & Meyer, D. (1999) [1996]. Marcos interpretativos de la oportunidad política. In D. McAdam, J. McCarthy & M. Zald (Eds.) *Movimientos sociales, perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo,
- García Canclini, N. (1995). *Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México: Grijalbo.
- Grossberg, L. (2003) [1996]. Identidad y estudios culturales: ¿no hay nada más que eso? En S. Hall & P. du Gay (Comp.). *Cuestiones de identidad cultural*, pp. 180-148. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gutiérrez Alea, T. (1995). Otro cine, otro mundo, otra sociedad. *La Gaceta de Cuba*, 6, Noviembre.
- Guzmán, P. (1997). *La Batalla de Chile*. Madrid: Hiperión.
- Hacher, S. (2003): "'Apuntar el lente', donde los medios de comunicación no están", en www.argentina.indymedia.org. Visitado el 05.02.2003.
- Jelin, E. (2001). *Memorias de la represión*. Madrid: Siglo XXI.
- Jelin, E (2003). La escala de la acción de los movimientos sociales. In E. Jelin (Comp) *Más allá de la nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*, pp. 5-25. Buenos Aires: del Zorzal.
- Jelin, E (2005). Reflexiones (localizadas) sobre el tiempo y el espacio. In A. Grimson (Comp.) *La cultura en las crisis latinoamericanas*, pp. 247-237. Buenos Aires: CLACSO.
- Mc Adam, D., Mc Carthy, J., y Zald, M.N., (comp.)(1999). *Movimientos*

- Sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo.
- Mc Adam, D. (1999). "Marcos interpretativos y tácticas utilizadas por los movimientos: dramaturgia estratégica en el Movimiento americano pro-derechos civiles". En Mc Adam, D., Mc Carthy, J., y Zald, M.N., (comp.)(1999). *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, Madrid, Istmo.
- Mastrini, G. (Comp.). (2005) *Mucho ruido y pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004)*. Buenos Aires: La Crujía.
- Melucci, A. (1987). ¿El fin de los movimientos sociales?, Paper introductorio a las secciones sobre nuevos movimientos sociales y cambios en las formas de organización social. 23 (4/5).
- Melucci, A. (1996) ¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?. Méjico: Sedepac.
- Melucci, A. (1994). *Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales*. Zona Abierta 69: 68-34.
- Mestman, M. (2001). *La exhibición del cine militante. Teoría y práctica en el Grupo Cine Liberación (Argentina)*. Ponencia presentada al VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC), Madrid, 13 y 14 de noviembre.
- Mestman (1997). *Cine político y procesos culturales. Argentina 1966-1976*, mimeo.
- Mestman (1995). *Notas para una historia de cine de contrainformación y lucha política*. En *Causas y Azares* 2:144/161.
- Naishtat, F., Schuster,F., Pereyra, S., Nardacchione, G. et al. (2005) *Tomar la palabra*. Buenos Aires : Prometeo.
- Ortner, S. (2005) Geertz, subjetividad y conciencia posmoderna. *Etnografías contemporáneas* 1(1): 25-53.
- Oszlak, O & O,Donnell, G. (1984): *Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación*. En Flores (comp.) *Administración pública, Perspectivas críticas*. Buenos Aires: ICAP.
- Ranzani, O. (2002): "Los films de una era de piquetes y cacerolazos", en diario *Página/12*, 07.05.02, Buenos Aires.
- Ranzani (2002): "La saludable Costumbre de mostrar la Realidad", en *Página 12*, 02.09.2002. Buenos Aires.
- Ranzani (2002): "Últimas imágenes de la resistencia", en *Página 12*, 29.09.2002. Buenos Aires.
- Reguillo, R. (2004): "Subjetividad, crisis y vida cotidiana. Acción y poder en la cultura". En A. Grimson (Comp.) *La cultura en las crisis latinoamericanas*, 270-249, CLACSO, Buenos Aires.
- Rodríguez Esperón, C. y Vinelli, C. (2004). *Contrainformación*. Buenos Aires: Continente.
- Rodríguez, M. G. (2007). *La beligerancia cultural, los medios de comunicación y el 'día después'*. En Luchessi, L. y Rodríguez M. G. (comp.) *Fronteras globales. Cultura, política y medios de comunicación*. Buenos Aires: Prometeo.
- Ruso, S. (2002). *Matanza: un fenómeno de boca en boca*. en www.leedor.com.
- Segato, R. (1998). *Alteridades históricas/Identidades políticas: una crítica a las certezas del pluralismo global*. *Série Antropología* 234: 112-48.
- Solanas, F. & Getino, O. (1973). *Cine, Cultura y Descolonización*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Svampa, M. (2004). *Relaciones peligrosas. Sobre clases medias, gobierno peronista y movimientos piqueteros*. *El Rodaballo* 15(10):3-9.
- Tal, T. (2005). *Influencias estéticas de Eisenstein y Vertov sobre el cine militante argentino: 'Los Traidores' y*

- ‘Los hijos de Fierro’, en www.avizora.com.
- Tarrow, S. (1997). El poder en movimiento. Madrid: Alianza.
- Tarrow (1999) [1996]. Estado y oportunidades: La estructuración política de los movimientos sociales. In D. McAdam, J. McCarthy & M. Zald (Eds.). Movimientos sociales, perspectivas comparadas. Madrid: Istmo.
- Tilly, Ch. (2000). Acción colectiva. Apuntes 6:12-28.
- Vázquez, Mauro (2008). “Las formas de la visibilidad : cultura, política e identidad en la comunidad boliviana en Buenos Aires”. En Revista Delito y Sociedad. Buenos Aires. Vol. 27 p.111-120
- Venas, L. (2004): La cultura como herramienta de lucha, estudio del caso “La fábrica cultural”, el centro cultural de Impa. Tesina de licenciatura en Ciencias de la comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires
- Williams, R. (1997). La política del modernismo. Buenos Aires: Manantial.
- Williams (1989) What I Came to Say. Londres: Hutchinson.
- Zald, M., (1999). Cultura, ideología y creación de marcos estratégicos, en Mc Adam, D., Mc Carthy, J., y Zald, M.N., (comp.).
- Zallo, R. (1988). Economía de la comunicación y la cultura. Madrid: Akal.
- Zibechi, R. (2003). Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. La Plata: Letra Libre.

Narrativas en disputa sobre violencia y protesta

De “el movimiento piquetero amenaza desestabilizar el gobierno de Duhalde” a “el anterior gobierno tuvo que adelantar las elecciones por la muerte de piqueteros en el Puente Pueyrredón”

*Marcela Perelman*²⁶

Resumen

El análisis de diferentes versiones construídas sobre un caso emblemático de represión de la protesta social presenta formas en que estas narrativas, aunque opuestas, se constituyen entre sí. Esta trama de versiones sobre los hechos plantea un pasaje de un contexto social previo en el que el par protesta-violencia estaba anclado en forma predominante en la alegada peligrosidad del movimiento piquetero, a un contexto en el que el mismo par encuentra anclaje también en la violencia policial. Pasaje que resulta central de cambios en el posicionamiento oficial frente a la protesta social en los siguientes gobiernos.

Palabras claves: movimiento piquetero, protesta social, represión policial

Summary:

The analysis of different versions around an emblematic event of repression of a social protest presents several ways in which these narratives, though opposite, are constitutive of one another. The net of versions presents a passage from a previous social context in which the conceptual pair violence-protest was predominantly anchored to the alleged menace of the “movimiento piquetero” to a context in which the same pair is also anchored to police violence. This is also a key-passage to the new official policies that the subsequent governments implemented in regards to public demonstrations.

Key words: piquetero movement, social protest, police repression

Recibido: 30.07.2009 Aprobado: 21.10.2009

²⁶ Integrante del Equipo de Antropología Jurídica y Política, ICA, UBA / Instituto de Investigaciones Gino Germani / CONICET.

Introducción

Propongo reflexionar sobre el caso “Puente Pueyrredón” como acontecimiento de articulación, como pasaje, entre discursos y prácticas sobre posicionamientos oficiales en torno de la protesta social. Hablo de “Puente Pueyrredón” para dejar claro que me refiero al *caso*, a la etiqueta que corresponde a la construcción social en torno de la represión del 26 de junio de 2002, durante la que dos manifestantes piqueteros fueron asesinados por parte de funcionarios policiales.

Inicialmente, planteo que puede pensarse el caso como un pasaje de un contexto social previo en el que el par protesta-violencia estaba anclado en forma predominante a una alegada peligrosidad del movimiento piquetero, a un contexto en el que el mismo par encuentra anclaje también en la violencia policial. La propuesta, entonces, es analizar este *pasaje* a través de comparar los relatos sobre lo que anteriormente se (dijo que se) suponía que iba a ocurrir ese día, y las versiones sobre *lo que ocurrió* el 26 de junio de 2002. Comparar relatos que advertían la peligrosidad de lo que ocurriría y aquellos que, luego, cuentan lo sucedido.

A partir de esta comparación busco plantear algunas nociones respecto de cómo las *versiones*²⁷ se han

Agradezco los comentarios, intercambios y sugerencias bibliográficas a María Josefina Martínez, Lucía Eilbaum y Sofía Tiscornia, del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a Enrique Font, de la Universidad Nacional de Rosario y a Gabriel Kameniecki. Sus aportes no sólo me ayudaron a ajustar los argumentos que aquí se presentan, sino también a reorientar y cambiar ciertas conclusiones.

²⁷ En su tesis doctoral la antropóloga María Pita al oponer el discurso de los familiares de

relacionado, constituido, entre sí. Procuró evitar una mirada sobre las diferentes versiones como si compitieran desde campos estancos e intento avanzar en conceptualizar algunas formas en las que las narrativas se contaminan, se fortalecen, convergen en una matriz de relaciones compleja a la que otorgan, y de la que toman, sentidos.

Acompaña este planteo una reflexión sobre los límites del análisis del discurso para dar cuenta de las dinámicas de construcción de narrativas y la necesidad de articular dicho análisis con otras herramientas disciplinares que colaboren en plantear las preguntas adecuadas.

El caso Puente Pueyrredón

Junio de 2002 era un mes crítico en la gestión presidencial interina de Eduardo Duhalde, tanto en referencia a la situación económica como a la conflictividad social. La protesta social, asociada a diferentes acontecimientos de violencia en la historia argentina reciente registraba el muy cercano antecedente de los hechos del 19 y 20

víctimas de la violencia policial con el discurso policial, introduce un nivel de diferenciación entre lo que entendemos por *versiones* y lo que debe identificarse como “historias distintas”: “No se trata de historias contadas desde diferentes puntos de vista, sino de distintas historias. Así, el relato descarnado de los hechos muestra distintas versiones de la misma historia, las versiones policial y militante, pretendiendo imponer diferentes interpretaciones sobre los hechos. Las narraciones de los familiares en cambio, organizadas a partir de un registro donde cobran primacía las emociones y los sentimientos, muestran las redes de sociabilidad, la trama de relaciones sociales pre-existentes a estas muertes que en cierta medida las hizo posibles y que, también, es la trama a través de la cual será posible no sólo acceder al conocimiento de lo sucedido sino organizar la denuncia e impugnación de la violencia” (2007, 21).

de diciembre de 2001, ocurridos sólo seis meses antes, durante los que al menos 30 manifestantes fueron asesinados en el marco de la represión de diferentes protestas. Los anuncios de las acciones de protesta que se llevarían a cabo el 26 de junio recibían diversa atención de los medios y dentro del gobierno. En distintas instancias fue quedando claro que no se trataba de una protesta más, sino de una que marcaría la “unificación del movimiento piquetero”, que implicaba serios riesgos para la gobernabilidad. Fue quedando instalado un relato según el cual las acciones del 26 de junio podían hacer caer al gobierno. Esta “profecía” se escribió en la prensa, se conversó en reuniones de alto nivel del gobierno y se advirtió en informes de inteligencia.

El 26 de junio se llevó a cabo una importante movilización que culminó con dos manifestantes muertos. El gobierno insistió con la versión de la posible acción subversiva²⁸, arrastrando la inersia del clima previo: *la violencia piquetera había escalado, piqueteros*

²⁸ “En la jornada del 27 de junio, las declaraciones oficiales no reconocieron ninguna responsabilidad de las distintas autoridades sino que tomaron otra orientación: Duhalde pidió a la Justicia que se investigara un supuesto complot, o bien, según sus palabras, una ‘maquinación concertada’, que intentó derrocar los poderes constituidos y el orden democrático. Esta nueva posición se fundamentaba en las primeras averiguaciones de las fuerzas policiales y de inteligencia que señalaban que en las agrupaciones piqueteras Corriente Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Rodríguez, se había identificado a dos supuestos activistas vinculados con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). Para argumentar esta toma de posición del gobierno, apuntaron a hechos que parecían fruto de acciones concertadas; a las armas de los piqueteros; al número de víctimas policiales (aunque sólo fueran dos, con heridas ligeras); a supuestas maniobras de emboscadas a policías, que remitirían a conocimiento de ‘lucha armada’ de parte de los manifestantes” (CELS, 2003: 152).

armados habían procurado bloquear todos los accesos a la Capital, el conflicto estallaba en los alrededores de Puente Pueyrredón con dos manifestantes muertos, “más de 30 manifestantes heridos y al menos dos policías heridos, también”, se desconocía el origen de los disparos fatales.

Dos días después, diferentes diarios nacionales publicaron series de fotos en las que con mucha claridad se ve que una de las víctimas fatales, Darío Santillán, estaba aun con vida en la Estación²⁹ Avellaneda cuando policías bonaerenses ingresaron al hall, en contradicción con la versión del comisario inspector a cargo del operativo que es, justamente, uno de los policías que aparecen en las secuencias de fotos. Más aun, la serie de imágenes da cuenta de la ejecución de Santillán por parte de la policía.

El relato, entonces, cambia para los actores: gobierno, policía, medios, movimientos sociales. La imagen de la violencia piquetera cede ante una imagen más clásica de la historia argentina reciente: la represión policial y la manipulación de las pruebas. Con este giro, los hechos del 26 de junio pasan a ser la “Masacre de Avellaneda”, y allí cambia el sentido asignado a la violencia que, entre otros aspectos, pasa de piquetera a policial.

²⁹ La reconstrucción del tiempo que medió entre las tomas fotográficas y su publicación en los principales diarios del país es objeto de discusiones que oscilan entre señalar pactos político-periodísticos y explicarlo a partir de las formas de trabajo entre el periodismo gráfico y el editorial. Resta investigar y analizar la articulación entre estos medios nacionales (Ej. Clarín, La Nación, Página/12) y otros medios (alternativos como Indymedia o el Diario de las Madres, masivos como la televisión) tuvieron en ese lapso que medió hasta la publicación de las imágenes.

Seis días después, el 2 de julio, el entonces presidente interino Eduardo Duhalde anunció el adelanto de las elecciones que estaban previstas para diciembre, a marzo de 2003. Su breve discurso no explicita las razones de su decisión. El análisis de la noticia en diferentes medios reflejó una serie de cuestiones que habrían motivado la decisión y el anuncio. La lista incluye referencias a factores predominantemente asociados a la situación económica y la relación con el Fondo Monetario Internacional³⁰. Con notable menor extensión y énfasis, se menciona como un posible factor concurrente las muertes de la semana anterior³¹ y las marchas de protesta que les siguieron.

Con el tiempo, sin embargo, se instaló fuertemente la idea de que Duhalde tuvo que adelantar las elecciones por las muertes de Kosteki y Santillán. Las referencias a los hechos del 26 de junio cada nuevo 26 y, luego, en cada aniversario, van delineando una “verdad política”, un consenso extendido comienza a cristalizarse hasta llegar al discurso oficial. De hecho, tres años después, el 7 de julio de 2005, en el discurso con el que Cristina Fernández de Kirchner lanzó su campaña a senadora por la Provincia de Buenos Aires, señaló: “El anterior gobierno tuvo que adelantar las elecciones por la muerte de piqueteros en el Puente Pueyrredón”³².

³⁰ El que más cobertura recibía era la necesidad del acuerdo con el FMI que se presentaba como sujeto a gestos de cambio político. El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, había regresado de un viaje a Estados Unidos con indicaciones en ese sentido.

³¹ Estas menciones no eran necesariamente como “represión”, “asesinato policial” o “gatillo fácil”, sino que abundaban las referencias a la “violencia social”, al “conflicto social”, a los “dos piqueteros que murieron”

³² Página/12, 8 de julio de 2005, “Poner escollos es ser como ‘El Padrino’”.

Frente a estas transformaciones en las *narrativas dominantes* (Smith, 1997: 94), me pregunto por la relación entre relatos según los cuales la gobernabilidad se encontraba amenazada por grupos piqueteros desestabilizantes (cuando no directamente “subversivos”) a otros según los cuales, efectivamente, la muerte de dos manifestantes piqueteros “le costó” el gobierno a Duhalde. Encuentro un pasaje que va de la amenaza de los movimientos sociales a la amenaza de las instituciones de seguridad: el gran riesgo, el costo político mayor, puede provenir de la represión, y ya no (o ya no solamente) de los movimientos protagonistas de la protesta. Propongo pensar estos relatos también como condensaciones de pujas al interior del gobierno, de posicionamientos frente a la protesta social y frente a la policía, formas de contar los hechos que coincidieron, a su vez, con momentos de cambio de las políticas de posicionamiento oficial frente a la protesta.

Estructura de las narrativas legitimantes de la violencia y de negación oficial

Para el análisis de las narrativas me serviré centralmente de herramientas de análisis de Philip Smith – antropólogo– y de Stanley Cohen – sociólogo. Esto implica un desplazamiento de las herramientas “básicas” o “generales” del análisis del discurso hacia algunos abordajes ya sistematizados para el análisis de discursos sobre violencia y, particularmente, sobre violencias del Estado.

Así es que tomo de Smith (1997: 94) su entrada a las concepciones sociales de la violencia a partir de las narrativas:

La teoría narrativa ha demostrado la importancia de las ‘historias’ como marcos que dan forma a representaciones colectivas del mundo, marcos que a su vez informan la acción social [...] En suma, podemos demostrar el significado de las narrativas para la sociedad civil como un recurso que sus miembros usan para dotar la violencia de legitimidad o ilegitimidad.

Las “narrativas maestras predominantes” (*prevailing master narratives*, Smith, 1997: 96) en secuencias históricas específicas, cambian con el tiempo y constituyen permanentemente un campo de disputas. Para analizar pasajes entre narrativas dominantes utilizo la estructura de la *narrativa legitimante* (Smith, 1997: 97-98), que tiene una estructura que puede pensarse en un continuo que va de la defensa propia, a la descripción de los hechos como acciones heroicas en defensa de otros. La violencia debe ser presentada como necesaria, inevitable. La narrativa debe reforzar el contraste entre las motivaciones y cualidades del perpetrador y aquellas del destinatario de la violencia, que deben ser ubicados en un marco narrativo que dé cuenta de la necesidad de la confrontación: “La presencia de un ‘otro-demoníaco’, dedicado a una violencia persistente, es entonces una precondition para el uso de la violencia por parte del héroe”. Smith (1997: 110) presenta tres condiciones de la narrativa legitimante de la violencia que *Estado y sociedad civil* deben alcanzar para legitimar los actos de violencia:

1. la violencia debe presentarse como un último recurso, restringido a niveles mínimos y no deben haber alternativas pacíficas;
2. la violencia debe ser ejercida por una figura cuasi-heroica contra un otro-demoníaco;

3. la violencia debe ejercerse en nombre de razones universales y desinteresadas.

Propongo complementar la estructura de Smith con los recursos argumentativos que Cohen analiza en los discursos de negación que esgrimen los Estados cuando se los acusa de violaciones a los derechos humanos. Cohen (2001: 103)³³ trabaja sobre tres variantes de la negación:

1. la literal (*nada ha pasado*),
2. la interpretativa (*lo que ocurrió es otra cosa*)
3. la implicatoria (*lo que ocurrió está justificado*).

A veces, aparecen en una secuencia visible: si una estrategia no funciona, se intenta con la siguiente. Si la negación literal es contrariada por evidencia irrefutable de que algo efectivamente sucedió –“imágenes de video de manifestantes pasivos siendo ejecutados”– la estrategia puede pasar a reinterpretaciones legales o justificaciones políticas (2001: 103).

Considero pertinente articular las condiciones de Smith con las etapas de negación de Cohen. Mientras Smith plantea ejes interesantes para el análisis de una narrativa dominante en un momento dado, aporta menos elementos para comprender cambios de estrategia en el discurso oficial. Por su parte, Cohen aporta algunas claves para comprender los cambios argumentales del gobierno ante nuevas evidencias y la imposición de una nueva narrativa dominante de los hechos. Complemento, entonces, las condiciones de las narrativas predominantes con el análisis de algunos recursos propios de las

³³ Traducción propia del inglés original.

estrategias de negación interpretativa e implicatoria.

Del riesgo subversivo a la atrocidad policial

El contexto previo al 26 de junio resultaba legitimante de la violencia. El alegado “riesgo institucional” que se predicaba sobre los movimientos sociales es, sin dudas, uno de los rótulos de riesgo de más alto grado para el sistema democrático. En nombre de salvaguardar el ordenamiento institucional, incluso la constitución prevé la suspensión de las garantías constitucionales (como demuestran los clásicos trabajos de Carl Schmitt y Giorgio Agamben sobre el Estado de excepción). Haber inscripto las acciones de protesta del movimiento piquetero como indicios de una escalada hacia el riesgo institucional fue una construcción política fuertemente habilitante de la violencia policial.

El poder legitimante de la defensa propia se encuentra activo en la “inevitabilidad” como fuente de legitimación. Lo inevitable nace justificado: el ataque de otro sobre la propia vida vuelve *inevitable* una defensa violenta. Lógicamente, diferentes narrativas oficiales que legitiman el recurso a la violencia giran sobre su *necesidad* (Elías, 1999 y Smith, 1997)³⁴. Muy cerca de la *inevitabilidad* se encuentra el argumento de la *última ratio*, la violencia como el tribunal superior al que es lícito, *necesario*, acudir cuando se han agotado las instancias, que encuentra su formulación clásica en la cita a Carl von Clausewitz acerca de que la guerra es la continuación de la

³⁴ A partir de esto, Rita Segato (2003, 144) propone rastrear las “señales de evitabilidad” en narrativas que proponen opciones a la violencia.

política por otros medios³⁵. La *necesidad* es, justamente, uno de los recursos que Cohen señala como clásico de la negación oficial implicatoria (2001: 110): “Una justificación menos estridente, es utilitaria y expeditiva [...] El gobierno, a su pesar, actuó por necesidad: defensa propia, defensa nacional”.

Las primeras versiones sobre las muertes de los manifestantes, tanto en los medios de comunicación como en los discursos oficiales, continuaron la matriz narrativa de la peligrosa violencia piquetera que venía sosteniéndose desde los meses anteriores. Cito, primero, el discurso del jefe de Gabinete Alfredo Atanasof en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, la misma tarde del 26 junio:

El Gobierno lamenta con mucho dolor tantos heridos y también los hechos vandálicos [...] hubo encapuchados con armas, con palos, atacando a policías, viviendas y negocios de la zona [...] la Argentina no soporta más violencia, la pacificación es una condición necesaria para superar la crisis [...] [hay que] evitar el caos, porque el caos sólo favorece a los violentos y a los conspiradores, mientras que la paz es el ámbito en el que podemos construir entre todos [...] [hay grupos que buscan] desestabilizar al Gobierno, generar violencia.³⁶

En segundo lugar, el ministro del Interior, Jorge Matzkin, afirmó:

Dichas acciones constituyen un plan de lucha organizado y sistemático,

³⁵ Sobre la ética de la violencia como último recurso, plantea Bobbio (1979, 196): “Existe por otra parte al menos una regla general a la que se adecuan tanto la violencia estatal e internacional, por un lado, cuanto la violencia revolucionaria, por el otro; se trata de la justificación de la violencia como extrema ratio”.

³⁶ La Nación, 27 de junio de 2002, “Duhalde pidió investigar los hechos de violencia”.

que puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos hemos elegido porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia [...] amenaza con el derrocamiento de los poderes constituidos y puede poner en peligro más vidas y la totalidad de las instituciones de la República.³⁷

En tercer lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires justificó el accionar de la policía a su cargo:

"Estos grupos estaban preparados para ir a la guerra y frente a esta actitud de violencia y destrucción la policía bonaerense no puede permanecer pasiva", dijo [el gobernador de la provincia de Buenos Aires] Solá.³⁸

Con matices, los medios gráficos nacionales oscilaron entre hacerse eco de estas versiones y dejar abiertas las preguntas acerca del origen de la violencia letal que ya se sabía que había provocado dos víctimas:

Diario La Nación

Más que una manifestación de la crisis social, el movimiento piquetero es una manifestación fronteriza –y por cierto violenta e inaceptable– de la política. [...] En esto, resultaría impropio ser asertivos, porque con otra Argentina, tan distinta de la actual, ¿por qué se produjo la subversión de los años 70?³⁹

Diario Clarín

Previsiblemente, la SIDE y las fuerzas de seguridad eligieron una hipótesis que los exculpa para justificar la represión de ayer. "Se

mataron entre ellos", fue la respuesta oficiosa que dio el Gobierno. En la misma sintonía se movieron la Policía Federal y la Bonaerense. Oficialmente, todos negaron saber el origen de las balas. En cambio, los piqueteros y algún funcionario escéptico coincidieron en avalar una hipótesis contrapuesta [...]

Esta teoría deja abierta la puerta para suponer que las balas que ayer provocaron dos muertes podrían haber salido de las armas de las fuerzas de seguridad.

Ninguno de los sectores implicados pudo mostrar pruebas para probar una u otra hipótesis. Las únicas certidumbres son la decisión del Gobierno de endurecer su política de seguridad y la de los piqueteros de radicalizar la protesta. Entre estas dos posturas divergentes, postales del país en crisis, ayer estalló la violencia.⁴⁰

Diario Página/12

Por lo que se sabe hasta ahora, cayeron escapando de la policía, uno de ellos porque decidió auxiliar a otro herido, los dos bastante después de iniciado el operativo de represión que la bonaerense desató en la bajada del Puente Pueyrredón como inicio de una cacería que prolongó durante varias horas por las calles de Avellaneda.⁴¹

La fuerte carga respecto de la responsabilidad piquetera en la violencia a desplegarse/desplegada el 26 de junio de 2002 comenzó a revertirse a partir de la emergencia de evidencias fotográficas de la ejecución de Santillán. Este momento marca un cambio en las estrategias de negación oficial, cuando la evidencia irrefutable obliga al gobierno a cambiar sus argumentos.

³⁷ La Nación, 27 de junio de 2002, "Matzkin: 'No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos'".

³⁸ La Nación, 29 de junio de 2002, "Solá: 'Franchiotti me mintió; contó sólo una parte de la verdad'".

³⁹ La Nación, 27 de junio de 2002, "Crónica de una violencia anunciada".

⁴⁰ Clarín, 27 de junio de 2002, "La violencia no sorprendió a la SIDE ni a la Policía".

⁴¹ Página/12, 27 de junio de 2002, "La cacería policial terminó con dos muertos a balazos".

Según las etapas de negación oficial que propone Cohen, el momento de la negación implicatoria cede entonces ante la negación interpretativa, uno de cuyos recursos más habituales es el *aislamiento de los victimarios*: “el gobierno concede lo sucedido y acepta responsabilidad, pero niega el carácter sistemático, rutinario o reiterado que se le puede atribuir al hecho” (2001: 107-109). Las antropólogas María Josefina Martínez y Lucía Eilbaum destacan el mismo recurso en el ámbito local: “En Argentina las explicaciones de la violencia policial en tanto hechos aislados encuentran todavía un gran eco, tanto en las declaraciones de funcionarios policiales como de responsables políticos” (1999: 8).

Con las imágenes publicadas, el entonces presidente Duhalde concedió: “Aparentemente, quienes deben custodiar el orden son los que llevaron a cabo esta atroz cacería”⁴². Y, unas horas después: “Cuando pasa este tipo de cosas, cuando un hombre actúa tan mal, perjudica a toda la policía”⁴³. La peligrosidad que se predicaba sobre las agrupaciones perdió potencia en el discurso político. De esta forma, la *inevitabilidad* y la *necesidad* fueron matizándose en el horizonte de verosimilitud y los hechos pasaron a integrar la extensa tradición de las verdades falseadas en nombre de “la seguridad”.

Por su parte, los medios que habían sostenido el discurso más estigmatizante

⁴² La Nación, 29 de junio de 2002, “Duhalde: ‘Fue una cacería atroz’”.

⁴³ El recurso argumental de aislar a un responsable como negación del carácter sistemático de una violación de derechos por parte del Estado, que aquí planteo en relación con la primera condición de Smith, volverá a plantearse más adelante también en relación con los intereses que se alegan sobre los actores de la violencia.

de las acciones de protesta social retomaron su posición anterior con mucho mayor persistencia que los dirigentes. En este sentido, la columna editorial del diario La Nación luego de la publicación de las imágenes fortaleció su posición anterior:

Los dolorosos enfrentamientos que se han registrado en estos días como consecuencia de los disturbios causados por grupos piqueteros - muchos de ellos con el rostro cubierto, como en los tristes tiempos de la subversión terrorista⁴⁴ deben encontrar una inmediata respuesta en la conciencia moral de los argentinos. La sangre que se ha derramado, trágico signo de la recurrente incapacidad de cierta dirigencia gremial para encontrar vías pacíficas de negociación, debería generar en la sociedad una reacción inmediata, tendiente a modificar de raíz los hábitos de violencia que se están instalando en el campo de la protesta social [...] Es lamentable, en ese sentido, que dirigentes [...] hayan respaldado el comportamiento de los grupos que iniciaron los disturbios en el puente Pueyrredón y sus inmediaciones y hayan enjuiciado con severidad a la policía por los métodos de que se valió para contenerlos. [...] Quienes conducen los movimientos de protesta social deben ser, a su vez, hoy más que nunca, cuidadosos y reflexivos. El precio que hay que pagar cuando esa responsabilidad se descuida se mide, con frecuencia, en vidas humanas, como se comprobó dolorosamente anteaer.⁴⁵

Del ojo de Franchiotti a la sonrisa de Quevedo

La segunda condición que señala Smith establece que en las narrativas legitimantes “la violencia debe ser ejercida por una figura cuasi-heroica

⁴⁴ Sobre las concepciones de sobre la protesta social como acciones irregulares, ver Perelman, 2009.

⁴⁵ La Nación, 29 de junio de 2002, “Desterrar la violencia”.

contra otro-demoníaco”. En la secuencia de las narrativas del caso analizado estas posiciones se van invirtiendo, hay un intercambio entre el espacio de las víctimas y el de los victimarios, se invierten *héroes* y los *demonios* cuando las relaciones sociales comienzan a cambiar sus signos.

Se puede focalizar esta transición en el pasaje entre dos imágenes que resultan paradigmáticas de una y otra narrativas: por un lado, el ojo ensangrentado del comisario Franchiotti difundida el día de los hechos; en oposición, la supuesta sonrisa del oficial principal Carlos Jesús Quevedo junto al cuerpo agonizante de Maximiliano Kosteki, difundida junto a la serie de fotos de la ejecución de Santillán.

En la primera imagen se ve al comisario Franchiotti el mismo 26 de junio de 2002 con el ojo sangrando. Los relatos periodísticos abundan en referencias a este detalle:

Cuando el comisario inspector Alfredo Fanchiotti comenzaba a dar una conferencia de prensa en la puerta de la guardia médica para *explicar los episodios* que habían ocurrido minutos antes en el puente Pueyrredón, *fue agredido por familiares de los piqueteros* heridos y tuvo que ser atendido por personal médico. El jefe policial se preparaba para dar explicaciones cuando, *sin mediar palabra alguna, recibió un puñetazo en la cara. Dos personas fuera de control lo hirieron en el rostro.* En el acto Fanchiotti *comenzó a sangrar.* Tuvo que ingresar en la guardia médica para ser atendido por los profesionales del nosocomio. Según el parte médico oficial, el comisario inspector "sufrió una herida cortante [...] Franchiotti ya *había sufrido lesiones leves cuando fue*

*alcanzado por un proyectil en el puente Pueyrredón.*⁴⁶

Las heridas, la sangre de Franchiotti, no sólo lo presentaban como un héroe, también probaban el origen de la violencia cuando todavía estaba en duda quiénes habían disparado contra Kosteki y Santillán. En otras palabras, su ojo ensangrentado era una evidencia que se presentaba para sostener la versión de los hechos anclada en la violencia piquetera. El diario La Nación cita a Franchiotti:

“Piqueteros y agitadores venían preparados para pelear. Con armas de fuego, palos y pasamontañas [...] Fuimos agredidos con objetos de todo tipo, entre ellos armas de fuego [...] Nosotros usamos en todo momento postas de goma. Pero escuchamos disparos de armas de fuego. Los manifestantes estaban con handies y con filmadoras [...] Fue muy parecido a diciembre último. Sobre todo por la violencia y los saqueos”, agregó Franchiotti, *con el ojo aún ensangrentado.*⁴⁷

El otro-demoníaco aparece ya en estas descripciones como “*familiares de los piqueteros que sin mediar palabra alguna y fuera de control golpearon al comisario en la cara*”. Pero, aun en forma más directa, la descripción predominante proveniente del *Estado* y de la *sociedad civil* era:

“Esta gente venía con toda la intención de pelear con nosotros... Con palos, armada, con trapos cubriendo su cara. No digo que se trataba de un ejército, pero es gente que iba a combatir”, señaló luego el comisario Franchiotti.

"Estos grupos estaban preparados para ir a la guerra y frente a esta actitud de violencia y destrucción la policía bonaerense no puede permanecer

⁴⁶ La Nación, 27 de junio de 2002, “Golpearon a un jefe policial en un hospital”.

⁴⁷ La Nación, 27 de junio de 2002, “El puente Pueyrredón fue un amasijo de palos, piedras y balas”.

pasiva", dijo [el gobernador de la provincia de Buenos Aires] Solá.⁴⁸

Enrique Pini, un vecino de Avellaneda que se presentó a declarar tras los sucesos, relató a LA NACION que vio cómo dos piqueteros arrojaban armas de fuego a la calle durante su huida.⁴⁹

“Hay algunos sectores mesiánicos que buscan desplazar con mecanismos de la violencia el funcionamiento democrático”, afirmó el vocero presidencial Eduardo Amadeo en referencia a las organizaciones piqueteras.⁵⁰

La imagen del ojo ensangrentado de Franchiotti refuerza su condición de héroe, de mártir y de víctima de la violencia, mientras subraya que los victimarios son los manifestantes piqueteros. Pero si el ojo ensangrentado de Franchiotti es el estigma que prueba su carácter heroico⁵¹ y el origen piquetero de la violencia, un día después la sonrisa del policía Quevedo será la prueba de la inhumanidad, del carácter demoníaco de la policía. En la fotografía aparece el policía bonaerense Quevedo con una expresión ambigua – ¿sonriendo?– junto a Maximiliano Kosteki gravemente herido. La imagen integra la serie sobre la ejecución de Santillán en la estación, en la que también se ve a los policías alterando la escena. Numerosas descripciones se detuvieron en el detalle de la supuesta sonrisa de Quevedo, un gesto que se

ofrece como prueba de su crueldad, revierte el sentido de la violencia, presenta a la policía como demonio y les devuelve el lugar de mártires a las víctimas:

Un odio que también se hizo visible para todos en aquella terrible sonrisa en la boca del policía federal que exhibía como un trofeo de caza el cuerpo muerto de Darío Santillán.⁵²

El muchacho queda con los brazos y los ojos abiertos, y empieza a perder más sangre. Se arma un segundo charco. Sus manos, sus manos de artista, siguen con guantes negros. El policía mira a otro fotógrafo y hace una mueca que parece una sonrisa.⁵³

El ex oficial es aquel que aparece en una foto que recorrió el mundo, donde se lo ve agachado al lado de Kosteki agonizante, con una sonrisa de oreja a oreja.⁵⁴

Después, cuatro efectivos, que lejos de tener una actitud de asistir a un herido, arrastraron el cuerpo. Voy hasta el hall y ahí también veo a un policía arrastrar a Kosteki. Lo acercó más al cartel y le levantó las piernas, en ese momento tomé la imagen con mi cámara, se sonreía, parecía un cazador con su presa" (el oficial mencionado es Carlos Quevedo, y elevaba las piernas del herido para que este se desangre más rápido).⁵⁵

Este es el momento en el que se impone un cambio de signo de argumentos y relaciones. El impacto de las imágenes publicadas, la falsación pública del relato sostenido por los

⁴⁸ La Nación, 29 de junio de 2002, “Solá: ‘Franchiotti me mintió; contó sólo una parte de la verdad’”.

⁴⁹ La Nación, 27 de junio de 2002, “Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía”.

⁵⁰ Página/12, 3 de julio de 2002, “La violencia siempre es piquetera para el Gobierno”.

⁵¹ Queda pendiente ampliar sobre las implicancias simbólicas de “la sangre en el ojo” de Franchiotti. Existen diferentes referencias hagiográficas que merecen un detallado análisis: ej. la lanza de Longinus, la sangre del martir.

⁵² Página/ 12, 16 de abril de 2005, “Camila, Ezequiel, Darío, Maximiliano”.

⁵³ Clarín, 30 de junio de 2002, “Qué pasó en Avellaneda, la estación de la muerte”.

⁵⁴ La Vaca.org, 19 de noviembre de 2005, “Dos tipos audaces (y cínicos)”.

⁵⁵ Prensa de Frente, Diario del juicio, 25 de Agosto de 2005, “El Gobierno había llegado a un punto sin retorno. Se preveía la represión” declaró el fotógrafo que estuvo en la estación. Esta fuente reproduce el testimonio del fotógrafo Sergio Kowalewsky, quien registro la ejecución de Darío Santillán.

funcionarios y responsables políticos y por las instituciones policiales, se erige en bisagra y crisis estructural e impactará en los posicionamientos posteriores. Resulta interesante pensar la “metamorfosis” de Franchiotti, como cara de la institución policial, “de ser de veneración a objeto de hostilidad” (Sahlins, 1997: 106).

El gobierno abandonó, con las evidencias publicadas, los dos ejes de su discurso anterior (que los manifestantes se habrían matado entre sí y que organizaban un plan de desestabilización nacional) para centrarse en la responsabilidad policial. Así lo hicieron el jefe de Gabinete y el Presidente una vez publicadas las imágenes:

“La familia argentina está de luto y desgraciadamente quienes deben custodiar el orden son los que cometieron esta atroz cacería”, dijo el Presidente en el acto de los prefectos.⁵⁶ “Deseo descartar cualquier vinculación entre cómo ocurrieron los hechos de violencia que llevaron a la muerte de los chicos y la intención de los grupos minoritarios que apelan al caos y que hablan de situación prerrevolucionaria. Más que de complot, debemos hablar de los indicios que hoy (por ayer) aparecen en los testimonios gráficos de los medios”, dijo [el jefe de Gabinete Atanasof] a la prensa en la Casa de Gobierno.⁵⁷

El predicar ciertas acciones sobre un sujeto, como alegar que sonríe junto a un joven que agoniza, permite inscribirlo como bestial o inhumano:

hay un “repertorio desviado de las ‘conductas extrañas’ de las personas” y hay acciones que quedan por fuera de

ese repertorio, que “no pertenecen ‘al hombre’”.⁵⁸

Finalmente en un acto difícil de comprender para cualquier ser humano, Quevedo y Colman levantaron las piernas de Maxi Kosteki con la única intención de que se desangrara.⁵⁹

Hay acciones violentas consideradas “humanas” y otras, que no. Y esta oposición humanidad-inhumanidad no se apoya necesariamente sobre lo que podría considerarse como el hecho más grave de la violencia, dar muerte, sino sobre otros rasgos de las acciones⁶⁰, en particular es en referencia al accionar frente a los cuerpos agonizantes o muertos (llamar o no a una ambulancia, cubrir o no los cuerpos, estar desesperado o sonreír, agredir a los cuerpos muertos) que se establece un límite⁶¹. La sonrisa de Quevedo es,

⁵⁸ Página/ 12, 16 de abril de 2005, “Camila, Ezequiel, Darío, Maximiliano”.

⁵⁹ Prensa de Frente, Diario del juicio, 23 de Noviembre de 2005, “Declaró el imputado Quevedo y Fanchiotti desistió de ampliar su testimonio”.

⁶⁰ Sobre “la divisoria moral entre lo humano y lo no-humano”, ver el capítulo “El ‘Musulmán’”, en Agamben, 2000, pp. 41-89

⁶¹ He desarrollado este aspecto desde las marcas discursivas que indican umbrales de tolerancia y las concepciones de violencia que suponen en el artículo “La crueldad y otras dimensiones de excepcionalidad en discursos sobre hechos de violencia” (2008). Por su parte, Pita señala (2007, 105): “Que sea la forma de matar, y no la sola referencia a la acción de matar, lo que aparece de manera recurrente y con un peso significativo tanto en los relatos de los familiares, así como en los actos de protesta, coloca la pregunta de si, acaso, existe una forma de matar que puede ser aceptada. Y esto, lleva a considerar especialmente el universo de preferencia de estas expresiones y su anudamiento con la pertenencia a un grupo social determinado. Ya que, mientras para algunos grupos sociales, la sola denuncia del acto de matar –el ejercicio de la violencia policial- resulta por sí misma inadmisibles por impensables; en otros –aquellos expuestos de manera cotidiana a la pura violencia del poder policial-, el señalamiento de la forma de matar,

⁵⁶ Página/12, 29 de junio de 2002, “El día que el Gobierno reconoció que hizo ‘todo mal, un desastre’”.

⁵⁷ Página/12, 29 de junio de 2002, “El día que el Gobierno reconoció que hizo ‘todo mal, un desastre’”.

entonces, una prueba que sostiene la narrativa de la “atroz cacería policial”.

Si la sangre en el ojo de Franchiotti probaba, entre otros supuestos, el origen piquetero de la violencia letal, la sonrisa de Quevedo se ofrece como prueba de la crueldad policial. Se da en estas narrativas el intercambio de posiciones entre héroes y demonios, clave en la disputa entre narrativas legitimantes de la violencia.

De “evitar la insurrección” a “la venganza personal”

Hemos visto ya que desde días anteriores al 26 de junio venía construyéndose la idea de que el movimiento piquetero organizaba un plan de desestabilización nacional que tendría en la marcha convocada para el 26 un capítulo decisivo, hipótesis que tenía como respaldo un informe de inteligencia. Según explica Gerardo Fernández, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) querellante en el juicio por los hechos de Puente Pueyrredón, a los pocos meses de iniciado el juicio oral, el entonces presidente Néstor Kirchner autorizó la apertura de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia (SI). En ellos figuraba un informe dirigido a Duhalde, elaborado por agentes de la SI, que daba cuenta de la actividad y los propósitos de las organizaciones de desocupados que participarían de la movilización. El informe concluía con una recomendación al Poder Ejecutivo para que actuara “con la mayor firmeza” frente a las protestas que se desarrollarían durante esa jornada ya que éstas constituirían “un caso testigo por lo cual se hacía imprescindible

que alude a ser muerto como un perro, es el límite ante el cual la muerte se presenta como inaceptable”.

defender la autoridad del Estado”⁶² (Fernández, 2007).

Los gobiernos nacional y provincial habían sostenido públicamente esta posición al explicar los motivos por los que la represión había sido *necesaria*. Frente a una amenaza desestabilizante tal, las razones de la violencia oficial se presentaban como universales y no como sectoriales.

“Estos grupos estaban preparados para ir a la guerra y frente a esta actitud de violencia y destrucción la policía bonaerense no puede permanecer pasiva”, dijo [el gobernador de la provincia de Buenos Aires] Solá.⁶³

Dichas acciones constituyen un plan de lucha organizado y sistemático, que puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula de consenso que la mayoría de los argentinos hemos elegido porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia [...] amenaza con el derrocamiento de los poderes constituidos y puede poner en peligro más vidas y la totalidad de las instituciones de la República.⁶⁴

“Hay algunos sectores mesiánicos que buscan desplazar con mecanismos de la violencia el funcionamiento democrático”, afirmó el vocero presidencial Eduardo Amadeo en referencia a las organizaciones piqueteras.⁶⁵

⁶² Se determinó durante el juicio oral que este informe se elaboró luego de que agentes de la SI relevaran la información surgida de la Asamblea Nacional Piquetera, realizada los días 22 y 23 de junio de 2002, en el Estadio Gatica de Villa Dominico

⁶³ La Nación, 29 de junio de 2002, “Solá: ‘Franchiotti me mintió; contó sólo una parte de la verdad’”.

⁶⁴ La Nación, 27 de junio de 2002, “Matzkin: ‘No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos’”.

⁶⁵ Página/12, 3 de julio de 2002, “La violencia siempre es piquetera para el Gobierno”.

Sin embargo, el pasaje a otras narrativas dominantes sobre estos hechos de violencia incluyó la desestimación de las motivaciones de defensa institucional esgrimidas oficialmente, y comenzaron a imponerse, en forma opuesta, motivaciones personalísimas de los funcionarios que participaron de la ejecución (que había sido fotografiada):

Los hombres más cercanos al presidente Eduardo Duhalde comenzaron a bajar el tono respecto de que las dos muertes en Avellaneda fueron el producto de un complot para derrocar los poderes constituidos [...] La tesis del complot fue alentada por los ministros que más simpatizaban con la mano dura.⁶⁶

En ese contexto, las heridas de Franchiotti dejaron de funcionar como prueba de su heroísmo para constituir la evidencia de su ira personal y su búsqueda de venganza:

En ese instante, el comisario inspector Alfredo Franchiotti descerraja su instinto más violento dentro de la estación Avellaneda. Es un trueno, con una mancha de sangre seca del lado izquierdo de su cuello. Lidera una pequeña patrulla de policías dispuestos a todo.⁶⁷

El fiscal González incorporó varias fojas al expediente por la muerte de los piqueteros. Según informó el abogado Claudio Pandolfi, de la Coordinadora Aníbal Verón, varios testigos declararon que "el comisario Franchiotti insultaba a Santillán. Otros vieron cuando el oficial disparaba a los manifestantes".⁶⁸

Si en la sección anterior se articula el pasaje entre la sangre de Franchiotti y la sonrisa de Quevedo, en

este se plantea un pasaje de la sangre de Franchiotti a... la sangre de Franchiotti. Este rasgo es recuperado, el foco en las heridas del policía es un recurso polivalente en los argumentos. Según Eilbaum (2009), "como en toda narrativa de la cual participan varias voces, hay puntos comunes, que se instalan como referencia, y otros divergentes". En este caso la referencia común es justamente eje de las divergencias.

También en esta dimensión La Nación se mantuvo en su discurso previo manteniéndose a "la derecha" del gobierno que dirigió la letal represión. Encuadrando el argumento en una consecución aparente (van Dijk, 2003: 64) a "los abusos o delitos en que puedan haber incurrido [los policías bonaerenses] al ejecutar su cometido", retomó:

De todos modos, debe insistirse en la responsabilidad subyacente del grupo extremista que condujo la protesta. El artero ataque físico de que fue objeto el comisario que comandó el desalojo -finalmente detenido por sus eventuales responsabilidades penales, que deberán ser investigadas a fondo- y los inútiles y gravosos daños materiales causados en el vecindario demuestran a las claras el evidente grado de peligrosidad de los autores de la protesta.⁶⁹

El abandono de la tesis del complot por parte de la dirigencia y el acento en la animosidad personal de Franchiotti contra Santillán no tardaron en utilizarse para desdibujar la responsabilidad institucional y reducir el homicidio al *hecho aislado de un hombre* (como ya hemos visto al presentar el recurso del aislamiento, Cohen 2001: 107-109 y Martínez y Eilbaum 1999: 8). De hecho, en el mismo movimiento argumental Duhalde

⁶⁶ La Nación, 30 de junio de 2002, "Retrocede la tesis del complot de piqueteros".

⁶⁷ Clarín, 30 de junio de 2002, "Qué pasó en Avellaneda, la estación de la muerte".

⁶⁸ Clarín, 29 de junio de 2002, "Ya son tres los policías bonaerenses detenidos".

⁶⁹ La Nación, 29 de junio de 2002, "La búsqueda de la paz social".

abandona la negación interpretativa anterior (la necesidad de actuar contra el complot) que, de sostenerla, lo hubiera forzado a rendir cuentas sobre una represión premeditada. Frente a esto, su estrategia de negación pasa a ser la del aislamiento del victimario:

Duhalde elogió la actitud del gobernador Felipe Solá. "Actuó muy rápidamente", al detener a los policías sospechosos de los homicidios, dijo. Reiteró que el objetivo principal del Gobierno es "preservar el orden y decirle no a todo tipo de violencia", y relativizó las hipótesis sobre un supuesto complot contra su gestión enunciadas días atrás por algunos funcionarios, ya que consideró que la actuación de algunos policías fue "un hecho aislado". "Cuando pasa este tipo de cosas, cuando un hombre actúa tan mal, perjudica a toda la policía", dijo.⁷⁰

Las tres condiciones de Smith se presentan como no necesariamente secuenciales ni lineales, pueden fortalecerse entre sí o, incluso, reemplazarse. Por ejemplo, Duhalde abandona las referencias a la *necesidad* ya que estas presuponen, arrastran, cierto nivel de planificación de la violencia de Estado. Ante las evidencias fotográficas, deserta de este argumento para sumarse a una nueva narrativa de los hechos, incorporando *la negación interpretativa* del aislamiento.

El desafío de dar cuenta de la emergencia de las fotografías de la Estación.

Como ya he señalado y marcado en las citas periodísticas, las narrativas se transforman con *las fotografías de la Estación*. Es posible identificar marcas lingüísticas y semánticas que este *hecho* ha dejado en la prensa y en los discursos

oficiales. Sin embargo, el acontecimiento de la *emergencia* de las imágenes es de una densidad no abarcable por las huellas en el discurso.

Voy a hacer dos digresiones disciplinares para desarrollar mi argumento. A través de una analogía con la antropología de las sociedades tribuales y otra con la teoría literaria, quisiera avanzar en el planteo de la crisis que la aparición pública de estas imágenes supuso para el desarrollo de los hechos y el desafío que presenta para dar cuenta de este acontecimiento en términos teóricos.

Primero, propongo pensar el posicionamiento de los responsables políticos, la policía y los principales medios frente a las muertes de los manifestantes con la lógica subyacente a los juicios por "juramento colectivo" que Ernst Gellner (1997) analiza a partir de su uso en sociedades tribuales, en ámbitos en los "que el conflicto no está enteramente sujeto a reglas legales impuestas" (Gellner, 1997: 200), tal como puede plantearse el ámbito del uso de la fuerza policial en el contexto de protestas sociales en 2002:

El juramento colectivo es una institución muy común. La idea es simple: si un miembro del grupo A acusa a un miembro del grupo B de un delito [...], luego lo justo o lo injusto de la acusación se decide pidiendo al acusado y a un determinado número de sus parientes que atestigüen solemnemente en un lugar sagrado la inocencia del acusado. Si así lo hacen, se considera que el acusado es inocente; si los parientes o alguno de ellos se niega a jurar o comete algún error en el curso de la ceremonia, el acusado se considera culpable.

Aunque en un primer acercamiento desde nuestro sistema de justicia (que justamente excluye a los familiares e interesados del ámbito de los jueces admisibles) este sistema

⁷⁰ La Nación, 30 de junio de 2002, "Repudio total a las actitudes de violencia".

parece inútil, entre otras cosas dado que “aquellos que están más inclinados a absolverlo [al acusado] se convierten en sus jueces” (Gellner, 1997: 196), el sistema se presenta como no determinado de antemano, ni inútil: “su desenlace no es siempre obvio”. Más aun, los principios subyacentes al sistema se encuentran presentes, según Gellner, en sociedades no tribuales y en circunstancias muy diversas como las votaciones en Naciones Unidas y la organización de huelgas. Según Gellner, lo esencial del funcionamiento de este sistema:

es el hecho de que el testimonio sea público y solemne, lo cual presenta una oportunidad importante, o hasta la provoca, para que la opinión pública tome partido por aquellos que iniciaron la causa, o bien contra los que están acusados (Gellner, 1997: 199-200).

Y es esta clave que plantea Gellner, la tensión entre la lealtad al grupo y el costo al que se expone frente a otros grupos si el juramento se demuestra falso ante la opinión pública, lo que permite la reflexión acerca del pasaje entre narrativas dominantes y de poder en nuestro caso. Análogamente, en el contexto de las primeras versiones, las policías, los medios y los políticos dirigentes (nacionales y provinciales) “juran colectivamente” a favor de la inocencia de la policía o, más precisamente, los erigen en víctimas y acusan a los manifestantes de ser autores de la violencia. Se comportan como un clan y en diferentes ocasiones ceremoniales y solemnes (conferencias de prensa, declaraciones oficiales, crónicas y editoriales periodísticos) ofrecen su juramento a favor del accionar policial.

Hasta aquí, la analogía se sostiene. Sin embargo, se agota cuando intentamos dar cuenta de la aparición de fisuras en el juramento colectivo. Para

Gellner, los elementos decisivos para la deserción de los integrantes del grupo debe rastrearse al interior del colectivo, como en “la convicción [o no] de que otros también están permaneciendo leales al grupo”. Por el contrario, nuestro juramento colectivo se fisura por la emergencia de un testimonio impensado como es el de las evidencias fotográficas. Esta situación rememora mejor la escena del juicio adversarial, tan evocado en las películas estadounidenses, en la que a último momento la estrategia de la querrela se deshace ante la evidencia presentada por la otra parte, lo cual revierte la inminente injusticia y hace surgir una nueva “verdad” ante el jurado.

Para la digresión literaria me serviré de la *Tesis sobre el cuento. Los dos hilos: Análisis de las dos historias*, de Ricardo Piglia. En este conocido ensayo, el autor plantea que existe una escisión “clave para definir el carácter doble de la forma del cuento”, que deriva en que “un cuento siempre cuenta dos historias”. Así:

El cuento clásico (Poe, Quiroga) narra en primer plano la historia 1 [...] y construye en secreto la historia 2 [...]. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie.

Cada una de las dos historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción.

La versión moderna del cuento que viene de Chéjov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de Dublineses, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada; trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico a lo Poe contaba una historia anunciando que había otra; el cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola.

Las analogías de la *Tesis del cuento* con el juego de narrativas que presenta Puente Pueyrredón son muy fértiles. Para el argumento que me ocupa, quisiera plantear que hasta la *emergencia* de las fotografías la forma dominante del relato se condice con la versión moderna del cuento. Si la Historia 1 es la versión oficial, la Historia 2 (la verdad de la violencia policial) estaba cifrada pero no develada en la 1, algunas marcas en los relatos (ej. la resonancia cercana del 19 y 20 de diciembre) son indicios sólo para el lector entrenado. Así, la Historia 2 se insinúa sólo como sospecha y, sin evidencias, la Historia 1 se cierra como oficial.

Sin embargo, la circunstancia de la aparición pública de las fotos de la ejecución de Santillán y de la agonía de Kosteki devuelven el relato a un formato clásico: la Historia 2 emerge como “sorpresa”. Estaba “efectivamente” en la Historia 1: estaban todos los personajes relevantes, las víctimas, los victimarios, la “sangre polivalente”. Si se relee el cuento se encontrarán las marcas de la Historia 2: *el asesino era el policía*.

Los variados esquemas tomados de diferentes disciplinas (los que aquí expongo y otros) que he aplicado para comprender la forma en que se han tejido las narrativas en torno de Puente Pueyrredón recurrentemente me han servido para apreciar que las imágenes

presentan un hecho político de una densidad tal que debe ser abordado como acontecimiento, antes que como “un dato”. Los esquemas que ayudan a pensar los hechos hasta la aparición de las imágenes, no dan cuenta del proceso que siguió a la contradicción flagrante entre el discurso oficial y las evidencias fotográficas.

Hablar de “publicación” o “aparición” de las imágenes implica una reducción de este acontecimiento que obtura la apreciación de la densidad de este Hecho y oscurece la condensación de rutinas y relaciones que aparecen objetivadas en la imagen-objeto o en la *publicación* como dato sincrónico.

Del planteo de este apartado quiero señalar que es necesario dar cuenta de este acontecimiento desde las lógicas propias del caso, de los actores (particulares e institucionales) que en él convergen. Mi propuesta es *dar cuenta* a través de indagar en la *emergencia de las imágenes*.

Con la figura de la “emergencia” pretendo dar cuenta de un entramado de rutinas, acciones, procesos, tiempos, usos, que aparecen condensados en las “imágenes”. Implica separar la imagen como objeto (*las imágenes*, claro) de las imágenes como acción⁷¹, como acciones. La imagen-objeto, las imágenes en sí, requiere el análisis de sus rasgos y patrones formales, su “intertextualidad”. La imagen-acción, “la praxis de la imagen” (Belting, 2009: 8) implica pensar en actores, en rutinas, en procesos que dieron lugar a la producción misma de las imágenes; al entramado político-periodístico que

⁷¹ En 1936, Jean-Paul Sartre en su ensayo filosófico *L'Imagination*, ya plantea: “La imagen es un acto y no una cosa. Una imagen es una conciencia de algo” (traducción de la octava edición en inglés de 1981).

medió entre la producción de las imágenes y su reproducción mediática, al impacto de la publicación. Y, luego, a su interpelación en términos de evidencia durante la investigación judicial y el juicio oral. La propuesta es volcar las imágenes en un eje diacrónico que dé cuenta de su historia, en un sentido que abarque sus soportes, su materialidad y su idealidad.

Lo que puede presentarse como un dato sincrónico, “la publicación de las imágenes” como un corte en el caso, adquiere continuidad cuando se lo somete a un análisis en términos de la acumulación de acciones condensadas en su producción, su reproducción, sus recepciones, sus pasajes entre soportes (rollo fotográfico, en medios alternativos, en televisión, en papel diario, en expedientes, en discursos), su entidad como objeto de peritajes, su entidad en cuanto evidencia (así política, como judicial). Esta perspectiva relaciona a numerosos, incontables, agentes involucrados en las instancias de producción, de edición *en vivo*, de transmisión, de edición, de almacenamiento, de proyección, periciales, judiciales y las formas particulares de recepción que acompañan cada instancia.

Reflexiones finales sobre la convergencia dinámica entre narrativas

El título de este artículo refiere a la *disputa* entre narrativas, esta referencia pretende destacar el carácter político de los diferentes posicionamientos respecto del uso de la fuerza en el contexto de protestas sociales y ciertas transiciones que considero que tuvieron un momento clave en los pasajes analizados.

Sin embargo, esta disputa no debería considerarse simple o

estrictamente como una competencia entre formas de relatar los hechos, como una pugna por la imposición de una narrativa sobre la otra. La disputa debe dar más bien cuenta del carácter constitutivo que una narrativa predominante y su falsación tuvieron en el fortalecimiento de otra versión de los hechos. Cuando desde la antropología Marshall Sahlins analiza la muerte del capitán Cook (1997: 126) utiliza el concepto de *convergencia* para explicar el desenlace fatal en relación con el *encuentro* entre teologías y creencias de los hawaianos y los británicos: “Los mitos no eran sólo hawaianos. Estaba también el folklore británico *complementario*” (p. 106; énfasis propio). Me interesa destacar la convergencia, el empalme, la complementariedad y la mutua constitución como parte de la disputa por la narratividad predominante.

El solapamiento puede verse en un grado extremo en el caso de La Nación, cuya persistencia argumental utiliza las muertes como un refuerzo de su posición (anterior). Puede pensarse como una *negación implicatoria* al extremo: mientras el medio no tiene responsabilidad directa (política, penal) en los hechos de violencia policial, no sólo no rinde cuentas de la falsedad de su discurso frente a las evidencias, sino que procura incluirlas como un punto más a favor de su planteo.

Al dejar de lado una mirada en la que las narrativas se excluyen en forma estanca y suplementaria, por una que supone una trama de relaciones más compleja, de contrastes y oposiciones que resultan preformativos de narrativas, discursos e identidades políticas, podemos ver que diferentes aspectos de la narrativa que señalaba la violencia piquetera como desestabilizante del gobierno, primero, y como homicida después, potencia el

relato posterior sobre la violencia de Estado. Pensemos en el notable hecho de que sea el mismo Franchiotti quien protagoniza ambas narrativas, en una como héroe-víctima y en la otra como victimario. Este pasaje entre una y otra narrativa, este quitarle la máscara de justo al asesino, la mirada que se desplaza del ojo de Franchiotti a la sonrisa de Quevedo, de la sangre de Franchiotti a la sangre de Kosteki –o del pasaje entre diferentes valoraciones de la sangre del policía–, establecen una trama de relaciones entre narrativas mucho más significativa que la imposición de una sobre la otra.

Se trata de movimientos antitéticos en los que el contraste entre los rasgos relevantes en términos de narratividad de la violencia se potencian. La nueva política será aquella del *control* del uso de la fuerza frente al *descontrol* policial del que los siguientes gobiernos se pretenden despegar: “Cada historia es siempre una disputa entre versiones relativas, ‘es una historia contada contra los otros’” (Eilbaum, 2009). La narrativa del control del uso de la fuerza se erige en gran parte en oposición a la anterior y toma, se alimenta de, capitaliza políticamente, la mentira que ha quedado expuesta en el contraste entre las declaraciones y las imágenes.

Las imágenes patentes de la ejecución policial de Santillán, de la muerte de Kosteki frente a la indiferencia o a la *crueledad* policial, la refutación ante la opinión pública uno a uno de los rasgos que sostenían la versión oficial, presentaron la falsedad del “juramento colectivo” sostenido por una clase política y mediática que se había replegado en defensa de “los agentes de seguridad”. El lugar de las imágenes de la estación en esta trama nos habla de la vigencia de “la verdad” en la política actual, y desestima un

relativismo político que anule la evaluación de las palabras en términos de su veracidad o falsedad. El lugar de la evidencia se sobrepone a la verosimilitud. Dice Eilbaum que “el discurso está siempre moldeado por esa lógica segmentar de la verdad y la mentira, la legitimidad de las versiones siempre estará relacionada con las posibilidades de sustentarlas (la credibilidad transmitida, las pruebas, su coherencia, entre otros factores)”. Y, al tratarse de imágenes, nos encontramos frente a la ilusión de “instantes de verdad” (Arendt, 1966: 257-258, citado en Didi-Huberman: 2003, 56). Un tipo de testimonio que sobrevive al testigo imposible y completa lagunas del testigo sobreviviente. La imagen tiene su potencia, su existencia y su esencia particulares como testimonio. Puede operar como una mediación entre las palabras y las cosas, puede asir el lazo que las une, como puede probar la interrupción.

Este artículo se pregunta por las dinámicas entre narrativas, pero la indagación misma presenta los límites de abordar estas dinámicas sólo en las narrativas resultantes y abre líneas de investigación que demandan otras herramientas. Los actores y procesos que dan lugar a los relatos, a sus versiones y variaciones no se sirven solamente de prácticas discursivas, aunque sí las marcan y las habitan. El análisis de las marcas que han quedado en el discurso es un momento válido de la investigación, que no debería llevar a confundir la huella con la acción que la imprime.

Bibliografía

Agamben, Giorgio [1999] (2000). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III Valencia, Pretextos.

- Belting, Hans (2009), *Antropología de la imagen*, Katz Editores, Madrid [Trad. Vélez Espinosa, Gonzalo María].
- Bobbio, Norberto (1979). *El problema de la guerra y las vías de la paz*. Barcelona, Gedisa.
- Centro de estudios legales y sociales /CELS, (2003), *El Estado frente a la protesta social 1996–2002*, Siglo XXI, Buenos Aires.
- Cohen, Stanley (2001). *States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering*, Polity Press–Blackwell Publishing, Cambridge.
- Didi-Huberman, Georges. (2004) [2003]. *Images malgré tout* [cito por la edición castellana *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Barcelona, Paidós. Traducción de Miracle, M].
- Eilbaum, Lucía (2009). “Entre el barrio y Tribunales: sobre las causas judiciales y las tramas de relaciones sociales en casos penales en la justicia de la provincia de Buenos Aires”, ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del Mercosur, 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina.
- Elias, Robert (1997). “A culture of violent solutions”, en TURPIN, Jeniffer y Kurtz, Lester R. (1997). *The Web of Violence. From Interpersonal to Global*, University of Illinois Press, Illinois.
- Fernández, Gerardo (2007). “El Desarrollo de Tareas de Inteligencia sobre manifestantes y organizaciones sociales”, presentado en el encuentro *La justicia frente a la protesta social en Argentina*, organizado por el CELS el 3 de julio de 2007.
- Gellner, Ernest (1997). *Antropología y Política. Revoluciones en el bosquecillo sagrado*, Barcelona, Gedisa.
- Habermas Jürgen [1981] (1990). *Theorie des kommunikativen Handelns* (Bd.1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft), Frankfurt a.M. [cito por la edición española *Teoría de la acción comunicativa*, Tomo I y Tomo II, Taurus, Madrid].
- Martínez, María Josefina y Eilbaum, Lucía (1999). “La violencia policial en Argentina. Un debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles”, desarrollado en el marco del Proyecto *Policía y Sociedad Democrática*, con participación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Viva Río-ISER y el Instituto de Defensa Legal coordinados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
- Perelman, Marcela (en prensa). “La Protesta social como acción irregular. Vigencia de la figura del partisano en la mirada policial sobre los manifestantes piqueteros en Argentina”, en *Revista Colombiana de Antropología*.
- Perelman, Marcela (2008) “La crueldad y otras dimensiones de excepcionalidad en discursos sobre hechos de violencia”, en *Revista Katálysis*, Vol. 11 15 12, pp. 167-176.
- Pita, María (2007). *Formas de morir y formas de vivir: los familiares de víctimas de la violencia policial*, Tesis Doctoral en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Sahlins, Marshall (1997). *Islas de historia. La muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e historia*, Barcelona, Gedisa.
- Sartre, Jean-Paul (1981) [1936], *L'imagination*, Volumen 1 de *Quadrige*, PUF (Presses universitaires de France), Paris.
- Segato, Rita (2003). *Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes. Citado en BRIONES, Claudia (2003). “La violencia está en los otros”, presentado en el Encuentro *Opinión pública, sentido común, violencia y*

derechos humanos, organizado por CELS, Buenos Aires.

Smith, Philip (1997). "Civil Society and Violence: Narrative forms and the Regulation of Social Conflict", en turpin, Jeniffer y KURTZ, Lester R. (1997). *The Web of Violence. From Interpersonal to Global*, University of Illinois Press, Illinois.

VAN DIJK, Teun A. (2003). *Ideología y discurso*, Ariel Lingüística, Barcelona.

Notas de prensa, (sólo aquellas citadas)

Clarín, 27 de junio de 2002, "La violencia no sorprendió a la SIDE ni a la Policía".

_____ 29 de junio de 2002, "Ya son tres los policías bonaerenses detenidos".

_____ 30 de junio de 2002, "Qué pasó en Avellaneda, la estación de la muerte".

La Nación, 27 de junio de 2002, "Crónica de una violencia anunciada".

_____ 27 de junio de 2002, "Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía".

_____ 27 de junio de 2002, "Duhalde pidió investigar los hechos de violencia".

_____ 27 de junio de 2002, "El puente Pueyrredón fue un amasijo de palos, piedras y balas".

_____ 27 de junio de 2002, "Golpearon a un jefe policial en un hospital".

_____ 27 de junio de 2002, "Matzkin: 'No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos'".

_____ 28 de junio de 2002, "Desterrar la violencia".

_____ 29 de junio de 2002, "Duhalde: 'Fue una cacería atroz'".

_____ 29 de junio de 2002, "Solá: 'Franchiotti me mintió; contó sólo una parte de la verdad'".

_____ 29 de junio de 2002, "La búsqueda de la paz social".

_____ 3 de julio de 2002, "Las razones para dejar el poder".

_____ 3 de julio de 2002, Rosendo Fraga, "El conflicto social marcará en adelante los tiempos en el almanaque de la política".

_____ 30 de junio de 2002, "'Repudio total a las actitudes de violencia'".

_____ 30 de junio de 2002, "La política de seguridad será más tolerante".

_____ 30 de junio de 2002, "Retrocede la tesis del complot de piqueteros".

La Vaca.org, 19 de noviembre de 2005, "Dos tipos audaces (y cínicos)".

Página/ 12, 16 de abril de 2005, "Camila, Ezequiel, Darío, Maximiliano".

_____ 27 de junio de 2002, "La cacería policial terminó con dos muertos a balazos".

_____ 29 de junio de 2002, "El día que el Gobierno reconoció que hizo 'todo mal, un desastre'".

_____ 3 de julio de 2002, "La violencia siempre es piquetera para el Gobierno".

_____ 8 de julio de 2005, "'Poner escollos es ser como 'El Padrino'".

Prensa de Frente, Diario del juicio, 23 de Noviembre de 2005, "Declaró el imputado Quevedo y Fanchiotti desistió de ampliar su testimonio".

_____ Diario del juicio, 25 de Agosto de 2005, "El Gobierno había llegado a un punto sin retorno. Se preveía la represión" declaró el fotógrafo que estuvo en la estación. Esta fuente reproduce el testimonio del fotógrafo Sergio Kowalewsky, quien registro la ejecución de Darío Santillán.

Amotinados. Ira obrera en la industria pesquera argentina, 1997-2007

Agustín Nieto⁷²

Resumen

Exploraremos las recientes formas de la resistencia de los cuerpos obreros a la precarización laboral y al desempleo en la industria pesquera. Hacia finales de los noventa la conflictividad obrera se expresó públicamente en una creciente y multiforme protesta social, en el marco de la crisis de un sistema productivo ligado fuertemente a la 'convertibilidad'. Con el abandono de la convertibilidad, las luchas sufrieron transformaciones que implicaron un nuevo ciclo de rebelión. Es por esto que en este trabajo nos proponemos dar cuenta de los cambios y continuidades en las fuentes grafías de la resistencia obrera, sabiendo que el motín fue (y es) una de sus formas más características.

Palabras claves: Conflictividad obrera, precarización laboral, industria pesquera.

Summary

We will explore the recent resistance forms of the worker's bodies to labour flexibility and to unemployment in the fishing industry. Towards the late nineties the working conflict was expressed publicly in a growing and multiform social protest, in the context of the crisis in a productive system strongly linked to the "convertibility". With the abandonment of the convertibility, the struggle suffered transformations that implied a new cycle of rebellion. This is why we propose in this article to account for the changes and continuities in the fluent graphemes of the worker's resistance, knowing that the riot was (and is) one of its more typical forms.

Key words: Working confliction, labor precarization, fishing industry

Recibido: 16.07.2009 Aprobado: 01.11.2009

⁷² Profesor en Historia. Egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Becario Doctoral del CONICET, integrante del Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar). También es miembro del colectivo Nuevo Topo y de la Revista de Estudios Marítimos y Sociales. Desarrolla su actividad docente en la cátedra "Estructura y Cambio Social" de la carrera de Sociología en la Facultad de Humanidades de la UNMdP.

Introducción

Durante los años menemistas algunos análisis sobre la conflictividad social estuvieron signados por un notorio pesimismo en torno al movimiento obrero organizado y por un auge eclipsante del individualismo metodológico que, hormado por el modelo de interrogatorio de la policía y el derecho, alinea a las ciencias sociales con las prácticas del Estado y los grupos dominantes, quienes individuán, con el objetivo de controlar, disolviendo un sujeto colectivo en una mera colección de individuos. En este sentido, se intentaba e intenta comprender la supuesta pasividad obrera por la vía de la aceptación y complicidad de las direcciones sindicales ‘burocráticas’ para con las políticas económicas neoliberales, junto con la redefinición de un peronismo que ya no tenía en ellos su columna vertebral y se apoyaba en las redes de tipo clientelar (Levitsky, 2005). Sin embargo, sin desconocer la persistente y oscilante aunque invisibilizada resistencia y lucha obrera durante todo el período, aquel pesimismo analítico tiene un costado objetivo, producto de las consecuencias que provocó la hegemonía del capitalismo financiero a nivel del proceso económico así como su traducción en el entramado de relaciones políticas y en el Estado. La hiperinflación, el desempleo estructural, la superexplotación, la abrupta disminución del salario y la consecuente pauperización de importantes capas del proletariado y de otras clases subalternas, en el marco de un capitalismo que mutaba sus formas en su afán de contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia, fueron en desmedro de las antiguas conquistas obreras.

Estas cuestiones ayudaron a reforzar la fragmentación y aislamiento social del campo popular, dando como resultado una exacerbación del individualismo y de las relaciones de competencia que socavaban a las de solidaridad (Izaguirre, 1994). No obstante, en algún momento de los ‘90, el consenso fue dando lugar a la protesta callejera. Como correlato, los trabajos en torno al análisis de la conflictividad en la Argentina reciente crecieron de manera sustancial, en particular, después de los sucesos de diciembre de 2001. Con todo, el eje siguió puesto en las ‘nuevas’ formas de la lucha social, extendiéndose las interpretaciones acerca de los nuevos movimientos sociales y los fenómenos de acción colectiva contenciosa, en perjuicio de la observación de las acciones del movimiento obrero organizado. En general, primaron los trabajos sobre ‘novedosos’ sujetos y repertorios (gays, lesbianas, mujeres, ecologistas, ONGs, piqueteros, fogoneros, asambleas populares, cortes de ruta, cortes de calle, etc.), que visualizaron un punto de inflexión en las protestas sociales entre los hechos de acción colectiva ocurridos a partir de la segunda posguerra y los que acontecieron en la última década del siglo XX (Lobato y Suriano, 2003). Hacia el 2002, devaluación por medio, el escenario de la protesta social nuevamente sufrió algunas mutaciones (Chitarroni y Cimillo, 2007). A simple vista, el crecimiento de las luchas obreras se presenta como un dato innegable al mismo tiempo que los ‘nuevos sujetos’ tendieron a perder visibilidad. Partiendo de esta observación, se nos plantea el siguiente interrogante: ¿estamos ante un proceso de revitalización del movimiento obrero organizado? En esta línea, el siguiente trabajo, que es de carácter exploratorio y conjetural, se propone dar cuenta de

las acciones obreras producidas en la industria de la pesca. Debido a su peso en esta actividad nos centraremos en el puerto marplatense, aunque sin dejar de ponerlo en relación con lo ocurrido en los puertos patagónicos, como se verá a lo largo del artículo.

A finales de los noventa la conflictividad dentro de la rama se expresó públicamente en una creciente protesta social y lucha de calles, en el marco de la crisis de un sistema productivo ligado fuertemente a la 'convertibilidad' (Nieto, 2005; Colombo, 2008a). La convergencia entre esa política monetaria y los procesos de transformación de la estructura económica de la rama provocó, entre otras cosas, un proceso de reconversión industrial de la actividad, siempre mediado por conflictividad obrera. Alguno de estos cambios fueron: el crecimiento de la aplicación de tecnología, la reducción del número de asalariados y el empeoramiento de la situación laboral, así como, procesos de extranjerización, centralización y concentración del capital, pérdida de importancia del puerto marplatense y depredación de distintas especies del mar argentino como producto del sobredimensionamiento de la flota pesquera (Colombo y Nieto, 2006).

Como corolario del abandono de la convertibilidad, las luchas obreras sufrieron transformaciones que implicaron un nuevo ciclo de rebelión. Para dar cuenta de este proceso hemos tomado la larga década que transcurre entre 1997 y 2007, abarcando de esta forma los últimos años de 'convertibilidad' como los primeros de la 'devaluación'. Dentro de esta década, observamos las transformaciones en la dinámica conflictual, delimitando dos

ciclos de rebelión separados por el cambio de política monetaria.

Concomitantemente, como objetivo general pretendemos evaluar cuáles son los cambios y cuáles las continuidades en las características de los sujetos de la protesta y sus instrumentos de lucha y formas de organización.

Al respecto, la temática central del presente trabajo gravita en torno a una forma particular de rebelión: el motín. Es por esto que consideramos pertinente introducir brevemente al lector en lo que consideramos sus rasgos socio-históricos distintivos y sus derivas teóricas en relación al conjunto de las formas de rebelión.

Para lo cual nos nutriremos tanto del conocimiento ya acumulado por las ciencias sociales, como de experiencias recientes y no tanto, en Argentina y otros países del globo. Entre los trabajos existentes sobre la problemática percibimos que motines, o hechos análogos, fueron llevados adelante en el Río de La Plata y otras regiones de Latinoamérica, desde la colonia hasta nuestros días, por las clases subalternas. Sucesos similares que acontecieron en Europa fueron registrados y analizados por distintos historiadores, destacándose los trabajos de los denominados historiadores marxistas británicos.

También contamos con evidencias de motines en Asia y África. Para este último continente tenemos el clásico trabajo de Fanon y para Asia contamos con los motines registrados por el grupo de historiadores indios agrupados en torno a la publicación *Subaltern Studies*. Esto nos invita a desestimar los motines, por un lado, como forma inherente a una región del mundo, la llamemos dependiente o imperialista, primer o tercer mundo,

desarrollado o subdesarrollado, norte o sur, oriente u occidente. Por otro lado, tampoco parece tener una delimitación temporal exacta, ni ser producto de alguna formación social particular, por ende podemos decir que no se trata de una forma novedosa de rebelión. Pero, ¿cuáles son sus rasgos? En consonancia con los estudios citados y con muchos otros, entendemos que los motines, predominantemente, condensan y canalizan, de forma ‘espontánea’ y colectiva, sentimientos de desesperación, repudio, indignación, ira, revancha y venganza para con personas y/o cosas que, para los amotinados, simbolizan relaciones de opresión y/o explotación. Si bien esto es así en cuanto a la forma de las acciones, ¿qué sucede en cuanto a la forma de los sujetos colectivos que las desarrollan? Aunque no existe un consenso absoluto sobre el tema, muchos estudiosos suelen acordar en utilizar el término multitud para dar cuenta de los sujetos de los motines (Hobsbawm, 1983; Rudé, 1998). Compartiendo esta perspectiva, consideramos que la multitud es una configuración del sujeto colectivo más efervescente y compacto que la turba y menos hirviente y anudado que las masas (Cotarelo, 1999). Sin embargo, con lo dicho hasta aquí no sólo que no resolvemos los problemas sino que abrimos las puertas de muchos otros.

Decimos esto porque el haber podido delimitar algunos rasgos característicos del motín y de la multitud nos habla bastante sobre las formas de los sujetos y las luchas pero nos alerta muy poco sobre el contenido de estas luchas y sujetos. Motines los hubo, y los puede haber, militares, carcelarios, populares, rurales, urbanos, campesinos y obreros. Son estos últimos, justamente, los que particularmente nos interesan.

En las notas de un diario, en las imágenes de un noticiero, en las páginas de un libro nos podemos encontrar con la narración de episodios como el ocurrido, no hace muchos meses, en una fábrica de containers de Maersk en el puerto de Machong, China:

Un trabajador migrante salta por encima de la valla para acortar el tiempo de espera en la cola de la cantina porque había sido retenido demasiado rato por su jefe y no tenía tiempo suficiente para almorzar. Dos guardias lo ven y le imponen una multa de 200 yuanes (el salario mensual nos es desconocido, pero no supera los 1.500 yuanes). Cuanto más se niega a pagar, más le incrementan la multa. Ésta acaba en 1.000 yuanes. Al final, el trabajador se va a almorzar sin pagar la multa, pero a la salida los guardias le esperan y le dan una paliza. Con la cabeza ensangrentada, el trabajador regresa a la cantina para pedir ayuda. Los compañeros salen con armas improvisadas. Los guardias huyen, salvo uno que es herido. Cuando la policía se lleva a los dos heridos al hospital, los obreros agarran ladrillos y rompen todos los cristales que pueden. Estaban enfadados desde hacía tiempo a causa de la bajada de los sueldos, de las cadencias que se incrementaban y de las horas suplementarias. El destrozo dura hasta el alba del día siguiente (Astarian, 2008: 18).

Acontecimientos como éste, donde la ira popular prevalece y se manifiesta, son la principal materia prima de esta investigación, desentrañar sus lógicas es nuestra pretensión.

En síntesis, partiendo de la problemática general sobre el grado de debilidad o fortaleza del movimiento obrero, en este artículo nos proponemos explorar, por un lado, las bases socioeconómicas de las protestas

obreras, y por otro, los cambios y continuidades en las recientes formas de resistencia obrera a la precarización laboral y al desempleo en la industria pesquera, centrándonos en los sujetos de la protesta y sus instrumentos de lucha y formas de organización. Conjeturalmente sostenemos que entre 1997 y 2007 se pueden identificar dos ciclos de rebelión (1997-2002 / 2002-2007). También consideramos hipotéticamente que los ciclos culminan con acciones por fuera del sistema institucional protagonizadas por las capas obreras más pauperizadas, que dan lugar en sus momentos más álgidos a motines obreros. Asimismo presumimos que los rasgos de recurrencia en los ciclos de rebelión están relacionados y, en parte, informados por la persistencia a lo largo de todo el período de una estructura productiva hegemonizada por los grupos monopólicos de la rama. Para dar cuenta de las presunciones precedentes hemos desarrollado un exhaustivo relevamiento y análisis de bibliografía especializada, entrevistas a protagonistas, relevamiento in situ, imágenes televisivas y fotográficas, diarios y revistas comerciales, periódicos partidarios, datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otros.

Posteriormente, con la información recabada, hemos elaborado dos bases de datos, una de conflictos y otra de desembarques y comercialización de productos pesqueros. No obstante, en el presente artículo nos ocuparemos particularmente en la elaboración de una descripción densa de los ciclos de rebelión y de los motines obreros en Mar del Plata y en los puertos de la Patagonia.

A continuación analizaremos la estructura socioeconómica de la industria pesquera para, posteriormente, abocarnos al análisis de los ciclos de rebelión y los motines obreros.

Las ciudades-puerto y las bases socioeconómicas de las protestas

La ciudad-puerto de Mar del Plata se encuentra ubicada en el litoral del mar argentino, en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Es la cabecera del partido de Gral. Pueyrredón y está ubicada 404 km al sureste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Es el puerto pesquero más importante del país a la vez que una de las principales ciudades turísticas argentinas. Según datos del último censo, en el 2001 la población de Gral. Pueyrredón ascendía a 564.056 habitantes, de los cuales 541.733 residían en la ciudad de Mar del Plata. Hoy se estima que la población del partido sobrepasa los 625.000 habitantes. Siguiendo con los datos censales del 2001 podemos decir que la población económicamente activa (PEA) del partido es de 260.179 (46,1% de la población total), de las cuales 182.674 están ocupadas y 77.505 desocupadas (el 29,8% de la PEA). Si ahora observamos la distribución de la población ocupada por categoría ocupacional veremos que, sobre un total de 182.674 personas, 124.878 (68,3%) son asalariados, 41.049 (22,5%) son trabajadores por cuenta propia, 13.820 (7,6%) son empleadores y 2.927 (1,6%) son familiares sin remuneración fija. Por su parte la estructura productiva está diversificada, destacándose las actividades vinculada al turismo, la construcción, el tejido y la pesca.

Asimismo, otro rasgo característico es un mercado de trabajo signado por actividades económicas

estacionales, que refuerzan la inestabilidad laboral y las altas tasa de desempleo (Gennero de Rearte y Ferraro, 2002). Pasemos ahora a ver la trayectoria de la industria pesquera en los últimos años.

A partir de los '90, en la industria pesquera, se produjo una gran transformación. Por un lado, la preponderancia del sistema productivo de pesca con fresqueros y procesamiento en tierra fue perdiendo en términos relativos su importancia en relación a la actividad extractiva realizada por los buques congeladores y factoría, que contaban con procesado a bordo y mayor capacidad de bodega. Este proceso fue acompañado por la extranjerización de la flota, particularmente a través de los convenios de charteo y el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Una de las consecuencias que se evidencian de este proceso, al cotejar la participación de los mismos en las capturas, es que mientras los desembarques provenientes de la flota fresca se muestran más o menos constantes, los realizados por los buques factorías y congeladores crecen, pasando a liderarlos con 600.000tn en 1993 y llegando a 900.000tn en 1997 (ver gráfico I). En definitiva, estas referencias nos permiten visualizar el cambio en el tipo de flota y su participación en la pesca nacional. Por otro lado, si introducimos algunas características regionales veremos que durante el gobierno de la dictadura militar se intentó dar fuerza a los puertos del sur para que desarrollen la actividad pesquera, incentivando la inversión a través de subsidios y reintegros. Aquella política iniciada en los '70 fue reforzada durante los '90, en esta década el crecimiento de las provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego fue

acompañada por la incorporación de buques procesadores, congeladores y factorías en aquellos espacios geográficos. De este modo, el cambio en materia de sistema productivo en los '90 también implicó una modificación profunda en la industria pesquera general del país, resultando de ello una pérdida de importancia relativa muy fuerte por parte del puerto marplatense que quedó conformado preponderantemente por la flota fresca y el procesado en tierra (ver gráfico II). Es esta ciudad la que concentra alrededor del 70% de la flota fresca. Esta situación no descarta la existencia de grupos económicos que participan de ambos sistemas productivos y tienen una doble localización (Mar del Plata y la Patagonia). En la comparación de las exportaciones pesqueras por puerto se observa que en términos relativos el crecimiento de las exportaciones se mantiene parejo, sin embargo, hay que considerar que el comienzo del descenso en el nivel de exportaciones del puerto de Mar del Plata se inició en 1997, antes que en el resto de los puertos, que por el contrario se mantienen en ascenso hasta 1998 (ver gráfico III).

En resumen, la década del '90 se caracterizó por poner de manifiesto los síntomas de una actividad pesquera (esfuerzo de pesca) por sobre la posibilidad de renovación de los recursos ictícolas, lo que trajo aparejado una sobrecapitalización en el sector. Esta situación comenzó a hacer crisis en 1997. Hasta aquel año el volumen de las capturas se mantuvo ascendente y se superan los niveles históricos (ver gráfico IV). Sin embargo, el resultado de tal expansión significó que en 1997 entrara en crisis el recurso pesquero más importante, la merluza común, debido a la sobreexplotación (ver gráfico V). El

descenso en las capturas de esta especie afectó a ambos tipos de flota, sin embargo, el impacto más fuerte lo sufrió la flota congeladora, pues fue obligada a pescar debajo del paralelo 48° donde los volúmenes de merluza existentes son menores, repercutiendo de esta forma en los niveles de captura. Por consiguiente, el resultado concreto fue que se pasó de las 316.000tn declaradas de merluza del año 1997 a las 29.000 del año 2000, reduciéndose de esta forma en 287.000tn. Ante esta situación, el gobierno nacional resolvió hacer paros biológicos, vedas y otros mecanismos de control para resguardar el caladero, provocando una reducción en las capturas de merluza. Estas medidas, que fueron llevadas a cabo sin preocuparse por las consecuencias económicas y sociales, pusieron en riesgo en forma directa a más de 15.000 trabajadores y en forma indirecta a más de 150.000 personas vinculadas a la industria pesquera marplatense.

La crisis provocó y provoca forcejeos y alineamientos entre las distintas fracciones capitalistas ligadas al sector y el involucramiento de las fracciones obreras. La disputa fue representada por el discurso periodístico y académico como una dicotomía entre distintos sectores, como por ejemplo, entre las distintas localizaciones (Buenos Aires – Patagonia), tipos de flota (costeros – fresqueros – congeladores – factorías), orígenes de los capitales de las empresas (nacional – extranjero).

A su vez, también se expresó en los distintos niveles de gobierno: local, provincial y nacional, reflejándose en las reuniones del Consejo Federal Pesquero. Pero estas representaciones invisibilizaban al sector que había sido el impulsor y dinamizador de las transformaciones de los '90 y su

principal beneficiario en la actualidad: los grupos económicos de la pesca.

Los grupos económicos de la pesca

Un planteo apresurado de la problemática pesquera nos traza una distinción entre dos tipos de flota que se radican respectivamente en dos zonas geográficas distintas. Por un lado se encuentra la flota fresquera, vinculada a la ciudad de Mar del Plata como ámbito principal de localización que implica “pesca en el mar y trabajo en tierra”. No obstante, en este puerto la relación entre fresqueros y congeladores es de 70% y 30% respectivamente. Por otro lado, en el sur operarían con exclusividad los buques congeladores, sin embargo, aquí tampoco el enunciado se respalda en evidencia empírica, pues en los puertos patagónicos el 14% de la flota es fresquera. Igualmente juzgamos necesario, para profundizar el estudio, enfocar la mirada en los grupos económicos que operan en la actividad y, de esta forma, complejizar el análisis agregando y construyendo otros datos y observables.

A mediados del año '97 el Poder Ejecutivo Nacional anunció su decisión de decretar un paro biológico para dejar descansar el recurso merluza. Desde la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros y la Cámara de Procesadores (ambas radicadas en Mar del Plata) se señaló como los responsables del colapso del recurso a los buques congeladores y factorías, y solicitaron que las vedas les sean aplicadas este tipo de flota por ser los que más han depredado el caladero nacional. Para noviembre de 1997 estas cámaras en conjunto solicitaban que se aseguren 300.000tn de merluza para la flota fresquera, debido a que -según sostenían- es éste el sistema productivo que contrata mano de obra en tierra; además de solicitar reintegros a las

exportaciones manufacturadas en tierra y distintas limitaciones a la operatoria de los congeladores. De esta forma, la flota fresquera lanzó su posicionamiento respecto a un futuro donde se preveía la escasez de pescado y se iniciaba una puja interburguesa. Por su parte, a principios de 1998 se presentaba en sociedad el CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas). La institución nuclea a los “hombres fuertes de la pesca”. Las firmas responsables son: Moscuza, Valastro, Solimeno y Santa Elena S. A. Sin abandonar su posición en la Cámara, estas empresas se distanciaron del ‘proyecto marplatense’ llevado a cabo por la Multisectorial Pesquera que se sintetizó en el pedido de sanción de la Ley de Emergencia Pesquera. Detengámonos en estos “hombres fuertes de la pesca”.

Estos grupos económicos, tanto los adheridos al CEPA como los no adheridos (por ejemplo Barillari), cuentan con empresas pesqueras radicadas en Mar del Plata y la Patagonia, buques fresqueros y congeladores, procesamiento de materia prima en mar y tierra, grandes stocks de mercaderías en cámaras frigoríficas, trabajadores bajo relación de dependencia y ‘en negro’, disponen de superficies cubiertas integradas por talleres de herrería, mecánica, electricidad, proveedora naval y depósito de redes y artes de pesca. Su flota se encuentra diversificada, lo cual les permite reorientar rápidamente los objetivos de pesca a la especie demandada. También cuentan con sistemas mecanizados de alimentación de materia prima y entrega de producto elaborado para mesas de fileteado, y sistemas mecanizados y computarizados para control de producción como así también con congeladores continuos, congeladoras de placas por contacto y

túneles de congelado estáticos. Estos grupos son los beneficiarios de la reestructuración que sufrió la pesca en los ‘90, todos ellos realizan las operaciones de extracción, industrialización, comercialización y distribución de los productos pesqueros, tanto frescos como congelados. También orientan su producción a los mercados interno y externo, evidenciando de esta forma que para hacer frente a la crisis aplicaron una política de, en sus palabras, “integración y diversificación”. Pero el rasgo más sobresaliente es el grado de concentración y centralización logrado por los mismos, que se evidencian si analizamos las exportaciones. En esta actividad vemos que, según datos de la revista Mercado, el 10% (20 empresas) exportaron en 1996 el 43 % (US\$ 434.800.000) y en 2003 el 63% (US\$ 556.000.000), esto demuestra el grado de monopolización creciente que tienen estos grupos económicos. Otro dato importante es que todos estos grupos implementan la política del trabajo en negro a través de la implantación de ‘cooperativas truchas’, mucha de las cuales funcionan dentro de los establecimientos de dichas empresas, aumentando de esta forma su tasa de ganancia y la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, se puede advertir cómo los grupos económicos más concentrados, se diversificaron de tal forma que la división entre fresqueros y congeladores como explicativo del conflicto, oculta más que aclara una situación compleja. Por eso, es necesario que cuando en las distintas manifestaciones públicas de los actores se hable de ‘fresqueros vs. congeladores’ traduzcamos ‘fresquero’ como pequeña burguesía pesquera no monopolística y ‘congeladores’ como gran burguesía pesquera monopolística. Pasemos ahora a ver la situación de la clase obrera del pescado.

Situación del proletariado pesquero.

En la actividad pesquera podemos identificar al menos cuatro grupos de obreros: 1) El personal de buques pesqueros (marineros), que en su gran mayoría se encuentran nucleados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que en Mar del Plata cuenta con 2000 afiliados (Rodríguez, 1999). 2) Los estibadores, que realizan tareas de carga y descarga y se encuentran agrupados principalmente en torno al Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (SUPA), gremio que cuenta en Mar del Plata con 550 obreros (Rodríguez, 1999). 3) Los obreros de construcciones navales, que ocupa de manera directa en Mar del Plata a 750 operarios y que se organizan en torno al Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SOINRA) (Mauro y Calá, 2008). 4) Los obreros y obreras de la industria procesadora de pescado, en las ramas filete, conserva y harina. Estos se encuentran nucleados en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), sujeto primordial de nuestro análisis. En este último caso pudimos visualizar una tendencia al desalojo de estas fracciones obreras de los territorios sociales que ocupaban. Es decir que crecientes masas obreras fueron repelidas de esos espacios al ser destruidas las relaciones sociales (políticas y económicas) que los anudaban y constituían como determinadas fracciones y capas. El desalojo en números es el siguiente: para 1975 existían aproximadamente 15.000 trabajadores sindicalizados; según datos del SOIP, para 1990 existían 172 firmas pesqueras que oscilaban, durante el período de mayor producción para el ciclo pesquero (septiembre-diciembre), en la contratación de 7.000 y 9.000

trabajadores; según Allen (1996: 164) “hacia 1994 sólo estaban registrados 86 establecimientos y alrededor de 3.000 en relación de dependencia en dichas unidades”. Del restante número de trabajadores, alrededor de 3.000, comenzaron a desarrollar sus labores en ‘cooperativas truchas’. El resto de los trabajadores pasó a engrosar el número de desocupados, pudiendo ser utilizados como mano de obra en disponibilidad. Cuando nos trasladamos del plano estructural al de las relaciones políticas, vemos que estas fueron afectadas de manera más contundente. En un relevamiento de las elecciones en el SOIP podemos visualizar una pronunciada disminución en la participación obrera. La desarticulación de ciertas relaciones políticas se hace evidente a través de la disminución en el número de sufragantes en los procesos electorarios, pasando de 4.200 en 1984 a 1.157 en el 2002, que también son un indicador indirecto del resultado de la ‘política negra’ de los grupos económicos pesqueros.

Al día de hoy, los datos indican el desplazamiento de entre 4.000 y 6.000 personas de los lugares que ocupaban y una gran destrucción de las relaciones políticas previas, ya que el número de obreros del pescado que se encuentran por fuera de la organización gremial no poseen derecho a la jubilación, cobertura social, seguro de vida y mantienen grandes deudas en la AFIP porque están insertos como monotributistas. Así, quedaron establecidos tres sectores al interior del conjunto de los trabajadores: aquellos que realizan su actividad en el marco de convenios colectivos, los que trabajan bajo el sistema cooperativo y los desocupados. Estas son las nuevas relaciones sociales (políticas y económicas) que están vigentes entre la masa de obreros del pescado. Así, esta

situación se constituyó como un obstáculo para la unidad del gremio y repercutió en la capacidad de organización y movilización de los obreros en forma conjunta, reforzando las relaciones de competencia. En definitiva, éste fue el entretejido que dio forma a una crisis social, política y económica que desembocó en ciclos de rebeliones y motines obreros en la industria pesquera.

El ciclo de rebelión, 1997-2002

Como adelantáramos en la introducción, las transformaciones estructurales (mediada por tensiones, resistencias y conflictos), que llevaron al colapso de la merluza, constituyeron la base para que se desarrollara un ciclo de rebelión que activó al conjunto de las fracciones sociales vinculadas a la industria pesquera marplatense y patagónica. Veamos cómo se sucedieron los hechos.

Mientras la ‘Ciudad Feliz’ recibía a los turistas que venían con el afán de disfrutar de unas calurosas vacaciones, los periódicos de ‘la perla del atlántico’ daban cuenta de los primeros síntomas de malestar en las filas obreras del puerto que dieron inicio al ciclo de rebelión: “Trabajadores de la pesquera Pescafic Ute protestaron en la esquina de Bermejo y Ortiz de Zárate ante el retraso en el pago de las deudas salariales” (El Atlántico [E.A.], 22/01/97), “Saladero despidió a 17 mujeres” (E.A., 23/01/97), “Obreras despedidas tomaron una fábrica” (La Capital [L.C.], 24/01/97), “El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado denunció a establecimientos pesqueros que se hacen denominar -dice-cooperativas de trabajo” (Ecos del Puerto, 2º quincena de enero, 1997), “Conflicto laboral en Barillari” (E.A., 26/02/97), “Quieren la indemnización. Los despidieron del frigorífico

‘Barillari’” (E.A., 14/03/97). De modo que este ciclo envolvía la activación y movilización de distintos sujetos: obreros sindicalizados, de cooperativas fraudulentas, desocupados, empresarios ‘fresqueros’, ‘integrados’ (nombre que la burguesía monopólica de la pesca se dio a sí misma) y funcionarios municipales. Según informa Pradas (2006) en los noventa “se crearon las cooperativas para eludir toda la legislación laboral, terminar con los aportes patronales a la jubilación, liquidar la obra social y la garantía horaria. Desde el punto de vista de la patronal lo que se logra es la destrucción lisa y llana del convenio del ‘75. Las cooperativas significan un gigantesco fraude laboral que involucra a 4.500 trabajadores, el 60% de los obreros de la industria. Se estableció una división en el gremio para aislar y ‘domesticar’ al sector más combativo que son los fileteros. (...) la tendencia al trabajo en negro, que era como una ‘picardía’ o una avivada de la Liga Pesquera Marplatense, pasó a ser un eje fundamental de la estructura productiva de los Pulpos Integrados” (p. 55) [la negrita es del autor]. Sin embargo, esta estrategia patronal no fue privativa de Mar del Plata, según nos apunta Pérez Álvarez (2009) en la Patagonia entre 1990 y 1991 “son comunes los cierres de plantas y las suspensiones de personal. Como se ha relevado en Mar del Plata parte de este personal es ‘reincorporado’ a cooperativas truchas, que funcionan solamente cuando hay recurso. Aunque esto se hace presente en la realidad de la región no alcanza el grado de desarrollo que vemos en Mar del Plata.” (p. 175).

Asimismo, uno de los rasgos principales de la dinámica conflictual fue la división dentro de la burguesía pesquera en torno al acceso a un recurso escaso, cuestión que provocó una aguda

lucha interburguesa. En consecuencia, la burguesía 'fresquera' confluyó en una alianza de clases con una fracción de los trabajadores en contra de la burguesía 'congeladora', que, como veremos, también confluirá en una alianza con los obreros de la industria pesquera patagónica. Alianzas que no estuvieron exentas de tensiones y conflictos constantes a su interior. Sin embargo, la 'alianza marplatense' se conformó para enfrentar el proyecto de los grupos económicos, el cual ponía en riesgo la existencia de 'los fresqueros' y los puestos de trabajo asociados a la actividad pesquera de Mar del Plata. Recordemos que en la ciudad de Mar del Plata está radicada el 70% de la flota 'fresquera'. De esta forma, su consolidación por medio de acciones conjuntas dio lugar a la conformación de una fuerza social con nombre propio, Multisectorial en Defensa de la Pesca Argentina, enfrentada a los 'congeladores foráneos' y legitimada por una visión que consideraba al 'sistema fresquero' como el de la burguesía nacional generadora de empleo y residente en Mar del Plata.

Por consiguiente, al poco tiempo de ser conjurada la multisectorial de la pesca marplatense protagonizó diversas acciones, sin embargo, fueron tres los hechos más sobresalientes. Durante los años transcurridos entre 1997 y 2000 la multisectorial impulsó tres movilizaciones a Capital Federal con el objetivo de que los fresqueros pudieran seguir pescando y se produjera la expulsión de los buques congeladores del mar argentino. La iniciativa logró convocar a una gran cantidad de grupos sociales de la sociedad marplatense en las tres oportunidades. Así, a partir de hechos conjuntos y reivindicaciones compartidas, los empresarios 'fresqueros', los gremios pesqueros y los funcionarios municipales,

incluyendo al intendente de la ciudad Elio Aprile, participaron activamente en las movilizaciones.

De esta forma, la multisectorial obtuvo una victoria: los fresqueros marplatenses siguieron pescando y los fileteros conservaron sus trabajos. La concreción de esa victoria parcial fue la sanción de la Ley de Emergencia Pesquera a fines de 1999, la cual permitía continuar pescando a los buques fresqueros, al tiempo que expulsaba a los buques congeladores debajo del paralelo 48, donde disminuyen notablemente los stocks de merluza. Esta victoria se vio reflejada en la evolución del volumen de capturas de merluza (ver gráfico V).

Sin embargo, la alianza que obtuvo estos triunfos estaba signada por el conflicto estructural que representan los intereses antagónicos entre el capital y el trabajo. Es así, que al regreso de cada movilización a Buenos Aires, los trabajadores protagonizaban hechos de protesta con reivindicaciones obreras diferenciadas y enfrentadas a los intereses de los capitalistas de la rama, entre las que se destacaban el aumento salarial y el 'blanqueo' para todo el proletariado de la industria.

Si bien todas aquellas demandas y reivindicaciones eran, en líneas generales, comunes al conjunto de los trabajadores de la industria pesquera, no todas las organizaciones obreras mostraron un mismo nivel de activación y movilización, ni los mismos instrumentos de lucha y formas de organización. Marineros, fileteros, estibadores, constructores navales y otros trabajadores constituían y constituyen la fuerza de trabajo que consume en el proceso de producción las distintas fracciones del capital de la pesca. A la par, esta fuerza de trabajo está constituida por diversas fracciones

y capas obreras que, a lo largo de su historia y luchas, han dado lugar a la cristalización de variadas organizaciones económico-corporativas. Dentro de los sindicatos pesqueros, el más activo era el SOMU marplatense, que insistió con la defensa del 'sistema fresquero' y la denuncia de 'los congeladores', al mismo tiempo que mantuvo reclamos por mejoras salariales que, en general, fueron otorgadas por los empresarios, pero siempre con la mediación de una huelga de varios días. Por el lado del SOIP, las acciones propiciadas por la dirigencia gremial sólo se hicieron visibles cuando los reclamos se realizaron desde la Multisectorial. Dentro de todo el ciclo no participó de ninguna huelga, declarándose en más de una oportunidad contrario a la metodología del paro porque, a su entender, perjudicaba a 'los fresqueros' y beneficiaba a 'los congeladores'. Sin embargo, dentro de los trabajadores de tierra y por fuera de la conducción del gremio, hubo un sector que llevó a cabo el mayor número de hechos de acción directa: los trabajadores/as de las 'cooperativas truchas'.

Llegados a este punto conviene recordar que dentro del ámbito de influencia del SOIP existen dos sujetos que cumplen la misma función, el fileteado de pescado, pero en condiciones laborales disímiles. El primero, que agrupa alrededor de 3.000 obreros, se desempeña en relación de dependencia al amparo del convenio colectivo de trabajo. Un segundo grupo de obreros, entre 3.000 y 4.500, trabajan bajo el 'sistema cooperativo'. Estos últimos son los que se encuentran en la peor situación dentro del modelo productivo vigente. Ante la carestía de pescado esta capa obrera no contaba, ni cuenta, con ningún tipo de contención social. Situación agravada por un

contexto de creciente desocupación en la ciudad que imposibilitaba la búsqueda de otro tipo de labor. En este marco, se volcaron a las calles para reclamar por registración laboral, subsidios a los desocupados, reactivación del puerto y erradicación del régimen cooperativo. Son estos sectores los que producen la mayor cantidad de hechos de protesta con los más altos índices de 'violencia' (acciones por fuera de lo que el régimen considera legal e institucional), y los que denuncian a la dirigencia del SOIP por no ocuparse de su situación y por haber sido cómplice de la 'cooperativización'. Realizada este señalamiento pasemos a ver los números de la protesta.

Durante el proceso de desarrollo del ciclo de rebelión en Mar del Plata, entre 1997 y 2002, hemos podido registrar, a través de la prensa periódica, la realización de, al menos, 242 hechos de protesta, entre los que se contaban: piquetes, ollas populares, tomas y quemas de edificios públicos y privados, manifestaciones y concentraciones, entre otros. Del total de hechos mencionados, 157 fueron llevados a cabo por fileteros y fileteras. A su vez, dentro de estos últimos predominaron las acciones protagonizadas por los trabajadores pauperizados, 'cooperativizados'. Es así que su presencia se visualiza en 118 acciones frente a 39 de los obreros bajo relación de dependencia (Colombo, 2008a). Es decir, que los más activados dentro del ciclo, cuantitativamente hablando, fueron aquellos que estaban en las peores condiciones dentro del modelo productivo. Estos serán los protagonistas de dos acontecimientos de protesta disruptivos que se produjeron por fuera del sistema institucional vigente: los motines obreros. Analizarlos detenidamente nos dará

algunas claves para comprender los rasgos característicos del ciclo. Pero antes, pasaremos una breve revista sobre los sucesos que se desarrollaron más allá de las fronteras bonaerenses, en los puertos patagónicos.

Protestas obreras en los puertos pesqueros patagónicos

En el verano chubutense del '97 la temperatura social era mucho más alta que la medida en grados celsius. Ante el inminente colapso del recurso merluza los empresarios soltaron amarras. La acumulación de suspendidos y cesanteados en las ciudades portuarias de Rawson y Madryn creó la condición de posibilidad para los reclamos obreros. Ante nuevos despidos, esta vez en la pesquera Alpesca (del grupo Alpargatas), los trabajadores lanzaron una huelga general en la pesca, medida inusual en los años precedentes. Este paro no fue contra la patronal pesquera sino para presionar al gobierno nacional, a quien se quería empujar a levantar la veda pesquera, y por leyes promocionales. La medida contó con el apoyo de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP). Como adelantáramos, esto da cuenta de la conformación de una alianza social integrada por los capitales más concentrados de la pesca y los trabajadores de la rama para disputarle el recurso pesquero a la otra alianza, la multisectorial marplatense (Pérez Álvarez, 2009; Colombo, 2008b). No obstante, pocos meses más tarde, los trabajadores de Alpesca tomaron la empresa y mantuvieron al personal jerárquico como rehén. Ya en 1999 los conflictos se extendieron a las empresas de la burguesía monopólica Conarpesa y Harengus. En junio de ese año la Coordinadora de Gremios Marítimos se

movilizó a Capital Federal para realizar la marcha nacional pesquera.

Hacia mediados de 2000, previa sanción de la veda para la pesca de merluza por parte del gobierno nacional, se desarrollaron conflictos obreros en las plantas procesadoras por carencia de materia prima y, por ende, de trabajo. Los obreros también protestaron contra la dirección del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA). Sin embargo, el 30 de mayo confluyeron, en una marcha de protesta en la Capital Federal, los marineros del SOMU, los estibadores del SUPA, los capitanes y patrones de pesca, los fileteros patagónicos del STIA y la burguesía monopólica de la pesca, en reclamo de un corredor de pesca exclusivo. El 2001, con 21 hechos de protesta, fue el año, en términos cuantitativos, de mayor belicosidad social del ciclo 1997-2002, en la Patagonia. Las acciones, como respuesta obrera, fueron detonadas por los atrasos en el pago de salarios, los despidos y las suspensiones. Dentro del amplio espectro de acciones se destacaron las tomas de fábricas, barcos y bancos (Banco Nación), aunque también se desarrollaron diversas movilizaciones y piquetes con quema de neumáticos (Pérez Álvarez, 2009).

Con todo, las acciones más 'espectaculares', por su cantidad y radicalidad, fueron llevadas a cabo en Mar del Plata. Veamos cómo se desarrollaron las experiencias más paradigmáticas.

Motín obrero y toma del SOIP

Entre el 26 de abril y el 1º de julio de 2000 se concentran la mayor cantidad de acciones de protesta de todo el ciclo (71) en Mar del Plata, de las cuales en el mes de junio se concentraron el 52% (37). Fue en este

clima general que se agudizaron las luchas y se fueron sucediendo numerosos paros, marchas, concentraciones, asambleas, cortes de calle, huelgas de hambre, cierre de comercios, tomas de fábricas, ollas populares, tomas de edificios públicos, piquetes, etc. De aquellos días el 28 de junio fue uno de los más significativos, algunos marineros y más de 300 fileteros (en su mayoría, obreros de 'cooperativas truchas'), luego de una asamblea realizada en conjunto en las calles del puerto, donde no se hicieron presentes las dirigencias gremiales oficiales, decidieron marchar hacia las fábricas de procesamiento de pescado de los 'pulpos pesqueros' para escracharlos .

Pero al pasar por las puertas de las fábricas comenzaron a atacarlas. Estas acciones se reiteraron en seis fábricas, todas ellas pertenecientes a los grupos económicos de la pesca, lo que se vuelve un indicador de la delimitación por parte de los obreros del perfil de su contrincante. Se quemaron autos, se rompieron camiones, instalaciones de las plantas, mobiliario, vidrios, computadoras, entre otras cosas.

Cuando la multitud obrera se dirigía hacia su próximo objetivo para seguir manifestando toda su ira, una formación de Infantería Bonaerense bloqueó su paso. En aquel momento, se originó el primer enfrentamiento. Las imágenes de archivo del marplatense Canal 10 muestran cómo en pocos segundos los trabajadores alcanzaron a arrojar piedras, recibiendo como respuesta gases lacrimógenos y balas de goma. Ante este panorama, retrocedieron 100 metros aproximadamente, al tiempo que derribando carteles publicitarios para hacer barricada se resguardaron de las

balas de goma. La policía dio la orden de que la columna de manifestantes no avance. Los trabajadores desobedecieron y comenzaron a acercarse lentamente, hasta encontrarse frente a frente con las fuerzas policiales. Algunos obreros discutieron con personal policial, que los acusó de realizar una protesta violenta, ante lo cual sostuvieron que "la violencia era no poder comer y estar tres meses sin trabajar". Otro grupo de trabajadores llamaba constantemente a la calma y los manifestantes se mantuvieron expectantes, sin dejar de corear consignas. Dos de ellos fueron heridos con balas de goma y tres fueron detenidos. Los obreros decidieron no desconcentrar hasta tanto la policía no los liberase. Los acontecimientos, que habían comenzado con la asamblea aproximadamente a las 11.30hs. de la mañana, se prolongaron por dos horas. Finalmente, los trabajadores se dispersaron pero con la decisión de realizar otra asamblea el día posterior para evaluar las medidas a seguir. Igualmente, las fuerzas policiales decidieron montar guardias permanentes en los domicilios de los industriales pesqueros, debido a que entre los manifestantes se barajó la posibilidad de realizar 'escraches' en los mismos. En el lugar de los hechos los obreros dijeron: "acá está pasando esto con las fábricas, porque son los empresarios con congeladores, con factorías que están trabajando en el sur. Estos empresarios tienen congeladores les importa un bledo que toda la economía marplatense se caiga. (...) Acá hay tres empresas que pudren todo, porque no quieren sentarse a negociar" (E.A., 29/06/00).

Resumiendo, en lo que respecta a las acciones propiamente dichas, al momento de la protesta callejera vemos como tuvieron preponderancia rasgos de

lo espontáneo. En este sentido detectamos cómo la multitud obrera se armó en la calle sin aparecer como objetivo previo el combate con las fuerzas represivas del gobierno, las organizaciones convocantes se vieron rebasadas por los hechos y el movimiento se produjo por fuera de la dirigencia gremial, dando lugar a un motín obrero. Sin embargo, no podemos interpretar linealmente estas acciones como simplemente un ‘desborde’ sobre la dirigencia del SOIP, porque quienes cometieron la acción no fueron reconocidos por el gremio como trabajadores bajo relación de dependencia y, por ende, no los consideraron como sus representados. Este motín obrero fue producto de la indignación, la ira y la venganza ante lo que los obreros percibían como un agravio mantenido en el tiempo y una “tomadura de pelo”.

Por lo tanto, habría estado dominado por los rasgos de una política negativa que expresaba la imposibilidad de los obreros de hacer escuchar sus reclamos, ya que al no estar bajo relación de dependencia carecían de canales institucionales de diálogo con los empresarios. Del mismo modo, tampoco el Estado brindaba algún tipo de respuesta en el marco del ‘ajuste estructural’. Pero al día siguiente las acciones cambiaron de contenido y de antagonista.

En la jornada del 29 de junio los trabajadores volvieron a realizar una asamblea en las calles del puerto. Pero el marco había cambiado, ya que el “personal del Comando de Patrullas, como también de Infantería, la policía montada, helicópteros y bomberos estaban apostados en las zonas cercanas al lugar y luego acompañaron la marcha por las calles paralelas. Pero todo se registró con total normalidad, sin repetir

los hechos violentos de anteaer, que preocuparon a mucha gente” (L.C., 30/06/00). Después de un debate en la asamblea, los trabajadores de tierra, en un grupo de 300 obreros encabezado por la Unión Obrera del Pescado, se movilizaron hacia la sede del SOIP para exigirle que adhiriera al paro que mantenían los marineros. Una vez allí, desalojaron a los dirigentes que había dentro del lugar a empujones y se quedaron en el edificio gremial. Desde allí decidieron solicitar al Ministerio de Trabajo que avale la ‘comisión de base’ elegida en una asamblea y que convoque a elecciones dentro de 90 días. Días más tarde, anunciaron la fijación de un “programa reivindicativo, que la dirección expulsada del Soip se negó siempre a convalidar, lo que tuvo su expresión más siniestra en la negativa a sumarse a la huelga general indefinida de los trabajadores marítimos y del puerto”. Entre los objetivos que pretendieron impulsar figuraron “la efectivización de todos los trabajadores cooperativizados, la actualización salarial y de garantía horaria, de 18 centavos el kg. de filet y \$3 la hora para envasadoras y peones”. Y recordaron que “en Mar del Plata somos 7 mil trabajadores del pescado, de los cuales 5 mil han estado proscriptos, como parias, en la relación laboral y la participación sindical, por la política de (la) dirección expulsada” (L.C., 02/07/00). También pidieron el dictado de una amnistía que permitiera la afiliación de todos los trabajadores que desarrollaban sus labores bajo el régimen de las ‘cooperativas truchas’, a fin de realizar las elecciones y una auditoria en el gremio.

En esta segunda jornada se evidencia el pasaje a una política positiva, pero en otro territorio social, visualizando su antagonista al interior de la propia clase. La ‘burocracia

sindical' se construye como la antagonista, acusada de no plegarse al paro ni dar respuestas a las demandas de los trabajadores cooperativizados/desocupados. La organización político sindical que apareció dirigiendo las acciones fue la UOP. A través de éstas, los obreros pretendieron 'recuperar' el sindicato, que seguía siendo visualizado como una herramienta para defender sus derechos. El hecho tuvo una singular importancia para la posterior victoria de la Lista Celeste en las elecciones del año 2002. De algún modo, la victoria en las elecciones transformó en 'base' a los obreros de las cooperativas fraudulentas, porque sus acciones posibilitaron el cambio de dirección en el sindicato. Sin embargo, fue una 'base' relativa a su influencia política y no a su apoyo electoral directo, ya que su participación en los comicios sindicales estaba imposibilitada estatutariamente por su condición de 'trabajadores en negro'.

Rebeliones obreras después de la devaluación, 2002-2007

La devaluación y la virtual recuperación del recurso pesquero pospusieron la crisis que afectó a la industria pesquera en el año 2000, sin resolver las cuestiones de fondo. Mientras se recuperaban parcialmente los stocks de pescado, crecían las ganancias beneficiadas ahora por la disparidad cambiaria y por un incremento del precio internacional del producto (ver gráfico VI). Este plus en los beneficios de los empresarios permitió la perdurabilidad del sobredimensionamiento de la flota. Desde la perspectiva obrera, la devaluación del peso argentino significó un aumento de la tasa de explotación debido a la devaluación del precio de la fuerza de trabajo que era vendida por

debajo de su valor. Esta reducción en masa de los salarios fue motivo suficiente para que la mayor parte del movimiento obrero organizado se activase en su defensa y lograrse, a través de huelgas como de negociaciones, reactualizar el salario al valor de la fuerza de trabajo. Esta realidad nacional tuvo su correlato en el movimiento obrero de la pesca que a partir del año 2002, coincidiendo en el caso de los trabajadores de tierra con el cambio de dirección en el SOIP, protagonizó un elevado número de conflictos y huelgas parciales y generales por aumentos de salarios. Según datos oficiales, entre 2007 y 2008 se registraron en la pesca 13 conflictos laborales de los cuales 6 comprendieron huelgas en las cuales participaron 967 huelguistas con 7608 jornadas de paro (MTESS, 2009). El relevamiento de los periódicos durante estos años muestra que el grueso de las acciones, en Mar del Plata, fue llevada a cabo por los 'trabajadores en blanco' que buscaban la recuperación de su salario, hecho que benefició a quienes trabajan en cooperativas fraudulentas, pues facilitó la actualización de los suyos. En este marco, hubo algunos conflictos por la actualización salarial en las 'cooperativas truchas', junto con el histórico reclamo de 'blanqueo', aunque fue decayendo su visibilidad. Por otro lado, según los datos relevados para la industria pesquera del Chubut por Pérez Álvarez (2009) entre 2002 y 2005 se desarrollaron 75 hechos de protesta, 5 en 2002, 12 en 2003, 25 en 2004 y 33 en 2005. Al decir de este autor, hacia el 2004 la activación de los trabajadores de tierra se hace permanente. Al año siguiente en los meses de abril y mayo se desarrolló un conflicto pesquero en Puerto Madryn que logró el apoyo de la comunidad local, los protagonistas denominaron a esta acción como el segundo

Madrinazo, voz que evoca la pueblada madrinense de 1984 en repudio a la presencia de naves norteamericanas (Favaro e Iuorno, 2008). Dos años más tarde, nuevamente Mar del Plata iba a ser el escenario de un motín obrero comparable al de 2000 (Nieto y Colombo, 2009).

En otro orden de cosas, surge en 2003 con fuerza la firma de convenios por empresa motorizado por la conducción del SOIP con el argumento de que constituía un avance en el blanqueo de los trabajadores, no con respecto al convenio de 1975, sino a las condiciones de hecho en las que están inmersos los obreros ‘en negro’. Con el nuevo convenio PyME entraron bajo relación de dependencia más de 1.000 trabajadores, pero el mismo fue sistemáticamente denunciado por algunos sectores movilizadas de las cooperativas, quienes lo consideraron “peor que estar en negro”. El STIA también motorizó convenios PyMES luego de la huelga de 2005 (Pérez Álvarez, 2009).

Dentro de los rasgos distintivos de este ciclo podemos destacar la escisión de la Lista Celeste que provocó la ruptura dentro del Partido Obrero, el cual expulsó de la organización a los sindicalistas que quedaron en el gremio, al tiempo que los que perduraron como militantes del PO se alejaron de la conducción gremial. En las elecciones de 2006 la Lista Celeste volvió a ganar los comicios, pero por un escaso margen y siendo acusados por la oposición de utilizar el fraude. En este período también se presentaron tensiones al interior del STIA (Pérez Álvarez, 2009).

Como vimos, la reactivación de la conflictividad obrera estuvo acompañada por el aumento de las capturas, las exportaciones y el precio

internacional de la tonelada de pescado. En definitiva, hubo un marcado crecimiento económico en la rama. Sin embargo, esto no repercutió en beneficios para el conjunto de los asalariados. La parte de los obreros que desarrollaba su labor ‘en negro’ dentro de las ‘cooperativas marplatenses’, quienes se habían constituido en los principales protagonistas de las protestas durante el ciclo anterior desarrollando sus acciones por fuera del sistema institucional vigente (política incivil y, por ende, violenta cuando es mirada desde el régimen), mantuvo su dependencia respecto del ingreso de pescado al puerto marplatense. Ante una nueva amenaza de carestía de la materia prima, durante el año 2007, se volvió a atravesar una ‘situación desesperante’, lo que provocó nuevas protestas en las calles del puerto marplatense y del sur del país. El 2007 tendrá como protagonistas principales a los trabajadores de tierra de Mar del Plata y a los marineros de Puerto Deseado.

Observemos, ahora, como se sucedieron los hechos de protesta obrera en las provincias patagónicas.

Luchas y motines obreros en la Patagonia

Hacia los primeros días del mes de junio de 2004, un grupo de empleados de planta y fileteros de la pesquera Iberpesca (que había sido tomada por los trabajadores), tras una asamblea desarrollada en la sede local del STIA, se movilizaron por las calles de la ciudad capital de Chubut hacia la Legislatura provincial, la casa de Gobierno y el palacio Municipal, donde manifestaron su ira rompiendo vidrios, destrozando e incendiando el acceso, quemando cubiertas y enfrentándose a los bomberos y la policía. Hubo detenidos y numerosos heridos tras el

accionar policial (El Diario de Madryn, 11/06/2004). En el 2005, nuevamente una disputa interburguesa por la apropiación de un recurso cada vez más escaso (cupos de pesca), abrió las puertas de un conflicto obrero. Los trabajadores se lanzaron al reclamo por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, entre los que se encontraba el pase a planta permanente de los contratados. En Puerto Madryn se cortaron calles durante febrero. Días después, fileteros de Rawson cortan la ruta que conecta Rawson con Playa Unión. Hacia mediados de marzo, la asamblea de delegados del STIA votó un plan de lucha por el aumento al básico. Al mes se llevó a cabo un paro total de actividades por tiempo indeterminado en toda la provincia por la negativa patronal a dar el aumento. Asimismo, se puede ver cómo afloraron tensiones entre la dirección del STIA y grupos de trabajadores de algunas plantas. Mientras la conducción buscaba dar unas semanas más a la posibilidad de negociar, el grupo de trabajadores reclamó la declaración de la huelga frente a la sede sindical, mediante un piquete donde ardieron gomas. Al día siguiente se cortó la ruta provincial 1 y el paro fue total en Chubut. Las negociaciones no dieron resultado y el conflicto se extendió en el tiempo. Por su parte, la CTA declaró el estado de alerta y movilización en apoyo al STIA. A los pocos días el SUPA realizó piquetes y cortes de ruta en solidaridad con el STIA. Las medidas de solidaridad se multiplicaron y las posibilidades de una huelga general regional fueron cristalizando.

Conjuntamente las dos centrales sindicales (CTA y CGT) llamaron a una huelga general en Puerto Madryn. Empero, en Comodoro Rivadavia el STIA local llegaba a un acuerdo en la huelga pesquera. La huelga general en

Madryn no fue masiva y el SUPA levantaba la medida de fuerza ante un posible arreglo. La prolongación de la lucha empezó a jugarle en contra a los trabajadores del STIA. Por su parte, los operarios de Iberpesca de Rawson tomaron las instalaciones. Mientras tanto, la dirigencia del STIA decidió impulsar una marcha desde Madryn hasta la capital provincial, para elevar un petitorio al gobernador. La marcha no dio los resultados esperados. La huelga siguió pero muy débil, ya que el STIA aceptó la vuelta al trabajo del personal administrativo. Una nueva propuesta de la CAPIP fue rechazada por una asamblea de 1.500 obreros, la cual decidió tomar las instalaciones del Concejo Deliberante para reclamar la presencia del gobierno, manifestando su bronca contra los vidrios del edificio comunal. Los trabajadores también atacaron las instalaciones de El Diario de Madryn y las de una pescadería de la ciudad.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, anunció que iba a garantizar con la fuerza pública la vuelta al trabajo de los obreros que así lo decidieran, a la vez que ordenó el desalojo del Concejo Deliberante. Finalmente el 20 de mayo se llegó a un acuerdo y se levantó la huelga (Pérez Álvarez, 2009). Fue en el marco de esta lucha gremial que se sucedieron ‘hechos violentos’ en Comodoro Rivadavia. En esta localidad una multitud obrera iracunda atacó las fábricas de pescado rompiendo vidrios y mobiliario, también amenazó a gerentes y empleados administrativos. Dos años más tarde, en la provincia de Santa Cruz reapareció el motín obrero pero protagonizado principalmente por marineros. Veamos cómo se desarrollaron los hechos.

A la vez que el frío invernal de Puerto Deseado cedía antes las ardientes lenguas de fuego nutrido por la mampostería fabril, el ritmo habitual de la ciudad se vio interrumpido por la protesta obrera. Recordemos que Puerto Deseado es una ciudad de un poco más de 15.000 habitantes cuya actividad económica más importante es la pesca. Es por esto que cualquier conflicto de importancia en la industria pesquera pone virtualmente en jaque al conjunto de su economía. Fue así que el viernes 20 de julio, mientras el presidente Kirchner daba un discurso a pocos kilómetros de allí, en Puerto Santa Cruz, un grupo de marineros en huelga, nucleados por la Agrupación de Marineros Santacruceños, discutían en asamblea los pasos a seguir. Luego de unos minutos se resolvió tomar el Municipio y las plantas pesqueras. De esta forma una multitud de entre 500 y 700 obreros, en su mayoría marineros, atacaron e incendiaron varias fábricas en el marco de una lucha que se remontaba al 3 de julio, cuando decidieron declararse en huelga y posteriormente bloquear el acceso del parque industrial en reclamo de que se los eximiera del impuesto a las ganancias, les incrementaran el sueldo y en rechazo al convenio colectivo firmado por el SOMU nacional. En un primer momento, los manifestantes ocuparon durante algunas horas las sedes de la Municipalidad y el Concejo Deliberante, pero sin resultados ya que el intendente Arturo Rodríguez y algunos concejales se encontraban en Puerto Santa Cruz, esto motivó que algunos trabajadores provocaran ‘destrozos’. Posteriormente, una porción mayoritaria de la multitud obrera se dirigió al Parque Industrial donde atacaron a piedrazos e incendiaron instalaciones de las empresas Arbumasa, Argenova, Empesur, Pescargen Vieyra y Santa

Cruz (de capitales españoles), Santa Elena y Carsa (de capitales argentinos) y Pezpasa (de capitales japoneses y suizos), al igual que en Mar del Plata, el perfil del contrincante de los obreros responde a los grupos económicos de la pesca.

Durante el motín, los obreros apedrearon vidrios de un total de quince plantas pesqueras, sin embargo fue en el predio de la pesquera Vieyra que las acciones obreras cobraron mayor vilo, cuando parte de la multitud se desprendió del resto para voltear y quemar un camión de pequeño porte que se hallaba en la playa de estacionamiento. Minutos después de las 16hs, distintos grupos de obreros amotinados se dirigieron en forma simultánea hacia diversas fábricas. En la planta de Arbumasa produjeron un incendio en la cámara de frío, también se produjo otro en el depósito de Empesur, otro grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones de Pescargen donde abrieron contenedores y esparcieron en el suelo varios centenares de kilos de calamar y langostino, al tiempo que se registraba otro incendio de consideración en la planta de Santa Elena. Si bien los bomberos alcanzaron a controlar este último siniestro, la simultaneidad de hechos similares impidió que pudieran llegar a los restantes sitios. Daniel Medina, delegado hasta hacía unos días del SOMU, pues fue destituido por su enfrentamiento con la conducción nacional de dicha entidad obrera, señaló que “acá hay caos porque no hubo respuestas de las autoridades a nuestros reclamos. Queremos que nos escuchen y los marineros están con mucha calentura”. Si bien en los días posteriores los ataques a las fábricas cedieron, la huelga de obreros de la pesca se extendió a los puertos de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y

Madryn. Finalmente, el jueves 2 de agosto, tras el dictado de conciliación obligatoria, los marítimos retornaron a sus labores. Nuevamente la bronca y la ira aparecen como sentimientos movilizadores de la multitud obrera amotinada ante la falta de respuesta patronal y estatal.

Ira obrera en el puerto de Mar del Plata

Desde los primeros meses del año 2007 comenzó a preocupar la escasez de pescado para ser procesado en las plantas. El gran crecimiento registrado en el año 2006, en el cual se superaron los 1.200 millones de dólares en las exportaciones, se produjo fundamentalmente por las excelentes capturas de langostino y calamar, registrando la primera especie una suba considerable de su valor. No obstante, en los meses de febrero y marzo distintos sectores que participan de la actividad comenzaron a hacer oír sus voces respecto al desabastecimiento de pescado para procesar. En este sentido, Domingo Novero, entonces diputado bonaerense y secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), expresó “Estamos en un momento muy delicado, no quiero asustar a nadie, pero estamos al borde de un nuevo colapso de la merluza” (L.C., 03/03/07) (ver gráfico VII). La tendencia inicial se profundizó y a mediados de julio, la escasez de merluza motivó la salida a las calles de los trabajadores de ‘cooperativas truchas’, quienes protagonizaron una creciente protesta social con las reivindicaciones de un salario garantizado de \$980 y el reclamo de la registración laboral con el convenio 161/75. Desde esa fecha y fines de diciembre se produjeron hechos de protesta con las características del viejo ciclo, producto de los sujetos que los

llevan a cabo. Piquetes en el puerto, ollas populares, asambleas, toma del sindicato y expulsión de la dirigencia, toma del Concejo Deliberante del Palacio Municipal y del Ministerio de Trabajo, ataque a las fábricas y a la sede de las Cámaras pesqueras, enfrentamientos con las fuerzas policiales, etc. De esta forma se puede visualizar cómo fue emergiendo lo viejo en el nuevo ciclo de rebelión abierto hacia el 2002.

Pero no sólo existen rasgos de continuidad, sino también se observan algunas rupturas. El contexto no fue el de una crisis, sino el de crecimiento económico general del país y la rama, vía aumento del precio internacional del pescado. No se produjo solidaridad ni hubo medidas de fuerza por parte de los trabajadores marineros. Tampoco el enfrentamiento entre las fracciones empresarias adquirió la envergadura de antaño, debido principalmente al crecimiento económico, lo que hizo prescindir a los empresarios ‘fresqueros’ de la movilización de la masa obrera ligada a los mismos, imposibilitando de esta forma la conformación de una alianza entre sectores obreros y empresariales que diera lugar a la activación de una fuerza social en defensa de los intereses corporativos de los mismos. Este contexto provocó que las protestas desarrolladas por las capas más pauperizadas de los fileteros sean desarrolladas en condiciones de extrema debilidad y aislamiento, lo que incentivó aún más su ira.

Reflexiones finales

En un marco general de sobreexplotación y crisis del principal recurso pesquero del mar argentino la conflictividad laboral transitó diversas formas. Como pudimos ver en Mar del Plata y la Patagonia, tanto los objetivos

como los sujetos, las acciones como los antagonistas y los resultados sufrieron cambios a consecuencia de diversos factores.

Entre éstos podemos destacar el pasaje de la preponderancia de reclamos de trabajo y ‘blanqueo’ por parte de los trabajadores ‘cooperativizados’ y desocupados en el primer ciclo, a reclamos de aumento salarial por parte de los trabajadores bajo relación de dependencia en el segundo ciclo. No obstante, algunos rasgos mostraron una decidida continuidad. Por ejemplo, en lo que hace a las bases socioeconómicas de la protesta obrera se pueden destacar tres elementos relevantes. El primero se corresponde con una realidad que, en un sentido, excede a la industria pesquera y, en otro, se relaciona con las características que ésta asumió en los noventa. Nos referimos a la tasa de desocupación abierta que sufre la ciudad de Mar del Plata. Aunque los valores relativos han mermado significativamente en uno y otro ciclo, la existencia de una población sobrante para las necesidades del capital se mantiene en los niveles más altos del país. El volumen de desempleo se vería agravado además por las transformaciones de la industria pesquera que, de seguir por este camino, enfrentará una posible tendencia (y por ahora sólo es tal) de decrecimiento absoluto y relativo en las capturas de merluza. De este modo, se acrecentaría la precariedad de los trabajadores de las cooperativas fraudulentas, quienes no sólo le servirán al capital para regular el ingreso de pescado y descargar los costos que traen aparejados los ciclos de las capturas sobre los propios trabajadores, sino que se transformaran en una población que ya no tendrá cabida en este sistema productivo. Esto último, nos deposita en el segundo y el tercer aspecto a mencionar. Uno refiere

a la sobreexplotación del recurso merluza, que no varió a pesar de los cambios operados por la devaluación y que afecta a todos los puertos pesqueros analizados, y el otro, a la permanencia de una capa de obreros del pescado que trabajan en negro en las ‘cooperativas truchas’ junto a otro sector que mantiene la relación de dependencia, que como pudimos ver es una realidad marplatense y patagónica.

En lo que refiere a la conflictividad obrera entre 1997 y 2002, el sujeto preponderante de la protesta fue el sector de fileteros marplatenses en negro. Esta capa obrera desarrolló su rebelión a través de la acción directa, por fuera del marco institucional vigente, dando lugar a formatos organizacionales de democracia directa que se desarrollaron en todo momento en oposición a la dirección del SOIP. Sus reclamos referían a la registración laboral, un subsidio a los desocupados del sector, la reactivación del puerto y la obtención de una garantía horaria ante la carestía del pescado. Este ciclo de rebelión tuvo su momento más álgido durante las jornadas del 28 y 29 de junio de 2000. Dicho proceso se cristalizó en una salida positiva en las elecciones del 2002, cuando la Lista Celeste venció en las elecciones a la histórica conducción peronista del gremio, producto de una confluencia con los sectores en blanco, en un escenario de lucha institucional-electoral. Este hecho, junto a la devaluación, transformó el 2002 en un punto de inflexión dentro del proceso de lucha de los obreros del pescado, dando término a un ciclo rebelión, para abrir otro. A partir de este año el sujeto principal de la conflictividad obrera del gremio fue otro, el sector de trabajadores que desarrollaban sus actividades ‘en blanco’. Al cambiar el sujeto, también varió la forma y el medio de lucha, pasando a ser la huelga,

como forma de lucha institucional, el medio primordial. Además el sindicato volvió a ser la principal forma de organización y vehiculización de las demandas ¿Significa esto que la nueva dirección fue el motivo trascendental del cambio de eje en la dinámica sindical? Pensamos que no. Si bien la renovada conducción pudo aceitar algunos ejes del gremio, la razón principal de la activación de los trabajadores fue la lucha por recuperar el precio de la fuerza de trabajo, aspecto que fue llevado a cabo en otras ramas, y también dentro de la pesca, por sindicatos con sus antiguas direcciones, constituyendo un fenómeno de dimensión nacional y que se relaciona precisamente con la recuperación del salario que estuvo afectado por la devaluación (Chitarroni y Cimillo, 2007).

Por otra parte, los cambios registrados en la dinámica del conflicto del gremio del pescado parecen haber sido producto de un movimiento coyuntural y no orgánico, ya que hacia el 2007 volvemos a encontrar en el puerto marplatense a los sujetos, las acciones y las formas organizativas de finales de la década anterior: el piquete, la asamblea de autoconvocados, los ataques a las fábricas, los reclamos de registración laboral y subsidios, la renovada toma del sindicato, la expulsión de la directiva y los motines obreros. El hecho de que se repitan los sujetos, las formas de lucha y los modos organizacionales, pensamos, responde, en primer lugar, a la perdurabilidad de ciertos rasgos en la estructura socioeconómica de la rama, en segundo lugar (pero no menos importante), la perpetuación de relaciones políticas descuidadas, por último, la tradición de lucha de los obreros/as de las cooperativas fraudulentas.

Los términos de estas disputas, como las anteriores, enfrentan a los dos sujetos fundamentales de la estructura pesquera: la capa más pauperizada de los trabajadores/as contra los sectores más concentrados de la industria pesquera: fileteros/as ‘cooperativizados’ vs. burguesía monopólica. De esta forma, el enfrentamiento se realiza entre dos fuerzas asimétricas en un contexto de correlaciones de fuerza favorables a los grupos económicos de la rama. En contraposición a éste último, el movimiento obrero del pescado, que no posee una posición estratégica dentro de la estructura industrial de la pesca como sí la tienen los marineros, se encuentra altamente fragmentado y aislado, complicando la ejecución mancomunada de medidas que puedan presionar eficazmente a los ‘pulpos pesqueros’. Vale destacar que los hechos de mayor contenido de ‘violencia’ se produjeron cuando los obreros visualizaron que no existía ninguna posibilidad de darle una salida institucionalizada a sus reclamos.

Entendemos que esta situación es más una expresión de debilidad que de fortaleza. En consecuencia, lo predominante, lo orgánico de ambos ciclos de rebelión son las acciones desesperadas y vengativas con que parecen culminar los procesos de lucha. Es por esto que consideramos que, tanto en el 2000 como en el 2007, en Mar del Plata como en la Patagonia, los hechos presentan rasgos de motín. Ya que entendemos al mismo como expresión de desesperación y venganza, en la que prevalece el elemento espontáneo, en tanto forma embrionaria de lo consciente, que expresa pérdida de fe en la inmovilidad del orden de cosas que los/as oprime. Pues, no se elige previamente el momento de la acción (el ataque a las fábricas), expresándose un nivel de conciencia más bajo que

cualquier acción de lucha sistemática (por ejemplo las huelgas del SOMU).

Sin embargo, para el régimen social instituido lo preocupante no fue el grado de sistematicidad de una acción obrera organizada, legal e institucional y, por lo tanto, previsible; sino el carácter ‘desorganizado’, ilegal, no institucional, ‘incivil’ y, por ende, imprevisible. Pero ¿cuál es el sujeto de los motines? Los trabajadores del pescado desplegaron sus acciones en las calles, expresando su desesperación y su ira ante la situación en que se encontraban, llevando adelante un hecho que no llega a ser lucha (en el sentido estrecho del término), y no llega a ser lucha porque no tienen un objetivo gremial ni político claro, es principalmente una expresión de venganza. Por lo que consideramos que el sujeto del motín en la industria de la pesca es la multitud, pero una multitud obrera. De lo que se desprende, finalmente, que los hechos en cuestión fueron motines obreros. Y que estos rasgos de la protesta obrera persistirán en el futuro, en tanto las relaciones políticas y económicas vigentes continúen presentes.

Asimismo, el hecho de que los marineros de Puerto Deseado hayan protagonizado un motín obrero estaría indicando una difusión de esta forma y tradición de lucha hacia otras fracciones y capas obreras del pescado que, explotadas por los mismos grupos económicos, no encuentran respuestas patronales y/o estatales a sus reclamos.

Esta breve reseña de los rasgos principales del proceso de lucha entre 1997 y 2007, por otra parte, nos invita a ensayar una respuesta al siguiente interrogante: ¿hay una revitalización del movimiento obrero? En primer lugar, para que exista una revitalización debemos observar previamente una des-

vitalización, una extinción. A partir de la experiencia analizada en este artículo podemos indicar que tal agonía no se produjo. El sujeto de la protesta perteneció al movimiento obrero, aunque el papel central lo ocuparon los sectores que se hallaban en la peor situación. No obstante, los obreros sindicalizados, dirigidos por conducciones que podrían considerarse como ‘burocráticas’, participaron del ciclo en la medida en que vieron peligrar su fuente de trabajo y su lugar en cuanto atributos del capital. Por otro lado, ¿podemos pensar que el cambio de forma a partir de la devaluación y bajo la nueva orientación gremial nos habla de una revitalización del movimiento obrero con los viejos métodos de lucha? La respuesta a esta pregunta merece que no nos aventurarnos en afirmaciones que contengan más de deseos personales que de validez empírica. Si bien la visibilización de la lucha de los trabajadores ‘en blanco’, del sindicato y de la huelga fue evidente, las acciones mermaron cuando los mismos recuperaron, en cierta medida, el precio de la fuerza de trabajo que se estableció durante la ‘convertibilidad’, mientras que crecieron las ganancias empresariales y por tanto, la tasa de explotación. La aparición de los viejos conflictos en la nueva coyuntura nos habla de una irresolución de la situación de los obreros más pauperizados, al mismo tiempo que se evidencia una relativa falta de solidaridad de los trabajadores en blanco respecto a aquellos que trabajan en negro. En este sentido, los datos de la rama no nos permiten hablar de un cambio sustancial en la correlación de fuerzas políticas ni en la tendencia de las luchas defensivas de fines de los noventa. Por otra parte, el movimiento de ‘base’, que podríamos observar dentro de los actores que se movilizaron tanto en el primer ciclo como los que se están movilizand

este segundo ciclo, guarda una relación compleja con la representación gremial, con lo cual se dificulta la definición como 'base'. Es decir, protestan desde fuera y en oposición a la conducción del SOIP, pero en tanto obreros precarizados de las 'cooperativas truchas'. No existe un número importante de 'obreros de base' que proteste, entre aquellos que están en blanco, en contra de la dirección del SOIP. Sin embargo, complica más el panorama el resultado de las últimas elecciones gremiales en las que, si bien obtuvo la victoria la lista Celeste, si sumamos los votos de las listas vinculadas a partidos de izquierda se superan los sufragios que obtuvo la conducción actual, a pesar de que, recordemos, sólo votan quienes están en blanco.

Lo cual nos indica la existencia de una simpatía implícita con las propuestas de estas corrientes político-sindicales, pero que no alcanza para movilizar en pos de esos objetivos. Igualmente el fenómeno principal es que cualquier representación que asuma el gremio no es 'representativa' del conjunto de los trabajadores, ya que de aproximadamente 8 mil (cooperativizados y en blanco), el padrón se reduce aproximadamente a 2.500 y votan menos de la mitad de ese número. En este marco, aquellos que dirigen el gremio son electos por un 25% o 30% de los que asisten a votar, o sea, un poco más del 5% del conjunto de los obreros del gremio, lo que nos indica un agudo proceso de destrucción de relaciones políticas que lleva aparejada a una escasa representatividad gremial del SOIP.

Por último quisiéramos arriesgar algunas reflexiones sobre el contexto general de las protestas obreras. Conjeturamos que los cambios en el

régimen de acumulación, junto a las mutaciones del Estado, están provocando una transformación en las condiciones de existencia de la clase obrera. Las tendencias del capitalismo actual, dominado por la burguesía financiera y en un contexto contrarrevolucionario que siguió a la derrota obrera de los '70 y las hiperinflaciones de 1989-91, establecen un nuevo escenario en las condiciones de vida, de trabajo, de organización y lucha de los trabajadores. Lamentablemente, esas condiciones parecen retrotraerse a las que vivieron sus abuelos en los primeros años del siglo XX. Siendo una de sus consecuencias la 'reaparición' de formas de lucha consideradas 'primitivas', como el motín obrero. Sin embargo, más allá de la situación contextual y situada de sus luchas y condiciones de vida, la clase obrera parece estar presente en Argentina y el resto del mundo.

Anexo

Aquí van los cuadros

Bibliografía

Astarian, Bruno (2008) Las huelgas en Francia durante mayo y junio de 1968, Madrid, Traficantes de sueños.

Atzeni, Maurizio y Ghigliani, Pablo (2008) "Nature and limits of trade unions' mobilizations in contemporary Argentina", en LabourAgain Publications (online) <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/atzeni-ghigliani.pdf> (consultado 22/07/2009)

Battistini, Osvaldo (2002) "Transformaciones culturales en el trabajo y acción sindical. Un juego de intereses contradictorios", en Arturo Fernández (comp.) Sindicatos, crisis y después, Buenos Aires, Biebel.

- Chakrabarty, Dipesh (2008) "La historia subalterna como pensamiento político", en AA.VV. Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de Sueños, pp. 145-165.
- Chatterjee, Partha (2008) La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos, Argentina, Siglo XXI.
- Chitarroni, Horacio y Cimillo, Elsa (2007) "¿Resurge el sujeto histórico?: cambios en el colectivo del trabajo asalariado: 1974-2006", en Lavlaboratorio, n° 21, pp. 5-11. (online) <http://lavlaboratorio.fsoc.uba.ar> (consultado 01/09/2009)
- Colombo, Guillermo y Nieto, Agustín (2006) "Bases sociales y económicas de la protesta. La industria de la pesca en Mar del Plata. De la convertibilidad a la devaluación (1991-2002)", en Actas de las XX Jornadas de Historia Económica, Mar del Plata.
- Colombo, Guillermo y Nieto, Agustín (2008) "Aproximación a las formas de la lucha obrera en la industria de la pesca, Mar del Plata 1997-2007", en LabourAgain Publications (online) <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/colombo-nieto.pdf> (consultado 22/07/2009)
- Colombo, Guillermo (2008a) 'Hasta que el recurso nos falló...'. Crisis de la merluza y protesta obrera. La dinámica de los enfrentamientos en el puerto marplatense (1997-2002), Tesina de licenciatura en historia, UNMDP.
- Colombo, Guillermo (2008b) "Colapso de la merluza y protesta obrera en los inicios de la crisis pesquera (1997-1998)", en Revista de Estudios Marítimos y Sociales, n° 1, pp. 57-68.
- Cominiello, Sebastián (2003) "El escrache: una hipótesis preliminar", en Razón y Revolución, n° 12, pp. 149-153.
- Cominiello, Sebastián (2004) "Otra vez: ¿Qué es un escrache?", en Razón y Revolución, n° 12, pp. 149-153.
- Cotarelo, María Celia (1999) "El motín de Santiago del Estero, diciembre de 1993", en PIMSA 1999, pp. 83-119.
- Cotarelo, María Celia (1998) "Abstención electoral y voto en blanco en Argentina", PIMSA 1998, pp. 241-247.
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth (2007) "Down but not Out: Union Resurgence and Segmented Neocorporatism in Argentina: 2003-2007", en Politics and Society, n° 35, pp. 363-401.
- Fanon, Frantz (2007) Los condenados de la tierra, Rosario, Último recurso.
- Favaro, Orietta y Iuorno, Graciela (2008) "Sujetos, política y conflictos en la Patagonia argentina", en López Maya, Iñigo Carrera y Calveiro (comp.) Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina, Buenos Aires, CLACSO.
- Gennero de Rearte, Ana y Carlos Ferraro (comp.) (2002), "Mar del Plata Productiva: diagnóstico y elementos para una propuesta de desarrollo local", CEPAL, Serie Estudios y perspectivas, N° 11, Buenos Aires.
- Gramsci, Antonio (1985) La política y el Estado moderno, Barcelona, Planeta-Agostini.
- Grez Toso, Sergio (2000) "Transición en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)", en Historia (Santiago) [online], 33: 141-225 (consultado 18/07/2009)
- Gudavarthy, Ajay y Vijay, G. (2008) "Antinomias de la sociedad política. Implicancias del desarrollo incivil", en Ciska Raventós (comp.) Innovación democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América Latina, Bs. As., CLACSO.
- Guha, Ranahit (2002) Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, Crítica.

- Hardt, Michael y Negri Antonio (2004) *Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio*, Argentina, Debate, 2004.
- Hobsbawm, Eric (1983) *Rebeldes Primitivos*, Barcelona, Ariel.
- Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia (2004) “La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”, PIMSA 2003, pp. 201-308.
- Iñigo Carrera, Nicolás (2007) “A century of general strikes. Strikes in Argentina”, en Sjaak van der Velden, Heiner Dribbusch, Dave Lyddon, Kurt Vandaele (eds.) *Strikes around the World, 1968-2005*, Amsterdam, Aksant, pp. 61-85.
- Iñigo Carrera, N. (2008) “Algunos instrumentos para el análisis de las luchas populares en la llamada historia reciente”, en López Maya, Iñigo Carrera y Calveiro *Luchas Contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Bs As, Clacso.
- Izaguirre, Inés (1994) *Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada*, Buenos Aires, CEAL.
- Izaguirre, Inés (1994) “Problemas metodológicos y construcción de observables en una investigación sobre luchas obreras”, en Daniel Campione (comp.) *La clase obrera de Alfonsín a Menem*, Buenos Aires, CEAL.
- Levitsky, Steven (2005) *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Lobato, Mirta y Suriano, Juan (2003) *La protesta social en la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Marín, Juan Carlos (2000) “La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder”, *RyR*, n° 6, pp. 21-33.
- Mauro, Lucía y Cala, Daniela (2008) *La industria naval en Mar del Plata*, Mar del Plata, FCEyS-UNMdP.
- MTSS (2007) *La reactivación de la negociación colectiva*, Buenos Aires.
- MTSS (2007) *Estadísticas de Conflictos Laborales 2006*, Buenos Aires.
- MTSS (2009) *Los conflictos laborales en el trienio 2006-2008*, Buenos Aires.
- Nieto, Agustín (2005) ‘Lucha de calles en el puerto de Mar del Plata. 28 y 29 de Junio de 2000’, en *Actas X° Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia*. UNR – Rosario.
- Nieto, Agustín y Colombo, Guillermo (2009) “Lucha de calles en la industria de la pesca. Una interpretación del porqué de su regularidad (1997-2007)”, en *Conflicto Social*, n° 1, pp. 168-194.
- Pérez Álvarez, Gonzalo (2009) “Aunque parezca, la red no está vacía. Luchas de los obreros pesqueros del noreste de Chubut, 1990-2005”, en *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, n° 2, pp. 171-183.
- Portantiero, Juan Carlos (1973) “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Oscar Braun (comp.) *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Pradas, Eduardo Maro (2006) *Un acercamiento a la problemática pesquera marplatense*, Buenos Aires, El Mensajero.
- Rodríguez, Alejandro (1999) *El sector pesquero marplatense*, Buenos Aires, INAP.
- Rudé, George (1981) *Revolución popular y conciencia de clase*, Barcelona, Crítica.
- Rudé, George (1998) *La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848*, Madrid, Siglo XXI.
- Tarrow, Sidney (1997) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza.
- Thompson, E. P. (1995) *Costumbres en Común*, Barcelona, Crítica.
- Tilly, Charles (2007) *Violencia Colectiva*, Barcelona, Hacer.

Virno, Paolo (2003) Gramática de la multitud, Madrid, Traficantes de sueños.

Womack, John (2007) Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros, México, FCE.

Yurkievich, Gonzalo (2008) “Crónica de un conflicto anunciado. Un nuevo capítulo en la lucha por la registración laboral en la industria pesquera marplatense, julio-diciembre de 2007”, en Revista de Estudios Marítimos y Sociales, nº 1, pp. 141-144.

Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales.

La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008

Ana Natalucci,⁷³

Resumen

Este artículo retoma conclusiones de mi tesis de maestría “Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006”. La propuesta es analizar la experiencia del Movimiento Barrios de Pie e indagar sobre los cambios producidos en su experiencia y su horizonte de expectativas. ¿Cuál fue el impacto para la trayectoria del Movimiento que la democracia sea incorporada a su horizonte de transformación? ¿Es posible afirmar que estamos frente a un paradigma de cambio social que, paralelamente a la transformación del régimen de acumulación económica, se interesa por la del régimen de dominación política? Estas respuestas sin dudas contribuirán a reflexionar sobre una problemática actual: la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales.

Palabras claves: autonomía, heteronomía, cambio social, democracia, Barrios de Pie.

Summary

This article takes a several lines of my Master's thesis “Political subjects, process of reconstituting identity and social protest: organizations piqueteras de Córdoba, 1994-2006”. The proposal is based on the experience of the Movimiento Barrios de Pie, look over the horizon of expectations called “twenty-first century socialism”. What was the impact on the trajectory of the movement that democracy is incorporated in processing your horizons? Can we say that we are facing a paradigm of social change, in parallel with the transformation of the economic regime of accumulation, is interested in the regime's domination of politics? These responses undoubtedly contribute to reflect on a current issues: autonomy or heteronomy of social organizations.

Key words: autonomy, heteronomy, social change, democracy, Barrios de Pie.

Recibido: 16.08.2009 Aprobado: 11.11.2009

⁷³ Becaria CONICET. Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva, IIGG, FCS, UBA.

Introducción

A mediados de 2003, a posteriori de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, el Movimiento Barrios de Pie vivió una metamorfosis decisiva. Por un lado, modificó su estrategia política, ampliando no sólo sus ámbitos de intervención sino aceptando ser parte de la coalición de gobierno. Por otra parte, redefinió su horizonte de expectativas teniendo en la mira el proyecto chavista de “socialismo del siglo XXI”, fundamentado en torno a dos supuestos: la redistribución de la riqueza y la democracia participativa. ¿Qué repercusión aparejó para la trayectoria del Movimiento la introducción de la dimensión democrática en su horizonte de transformación? ¿Implicó la sustitución de una estrategia autónoma de intervención en el régimen político por una de tipo heterónoma? O en otros términos ¿en qué medida fue reformulado el paradigma de cambio social al interesarse por la transformación del régimen de acumulación económica y por la del régimen de dominación política? Y en relación con esto último, ¿esos cambios en la trayectoria organizacional aparejaron una redefinición de las concepciones de cambio social, que hasta entonces reclamaban las organizaciones que se reconocían de la izquierda nacional?

El propósito de este artículo es plantear una pregunta significativa para las organizaciones sociales: su autonomía o heteronomía respecto del régimen político. Para esto, propongo reconstruir la trayectoria del Movimiento Barrios de Pie, especialmente a partir de la reformulación de su horizonte de expectativas, identificando los desplazamientos y rupturas. Siguiendo a

Palti (2007), los cambios terminológicos siempre expresan un desplazamiento político. Consecuentemente, la lectura sobre la reformulación del horizonte de expectativas en términos de la autonomía o heteronomía de la intervención en el régimen político tiene mucho para aportar sobre la dinámica de una organización, como también sobre otras experiencias de movilización. El período seleccionado se extiende desde 2002 a 2008, como límites de dos momentos diferentes del Movimiento Barrios de Pie: uno de máxima confrontación callejera y otro de progresiva participación en instancias estatales. Asimismo, el año 2008 marca el retiro del Movimiento del Estado producto de diferencias con el kirchnerismo.

El recorrido propuesto es, en primer lugar, explicitar los supuestos teóricos; luego, se realiza un breve racconto de la dinámica del espacio piquetero a fin de contextualizar la trayectoria del Movimiento Barrios de Pie. A continuación, se presentan los rasgos centrales de aquel, respecto de sus opciones y definiciones hasta 2008, diferenciando tres momentos: la discusión de los partidos de izquierda alrededor de su integración en el espacio piquetero, la posición autónoma y la heterónoma. Por último, se retoma la problemática relacionada con la redefinición del horizonte de expectativas y su alcance.

Algunas precisiones conceptuales sobre el espacio piquetero y sus estrategias de intervención política

En coincidencia con la literatura que señala el doble origen de las organizaciones piqueteras (Auyero 2002, Svampa y Pereyra 2003, Delamata 2004, Pereyra, Pérez y Schuster 2008), propongo pensar en un

campo de experiencias piquetero, entendiendo por tal un espacio donde intervienen varias organizaciones, modos diferentes de intervención y apropiaciones desiguales sobre la identidad piquetera. Siguiendo a Koselleck (1993, 2001) el espacio de experiencias se configura a partir de historias que se solapan en procesos generacionales y que remiten a líneas temporales más amplias. En ese espacio se producen las condiciones de repetición de la experiencia y de incorporación de acontecimientos significativos, se articulan acontecimientos y cursos intersubjetivos de la acción y se sintetizan vivencias pretéritas dando lugar a una trama en la que se inscriben otras, así como los modos de vivirlas y leerlas, registrarlas y escribirlas. Desde esta conceptualización, es posible pensar que las organizaciones piqueteras han tenido estrategias diferentes de intervención en el régimen político, e incluso, que algunas modificaron significativamente su trayectoria por cambios coyunturales.

En el momento de constitución y consolidación, algunos rasgos comunes permiten sostener que el campo de experiencias se caracterizó por: 1) movilización de tipo descorporativizada, 2) autoorganización comunitaria, 3) dinámica asamblearia y 4) articulación de un lenguaje de derechos como vehículo de expresión de demandas e interpelaciones en el espacio público (Pérez, 2007), donde primó una estrategia de tipo autónoma. En su trayectoria, algunas organizaciones por cuestiones internas como otras vinculadas a la coyuntura, adoptaron una estrategia heterónoma.

En términos conceptuales ¿de qué se tratan la autonomía y la heteronomía? Por un lado, vamos a

entender la autonomía como orientada a la construcción de una estrategia independiente, de autogestión, con reticencias a participar del Estado y sus áreas. Siguiendo a Lefort esta estrategia “imagina una sociedad que concordaría espontáneamente consigo misma, una multiplicidad de empresas que serían transparentes las unas a las otras y se desplegarían en un tiempo y un espacio homogéneo [...] Una ilusión de un poder que coincidiría realmente con la posición que se le imagina y que él intenta ocupar, así como a la ilusión de una unidad que se tornaría palpable, real y disolvería en sí las diferencias” (1990: 35). Por otro lado, la estrategia heterónoma implica una intervención teniendo como horizonte la generación de dispositivos que puedan institucionalizarse, sin por esto presuponer que la organización cuenta con un programa o doctrina política (Lefort, 1990). Desde esta perspectiva, las organizaciones contarían con una capacidad para instalar una estrategia tendiente a generar dispositivos que puedan ratificar, instaurar o redefinir derechos y sostener experiencias plurales que rearticulen las diferencias, sin subsumirlas en una unidad totalizadora; en definitiva un nuevo modo de institución.

En este sentido, cada estrategia supone una concepción de la política, entendiéndola por tal la capacidad de intervenir sobre el orden social (Lefort, 2004). Uno de los propósitos de la intervención política puede ser meramente cuestionar ese orden social vigente en un sentido destituyente, en ese caso se trataría de una elección autónoma por parte de las organizaciones. Otro puede tener un estatuto destituyente e instituyente, bajo la forma de una nueva propuesta de institucionalización. Para Rancière la posibilidad de esta formulación depende

del cuestionamiento de las dicotomías mediante la acción política que “altera la distribución de términos y lugares” (2006: 86). Como corolario de la elección de una actitud destituyente o una instituyente se deriva la posibilidad de alianzas y confrontaciones.

Ahora bien, toda práctica política se enlaza a un horizonte de expectativas, aquella “línea tras de la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar” (Koselleck, 1993: 340). Por ello, la definición de un horizonte de expectativas es una tarea fundamental que las organizaciones deben asumir para fortalecer su pertenencia y sostener una intervención política de corte contencioso-disruptivo. En este marco, es posible inscribir ese horizonte en una conceptualización de cambio social, orientadora a la vez de la práctica organizacional.

La trayectoria de las organizaciones de desocupados y la configuración del espacio piquetero

Las organizaciones de desocupados, sin dudas, tuvieron un rol significativo en el ciclo de movilización que se extendió entre 1996 y 2003. ¿Cómo se movilizaron estas organizaciones? ¿Cuáles fueron las características que asumió dicho ciclo de movilización? Y ¿qué impacto tuvieron para el régimen político?

Entre 1999 y 2000, las organizaciones de desocupados se habían erigido como interlocutores válidos frente al gobierno nacional y dinamizadores del ciclo de movilización. A partir de 2001, se consolidó una trilogía que articulaba: una modalidad de intervención en el espacio público –corte de rutas y en los accesos a las grandes ciudades–, la apropiación, aunque desigual, de la

identidad piquetera y la formulación de las demandas en un lenguaje de derechos –principalmente la de trabajo–. En este escenario, el espacio piquetero había intentado constituir una instancia de articulación y coordinación, que potenciara su capacidad de presión y negociación. La expresión más significativa de estos intentos fueron las Asambleas Nacionales Piqueteras, realizadas en julio y septiembre de 2001. Allí, sin embargo, se hizo evidente el estatuto irreconciliable que tenían las diferencias ideológicas y estratégicas de las organizaciones. Entre fines de 2001 y principio de 2002, se consolidaron dos tendencias: 1) eje matancero, dispuesto a desmovilizar si eso implicaba mejorar su capacidad de negociación por planes sociales y 2) Bloque Piquetero Nacional y organizaciones afines, que profundizaron la estrategia de movilización y confrontación.

La ruptura del espacio se hizo evidente en ocasión de la Masacre del Puente Pueyrredón, cuando el gobierno provisional de Eduardo Duhalde instruyó a la Policía de la provincia de Buenos Aires a despejar un corte en los accesos a la Capital Federal (MTD Aníbal Verón, 2003). Como consecuencia de la represión, murieron dos militantes del MTD Aníbal Verón, que coordinaba planes de lucha con el Bloque Piquetero. Las declaraciones de Luis D’Elía, uno de los dirigentes del eje matancero, reafirmando la versión oficial del enfrentamiento entre grupos piqueteros quebró la frágil relación entre ambos alineamientos.

A propósito de la contienda electoral, entre fines de 2002 y principio de 2003 se produjeron algunos reposicionamientos en el alineamiento que había mantenido la estrategia de movilización: el MTD Aníbal Verón,

Barrios de Pie y el MTR promovían una postura abstencionista o de boicot; el Polo Obrero, el MST y el MTL convocaron a integrar las listas de sus respectivos partidos políticos. De esta manera, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 el espacio piquetero ya se encontraba fragmentado.

Si hasta mediados de 2003 puede pensarse en un espacio de experiencias piquetero, la asunción de Kirchner contribuyó a trastocar la dinámica que había tenido hasta entonces. El nuevo marco político planteó un desafío a las organizaciones piqueteras, en tanto debieron redefinir sus estrategias y posiciones políticas en un contexto de reflujó de la movilización. Así se abrieron nuevas tendencias y discusiones alrededor de ejes tales como la dinámica interna, las modalidades de construcción política y las relaciones con el régimen político. Pero, fundamentalmente, la dimensión que sufrió una transformación significativa fue la del horizonte de expectativa.

¿Qué hacer? La discusión de los partidos de izquierda frente al creciente protagonismo de las organizaciones de desocupados

La constitución de Barrios de Pie fue resultado de la decisión de la Corriente Nacional Patria Libre, que junto con otros partidos participó de un debate en torno a tres ejes: el desocupado como sujeto histórico de vanguardia, modalidad de organización y planes sociales.

Respecto del primero, hasta 1999, la discusión había oscilado entre dos consideraciones: o eran un ejército de reserva o lumpen proletariado. Sin embargo, cuando la desocupación adquirió un carácter estructural y el

proceso de movilización piquetero fue evidente, los partidos flexibilizaron su posición inicial. En el caso de Barrios de Pie esto se evidenció en su acercamiento a CTA.

Sobre el eje de la modalidad de organización, hubo dos posturas. Por un lado, los partidos trotskistas (Partido Obrero y MST) promovían la creación de organizaciones de tipo clasista; bajo esta lógica, renegaban de establecer alianzas con sectores de la pequeña burguesía o de la socialdemocracia como expresión política. Por otro lado, el Partido Comunista y Patria Libre se inclinaban por la constitución de organizaciones con alianzas policlasistas, donde pudieran contenerse a sectores obreros y de las clases medias.

El último eje giró alrededor de los planes sociales. En general, los partidos coincidían en caracterizar a los planes sociales como paliativos asistencialistas que no resolvían el problema de la desocupación. Por el contrario, operaban negativamente sobre los trabajadores ocupados, disminuyendo el piso mínimo de los salarios o deteriorando las condiciones de trabajo. Esta posición fue revertida, principalmente, por la presión de las bases de las organizaciones a partir de la agudización de la crisis durante 2001.

La integración a CTA y los primeros intentos de organización territorial

En 1999 Patria Libre se integró a la CTA. En su 3º Congreso Nacional, en junio de 2000, Patria Libre ratificó su estrategia:

...gestar un Frente Popular que cobije en sus filas a todos aquellos que se oponen a este modelo; uniéndolos con la mayor amplitud tras las banderas de un Nuevo Proyecto Nacional que saque al país de su

frustración, que le permita volver a ser soberano y justo, que promueva y permita una democracia participativa real, donde ya no tengan lugar ni la impunidad ni la represión, donde tengamos las mismas oportunidades y derechos. Una Patria para todos.

En las resoluciones de ese mismo Congreso, Patria Libre proponía:

...que la CGT de Hugo Moyano, la CTA y todas las organizaciones populares llevemos adelante un plan de lucha hasta que el gobierno nacional y los provinciales den marcha atrás con las medidas y leyes que afectan los intereses de la nación y de la mayoría de sus habitantes. Apoyar la iniciativa popular por el empleo y la formación lanzada por la CTA, y participar activamente en la recolección de firmas y la marcha nacional de julio. Trabajar consecuentemente por el fortalecimiento del Frente de la Resistencia y por la unidad de todas las fuerzas de izquierda, nacionales y populares.

En ese Congreso, Jorge Ceballos dirigente nacional de la recientemente constituida CTA de los Barrios, reivindicó los cortes de ruta como modalidad legítima de protestar y convocó a organizar los barrios. En el momento fundacional, Patria Libre contaba con una estructura nacional de militantes universitarios nucleados en la agrupación Venceremos, que le permitió organizar los primeros trabajos territoriales en el marco de las Jornadas de Jóvenes Solidarios.

De CTA de los Barrios a Barrios de Pie

La permanencia en CTA era compleja debido que implicaba participar también de la FTV, como referente del sector territorial. En este marco, en 2001, Patria Libre definió la conformación de una tendencia propia, a la que primero llamó CTA de los

Barrios y luego Agrupación 1° de Mayo. Esta estrategia fue eficaz en el momento inicial de la organización, dado el margen de autonomía que CTA le otorgaba a cada una. Rauber advierte que pese a la inicial integración de CTA de los Barrios a la FTV esto “no evidenció nunca una real convergencia en la metodología de construcción y crecimiento. Acaso donde ello era más visible era en las consideraciones del desde dónde construir, con quiénes y cómo” (2002: 12. Cursivas en el original).

Lo cierto es que las diferencias políticas con FTV y, especialmente con D'Elía provocaron que la crisis interna se agudizara. Luego de esta ruptura, CTA de los Barrios adoptó el nombre de Barrios de Pie. En junio de 2002, difundió el comunicado “Barrios de Pie se desvincula de la FTV pero continúa en la CTA”:

...la decisión de no aceptar compartir el mismo ámbito con quien se ha convertido en un delegado de Duhalde dentro del movimiento de desocupados. Para mantener bien alto las banderas democráticas y opositoras que levanta la Central de Trabajadores Argentinos, el Movimiento Barrios de Pie ha decidido desvincularse de la Federación de Tierra y Vivienda de la que formaba parte. Sin dejar de pertenecer a la CTA, nuestra Central, decidimos diferenciarnos claramente de quienes desprestigian sus banderas. (Declaración de la Mesa Nacional del Movimiento Barrios de Pie. Negritas en el original)

¿Podría pensarse que esta ruptura implicaba que Barrios de Pie se pronunciara a favor de la autonomía del espacio piquetero, donde la relación con el gobierno y el resto de los actores del régimen político estuviera signada por la confrontación absoluta y no tuviera lugar la negociación y los acuerdos parciales? En parte si, dado que el

Movimiento caracterizaba al gobierno nacional como represivo e ilegítimo. En este sentido, promovía la confrontación y repudiaba cualquier tipo de convocatoria a elecciones y participación en el sistema político.

La constitución de Barrios de Pie y la ruptura con CTA

Barrios de Pie realizó su 1° Encuentro Nacional en marzo de 2002. Entre sus resoluciones, definió la convocatoria a un plan de lucha nacional, reafirmando la estrategia de confrontación. A lo largo de ese mismo año, mantuvo una estrategia de acercamiento al Bloque Piquetero Nacional y de confrontación con la FTV. Las disputas y tensiones entre ambas organizaciones perjudicaron la relación entre CTA y Patria Libre. En octubre de ese mismo año, en su 2° Encuentro Nacional Barrios de Pie cuestionó que la CTA tuviera una sola organización territorial. Esta crítica advertía sobre el posible distanciamiento del espacio. La ruptura se concretó en diciembre de ese mismo año en el marco del 6° Congreso Nacional de Delegados de CTA (Armellino, 2008). El Congreso tenía dos ejes: cómo enfrentar las elecciones presidenciales de 2003 y la representación de la organización territorial. Sobre este último punto, se manifestaron dos posiciones. Por su parte, la FTV proponía ser la única expresión territorial, mientras que Patria Libre ratificaba su pertenencia a CTA, pero no a la FTV. La votación favoreció a la FTV, dejando en claro que esta era “la única expresión barrial” de la CTA, sugiriéndose a las demás organizaciones que adhirieran a ella (Armellino, 2008). Esta sugerencia fue el detonante para que Barrios de Pie abandonara la CTA y decidiera la construcción de un espacio propio. En el mediano plazo, el saldo

resultó positivo si se tiene en cuenta el crecimiento notable que tuvo.

Este proceso de constitución y consolidación de Barrios de Pie coincidió con lo que el Movimiento ha definido como la “etapa piquetera”, y que considero que puede analizarse desde la perspectiva de la autonomía de las organizaciones.

La posición autónoma

La etapa piquetera es como el Movimiento ha denominado al momento expansivo y de consolidación de su trayectoria. La premisa es que en esta etapa se produjo un doble proceso. Por un lado, Barrios de Pie se constituyó como organización, reivindicó la identidad piquetera y se apropió de una modalidad de confrontación, como el corte de ruta. Por otro lado, el horizonte que acompañó este proceso se sintetizaba en la decisión de repetir otro Argentinazo.

¿Qué características adoptó la dimensión de la organización en relación con su identidad, espacios de socialización y proyectos, así como respecto de su construcción política en torno a la estrategia de intervención en el espacio público y en su vínculo con el régimen político? Entre 2002 y mediados de 2003, el Movimiento organizó la campaña “El hambre no puede esperar”, cuyo propósito era resolver la crisis alimentaria en el marco de una profunda debacle económica. Así, se priorizó la expansión del trabajo territorial, especialmente con el incremento de centros comunitarios, donde funcionaban comedores y copas de leche. El sostenimiento de estos proyectos era posible por la recepción de planes sociales y subsidios estatales. Al respecto, inicialmente Patria Libre, y en consecuencia Barrios de Pie, tuvo una posición de rechazo; sin embargo,

ante la magnitud de la crisis y la presión de las bases no sostuvo una postura ideológica taxativa y aceptó la recepción y gestión de los planes sociales. Para Barrios de Pie esta estrategia de confrontación y de construcción territorial fue exitosa, en tanto propició la consolidación de un frente de masas importante en lo cuantitativo y con una significativa presencia pública.

En paralelo al sostenimiento de la estrategia de movilización, el Movimiento rechazó cualquier intento de recomposición institucional. En este sentido, ¿qué tipo de estrategia tuvo la organización en relación con el régimen político? ¿Qué tipo de acuerdo era posible? Si bien Barrios de Pie identificaba entre sus antagonistas a los partidos políticos y grupos empresariales, el principal era el gobierno nacional. Contra él se dirigía gran parte de las confrontaciones callejeras; Duhalde era visto como el responsable de la situación vivida. El cuestionamiento central apuntaba a las alianzas que el gobierno sostenía con las clases dominantes, su relación con el FMI y a la instalación de un modelo económico, sustentado sobre una fuerte asimetría interclasista. Esta lectura no tenía como fundamento un Estado ausente, sino, por el contrario, al servicio de los sectores económicamente dominantes. Esta percepción del sistema político legitimó el alto nivel de confrontación y el carácter sumamente disruptivo de los formatos empleados, entre ellos los cortes totales a las rutas y a los accesos de las principales ciudades y bloqueos a los hipermercados.

En pos del objetivo de enfrentamiento con el gobierno ¿cómo se definieron los potenciales aliados? Pues bien aquellos que estuvieran

dispuestos a agudizar la confrontación y oposición. En este marco, estrechó sus vínculos con el Bloque Piquetero Nacional. Sin embargo por sus diferentes tradiciones y adscripciones ideológicas sólo pudieron coordinar planes de lucha, sin consolidar un espacio de articulación y de definición de una estrategia política común como un frente partidario como pretendían los partidos trotskistas. Lo cierto es que la potencialidad de estos vínculos era reducida, en tanto el punto de unión se asentaba sobre una lectura común respecto de la coyuntura y de la caracterización del resto de los actores involucrados, sin que esto propiciara acuerdos programáticos, o, una nueva institucionalidad. Al emerger los primeros desacuerdos en torno a la dinámica política se produjo una discusión que puso en riesgo su continuidad como espacio de coordinación.

En este marco de confrontación absoluta, el Movimiento desistió de participar en instancias estatales. Al respecto hubo dos ejemplos: los Consejos Consultivos y las elecciones. Los primeros eran un espacio institucional creado con el fin de masificar la asistencia social y facilitar la participación de las organizaciones para discutir la administración y distribución de los planes sociales. Barrios de Pie decidió no involucrarse dado que participaban también punteros del PJ, fomentando, de acuerdo a la evaluación de la organización, prácticas clientelares (Burkart, et. al., 2008). Por el contrario, su reclamo apuntaba al control directo sobre la distribución y gestión de los planes, rechazando cualquier posibilidad de institucionalización.

Acerca de su posicionamiento frente a las elecciones nacionales de

2003 –y trayendo a colación lo mencionado acerca que el Movimiento se proponía construir otro Argentinazo–, sostenía que eran una trampa, cuyo propósito era diluir la situación de movilización y conflictividad. Por esto, rechazó la propuesta de confluir en un frente electoral constituido por organizaciones de desocupados e impulsó la “Contracampaña en contra de la farsa electoral”, que consistía en la realización de actos en las principales plazas del país y el reparto de votos con la consigna “Que se vayan todos”, llamando a boicotear los comicios.

Lo cierto es que pese los esfuerzos, los resultados de la elección no fueron los esperados por Patria Libre. Pese a vaticinar “tiempos de lucha”, la posición de Patria Libre y Barrios de Pie cambió radicalmente en los meses posteriores a la asunción de Kirchner.

¿A qué respondió este cambio de estrategia? ¿Cómo fue esta transición? Y ¿cómo impactó en la estrategia del Movimiento y en sus vínculos con otras organizaciones piqueteras? Este período implicó la transición de la etapa piquetera –principalmente de confrontación y movilización– a la de institucionalización del reclamo, donde se modificaron, como veremos más adelante, tanto sus modos de canalización como su formulación. Al respecto cabe preguntarse si ¿se trató sólo de una forma de denominación o por el contrario expresó diferencias sustanciales respecto de la trayectoria del Movimiento? En principio considero que esa transición excedió el plano de la denominación, marcando una ruptura decisiva en relación al horizonte de expectativas, con significativas consecuencias para el campo de experiencias. Esto puede percibirse en dos dimensiones: en la constitución de

las áreas de trabajo y en la relación con el régimen político.

El giro heterónimo

En el ciclo abierto pos asunción de Kirchner, Barrios de Pie evaluó que las condiciones políticas habían cambiado, que la “vieja política” se había agotado y que se había quebrado la alianza entre el sector concentrado de la economía y la coalición gobernante. Esto era evaluado como un punto de inflexión que abría oportunidades políticas favorables para el accionar del Movimiento. De alguna manera, se quebró la visión monolítica del Estado, habilitándose la posibilidad de la ampliación de las experiencias posibles.

En este marco, se definió que la estrategia de movilización debía ser acompañada por una de integración a la coalición de gobierno. Este reposicionamiento quedó expresado públicamente en la convocatoria al 3º Encuentro Nacional realizado en noviembre de 2004, con la consigna “Participación popular para una Argentina que cambia”. Con el tiempo, se consolidó la opción que postulaba la intervención estatal y electoral en desmedro de la movilización, o incluso, de la presencia en las calles.

En esta misma dirección, desde 2004 el Movimiento participó el proceso de la transversalidad, que se cristalizó en varios frentes interorganizacionales, como el Frente de Organizaciones Populares o el Frente Patria para Todos. Si bien estas experiencias exceden las posibilidades de este artículo, quisiera aclarar que las dificultades de consolidación de estos frentes fueron en principio dos. Una vinculada a las posibilidades de reinventar una experiencia movimientista en la contemporaneidad y otra respecto de la discusión en torno

a la identidad peronista (Pérez y Natalucci, en prensa). Relacionada con esta segunda dificultad, Barrios de Pie, junto a Patria Libre y a otras organizaciones, decidieron la constitución de otro frente. En este marco, en abril de 2006 se produjo el lanzamiento de Libres del Sur, junto con el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre y la Agrupación Envar el Kadri. La pretensión del espacio era nuclear a otras organizaciones kirchneristas, que renegaran de mantener vínculos con el Partido Justicialista. Como indica su nombre, se proponían reivindicar con él diferentes experiencias latinoamericanas apelando a la capacidad de la autodeterminación de las naciones del sur. Esta “denominación expresaba el propósito de las organizaciones de fortalecer los lazos con los países latinoamericanos, especialmente con el proceso venezolano con el cual tenían vínculos previos por haber participado en los sucesivos Foros Mundiales realizados en la ciudad de Porto Alegre en Brasil” (Pérez y Natalucci, en prensa). La perspectiva era la generación de un movimiento político que pudiera, por un lado, reunir a los funcionarios de los cargos ejecutivos de los diferentes niveles gubernamentales y, por otro, constituirse en una herramienta electoral por fuera del PJ.

Antes de analizar esta estrategia, es interesante hacer algunos señalamientos acerca de las áreas de trabajo, en tanto su constitución marcó un punto de inflexión en la transición de la etapa piquetera y la de institucionalización del reclamo.

La nueva política territorial

En 2005, se constituyeron las áreas de trabajo: Salud, Género, Cultura

y Comunicación, Educación Popular, Microemprendimientos y Gestión, Juventud y Derechos Populares. Cada una funcionaba en los Centros Comunitarios y se integraba por dos coordinadores, promotores, militantes y vecinos. La coordinación era compartida entre un profesional de clase media y un militante barrial, de modo de formar una dupla que conjugara el conocimiento teórico con el práctico, al mismo tiempo que forjar un vínculo entre ambos sectores sociales.

Cada localidad tenía la autonomía necesaria para llevar adelante las actividades y definir sus prioridades; en este sentido no se elaboraron directivas nacionales. La articulación entre cada una surgió en las reuniones que mantenían periódicamente los coordinadores. Respecto de su funcionamiento, el Movimiento se dio una discusión en torno a cómo expandir el trabajo territorial, sin caer en posiciones asistencialistas ni paternalistas. Una de las estrategias fue la creación de la escuela de Promotores Comunitarios Ramón Carrillo. Generalmente, los promotores eran vecinos de los Centros Comunitarios, de modo de generar una identificación con los participantes de los talleres, que operaba como mediador entre el área y el barrio.

En este marco, las áreas tuvieron una múltiple funcionalidad. Primero, permitieron la convocatoria a otros sectores sociales y la ampliación del trabajo territorial realizado. Segundo, apuntaron a la formulación de los reclamos en un lenguaje de derechos. También, le permitieron contar con un nivel de representación que lo legitimara como sujeto político. Por último, favorecieron la etapa de institucionalización y la posibilidad de entablar relaciones con las diferentes

esferas gubernamentales. Como corolario de estos desplazamientos emergió una discusión en torno a lo “piquetero”, produciéndose una doble ampliación: de las actividades concretas y de los sujetos a interpelar (como las clases medias). Este hito aparejó repercusiones en la autodefinición identitaria, progresivamente se dejó de lado la identidad piquetera para adoptar una identidad social.

Redefiniciones de la estrategia de intervención política

La constitución de las áreas marcó una ruptura respecto del tipo de acción territorial del Movimiento; no obstante, el giro heterónimo encontró su punto máximo en el cambio radical de la estrategia de intervención en el régimen político. Para Barrios de Pie, el gobierno nacional se constituía sobre la base del enfrentamiento de sectores antagónicos por la conducción del Estado, en este sentido era un “Estado en disputa”. Esta percepción llevó a que en un principio el Movimiento mantuviera una posición expectante. El punto de inflexión se produjo en el momento de lanzamiento del plan Manos a la Obra, dado que el Movimiento lo interpretó, por un lado, como un cambio sustancial en la política social al atender un reclamo que había cobrado progresiva centralidad en el espacio piquetero: la constitución de cooperativas y microemprendimientos. Por otro lado, la convocatoria oficial a la participación activa de las organizaciones fue leída como apertura de oportunidades políticas.

Para el Movimiento este hecho significó un hito en su trayectoria, en consecuencia pasó de tener una posición expectante a adherir al kirchnerismo e integrarse a la coalición gobernante. Para Barrios de Pie, el gobierno implicaba una ruptura con los

anteriores, especialmente en relación a la política de derechos humanos, la posición frente a las corporaciones económicas y la convocatoria a las organizaciones. Inicialmente, este cambio de lectura sobre la coyuntura no fue acompañado por la desmovilización, participando esporádicamente de algunas protestas. A lo largo de 2004, el apoyo público del Movimiento al gobierno nacional fue incrementándose, y con ello se profundizó la estrategia de desmovilización, quedando reducida al reclamo a los “formadores de precios” y a las empresas transnacionales. Entre 2004 y 2005, el Movimiento organizó una serie de manifestaciones contra el ALCA, entre ellas participó de la marcha de cierre de la Cumbre de los Pueblos en noviembre de 2005. Asimismo, se encontró entre los convocantes cada vez que el presidente venezolano, Hugo Chávez, visitaba el país. En marzo de 2005, el MTD Evita, el Frente Transversal, Barrios de Pie, la Red Social Patriótica y el Movimiento Resistir y Vencer organizaron treinta escraches simultáneos a estaciones de servicio Shell, Esso y Repsol. El propósito no sólo era repudiar los aumentos de las petroleras, sino apoyar las gestiones presidenciales de control de precios, así como la participación en el mercado interno de la venezolana PDVSA.

¿Cómo repercutió este cambio de estrategia en las alianzas del Movimiento? ¿Se produjeron modificaciones en las modalidades de confrontación? A nivel nacional, el Movimiento por un lado tuvo un acercamiento a la FTV y con organizaciones vecinales o barriales y por otro, acrecentó su alejamiento del Bloque Piquetero. El desplazamiento del antagonista –esto es, del gobierno o el Estado a las empresas privadas– incidió en la adopción de otras

modalidades que contaran con mayor legitimidad social que el corte de ruta, por ese momento desprestigiado por la campaña mediática “anti-piquetera”. En definitiva, la resignificación de la estrategia de intervención pública implicó también una reformulación del sentido de la confrontación; es decir generando una oposición entre lo nacional/ latinoamericano y lo foráneo, cual reformulación de una vieja consigna del universo nacional y popular “Patria contra imperio” (Casullo, 2007). A los fines de este artículo, vale remarcar que la expectativa del Movimiento ya no se organizaba en términos de lograr la unidad con sectores parecidos, sino en poder articular políticas a partir de ciertos derechos.

En suma, las rupturas y continuidades en la dimensión organizacional y en la modalidad de construcción política transformaron la trayectoria de Barrios de Pie, mostrando un desplazamiento que puede leerse, desde mi perspectiva, en términos de la transición de una posición autónoma a otra heterónoma. ¿Qué impacto tuvo este proceso en la formulación del horizonte de expectativas “socialismo del siglo XXI”, qué rasgos asumió y cuáles fueron sus fundamentos?

Socialismo del siglo XXI: un nuevo horizonte de acción política

El horizonte de expectativas sufrió una delimitación en el sentido de precisarse en términos simbólicos, pero también respecto de la posibilidad de delinear líneas de acción y espacios de intervención. ¿Qué significa que la formulación de las expectativas sufrió una delimitación? En el momento formativo de Barrios de Pie la expectativa era sumamente ambiciosa: la modificación del sistema político y la recreación de una democracia

participativa, de un Estado con capacidad de intervención en el plano económico, la reconstrucción del movimiento revolucionario nacional, entendiéndolo por tal un proyecto nacional y popular, que sintetizara la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. A propósito de la emergencia de experiencias en otras regiones latinoamericanas, especialmente el proceso venezolano, la organización pudo delinear progresivamente una estrategia coherente con el proyecto deseado:

...Sin hablar de otro sistema ¿me entiendes? Sin llegar a hablar del socialismo, yo creo que en la democracia vos tenes instancias como para profundizar esta democracia, en un sentido más justo y más social. Por ejemplo, Chávez... él habla de eso del socialismo del siglo XXI. Podemos decir que la democracia te permite profundizar en un sentido de justicia social un montón de cosas... (Entrevista a la Co-coordinadora del Área de Educación de Barrios de Pie Córdoba, febrero de 2006)

Nosotros la evaluación que tenemos es que hay que apostar muy fuerte, todas las herramientas económicas... o sea lo del Mercosur por ejemplo que trascienda lo económico, que pueda formarse como un bloque político [...] Sí, porque es la posibilidad de sumar más independencia e ir alejándonos cada vez más de los yanquis. (Coordinadora Provincial del Área de Cultura, febrero de 2006)

¿Qué socialismo?

¿Cuál es la diferencia establecida entre el socialismo, a secas, y el socialismo del siglo XXI? Según el Movimiento, hay dos cuestiones que distinguen a uno de otro socialismo: la democracia participativa y la redistribución de la riqueza. En este sentido, no sería apropiado decir que el Movimiento resignificó radicalmente su

expectativa, sino que profundizó la originaria. Tanto para Patria Libre como para Barrios de Pie la democracia participativa propiciaría la reforma del sistema político pendiente desde la crisis de 2001. En cierto sentido, para el Movimiento se trataba de democratizar la toma de decisiones, instalar la posibilidad de remover a los representantes políticos e implementar referéndums vinculantes, como venían realizándose en la Venezuela chavista. En definitiva, el problema era la distribución de poder entre los grupos sociales. En otro sentido, esta reforma del régimen político necesariamente llevaba a pensar en la reconstrucción del Estado Nacional, donde uno de sus rasgos imprescindibles debía ser la participación popular. Por ello, no sólo se pensaba en la posibilidad de revocar mandatos o decisiones del Poder Ejecutivo, sino también en incorporarse como organización a la gestión del Estado y extralimitar la actividad ciudadana al momento electoral. Estas cuestiones reforzaron el giro heterónomo que dio la organización a posteriori de 2003, al permitir recrear no sólo sus concepciones de cambio social, expectativas a futuro, sino fundamentalmente su práctica e intervención política.

La segunda cuestión que diferencia al socialismo del socialismo del siglo XXI es la reivindicación de la redistribución de la riqueza. ¿Qué entendía el Movimiento por esta? Y ¿en qué se diferenciaba la propuesta de Barrios de Pie de otras organizaciones del espacio kirchnerista? Tal vez estas preguntas puedan responderse comprendiendo el proceso de los microemprendimientos, mencionados en una sección anterior. Para Barrios de Pie esta actividad fue importante en un marco de construcción territorial, donde la educación, la salud, la cultura y el

trabajo tenían el mismo orden de prioridad. A diferencia de otras organizaciones, no consideraba que su ocupación debía acotarse a la constitución de microemprendimientos y cooperativas, sino que la reivindicación de trabajo y el derecho a tener una actividad productiva que generara una remuneración, debía exceder la autogestión. En este sentido, Barrios de Pie no renunció a reclamos de política macroeconómica, promoviendo la economía social como solución al problema del trabajo, como sucedió, por ejemplo, con el Movimiento Evita (Natalucci, 2008a).

Como corolario de estas rupturas –la redefinición de la centralidad de la participación política, la ampliación de los espacios institucionales donde canalizar demandas y la redistribución de la riqueza– se produjo necesariamente una reformulación de su contenido. Lo que el Movimiento denominó la calidad de las demandas, no sólo se vinculaba con el modo de canalización, sino también con los términos en que se identifica y define el bien querido. En suma, la expectativa se organizó en torno a la redistribución de la riqueza y la profundización de la justicia social. El modo legitimado era la democratización de la toma de decisión, el acceso a lugares de representación y ejecución de políticas en el marco de la rearticulación del Estado Nacional. No está de más insistir con que la diferencia es que en este nuevo marco el Movimiento consideraba que su margen de acción se expandía y que su rol cobraba un protagonismo hasta entonces inédito: había llegado el momento de proponer antes que cuestionar; en los términos conceptuales planteados en este artículo de instituir y no sólo de destituir.

Para resumir, se reorganizó el campo de acción del Movimiento a partir de la redefinición de la estrategia política, la reformulación de las demandas y precisión de las expectativas. En este sentido, Barrios de Pie prácticamente dejó de lado la estrategia de confrontación. Al respecto, queda pendiente la pregunta si esa decisión no fue apresurada y en qué medida perjudicó su visibilidad pública. Más allá de estos interrogantes, lo cierto es que a la trilogía piquetera sobrevino otra donde la introducción de la democracia fue sustancial en el sentido que abrió un abanico de nuevos espacios y estrategias de intervención.

¿Qué democracia participativa?

A tenor de lo dicho, la democracia participativa fue sin dudas constitutiva en la reformulación del horizonte de expectativa. En este nuevo marco, Barrios de Pie delineó una estrategia bifronte: 1) incorporación a la coalición de gobierno y gestión de áreas gubernamentales y 2) conformación de un frente político y presentación a elecciones.

La primera se concentró en el Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social. La intención del Movimiento era facilitar su incorporación en instancias gubernamentales y, a la vez, relacionarlas con los proyectos implementados en las áreas de trabajo. Esta decisión marcó una ruptura significativa en un doble sentido. Por un lado, permitió repensar la relación que el Movimiento mantenía con el régimen político, con partidos políticos como el PJ y revertir su posicionamiento inicial respecto de no involucrarse en los Consejos Consultivos. Por otro lado, el Movimiento reflexionó acerca de la posibilidad de generar políticas de Estado que pudieran implementar

cambios de fondo, específicamente los relacionados con la redistribución de la riqueza. Al respecto de estas dos cuestiones, es interesante el planteo de Perelmiter (2009) respecto de la participación de militantes de Barrios de Pie en el mencionado programa. La investigadora sostiene que hay una doble narrativa con la cual los militantes fundamentan su involucramiento. Por un lado, “en continuidad con el trabajo social territorial a través del cual las organizaciones sociales de desocupados pobres constituyeron una red de resolución de problemas en los barrios” (2009: 6). Por otro lado, la organización se convierte en un puente entre el Estado y la sociedad “disolviendo las distancias entre la representación institucional y la representación sectorial” (2009: 8). La innovación en el caso de Barrios de Pie no radica en esta idea de puente, que por otra parte es propia de la tradición nacional popular. En todo caso, lo novedoso radica en la apertura de la organización a involucrarse en la estructura del Estado, a la que hasta entonces se había mostrado reticente. Sobre esto último, vale recordar que para Barrios de Pie el “Estado estaba en disputa” con otros sectores. Según Cortés, la organización mencionaba tres temas que hacían visible esa situación: derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia y la relación con los organismos multilaterales de crédito. Como corolario de esa percepción, la posibilidad de involucrarse e intervenir en la estructura estatal implicaba direccionar la tendencia en un sentido favorable para los sectores populares.

La segunda estrategia se inscribió en el replanteo de las organizaciones acerca de su participación en la coalición de gobierno y la eventual presentación en los comicios, con las consecuentes

alianzas partidarias o la constitución de frentes. Hasta ese momento, Barrios de Pie no se había involucrado en los comicios, aunque Patria Libre tuviera otra posición al respecto.

Una vez decidida la presentación en la contienda electoral, el Movimiento elaboró una estrategia, que implicaba al mismo tiempo la disolución de Patria Libre y la conformación de un espacio común con organizaciones filo kirchneristas. En abril de 2006, como mencioné, se produjo la constitución de Libres del Sur. En el acto fundacional “Encuentro por la Patria Grande”, Ceballos expuso los pilares del frente político: 1) ratificó la necesidad de construir poder popular entendiendo por tal que las organizaciones fueran capaces de gestionar no sólo recursos sino elaborar políticas de Estado; 2) definió a las empresas multinacionales como el antagonista; y aunque no rechazó la posibilidad de inversiones, sí reivindicó como primer derecho la dignidad de los pueblos; 3) convocó a la unidad latinoamericana y apeló al fortalecimiento del Mercosur, rechazó el ALCA y los tratados bilaterales con Estados Unidos y por último 4) explicitó su apoyo al gobierno nacional.

La condición de posibilidad de emergencia de este nuevo espacio radicó en un discurso que reorganizó su identidad, en términos de reconocerse una organización social y política, y no una piquetera o una social. En esta clave, el “nuevo movimiento político y social”, como fue definido por el Movimiento, marcó un nuevo hito en su trayectoria. La conformación de Libres del Sur reforzó la estrategia en pos de un proyecto político nacional, con capacidad de intervención en diferentes poderes del Estado –como el Poder Legislativo– y en las diferentes instancias gubernamentales –municipal,

provincial y nacional– (Natalucci, 2008b; Perelmiter, 2009). El giro heterónimo estaba en curso.

Alianzas y el lugar de la organización

¿Cómo fueron pensadas las alianzas en este nuevo marco? ¿Cómo pensaba y en qué términos el lugar que le correspondía en esta nuevo espacio? Si hasta ese momento las alianzas eran consecuencia de coincidencias y coordinación de ciertas demandas, esto cambió sustancialmente con la conformación de Libres del Sur. Los acuerdos podrían sintetizarse en los siguientes: caracterización compartida de las oportunidades abiertas por la crisis de los neoliberalismos en la región, la posibilidad de unificar proyectos latinoamericanos, respecto de sus modalidades de organización y de construcción política, reticencias a entablar vínculos con el PJ, y por último, la construcción de alternativas partidarias por fuera de las estructuras tradicionales. De esta manera, podríamos decir que estos acuerdos, a diferencia de aquellos que sólo permitían coordinar planes de lucha, fueron de tipo programático, a partir de los cuales articulaban dos o más organizaciones que compartían criterios genéricos (Burkart, et. al., 2008), e incluso llegaban a acuerdos ideológicos.

Acerca de la segunda pregunta, es menester reiterar que el cambio de estrategia fue justificado por la modificación en las relaciones entre la clase dominante y el poder político, donde el Movimiento evaluó la emergencia de una “nueva política”. El lugar que se reservó fue el de unir “la política con el pueblo”. Si bien en las legislativas de 2007, la expectativa era participar en las listas del oficialista Frente para la Victoria; en el mediano plazo, el “nuevo Movimiento” se erigió como la herramienta política, a partir de

la cual las organizaciones podían impulsar los cambios requeridos.

Estas redefiniciones propiciaron que el Movimiento ampliara sus márgenes de acción y reorientara sus alianzas, y delineara los contornos del “socialismo del siglo XXI”. Sin dudas, la introducción de la democracia como uno de los pilares de aquella expectativa favoreció la posibilidad de una intervención heterónoma del Movimiento en el campo político.

Conclusiones y Perspectivas

La etapa que Barrios de Pie denominó piquetera es entendida en los términos de este artículo como una posición autónoma, en tanto la expectativa giraba en torno a poder consolidar una estrategia de movilización y de confrontación, donde se resaltaba el carácter destituyente de la política. A posterior de 2003, esa posición sufrió un desplazamiento hasta definir una estrategia heterónoma. ¿Cómo fue posible que Barrios de Pie haya podido cambiar de una posición a otra? Y ¿cuáles fueron las condiciones y factores coyunturales que precipitaron este desplazamiento? Esta explicación no puede ser unívoca, sino que hay que considerar por lo menos dos cuestiones:

1. De todas las orgánicas de izquierda que discutían en 1999, qué hacer frente a la emergencia y protagonismo inesperado de las organizaciones de desocupados, esta fue la única que no mostraba un dogmatismo excesivo. Aunque en el momento de constitución y consolidación (2000-2003) tuvo una concepción monolítica del régimen político, descartando a priori cualquier tipo de intervención que se extralimitara a la confrontación, no sostuvo una postura taxativa de rechazo a la democracia, ni la catalogó simplemente

de burguesa, como justificación de su estrategia.

2. La reformulación del horizonte de expectativas con una perspectiva latinoamericanista en términos del “socialismo del siglo XXI”, especificando entre sus fundamentos principales la redistribución de la riqueza y la democracia participativa.

Entre diciembre de 2001 y mediados de 2003, Barrios de Pie aspiraba a profundizar en el marco de una movilización social generalizada el escenario pre-revolucionario abierto luego de los acontecimientos de diciembre. Para el Movimiento las “condiciones” estaban dadas y en consecuencia su propósito era desgastar al gobierno en una clave netamente destituyente. La asunción de Kirchner y la lectura sobre nuevas oportunidades políticas marcaron un punto de inflexión respecto de su dinámica interna, la modalidad de construcción política y la redefinición de su expectativa de futuro.

Concretamente, Barrios de Pie estimó que la ruptura de la alianza que en los últimos 30 años habían sostenido los gobiernos con los sectores concentrados de la economía, junto con un panorama regional permeable para el establecimiento de relaciones no imperialistas, generaba un marco propicio para la modificación de un régimen social altamente excluyente. Por ello, rectificó su estrategia, disolvió su estructura, se fusionó con otras organizaciones a fin de potenciar su campo de intervención y redefinió su horizonte de expectativas en torno al “socialismo del siglo XXI”. Para el Movimiento no era ya posible pensar en la Revolución como apropiación de los medios de producción, sino que cualquier transformación social debía estar inescindible de una

democratización en torno a la manera en que diferentes sectores sociales intervienen en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas de Estado.

En suma, aquello susceptible de transformación se reorientó a la intervención en el área económica y a la democratización de las formas políticas. Esa expectativa parte del supuesto que no hay que generar condiciones especiales, sino que es posible intervenir sobre el campo político tal y como está configurado en el presente. El rol del Movimiento en este nuevo espacio no podía ser de oposición radical, de auto exclusión del juego político como hasta 2003; sino que debía constituirse en intermediario, donde pudiera unir la “política con el Pueblo”.

La introducción de la dimensión democrática como expectativa de Barrios de Pie, y en general de las organizaciones de la izquierda nacional, es un elemento novedoso que amerita una reflexión al respecto también en términos de su potencialidad. Sobre todo, en virtud de los desplazamientos que propició ha generado una discusión en torno a la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales respecto del Estado.

Para concluir quisiera mencionar que en los últimos meses se produjo un cambio importante en la trayectoria del Movimiento, en un sentido adverso al que había mostrado entre 2003 y mediados de 2008. Sus fuertes cuestionamientos a la recomposición del Partido Justicialista, la decisión de Néstor Kirchner de presidirlo y de relegar los intentos que se habían ensayado en torno a la Transversalidad incidieron para que los dirigentes de Barrios de Pie y Libres del Sur renunciaran a sus cargos en el Poder Ejecutivo –no así a sus escaños– y que

ambas organizaciones renegaran de su pertenencia al espacio kirchnerista. Es muy reciente este cambio como para hacer afirmaciones concluyentes al respecto, más bien abre una nueva pregunta: ¿esta decisión implica de alguna manera la readopción de una estrategia autónoma? Si bien esto es dudoso dado que los desplazamientos ocurridos dejan marcas en las trayectorias organizacionales, lo cierto es que el desafío que tienen por delante las organizaciones en términos de poder generar una nueva institucionalización no es menor y parece estar atravesado por una discusión aún pendiente de saldar: el lugar otorgado al Estado en la intervención política. Ahora bien, lo que quisiera que quedara claro es que las respuestas que las organizaciones ensayan ante los desafíos que se enfrentan no se condicen necesariamente con una racionalidad económica fundamentada en el cálculo de costos-beneficios, sino que las opciones que practican encuentran explicaciones en sus tradiciones y en las elecciones políticas que realizan. Por ello, considero que la incorporación de la pregunta por la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales a este debate puede enriquecerlo, sorteando el falso eje entre oposición radical o cooptación.

Bibliográficas

Altamira Jorge (2002), *El Argentinazo*, Buenos Aires, Rumbos.

Armellino Martín (2008), “Algunas diferencias al interior del campo popular: la experiencia reciente de la CTA y la FTV” en Pereyra Sebastián, Pérez Germán y Schuster Federico (Ed.) *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001*, La Plata, Al Margen.

Auyero Javier (2002), *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la*

- Argentina democrática, Buenos Aires, EUDEBA.
- Burkart Mara, Cobe Lorena, Fornillo, Bruno y Zipcioglu, Patricia (2008), “Las estrategias políticas de las organizaciones de desocupados a partir de la crisis de 2001” en Pereyra Sebastián, Pérez Germán y Schuster Federico (Ed.). La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001, La Plata, Al Margen.
- Casullo Nicolás (2007), Las Cuestiones, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Cortés Martín (2009), “Movimientos sociales y Estado en el kirchnerismo. Tradición, autonomía y conflicto”, ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales.
- Delamata Gabriela (2004), Los Barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires, Buenos Aires, EUDEBA.
- Gargarella Roberto (2006), Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- GEPSAC (2006), Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, IIGG Documentos de Trabajo, N° 48. Disponible en: <<http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/DT/DT48.pdf>>
- Koselleck Reinhart (2001), Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós.
- Koselleck Reinhart (1993), Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós.
- Lefort Claude (2004), La incertidumbre democrática, Barcelona, Anthopos.
- Lefort Claude (1990), La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión.
- MTD Aníbal Verón (2003), Darío y Maxi Dignidad Piquetera. El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, Buenos Aires, Ediciones 26 de junio.
- Natalucci Ana (2008a), “De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita” en Pereyra Sebastián, Pérez Germán y Schuster Federico (Ed.). La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001, La Plata, Al Margen.
- Schuster Federico (2008b), “Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006”, Tesis de Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Schuster Federico (2007), “La unidad de los que luchan”: las Asambleas Nacionales Piqueteras (2001)” en Revista Question, N° 16, Disponible en: <www.perio.unlp.edu.ar/question>.
- Palti Elías (2007), El tiempo de la política, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Perelmiter Luisina (2009), “Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión de políticas sociales Argentina (2003-2008)”, ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales.
- Pereyra Sebastián, Pérez Germán y Schuster Federico (Ed.) (en prensa), La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001, La Plata, Al Margen.
- Pérez Germán (2007), “Participación, cambio social y régimen político. Apuntes sobre dos ciclos de movilización” en Rinesi Eduardo, Nardacchione Gabriel y Vommaro

Gabriel (Comp.) Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente, Buenos Aires, Prometeo-UNGS.

cambio social y Natalucci Ana, “Reflexiones en torno a la matriz movimientista de acción colectiva en Argentina: la experiencia del espacio militante kirchnerista”, en Revista América Latina Hoy, Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España. Aceptado para el N° 54 (marzo-abril de 2010).

Rancière Jacques (2006), El odio a la democracia. Buenos Aires, Amorrortu.

Rauber, Isabel, (2002), Piquetes y piqueteros en la argentina de la crisis. Cerrar el paso abriendo caminos. Disponible en: <<http://www.rebellion.org/docs/4859.pdf>>.

Svampa Maristella (2005), La sociedad excluyente, Buenos Aires, Taurus.

Svampa Maristella y Pandolfi Claudio (2004), “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina”. Disponible en:

<<http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo16.pdf>>.

Svampa Maristella y Pereyra Sebastián (2003), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos.

Tarrow Sidney (1997), El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza.

Fuentes primarias:

Declaraciones

Resoluciones del 3° Congreso Nacional de Patria Libre. Junio de 2000

Resoluciones del 1° Encuentro Nacional de Barrios de Pie. Marzo de 2002

“Barrios de Pie se desvincula de la FTV pero continúa en la CTA”, declaración

de la Mesa Nacional del Movimiento Barrios de Pie. Junio de 2002

Resoluciones del 3° Encuentro Nacional de Barrios de Pie. Noviembre de 2004

Resoluciones Encuentro por la Patria Grande. Abril de 2006

Discurso de Humberto Tumini en el lanzamiento de Libres del Sur. Abril, 2006. Publicaciones

Revista En Marcha.

Autor invitado

Sobre el concepto de masa marginal

*José Nun*⁷⁴

Resumen

En 1969 propuse el concepto de masa marginal en un artículo que escribí para la Revista Latinoamericana de Sociología y que generó abundantes controversias. Treinta años después, en 1999, rescaté y actualicé algunos aspectos de mis tesis de entonces en un trabajo que apareció en Desarrollo Económico. Al poco tiempo, este segundo texto fue traducido al inglés por Latin American Perspectives y al portugués por Novos Estudos CEBRAP y ha dado lugar a nuevos debates, especialmente en Brasil. A su modo, se reanuda de esta forma una discusión que, por motivos bastante diferentes, iniciara allí Fernando Henrique Cardoso a comienzos de los setenta.

Palabras claves: Masa marginal, exclusión social, modernidad, América Latina.

Summary

In 1969 I proposed the concept of “marginal mass” in an article for the Latin American Magazine of Sociology that generated lots of controversies. Thirty years later, in 1999, I rescued and updated some aspects of my thesis in a work that appeared at Economic Developing. Soon after, this second text was translated to english by Latin American Perspectives and to portuguese by Novos Estudos CEBRAP and has given place to new arguments, specially in Brazil. In this way, they started again a discusión that, by quite different reasons, initiated there Fernando Henrique Cardoso at the beginning of the seventith.

Keywords: marginal mass, social exclusion, modernity, Latin America.

⁷⁴ Abogado, Especialista en problemas de desarrollo económico, Facultad de Ciencias Económicas, y Diploma superior de estudios e investigaciones en Ciencia Política, Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Universidad de París. Investigador Superior, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET), y Director del Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Martín.

Introducción

El propósito de estas líneas es situar brevemente al lector en el clima teórico-ideológico en el cual surgió la noción de masa marginal (y el debate en su torno), dado que la distancia que hoy nos separa de esa época resulta mucho más que cronológica. Pese a ello, buena parte del argumento no ha perdido actualidad y, por eso, deseo indicar también la cercanía que existe entre los conceptos y las problemáticas de la marginalidad y de la exclusión social, originados respectivamente en América Latina y en Europa. Por último, me han parecido del caso un par de reflexiones tendientes a corregir el sesgo economicista que suele ser propio del planteo de estas cuestiones.

En las dos décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial el paradigma de la modernización se convirtió en uno de los puntos centrales de referencia del pensamiento social latinoamericano, sea que se estuviese a favor o en contra de sus postulados. Las diversas versiones de ese paradigma, que echó raíces muy profundas en los Estados Unidos, coincidían en identificar a este último país como la encarnación por excelencia de la sociedad moderna, esto es, como el punto de llegada de la historia -- la “primera nación nueva”, según el sugestivo título del libro que publicó Seymour M. Lipset en 1963. Y era por contraste con este punto de llegada, convenientemente estilizado y apologético, que se juzgaban las carencias y el carácter tradicional de los demás países. De acuerdo a una de las fórmulas que más circulaba en ese tiempo, esta interpretación de la modernidad se refractaba en lecturas necesariamente diversas conforme al horizonte particular de la disciplina que se ocupase de ella: para los

economistas, era sinónimo de un crecimiento sostenido del producto per capita; para los sociólogos, de la difusión de valores como la racionalidad, el universalismo, el desempeño, la secularización, etc.; y para los politólogos, de la efectiva institucionalización de una democracia representativa.

Claro que cada uno de estos fenómenos suponía también a los otros aunque fuera poco realista esperar que todos ocurriesen al mismo tiempo. En la visión más ortodoxa y extendida, el conjunto se organizaba según una secuencia cuyo disparador primordial era el crecimiento económico. En este sentido, para alcanzar a los países del primer mundo las naciones subdesarrolladas estaban llamadas a seguir una serie de etapas que esos países ya habían recorrido antes. A estos fines, el primer requisito era que se abriesen al comercio mundial, explotando los bienes primarios que se hallaran en mejores condiciones de producir. En esto, el teorema de las ventajas comparativas elaborado por David Ricardo en el siglo XIX se consideraba irrefutable y volvía lógico que los productores de tales bienes primarios se especializasen en exportar estas mercancías, mientras importaban las manufacturas fabricadas en el primer mundo, salvo aquellos bienes industriales de consumo que fuese más barato producir localmente. Sólo que, para ser efectiva, tal especialización exigía considerables inversiones en capital físico y en capital humano y esto planteaba un problema muy serio -- un “cuello de botella”, como era corriente decir en esos días. El economista Ragnar Nurkse sintetizó la dificultad apelando a lo que llamó el “círculo vicioso de la pobreza”. Sólo se puede invertir, afirmaba, aquello que se ahorra. Pero, por definición, un país

subdesarrollado tiene un ingreso per capita muy bajo y, por lo tanto, quienes lo reciben deben dedicarlo casi totalmente al consumo. El resultado es que poseen una bajísima capacidad de ahorro y, en consecuencia, les queda poco o nada para invertir. Si esto es así, sus niveles de producción y de ingresos seguirán siendo muy reducidos, persistirán tasas mínimas de ahorro y de inversión y la pobreza se perpetuará.

¿Cómo se podía romper este círculo vicioso? De tres maneras concurrentes: atrayendo inversiones extranjeras; obteniendo préstamos en el exterior; y/o recibiendo ayuda financiera y asistencia técnica tanto de otros gobiernos como de organismos internacionales. Era la principal estrategia que se desprendía del diagnóstico y se la juzgaba indispensable para sacar a los países subdesarrollados de su atraso. Más aun: tenía la gran ventaja de que, una vez establecido por ese camino un polo moderno de acumulación, sus efectos positivos empezaban a difundirse rápidamente, como si fueran una mancha de aceite. Se iría monetizando por completo la economía, se expandirían la educación y la movilidad social, se ampliarían las comunicaciones, circularía cada vez más la información y, en una palabra, se modernizarían la producción, el consumo y los valores. Aunque pudiesen surgir desajustes y contradicciones, lo fundamental era que el progreso liquidaría una a una las ataduras de la tradición y el país quedaría instalado en un generalizado proceso de cambio, que remataría en el establecimiento y consolidación de la democracia representativa.

En grados desde luego muy diversos, en los primeros años de la posguerra la experiencia

latinoamericana pareció responder a varias de esas previsiones. En efecto, a partir de la segunda mitad de los años 40 las tasas de crecimiento económico fueron en general elevadas; adquirieron fuerza según los lugares una serie de procesos de transformación agraria, de industrialización y de urbanización; hubo masivos movimientos de población del campo a la ciudad; bajaron los índices de mortalidad; se extendieron la educación y las comunicaciones; e inclusive se iniciaron en varios países campañas de incremento de la participación política, aunque casi siempre de signo populista antes que democrático liberal. Sin embargo, ya desde mediados de la década del 50 se desaceleraron los indicadores de buen desempeño económico, y se hicieron evidentes las graves distorsiones e inequidades que ocultaban. Entre 1950 y 1965 la tasa de desempleo abierto de la región se duplicó; se incrementó la subocupación; la miseria se tornó más visible en ciudades que rebosaban de asentamientos precarios, para grave preocupación de los sectores dominantes; y los golpes militares empezaron a volverse un recurso cada vez más habitual, dirigido sobre todo a ahogar los incipientes intentos democratizadores.

Como siempre ocurre en estos casos, los defensores del paradigma convencional de la modernización se esforzaron por normalizar teóricamente las considerables anomalías que se presentaban. Así, se pasó a cuestionar cualquier dicotomía simple y totalizante entre “lo tradicional” y “lo moderno” para poner el énfasis en las asimetrías y en las discontinuidades de lo que debía ser visto como un proceso y, encima, no siempre irreversible. Se incorporaron al análisis la persistencia y la rigidez de factores regionales, étnicos, religiosos,

etc., y se multiplicaron argumentos acerca de una falta vernácula de espíritu empresarial o de una extendida “cultura de la pobreza” que se convertían en “obstáculos” o “frenos” para la “locomotora” del desarrollo, según las metáforas de la época. Se señalaron también los efectos dislocantes de los cambios rápidos, que se transformaban en generadores de conductas anómicas y de una propensión al extremismo. Y, muy especialmente, se comenzó a descubrir en las dictaduras latinoamericanas virtudes de liderazgo, de racionalidad y de defensa de los valores occidentales que, en situaciones de transición, las recomendaban como verdaderos equivalentes funcionales de regímenes políticos modernos.

Pero, entretanto, sonaban cada vez más potentes las críticas que se iban acumulando contra las premisas mayores en las cuales se sostenía el paradigma de la modernización. Menciono aquí sólo algunas de las que poseen una relevancia más inmediata para nuestro tema. Ante todo, desde fines de los años 40 y por influencia de Raúl Prebisch, el pensamiento de la CEPAL se había organizado en torno a dos ideas estrechamente relacionadas: la existencia de un sistema centro-periferia y la necesidad de la industrialización para combatir el atraso. Contrariamente, entonces, a las enseñanzas que se extraían del teorema ricardiano, las tesis cepalinas señalaban que la llamada “asimetría estructural de las pautas de exportación y de importación” de las economías latinoamericanas no llevaba a disminuir sino a agrandar la brecha que separaba a estas conomías de las desarrolladas. Estas últimas se convertían en beneficiarias directas de una división internacional del trabajo que ponía en sus manos los mayores frutos del progreso técnico, mientras que la periferia se veía condenada a

experimentar desequilibrios permanentes en sus cuentas externas, a sufrir los vaivenes de una demanda errática de sus productos primarios y a tener que soportar una “evolución desfavorable o mezquina de los términos del intercambio”. Precisamente esa existencia de un sistema centro-periferia (o de una cadena imperialista, como preferían sostener los marxistas, o de un sistema capitalista mundial o una economía-mundo, como decían André Gunder Frank o Immanuel Wallerstein) invalidaba la idea de que los países subdesarrollados pudieran alcanzar alguna vez a los desarrollados siguiendo el mismo camino que – supuestamente – estos últimos habrían recorrido.

Es que no se trataba de aislar y de comparar las trayectorias de las naciones en clave liberal, como si fuesen individuos autónomos, sino de comprender sus heterogéneos modos de inserción y los distintos lugares que esas naciones ocupaban en un esquema mundial de intercambios desiguales que tendía a reproducir continuamente las diferencias. Fueron constataciones como éstas las que nutrieron a las diversas corrientes de la literatura sobre la dependencia, que rechazaron la imagen de las etapas y la sustituyeron por un examen sistemático (aunque no necesariamente coincidente) de las sucesivas épocas históricas por las cuales atravesaron tanto el capitalismo mundial como sus partes componentes.

Pero ¿era acaso factible financiar con recursos propios la industrialización que se propugnaba como objetivo? O, dicho de otra manera, ¿cómo se podía romper el círculo vicioso de la pobreza descripto por Nurkse sin aumentar aun más los lazos de subordinación al capital internacional? La respuesta corrió por cuenta de otro economista,

Paul Baran, quien puso en evidencia la falacia que escondía ese pretendido círculo vicioso. En efecto, que un país periférico tenga un bajo ingreso anual per capita no significa necesariamente que posea también una baja capacidad potencial de ahorro. Sucede que el ingreso per capita es una medida promedio, que soslaya la manera en que este ingreso se distribuye. Decir, en cifras de aquella época, que en ciertos lugares de América Latina el ingreso anual per capita era de 400 dólares, ocultaba el hecho de que 7 de cada 8 habitantes recibía 200 dólares mientras que 1 de cada 8 se apropiaba por lo menos de 2000. Y si un razonamiento como el de Nurkse podía aplicarse sin demasiadas dificultades a un ingreso de 400 dólares (y, mucho más, a uno de 200), carecía de sentido cuando ese ingreso era de varios miles. O sea que el problema residía en el modo en que utilizaban su fortuna los estratos más ricos de nuestro subcontinente, donde un 5 % de los habitantes se quedaba con el 50 % del total del ingreso nacional (y ello sin tomar en cuenta su patrimonio ya acumulado). Era la dilapidación de este excedente real en consumos conspicuos, en inversiones no productivas y en remesas al exterior lo que le impedía a América Latina conseguir realizar por sus propios medios el enorme excedente potencial que, en otras condiciones, hubiese estado a su alcance. El cuello de botella era sociopolítico antes que económico y, en la mayor parte del área, sólo podía ser superado a través de una revolución.

Se anunciaban así los grandes temas que iban a dominar el discurso teórico-ideológico de los años 60 y no sólo en América Latina. Ya había llegado al poder la Revolución Cubana, a muy pocas millas de los Estados Unidos, país donde iba quedando rápidamente atrás la serena y triunfal

confianza de la era Eisenhower. Ocupaban ahora la escena norteamericana los hippies, la revuelta estudiantil, el movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam (y sus opositores) y el descubrimiento de la pobreza en medio de la abundancia. Si esto sucedía en la "primera nación nueva", en el resto del continente se asociaba ahora a la modernización con el dualismo, con el aumento de las desigualdades, con las burocracias represoras, con la explotación y, finalmente, con la propia persistencia del atraso. Se había ingresado, en palabras de Alexander, a un nuevo período, el de las teorías "anti-modernización" y el "radicalismo heroico", cuya retórica narrativa iba a articularse en torno a las ideas de emancipación y de revolución.

Fue en este marco de confrontación de paradigmas que surgió en la literatura sociopolítica latinoamericana el tema de la marginalidad. Según sostuve entonces, apareció lleno de buenos sentimientos y de malas conceptualizaciones, porque la marginalidad es uno de esos significantes que seduce con trampa. Tienta al uso por su sencillez aparente cuando, en rigor, su significado resulta siempre complejo pues remite a otro que le da sentido: sucede que sólo se es marginal en relación a algo. Al comienzo se llamó marginales a los asentamientos urbanos periféricos (villas miseria, callampas, favelas, rancheríos) que proliferaron sobre todo a partir de la segunda posguerra. Los referentes ecológicos del término eran bastante claros: designaba a viviendas situadas al borde de las ciudades y carentes de ciertos requisitos mínimos de habitabilidad. Implicaba así otros dos significados: el de un centro urbano en relación al cual era caracterizable lo periférico, y respecto a cuyas

condiciones habitacionales medias se juzgaban aquellas carencias. Precisamente este último aspecto fue el que llevó a extender casi de inmediato el uso de la noción, al advertirse que albergues no periféricos (conventillos, cités, callejones, vecindades) padecían deficiencias iguales o peores a las de esos asentamientos. Por lo tanto, se relegó a un segundo plano la localización física de la vivienda, y la marginalidad pasó a referirse a los rasgos negativos propios de esta última.

Definida de esta forma, era presentada ante todo como un problema técnico. Se convocaba a planificadores urbanos, arquitectos, economistas y asistentes sociales para que erradicasen un mal transitorio, producto de un desajuste circunstancial (aunque presumiblemente inevitable) en el proceso de desarrollo. Se elaboraron algunas tipologías de viviendas marginales, se anunciaron ambiciosos programas de construcciones y se estimuló un enfoque hiperempirista de la cuestión que, como constataba sin explicar, dio un gran impulso a las generalizaciones no controladas. Marx decía que los ingleses confunden habitualmente las manifestaciones de un fenómeno con sus causas. Aquí ocurrió algo parecido y el fracaso recurrente de esos esfuerzos aumentó la inquietud de los sectores dominantes, que percibían cada vez más a las áreas marginales como un terreno propicio para las prédicas subversivas y revolucionarias. El problema técnico se convertía en un problema social, y ahora interesaba mucho menos la vivienda que su ocupante. Había llegado el momento de los psicólogos sociales, de los politólogos y de los sociólogos, a quienes se fueron sumando numerosos antropólogos cuyos temas de investigación también migraron del campo a la ciudad.

Es claro que, perdido su anclaje inicial, el significante marginalidad empezó a oscilar entre varios significados posibles. Fue así que los afanes de una “ingeniería social” simplificadora dieron un salto inaceptablemente determinista, y consideraron marginal a todo habitante de una vivienda marginal, a pesar de que si algo mostraban los estudios más serios de que se disponía era la altísima heterogeneidad del mundo de la pobreza urbana. Éste fue también el punto de partida de un enfoque que ganó una rápida circulación, inspirado por ciertos doctrinarios de orientación católica. Según ellos, la marginalidad manifestaba la desintegración interna de grupos sociales afectados por la desorganización familiar, la anomia, o la ignorancia. Se alegaba que ésta era la principal razón que les impedía intervenir en las decisiones colectivas y que tal falta de participación activa se volvía, a su vez, la causa de su bajísima participación pasiva o receptora en “los bienes constitutivos de la sociedad global”. Así planteada la cuestión, los marginales dejaban de ser necesariamente urbanos, pues fenómenos como éstos ocurrían con igual o mayor intensidad en las zonas rurales. Por este camino, se terminaba considerando marginal al 80 % de la población latinoamericana, lo que podía ser bueno a los fines catequísticos, pero le quitaba toda especificidad a la categoría, y dejaba flotando la pregunta de si, en ese caso, no le cabía mejor la denominación de marginal al 20 % restante. Conviene señalar que esta visión del problema cobró una especial importancia en el campo de la práctica política pues, en países como Chile o Venezuela fue el sustento ideológico de las llamadas “campañas de promoción popular” que impulsaron los gobiernos demócrata cristianos. Por otro lado, se adecuaba sin demasiadas dificultades a

las interpretaciones funcionalistas de la modernización que, según los lugares, se hallaban todavía en boga. Es que, como de costumbre, el significado del término marginalidad reenviaba al concepto implícito que le daba sentido. Y en este caso el esquema referencial resultaba evidente: se trataba del polo “urbano-moderno” de la sociedad, cuyo sistema de normas y de valores se continuaba juzgando portador de un proyecto de desarrollo capaz de absorber a los marginales, después de someterlos a una preparación adecuada.

Con ello, los grupos excluidos de la participación dejaban de ser testimonio de una estructura explotadora, para expresar, sobre todo, sus propias deficiencias psicológicas o culturales. Es verdad que sólo un romanticismo ingenuo podía ignorar que la miseria propaga tales deficiencias; pero lo que estaba en cuestión era el orden causal que se pretendía establecer. El tema de la marginalidad se instalaba así en el territorio del mito, para enunciar el mensaje de una incorporación posible a todas las ventajas del desarrollo en el marco de una armonía social tutelada por el privilegio. Revolucionarios de una sola revolución – la que separa lo tradicional de lo moderno – cumplía a los científicos sociales contribuir a allanar el camino, preservando las bases del orden constituido. No es que al hacerlo dejaran de denunciar algunas de las carencias y de los sufrimientos que agobiaban a los marginales. En la retórica del mito burgués, enseña Barthes, juega un papel clave la figura de la vacuna: se confiesa “el mal accidental de una institución de clase para ocultar mejor el mal principal”. De este modo, “se inmuniza a la imaginación colectiva con una pequeña inoculación del mal reconocido y así se la defiende contra el riesgo de una

subversión generalizada”. Fue justamente con la intención de echar un poco de luz sobre ese “mal principal” y de darle otro uso al término marginalidad que intenté reformular la problemática en cuestión, introduciendo la noción de masa marginal. Me situé para ello en el campo del materialismo histórico, apelando a una relectura de varios textos de Marx que me parecían y me siguen pareciendo importantes. Y me valí también de algunas contribuciones metodológicas de Althusser que me ayudaron a organizar la reflexión, por más – debo decirlo – que nunca participé de la “moda althusseriana”, tal como ya entonces advertía en una nota al pie. Dejo al lector la tarea de evaluar por sí mismo la medida en que mis trabajos de hace treinta años estuvieron fundados en algo más que la retórica revolucionaria característica de la época.

Corresponde ahora que haga por lo menos una rápida mención del tipo más común de crítica que recibió en ese tiempo la noción de masa marginal. El concepto de ejército industrial de reserva fue utilizado por Marx para designar los efectos funcionales de la superpoblación relativa en la fase del capitalismo que él estudió. Propuse que se denominara, en cambio, masa marginal a la parte de la superpoblación relativa que, en otras situaciones, no producía esos efectos funcionales. Pero eran años en los cuales un hiperfuncionalismo de izquierda dominaba buena parte del pensamiento social latinoamericano. Como alguna vez apuntó Wilbert Moore, los propios funcionalistas norteamericanos (entre quienes se contaba) nunca habían llegado tan lejos: afirmaban que muchas cosas eran funcionales para la reproducción del capitalismo, no que todo le era funcional. Es lo que hicieron, en cambio, los críticos de la

noción de masa marginal, que se empeñaron en demostrar que hasta el último de los campesinos sin tierra o de los vendedores ambulantes de nuestras ciudades eran no únicamente funcionales sino decisivos para la acumulación capitalista. Por eso, con frecuencia, sus objeciones o fueron injustas o resultaron excesivas, sin perjuicio de que algunas de ellas hayan servido para iluminar efectivamente otros aspectos del problema.

En primer lugar [hay que considerar] los modos diversos que han asumido en América Latina los procesos de desarrollo desigual, combinado y dependiente, satelizando en grados variables a formas pre- o proto-capitalistas de producción. A mayor abundamiento, pueden consultarse sobre el mismo punto otros trabajos de mis asociados y míos, citados en la bibliografía. Es decir que tales contribuciones parciales a la acumulación capitalista según los lugares (provisión de alimentos baratos, circuitos de distribución en áreas carenciadas, trabajadores precarizados) estaban contempladas en mi argumento aunque no fuesen centrales para él – como, de paso, tampoco lo fueron para Marx cuando se ocupó de estas cuestiones. Sólo que, en segundo lugar, no era ni es plausible sostener que el conjunto de la superpoblación relativa resulte funcional en todas sus dimensiones (aun cuando pueda serlo en algunas) ni esto significa tampoco que las pautas funcionales que los observadores detectaban fuesen necesariamente las más convenientes o rentables para los sectores capitalistas hegemónicos. Parece casi obvio que allí donde opera tal funcionalidad en el mercado de bienes, por ejemplo, es porque este mercado no se ha vuelto todavía atractivo para esos sectores capitalistas. Y ello porque, como

observa Godfrey, “tan pronto como los pequeños productores han desarrollado un mercado de algún interés, las firmas más grandes se apoderan de él, con la ayuda del estado si hace falta”.

La discusión perdió así de vista la diferencia crucial que separa a los procesos de conservación y de disolución de las formas productivas y comerciales preexistentes en una economía determinada, y el hecho no menos importante de que el curso, la complejidad y la intensidad de tales procesos se modifica de acuerdo al contexto específico de que se trate. Para establecer la pretendida funcionalidad general de la superpoblación relativa, mis críticos se concentraron casi exclusivamente en situaciones marcadas por procesos de conservación, sin advertir que, en todo caso, el aporte que hacían esas situaciones al esquema central de acumulación era tan bajo que no alcanzaba los umbrales requeridos para que se desencadenasen los procesos de disolución propios de las expansiones capitalistas. De todas maneras, debo resaltar nuevamente que el asunto nunca me fue ajeno (¿cómo podía serlo dado el campo de estudio elegido?) y se encuentra tematizado, por ejemplo, en mis hipótesis acerca de los peculiares mecanismos de integración del sistema y de integración social que, en muchas regiones, han sido característicos del desarrollo capitalista dependiente. El desacuerdo radica en que allí donde mis críticos ponían el acento en la funcionalidad que derivaba de los procesos de conservación, yo pensaba que esta funcionalidad aparente encubría un fenómeno mucho más profundo: la necesidad de a-funcionalizar los excedentes de población no funcionales que, si no, se corría el riesgo de que se volvieran dis-funcionales, dado que no eran incorporables a las formas

productivas hegemónicas. (Nótese que un excedente de población no funcional puede resultar a-funcional o dis-funcional en relación con el sistema que lo genera. En el primer caso, cuyo ejemplo extremo ha sido el apartheid sudafricano pero cuyas manifestaciones latinoamericanas abundan – la Sierra peruana, el Nordeste brasileño, etc. -, el excedente se encapsula y así se lo neutraliza, absorbiendo sólo a la mano de obra que se necesita, en el momento, en las condiciones y por el tiempo que convengan. En el segundo caso, en cambio, tal excedente puede volverse peligroso y demandar crecientes gastos fiscales para sofocar sus protestas, frenar la inseguridad o evitar el deterioro de la situación sanitaria del conjunto de la población).

Esta verdadera gestión política de esos excedentes fue uno de los temas que escapó al horizonte de la mayoría de mis críticos al tiempo que era uno de los puntos de mira principales del concepto de masa marginal.. Todo lo cual resultaba congruente con mi doble conjetura de fondo. Por un lado, creía que, a impulsos del capital monopolista transnacional, empezaban a ampliarse y a cobrar una gran intensidad los procesos que aquí he llamado de disolución. Por el otro, consideraba que estos procesos tendían a ser protagonizados por agentes económicos que generaban cada vez menos puestos de trabajo de buena calidad. A pesar de previsibles variaciones espaciales y temporales, parece legítimo afirmar que esta doble conjetura ha demostrado poseer un alto nivel de plausibilidad, que las políticas económicas neoliberales de las últimas décadas no han hecho más que acrecentar.

Esto dicho, agrego una apostilla que algunas discusiones me revelaron que es menos obvia de lo que supuse.

Introducir y fundamentar un concepto como el de masa marginal no equivale a sostener que resulta aplicable siempre y en todas partes. No sólo mis colaboradores y yo distinguimos desde el comienzo entre diversos tipos de marginalidad sino que la prevalencia (o no) de los efectos “ejército industrial de reserva” o “masa marginal” en situaciones particulares es una cuestión empírica, para cuyo tratamiento – y éste es el asunto – se necesita contar con los instrumentos teóricos adecuados.

Valga ahora un breve comentario sobre la categoría de exclusión social. En los tiempos de nuestro debate latinoamericano acerca de la marginalidad, esta categoría hacía su aparición en Francia, en un libro de Pierre Massé, primero, y en otro de René Lenoir, después. Sólo que tanto Francia como el resto de Europa vivían entonces esos años de gran prosperidad que han sido denominados “los treinta gloriosos”, con bajísimas tasas de desocupación, empleos estables, buenos salarios y la protección que brindaban los diversos Estados de Bienestar. No hace falta decir que se trataba de realidades muy distintas a las latinoamericanas. Los excluidos eran allí quienes habían quedado a la vera del camino del progreso general, pobres testimonios andrajosos de un pasado del que la mayoría de los sectores populares habían podido escapar. El propio nombre que se les daba denunciaba de inmediato el vínculo teórico con la matriz DURKHEIMIANA (v.) de la cohesión social: eran los inadaptados, los que quedaban fuera y no estaban en condiciones de entrar. Sin embargo, el carácter circunscrito del fenómeno, en una época de bonanza tan extendida, hizo que el término tuviese una circulación muy limitada. Su reaparición y su éxito datan de comienzos de la década del 90, cuando

ya habían cambiado los datos positivos de la posguerra y la creciente precariedad de los puestos de trabajo había desgastado seriamente los cimientos mismos de la que Robert Castel bautizó como la “sociedad salarial”. Según señala Paugam, en su nueva encarnación la categoría no designa ya a grupos particulares sino a procesos susceptibles de conducir a una ruptura progresiva de los lazos sociales. “En consecuencia, el éxito de la noción de exclusión se liga en gran parte a una toma de conciencia colectiva de la amenaza que pesa sobre franjas cada vez más numerosas y mal protegidas de la población”. Es decir que en los 90 el concepto europeo de exclusión social reencuentra los temas que ya nos planteábamos en América Latina en los 60. Desde luego, se trata de contextos que siguen siendo muy distintos, y los niveles europeos de desarrollo, de bienestar y de protección social superan ostensiblemente a los latinoamericanos. Es llamativo constatar, sin embargo, hasta qué punto algunas de nuestras formulaciones de entonces reaparecen ahora casi a la letra. Es Julien Freund observando que la noción de excluido está “saturada de sentido, de no sentido y de contrasentido” y prácticamente se le puede pedir que diga lo que uno quiera. O es Ralf Dahrendorf refiriéndose a la *underclass* (el otro término en boga) como los que están de más: “Si se me perdona la crueldad de la expresión, no se los necesita. El resto puede vivir sin ellos y le gustaría hacerlo”. Agrego el subrayado para que el lector tenga a bien recordarlo cuando compare con las que fueron mis tesis iniciales acerca de la masa marginal.

Hay que tener en cuenta la índole mucho más política que económica del problema de la marginalidad social, a la que ya me he referido en otros lugares, que hoy

asume más relevancia que nunca en una América Latina de mercados fuertes y de estados débiles. Para ello quiero mencionar un estudio de Göran Therborn, que ha recibido menos atención de la que merece. En él, Therborn se dedica a investigar las causas del desempleo en 16 de los países más avanzados del mundo, durante el período 1974 – 1984. Su primer hallazgo era previsible: la crisis económica de la década del 70 tuvo un impacto muy distinto en cada uno de esos lugares. Desde el punto de vista de la ocupación, en ciertos sitios la crisis provocó un desempleo masivo y en otros, un desempleo alto. Pero hubo cinco naciones donde esto no ocurrió, confirmando que el desempleo no es de ninguna manera una fatalidad. Estas naciones fueron: Suecia, Noruega, Austria, Suiza y Japón. ¿Cómo fue que estos países lograron mantener baja la desocupación? La respuesta de Therborn es simple y convincente: “La existencia o no de un compromiso institucionalizado con el pleno empleo constituye la explicación básica del impacto diferencial de la actual crisis” (p. 23). ¿En qué consistió este compromiso? Ante todo, como es obvio, en un esfuerzo explícito y decidido de impedir a cualquier costa que la desocupación avanzase. Después, en la puesta en marcha de mecanismos y de políticas anticíclicas. A la vez, se implementaron activamente programas específicos para impulsar el ajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra en el mercado de trabajo con la mira puesta en el pleno empleo. Finalmente, hubo un empeño sostenido y deliberado por no usar al desempleo como instrumento para conseguir otros objetivos económicos o políticos. Nótese que los propulsores de un compromiso de este tipo no fueron en todas partes los mismos. En el caso de Suecia y, algo menos, de Noruega,

ocurrió un importante ascenso del movimiento obrero y una fuerte consolidación de la socialdemocracia. Esta última dominó también la escena pública en Austria desde 1970. Pero en Japón y en Suiza, en cambio, primó una preocupación conservadora por el orden y la estabilidad, asentada en la no deificación del mercado. Los ejemplos que da Therborn podrían multiplicarse en el espacio y en el tiempo.

Hoy en día, es notable el contraste entre países como EEUU y Alemania, ambos golpeados fuertemente por la crisis económica mundial. En el primero de ellos, no se detiene un crecimiento altísimo del desempleo que, en cambio, Alemania logró evitar. Como señala Paul Krugman: “Ese milagro alemán no ha concitado gran atención en Estados Unidos pero es real, es notable, y plantea serias preguntas con respecto de si el gobierno estadounidense está adoptando las medidas adecuadas” (La Nación. 14/11/2009, énfasis agregado).

La lección que se desprende de estas experiencias es bastante clara. Cuando se habla de marginalidad, de exclusión social, de desempleo o de subocupación, no se está aludiendo a hechos de la naturaleza sino a emergentes de relaciones de poder determinadas. Es del carácter y de la lógica de estas últimas que depende que la lucha contra la marginación y contra la pobreza quede seria y firmemente ubicada (o no) en el primer lugar de la agenda y que se esté dispuesto (o no) a pagar todos los costos necesarios para que esta lucha sea eficaz. Dicho de otro modo, la existencia de esos fenómenos tiene siempre responsables; y se cuentan entre ellos quienes, por acción u omisión, en la práctica soslayan su urgencia y su importancia y eligen otras prioridades, confiando en que la

desocupación y el subempleo se resolverán por arrastre. América Latina ha comenzado a transitar el nuevo milenio con un panorama social francamente angustiante y, en varios sentidos, bastante peor al de la década del 60. Ojalá se mantenga vivo el debate acerca de las verdaderas razones que nos han conducido a esta situación.

(Texto resumido y actualizado de la Introducción a Marginalidad y exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001)

Bibliografía

Germani, Política y sociedad en una época de transición (pp. 117 - 126);
Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries;
Pinto, “Centro-periferia e industrialización”;
Baran, The Political Economy of Growth;
Alexander, “Modern, Anti, Post, Neo”;
Wilson, When Work Disappears;
Barthes, Mythologies;
Nun, "Los paradigmas de la ciencia política", Revista Latinoamericana de Sociología, 1966, 1: 67-97;
Kay, Latin American Theories of Development and Underdevelopment;
Murmis, “Tipos de marginalidad y posición en el proceso productivo”;
Nun, Crisis económica y despidos en masa;
Godfrey, “Surplus Population and Underdevelopment: Reserve Army or Marginal Mass?”;
Pierre Massé, L'exclusion sociale;
René Lenoir, Les exclus;
Serge Paugam, L'exclusion: l'état des savoirs;
Freund, “Prefacio”, en Xibberas, Les theories de l'exclusion;
Dahrendorf, “The Changing Quality of Citizenship”;
Therborn, Why Some Peoples Are More Unemployed Than Others.

Más allá de las palabras. Las transformaciones recientes del proyecto político zapatista

*Juan Diez*⁷⁵

Resumen:

Desde su aparición pública en 1994, el movimiento zapatista se ha caracterizado por un proyecto político en constante construcción y redefinición. La idea que atraviesa el presente artículo es que el desenlace de la Marcha por la Dignidad Indígena de principios de 2001 implicó la necesidad de reconfigurar una vez más el proyecto político zapatista y dar un nuevo salto en dos direcciones específicas: la consolidación del proceso de construcción de autonomía en las comunidades zapatistas como referente político-práctico y la articulación de un espacio político y social a nivel nacional, a través de la otra campaña, que supuso la primera vez que el EZLN recorrió todo el territorio mexicano a fin de entrelazar las diversas resistencias y proyectos alternativos. Ambas iniciativas se encuentran en el centro de la Sexta Declaración difundida en junio de 2005 y representan el gran desafío del zapatismo de construir –y constituirse en– una alternativa no sólo en la palabra sino también en la práctica.

Palabras clave: Movimiento zapatista – Sexta Declaración – proyecto político

Summary:

Since its public appearance in 1994, the Zapatista movement has been characterized by a political project in constant redefinition. This article argues that the outcome of the March for Indigenous Dignity, in early 2001, resulted in the need to reshape the Zapatista political project once again and to take a new step into two specific directions: the strengthening of autonomy process in the indigenous communities in Chiapas, and the articulation of a political and social space, through the other campaign, which was the first time EZLN traveled throughout Mexico in order to connect struggles and actual alternative projects. Both initiatives are at the center of the Sixth Declaration published on June 2005 and they represent the great challenge of the Zapatista movement to make –and to become– an alternative not only in words but also in practice.

Key words: Zapatista movement – Sixth Declaration – political project

Recibido: 06.08.2009 Aprobado: 23.11.2009

⁷⁵ Licenciado en Ciencia Política (UBA). Magíster en Estudios Latinoamericanos (UNSAM). Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA

Introducción

Desde su aparición pública el primer día de 1994, el movimiento zapatista se ha caracterizado por un proyecto político en constante construcción y redefinición. La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, difundida en junio de 2005, no resulta una excepción en ese sentido y también supone una nueva transformación.

La elección de esta declaración no sólo se basa en que se trata de la última que publicó hasta la fecha el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Mucho más importante, y tal como intento argumentar a lo largo del texto, su relevancia radica en que contiene problemas, debates y transformaciones sumamente relevantes para pensar el proyecto político zapatista, así como también, más en general, las luchas por alternativas en América Latina.

Previamente a la Sexta Declaración, y más allá de los doce días de enfrentamientos armados con el ejército y otras iniciativas, ha sido en el ámbito de la palabra donde el movimiento zapatista ha librado la mayor parte de sus batallas y donde se ha mostrado sumamente dinámico con cambios en sus estrategias discursivas. Estos cambios, a partir de evaluaciones del camino recorrido, obstáculos encontrados y situaciones no previstas, son uno de los rasgos más elocuentes del proyecto político zapatista.

La idea que atraviesa este trabajo es que el desenlace de la Marcha por la Dignidad Indígena de principios de 2001 puso en evidencia los límites de la estrategia discursiva y simbólica del zapatismo desarrollada hasta entonces. Como consecuencia, las y los zapatistas

decidieron redefinir una vez más su proyecto político y dar un nuevo salto en dos direcciones específicas: la consolidación del proceso de construcción de autonomías en las comunidades indígenas de Chiapas y la articulación de un espacio político y social a nivel nacional, que supuso la primera vez que el EZLN recorrió todo el territorio mexicano con el fin de entrelazar las distintas luchas y proyectos alternativos. Ambas iniciativas, junto a otros cambios igualmente significativos, se encuentran en el centro de esta nueva declaración y representan el gran desafío del movimiento zapatista de construir –y constituirse en– una alternativa no sólo en la palabra sino también en la práctica.

De todos modos, la iniciativa actual también supone nuevos desafíos y dilemas para el movimiento, tanto hacia fuera en relación al contexto en el cual se inscribe y busca incidir, como hacia dentro en la articulación de las distintas luchas y grupos en una instancia nacional.

En el marco del presente texto, se pone énfasis en la noción de proyecto político. Siguiendo a Evelina Dagnino (2004), utilizo este concepto para designar a un conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones que orientan la acción política. De esta manera, la noción de proyecto político no se reduce simplemente a estrategias de acción política en sentido estricto ni a un conjunto de programas políticos, sino que, desde una visión claramente vinculada al pensamiento gramsciano, los proyectos políticos expresan y producen significados que integran o buscan conformar matrices culturales más amplias a través de un proceso de

(re)construcción constante. Así, un proyecto político no parte de un modelo o de programa predeterminado, sino que se articula en un devenir abierto y dinámico a partir de una exigencia concreta.

Esta definición resulta sumamente adecuada para pensar el proyecto político zapatista, ya que una de las características centrales del mismo es justamente su reconfiguración a través de diálogos constantes con distintos actores políticos y sociales. Asimismo, la ventaja de este tipo de abordaje es que permite establecer un vínculo entre política y cultura, yendo más allá de los reduccionismos políticos en los que caen muchos estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva. Una importante cantidad de análisis se centran esencialmente en el impacto de los movimientos en la arena política. Esa elección metodológica privilegia los efectos finales de la acción, ignorando en muchos casos la forma en cómo dicha acción se produce y, por lo tanto, toman a la acción como un hecho y no como un proceso. Sin embargo, el mayor problema reside en que ese tipo de recorte deja de lado dimensiones muy significativas de los movimientos sociales, especialmente en lo referente a la creación de matrices culturales y retos simbólicos (Melucci, 1999). En el caso de mi investigación, dejar esos aspectos de lado impediría comprender adecuadamente el fenómeno zapatista.

En términos metodológicos, el trabajo de investigación lo abordé a través de una estrategia cualitativa que combinó distintos aportes y diversas fuentes de información, tanto primarias como secundarias, a fin de comprender un fenómeno tan complejo como el zapatismo. Dentro del primer tipo de fuentes, ocupan un lugar central la por

demás abundante producción del propio EZLN. Otras fuentes primarias que se produjeron y se emplearon en el marco de la investigación surgen del trabajo de campo –entrevistas y observación participante– que realicé en México durante el mes de septiembre de 2007. En cuanto a las fuentes secundarias utilizadas, éstas abarcan el numeroso y variado material escrito por analistas políticos, académicos y militantes sobre el movimiento zapatista y el contexto político mexicano.

Un proyecto político en construcción constante

En la madrugada del primero de enero de 1994, el EZLN tomó siete municipios en el sureño estado de Chiapas, y dio a conocer su Declaración de la Selva Lacandona (DSL1) como una “declaración de guerra” al Ejército Mexicano y al Poder Ejecutivo encabezado por Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A su vez, apeló a que “los otros Poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador”. Junto a estos dos destinatarios, la declaración también se dirigió al pueblo mexicano para que se sumara al EZLN en su “avance liberador” hacia la capital para luchar por once demandas básicas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

En este primer documento del EZLN, la estrategia propuesta es claramente la lucha armada. De cualquier manera, ante la cobertura mediática tanto nacional como internacional y las repercusiones en distintos sectores de la sociedad, las y los zapatistas aceptaron el pedido de buscar una solución política y pacífica al conflicto y modificaron su estrategia. La opción armada inicial fue quedando

de lado frente a un accionar más político, centrado en la palabra como una de sus principales armas.

Como señala Gloria Muñoz Ramírez (2004), este cambio era posible por algunas concepciones desarrolladas desde antes del alzamiento, durante el proceso de organización en la selva. Las dificultades iniciales del grupo guerrillero que intentó –sin suerte– desarrollar una estrategia foquista en el estado de Chiapas significaron la primera “derrota” del movimiento y el comienzo de una dinámica que después volverían a utilizar en otras ocasiones. Como reconoce el principal vocero del movimiento:

La virtud de esa organización militar está en reconocer que no tenía respuestas y que tenía que aprender. Esa es la primera derrota del EZLN, la más importante y la que lo marcará de ahí en adelante [...] Y ahí se comienza a dar un proceso de transformación del EZLN, de un ejército de vanguardia revolucionaria a un ejército de las comunidades indígenas, un ejército que es parte de un movimiento indígena de resistencia, dentro de otras formas de lucha [...] Pero luego el EZLN, a la hora en que se imbrica con las comunidades, pasa a ser un elemento más dentro de toda esa resistencia, se contamina y es subordinado a las comunidades. Las comunidades se lo apropian y lo hacen suyo, lo colocan bajo su férula. Yo pienso que lo que permitió al EZLN sobrevivir y crecer fue aceptar esa derrota (Subcomandante Marcos en Le Bot, 1997:148-149).

A medida que el grupo guerrillero entró en contacto con las comunidades, fue entrecruzándose con las redes organizativas y liderazgos que se habían venido conformando desde los años sesenta, haciéndose de una base social que ya compartía una cierta

identidad y experiencias colectivas. De esta manera, el EZLN se fue transformando a través del encuentro de distintas ideologías y propuestas políticas –que iban desde las luchas agrarias, las utopías indígenas, el marxismo leninismo y la teología de la liberación– aunque dando como resultado algo distinto a cada una de ellas. Todo esto contribuyó a que ya existiera una dinámica previa que permitiera al zapatismo afrontar una segunda “derrota” ante el rechazo de diferentes sectores de la sociedad frente al levantamiento armado. A su vez, esos elementos contribuyeron al surgimiento del movimiento zapatista como una amplia red en torno al EZLN a través de la insistencia en la convocatoria a encuentros y articulaciones entre diversas organizaciones e individuos para discutir y buscar soluciones a los grandes problemas nacionales. Esta configuración como una red política en movimiento no sólo le permitió evitar caer en un diálogo exclusivo con el gobierno, sino que, a su vez, refleja una de sus principales demandas y un gran desafío a la cultura política dominante (Leyva Solano, 1999).

Estos cambios del proyecto político se reflejaron en junio de 1994 con la Segunda Declaración de la Selva Lacandona (DSL2), donde llamaron a una Convención Nacional Democrática (CND) que diera oportunidad de lucha a las fuerzas políticas legales de oposición y permitiera “a la sociedad civil que se organice en las formas que considere pertinentes para lograr el tránsito a la democracia” (DSL2, 1994). Las y los zapatistas ya no apelaron a las instituciones ni llamaron al pueblo a levantarse en armas junto al EZLN, sino que el llamado se dirigió a “la Sociedad Civil [para] que retome el papel protagónico que tuvo para detener la fase militar de la guerra y se organice

para conducir el esfuerzo pacífico hacia la democracia, la libertad y la justicia”.

Para varias autoras y autores (Bellinghausen, 2005; De la Rosa, 2006; Leyva Solano y Sonnleitner, 2000), junto con el cambio en su estrategia, hubo una innovación en su discurso. La resonancia social y política del movimiento zapatista se logró mediante un discurso que, en forma paralela al pasaje de la estrategia militar a una más política, fue desplazándose desde un lenguaje revolucionario tradicional presente en los primeros documentos, hacia un mayor énfasis en el diálogo con la sociedad para impulsar un proceso profundo de democratización de las relaciones. De esta manera, fue configurándose el ámbito de la palabra como el espacio privilegiado en donde el movimiento zapatista ha librado la mayor parte de sus batallas, de una forma sumamente dinámica con cambios en sus estrategias. Al lado del alzamiento armado, las y los zapatistas iniciaron una guerra paralela contra el Estado con el fin de arrebatarle los símbolos que monopolizó durante años. Conscientes de que las guerras modernas son más bien de propaganda y que sus posibilidades de triunfo no estaban en el enfrentamiento armado con el ejército, han sabido aprovechar desde el inicio los efectos de las imágenes y los símbolos (Duhalde y Dratman, 1994).

Por medio del discurso, las y los zapatistas han buscado distanciarse de la habitual construcción política monológica de los grupos revolucionarios, haciendo hincapié en una estructura dialógica que busca generar un nuevo sistema colectivo de acción (Duhalde y Dratman, 1994). Apoyados en el avance de las tecnologías, especialmente Internet, y a través del discurso, logran tender

puentes de cercanía e identidad con una amplia gama de organizaciones e individuos, dando a cada uno elementos comunes de referencia que, sin dejar de conservar espacio para su particularidad, les permite identificarse con el movimiento zapatista. De esta manera, han contribuido como un elemento catalizador de los procesos de cambio, principalmente a través de la influencia en la conformación de nuevas subjetividades sustentadas sobre prácticas y formas de pensar alternativas.

Pese a los esfuerzos organizativos convocados nuevamente en la Tercera Declaración (DSL3), en enero de 1995, y en la Cuarta Declaración (DSL4), un año más tarde, los llamados a conformar un amplio frente opositor no lograron consolidarse, sobre todo por los conflictos entre los distintos grupos de izquierda a los que se le encargó la organización (Rodríguez Araujo, 2005). A diferencia de las tres declaraciones anteriores, la Quinta Declaración (DSL5) no convocó a la organización de la sociedad, sino a una consulta por el reconocimiento de los derechos indígenas y el alto a la guerra en Chiapas. En este documento, la cuestión indígena se colocó claramente en el centro de la lucha zapatista, tratando de generar un consenso para hacer cumplir los Acuerdos de San Andrés a través del recurso a una de sus mejores armas: el discurso. Sin embargo, hay cambios en el mismo: se orienta hacia los derechos de los pueblos indios, pasando de un discurso ofensivo a uno reivindicativo, de la transformación nacional a la defensa de los derechos indígenas, del impulso a la organización de la sociedad civil a un llamado de solidaridad con sus demandas (Pineda, 2005).

La Marcha por la Dignidad Indígena como punto de inflexión

La Marcha fue una gran apuesta política del zapatismo al buscar, nuevamente, apelar a las instituciones políticas mexicanas para darle una solución a los problemas de los pueblos indígenas, como ya lo había intentado con la fuerza de las armas el primero de enero de 1994. A diferencia de aquel momento, ahora contaba con un reconocimiento trabajosamente construido a lo largo de siete años de diálogos, encuentros y otras iniciativas, y que se reflejó en las movilizaciones y en los apoyos generados tanto en México como en otras partes del mundo. En esta ocasión no eran las armas sino el poder de la palabra y los símbolos, junto al proceso de movilización generado durante el recorrido por trece entidades federativas del sur y centro de México y las miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México a principios de 2001.

El triunfo de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), en julio de 2000, al poner fin al predominio priísta en la presidencia después de 71 años pareció abrir la posibilidad de cambios. De hecho, aún siendo candidato, la falta de oficio político del panista hizo ofrecer a las y los zapatistas la resolución del conflicto de Chiapas “en quince minutos”. Tan así que una de las primeras medidas de gobierno fue el envío de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) al Congreso de la Unión para su aprobación. Las y los zapatistas no desaprovecharon la oportunidad y elevaron la apuesta anunciando una marcha de la comandancia del EZLN hacia la capital para exigir al Congreso la sanción de dicha propuesta y, a su vez, demandaron la liberación de las y los zapatistas

presos y el retiro de 7 bases militares, como condición para reiniciar el diálogo suspendido en 1996. De esta manera, no sólo lograron poner la cuestión de los derechos, la autonomía y la cultura indígena en el centro de la agenda pública, sino que se apropiaron de la iniciativa durante los primeros meses del autoproclamado gobierno del cambio.

Para cerrar la marcha, el movimiento zapatista jugó su carta más fuerte y apeló una vez más al poder de los símbolos. Contrariamente a lo que la mayoría esperaba, no fue el subcomandante Marcos, sino una mujer indígena, la comandante Esther, quien dio el discurso central del movimiento zapatista en el Congreso:

[...] Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el Sup Marcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El Subcomandante Insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común, los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. [...] Ahora es nuestra hora. El respeto que ofrecemos al Congreso de la Unión es de fondo pero también de forma. No está en esta tribuna el jefe militar de un ejército rebelde. Está quien representa a la parte civil del EZLN, la dirección política y organizativa de un movimiento legítimo, honesto y consecuente, y, además, legal por gracia de la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Así demostramos que no tenemos ningún interés en provocar resentimientos ni resquemores en nadie. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena [...] Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora.

Esta tribuna es un símbolo. Por eso convocó tanta polémica. Por eso

queríamos hablar en ella y por eso algunos no querían que aquí estuviéramos. Y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas (EZLN, “Discurso ante el Congreso de la Unión”, 28 de marzo de 2001).

Así, el movimiento zapatista lograba su objetivo de llegar al centro del poder político y hablar “desde la más alta tribuna de la Nación” para reclamar la sanción de la ley indígena y, a su vez, mostrar el apoyo de buena parte de la sociedad mexicana a sus demandas.

Sin embargo, a pesar del gran proceso de movilización que suscitó la marcha, la reforma constitucional aprobada por el Congreso a fines de abril fue contraria a las exigencias del movimiento zapatista. El desenlace legislativo se apartó totalmente de los Acuerdos de San Andrés y de la propuesta de la Cocopa, que contaba con un amplio consenso no sólo entre las y los zapatistas, sino también en otros sectores de la sociedad. Incluso, en varios aspectos significativos resultó un claro retroceso de lo que existía previamente en la Constitución y en legislaciones locales, permitiendo hablar más bien de una contrarreforma indígena (Ceceña, 2001).

De este modo, la Marcha por la Dignidad Indígena y la movilización de principios de 2001 no tuvieron el éxito esperado frente a la estructura de oportunidad política que parecía abrirse con el triunfo de un candidato no oficial después de más de setenta años de régimen priísta. Este triunfo había hecho pensar en un cambio de escenario político más democrático, de mayor apertura del sistema político. Por el contrario, se constituyó un escenario de

estabilidad del sistema en su conjunto. A esta situación contribuyeron varios factores. Por primera vez en la historia contemporánea de México se vivía una alternancia de partidos en el poder que para muchas y muchos venía a cerrar el largo proceso de apertura política, otorgando al gobierno de Fox una considerable fuente de legitimidad. A su vez, a diferencias de las últimas cuatro sucesiones presidenciales, las elecciones federales de 2000 no fueron precedidas ni sucedidas por crisis económicas.

Tampoco sobrevino una crisis política. Pese a la pérdida de la presidencia, el PRI aceptó la derrota electoral; en buena medida porque seguía manteniendo importantes posiciones de poder a través de la mayoría de los gobernadores, gobiernos municipales y muchas otras instituciones políticas que continuaron estando bajo el control priísta o, en su defecto, permeadas por la cultura política forjada a través de más de siete décadas de partido de Estado. Más allá de la alternancia, lo que predominó fueron más bien las continuidades que las rupturas. Entre las y los legisladores prevalecieron las disputas y conflictos entre los partidos, e incluso dentro de ellos, para conseguir mejores espacios de poder (Pérez Ruiz, 2006). Todos estos elementos contribuyeron a que la correlación de fuerzas se mostrara en favor de la elite gobernante y en detrimento de los movimientos sociales y del zapatismo.

Esta nueva “derrota” para el movimiento zapatista, como otras en su historia, supuso un cambio importante en su proyecto político. El desenlace de la Marcha por la Dignidad Indígena implicó la necesidad de reconfigurar una vez más dicho proyecto y dar un nuevo salto en dos direcciones específicas: la consolidación del

proceso de construcción de autonomías en las comunidades zapatistas como referente político-práctico (Subcomandante Marcos en Muñoz Ramírez, 2004), como salió a la luz en 2003 con la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno; y la articulación de un espacio político y social a nivel nacional, a través de la otra campaña, que supuso la salida por primera vez del EZLN a todo el territorio mexicano con el fin de conocer y unir las diversas luchas y proyectos alternativos. Esta última decisión se dio a conocer en junio de 2005 con lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Ambas iniciativas, junto a otros cambios igualmente significativos, se encuentran en el centro de esta nueva declaración y representan el gran desafío del movimiento zapatista de construir –y constituirse en– una alternativa no sólo en la palabra sino también en la práctica.

El desenlace de la Marcha puso en evidencia, hasta cierto punto, los límites de la estrategia discursiva y simbólica del zapatismo desarrollada hasta entonces. De ahí que la nueva iniciativa zapatista suponga un intento por superar esas –y otras– limitaciones. La marcha mostró que la sola movilización no basta para lograr algún tipo de cambio. Es necesaria la articulación de un amplio movimiento político y social que reclame y sostenga dicha transformación. Se requiere, por lo tanto, de un extenso proceso de acumulación de fuerza que altere la correlación a favor de la reforma constitucional y que, además, la pueda hacer efectiva. Más importante aún, se trata de articular los distintos proyectos concretos que están actualmente buscando desarrollar lógicas alternativas, otras formas de pensar y hacer política.

La construcción de autonomía indígena como referente político-práctico

La Sexta Declaración no puede pensarse escindida del proceso de construcción de autonomías en las comunidades zapatistas en Chiapas. Este proceso autonómico es el que está en la base y permite articular las distintas acciones del movimiento zapatista en términos de avances, retrocesos e intensidad. Así, las comunidades indígenas son, en buena medida, la columna vertebral sobre la que se sustenta el movimiento en su conjunto.

Aunque la experiencia entre las comunidades indígenas de Chiapas tiene una larga historia, la sanción de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas contraria a los Acuerdos de San Andrés marcó un punto de inflexión en el proceso autonómico zapatista, puesto que a partir de entonces se decidió buscar el cumplimiento de dichos derechos, ya no legalmente a través del Estado, sino en los hechos.

Como resultado de ese proceso, en agosto de 2003, se crearon los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), como nuevas instancias de coordinación regional y lugares de encuentro de las comunidades zapatistas y la sociedad civil nacional e internacional. Se buscó así superar algunos problemas o tensiones que se habían venido generando en el proceso de construcción de autonomías. Con ese propósito, se plantearon sobre todo cambios en dos sentidos complementarios.

Por un lado, con las JBG se procura ir superando una de las mayores tensiones dentro del proyecto político

zapatista, al plantear la separación de la estructura militar del EZLN respecto de las tareas de gobierno que les corresponde a las propias comunidades. Se trata de una persistente tensión que viene del origen mismo del zapatismo al organizar un ejército -esto es, una estructura jerárquica- cuyo objetivo principal es la democratización de las relaciones sociales. Como plantean las y los zapatistas, el suyo es un ejército que lucha paradójicamente para dejar de serlo y para que no haya más necesidad de que existan ejércitos. Si bien la organización del EZLN fue una decisión necesaria para la declaración de la guerra como “una medida última pero justa” (DSL1), ahora resulta uno de los principales obstáculos para avanzar en la concreción de su proyecto político.

[...] vimos que el EZLN con su parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones que les tocaban a las autoridades democráticas, como quien dice "civiles". Y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no es democrática, porque es un ejército [...] pero entonces, de este problema, lo que hicimos fue empezar a separar lo que es político-militar de lo que son las formas de organización autónomas y democráticas de las comunidades zapatistas. Y así, acciones y decisiones que antes hacía y tomaba el EZLN, pues se fueron pasando poco a poco a las autoridades elegidas democráticamente en los pueblos. Claro que se dice fácil, pero en la práctica cuesta mucho, porque son muchos años, primero de la preparación de la guerra y ya luego mero de la guerra, y se va haciendo costumbre de lo político-militar. Pero como quiera lo hicimos porque es nuestro modo que lo que decimos pues lo hacemos, porque si no, pues entonces para qué vamos a andar diciendo si luego no hacemos (EZLN, DSL6, junio de 2005).

Previamente, el movimiento había buscado atenuar esas contradicciones a través de la construcción de una compleja organización en la cual el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG), formado por miembros de las comunidades zapatistas siguiendo el modelo de las asambleas indígenas, se encuentra por encima de la estructura militar. De manera tal que, pese a la estructura jerárquica del EZLN, éste se halla subordinado a las disposiciones de las asambleas comunitarias. A su vez, discursivamente, se había pretendido presentar esta tensión como el sustento de su sorprendente capacidad de cambio. Así, a través de su producción discursiva, es precisamente la cuestión de transformarse a sí mismos el dilema principal del proceso de construcción democrática que impulsa el movimiento zapatista. De todos modos, lo cierto es que, como las propias y propios zapatistas reconocen en la Sexta, la parte militar sigue teniendo un rol importante en la toma de decisiones y representa un fuerte obstáculo para el proceso de democratización por el que ellas y ellos mismos luchan.

Por otro lado, y relacionado con el punto anterior, se viene realizando un nuevo impulso para llevar a la práctica el proyecto democrático, cuyo pilar fundamental se sustenta en el principio de “mandar obedeciendo”. Esta noción implica una dinámica sociocultural que trasciende los límites de la democracia representativa. No se trata simplemente de invertir la relación de representación, sino que el desafío es construir nuevas prácticas y relaciones (entendidas en sentido amplio y en todas las dimensiones de la vida cotidiana). Junto a la construcción de formas de autogobierno, se ha avanzado en la impartición de justicia y en la creación

de programas de salud y de educación propios, incrementándose asimismo la participación de los miembros de las comunidades en la toma de decisiones (Martínez Espinoza, 2007). Al mismo tiempo, las JBG tienden a ampliar los beneficios de la autonomía a todas y todos los miembros de la comunidad sin distinción de filiación política, a fin de intentar reducir las confrontaciones que en algunos casos se producen entre zapatistas y no zapatistas.

Así, si bien las JBG derivan del proceso generado en las comunidades zapatistas de Chiapas, no sólo procuran resolver los problemas y distorsiones que se venían produciendo en los municipios autónomos a través de un salto cualitativo en el ejercicio de la autonomía. También se proponen ir más allá:

[Con] la construcción de las Juntas de Buen Gobierno, se avanza en la autonomía indígena y el EZLN ya se presenta como una alternativa no sólo en la palabra, sino también en la práctica. No estoy hablando de un ejemplo a seguir ni de una guía para la acción, sino como un referente. El EZLN tiene un perfil político práctico que ofrecer a la hora que dialoga con otros. Un referente político-práctico, civil y pacífico, porque el referente que teníamos era el de una organización armada, el de que había que organizarse y levantarse en armas. La creación de las JBG y los municipios autónomos significan ya otra alternativa, otra opción o referente para la sociedad (Subcomandante Marcos en Muñoz Ramírez, 2004:286).

Las JBG aparecen así como una alternativa, como la posibilidad de llevar a la práctica otro tipo de relaciones e instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. Pero, como reconocen las y los zapatistas en la Sexta, no pueden solos. La realización de este proyecto depende de

una multiplicidad de factores, que no todos están al alcance de ellas y ellos mismos. Héctor Díaz-Polanco sostiene que la importancia de las Juntas de Buen Gobierno radica “en que trasciende o puede trascender la particular realidad chiapaneca” (Díaz-Polanco, 2006:46). Para este investigador, la creación de instancias autonómicas a nivel regional es la expresión más clara de que las autonomías no pueden concebirse como pequeñas entidades aisladas, sino que requieren articular y coordinar esos esfuerzos a través de un gran movimiento político, social y cultural para avanzar en la construcción de un proyecto democrático para cada vez más amplios sectores de la sociedad. De ahí que, así como la Sexta no puede pensarse sin el proceso de construcción de autonomías, éste se relaciona estrecha y recíprocamente con aquélla y con la propuesta de la otra campaña.

La búsqueda de articulación de las resistencias: la otra campaña

La Sexta Declaración aparece, a su vez, como expresión de la necesidad política de superar el aislamiento y la vulnerabilidad en la cual se encuentra el movimiento zapatista desde hace un tiempo. Las y los zapatistas son conscientes de que el conflicto ha perdido cierta centralidad y, al igual que en los años posteriores a los Acuerdos de San Andrés, saben que el aislamiento político puede ser aprovechado para el recrudecimiento de las hostilidades por parte de grupos políticos, militares y paramilitares. De ahí que la declaración surja como un “nuevo paso adelante en la lucha indígena [que] sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados” (EZLN, DSL6, 2005). Para ello, se convocó a la realización de una serie de encuentros con distintos

sectores y personas en todo el territorio mexicano, en el marco de una “campana nacional con otra política, por un programa nacional de lucha de izquierda y por una nueva Constitución”, más conocida como la otra campana.

La propuesta retoma así la línea plateada desde la Segunda Declaración y que se mantuvo en las siguientes dos declaraciones: la construcción de un amplio frente político y social que luche por la democratización de México y la convocatoria a una asamblea constituyente que sancione una nueva Constitución. Sin embargo, no hay que ver una línea total de continuidad. La Sexta implica un cambio cualitativo: a partir de esta última declaración y de la otra campana se busca la construcción de un movimiento que supone una ampliación, ya no sólo discursivamente, más allá de lo indígena que se había constituido en el eje estructurador del proyecto político zapatista durante los últimos años, pero también más allá de Chiapas, para alcanzar una presencia a nivel nacional.

A medida que se fue avanzando en el recorrido de la otra campana, durante 2006 y parte de 2007, se fue conociendo y enriqueciendo la visión sobre los grupos, organizaciones, personas, sus resistencias, sus historias, sus situaciones y sus esfuerzos, en muchos casos dispersos, aislados y poco conocidos a nivel de los grandes medios de comunicación. El recorrido fue asimismo mostrando la riqueza y diversidad de historias, contextos y concepciones ideológicas que existen entre los distintos grupos. En ese contexto, el proceso de echar a andar la otra campana significó un proceso de enseñanza y aprendizaje en varios sentidos y direcciones. Antes que nada, supuso aprender a escuchar, puesto que

no basta sólo con respetar las palabras de las otras y otros, sino también comprenderlas y tomarlas en cuenta. Pero no sólo eso. También se trata de aprender entre todos y todas a relacionarse de otra manera. Gran parte de las primeras reacciones frente a la alerta roja de junio de 2005 y la aparición de la Sexta Declaración que se generó entre varios grupos y simpatizantes había sido cómo apoyar ahora a las y los zapatistas. Pero a diferencia de la DSL1 que termina con un “Intégrate a las fuerzas insurgentes del EZLN” o de lo que venía dándose en los últimos años y, sobre todo, a partir de la DSL5 donde se pedía la solidaridad con la lucha por los pueblos indios, con la Sexta y la otra campana hay un cambio significativo en el proyecto político, en el cual se insistió reiteradas veces a lo largo del recorrido:

No venimos como otras veces a decir apóyenos, simpatiza con nuestra lucha. Venimos a decirles: vamos a unir nuestra lucha, tú como joven, como mujer, como maestro, como trabajador agrícola, como estudiante, como trabajador del mercado, transportista –lo que sea cada quien-, vamos a unir nuestras luchas, y vamos a echar acuerdo para juntos empezar a transformar [...] (EZLN, Reunión en Parque Centenario, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de enero de 2006).

No resulta arbitrario trazar ciertas similitudes entre la dinámica de hablar, escuchar y aprender que se fueron entrelazando para dar forma al propio EZLN durante los años de trabajo clandestino en Chiapas y el proceso que ahora están llevando adelante en todo el territorio nacional. Ambos procesos buscan conocer y articular distintas resistencias y proyectos concretos para avanzar juntos en la transformación de la sociedad.

La Sexta Declaración y la otra campaña fueron redefinieron el trabajo de muchos grupos, potenciándolo, al abrir un espacio de comunicación, conocimiento e intercambio con otras experiencias y organizaciones en todo el país, muchas de las cuales eran poco o prácticamente nada conocidas previamente (Entrevista con el colectivo Jóvenes en Resistencia Alternativa, Ciudad de México, 23/09/2007). A su vez, la iniciativa zapatista puso en discusión las formas organizativas, la cuestión de la representación, la relación con las instituciones y partidos políticos y, por lo tanto, la necesidad de definirse hacia dentro de muchas de esas organizaciones y colectivos, llevándolas asimismo a analizar las lógicas que subyacen a dichas definiciones (Entrevista con David, Ciudad de México, 12/09/2007).

Sin embargo, la diversidad de experiencias, historias y posiciones dentro de la otra campaña no ha dejado de plantear algunos desafíos. A la par de las diferencias, también han ido apareciendo ciertos dogmatismos y sectarismos, subyacentes en distinto grado y más o menos abiertamente en el lenguaje, actitudes y recelos entre los grupos y personas, que dificultan “llevar a la práctica el rollo de escuchar al otro” (Intervención de un miembro de un colectivo de Querétaro en el «El Otro Seminario», Querétaro, 09/09/2007).

Una de las tensiones que ha mostrado más claramente la otra campaña es que varios de los elementos del proyecto zapatista quizás “cierran bien en lo discursivo, pero cuesta llevarlos a la práctica y a la construcción concreta” (Intervención de un participante en «El Otro Seminario», Querétaro, 09/09/2007). Precisamente, al igual que en el caso de las comunidades indígenas en Chiapas, el

principal desafío interno que enfrenta el movimiento zapatista en el proceso actual es llevar a la práctica los principios que forman parte de su proyecto político.

Junto a estos desafíos, la iniciativa zapatista ha tenido que enfrentar algunos elementos no previstos en el contexto en el cual se desarrolló y procura incidir. Los conflictos sociales desatados en San Salvador Atenco y en Oaxaca durante 2006 alteraron la otra campaña, no sólo al reducir la ya escasa cobertura de los medios de comunicación que resultaba fundamental para la visibilización de las distintas luchas, sino también porque dichos acontecimientos desataron un fuerte proceso de criminalización de la protesta social y aumento de las prácticas represivas del Estado. A su vez, la campaña electoral y los conflictos electorales también modificaron el esquema en que fue pensada la otra campaña y la dinámica de la confrontación social. En la percepción de muchas mexicanas y mexicanos, la lucha electoral adquirió un atractivo inusitado en la política mexicana puesto que se constituyó como la disputa entre dos proyectos de país representados por López Obrador y Calderón. En tal contexto, el discurso zapatista contra los partidos políticos y, especialmente, las críticas hacia López Obrador terminaron alejando a varios participantes de la otra campaña y a un sector de la intelectualidad que en el pasado había apoyado al zapatismo. Finalmente, tras la asunción de Calderón, y bajo el argumento de la guerra contra el narcotráfico, se incrementaron la militarización, las agresiones y las presiones contra las comunidades indígenas chiapanecas, obligando a las y los zapatistas a suspender el recorrido de la otra campaña.

De todos modos, resulta equivocado pensar que porque se ha interrumpido el recorrido de la Comisión Sexta, el proceso de la otra campaña también se encuentra detenido. Cabe recordar que, si bien el EZLN es quien lanzó la iniciativa, la dinámica se sostiene a través del trabajo, a veces silencioso y sin la mirada de los medios de comunicación, de todos los grupos, organizaciones y personas que adhirieron a la Sexta Declaración y participan del proceso. Uno de los aciertos y fortalezas de la otra campaña es justamente el énfasis dado al trabajo, con o sin las y los zapatistas, “en el nivel local, con nuestros propios medios. Sobre todo evaluarnos, criticarnos, mirarnos al espejo y preguntarnos lo que somos, lo que sabemos hacer, lo que estamos haciendo, lo que llevamos hecho, lo que podemos hacer más adelante, fijar objetivos, pues” (Rojo, 2006).

Algunas reflexiones finales

El movimiento zapatista, a través del énfasis puesto en los elementos simbólicos y discursivos, ha contribuido fuertemente en la emergencia de espacios de nuevas subjetividades y sociabilidades. Quizás en estos elementos radique una de sus mayores aportaciones. Mucho más si se lo piensa en el contexto mexicano, marcado por una cultura política fuertemente paternalista, jerárquica y estatal, la emergencia de ideas y prácticas que buscan la autonomía, la horizontalidad y la multiplicidad representan un más que elocuente cambio cultural.

Sin embargo, como las y los zapatistas lo reconocen en la Sexta, más allá de los avances que consiguieron, lo cierto es que no han logrado muchas de sus demandas. De ahí que hayan decidido dar un nuevo salto, tendiente a

superar ciertas tensiones y limitaciones encontradas, con el fin de plasmar su proyecto político a través de dos procesos complementarios: la consolidación de las autonomías en las comunidades indígenas de Chiapas y la articulación de las distintas luchas y resistencias, no sólo desde la perspectiva de que la unidad hace la fuerza, sino como posibilidad de complementarse y aprender de las experiencias de otras y otros para avanzar en la transformación de la sociedad.

A partir de estos cambios que se encuentran en el centro de la Sexta Declaración se refuerza una lectura del cambio a partir de las prácticas sociales en el ámbito de la vida cotidiana, y no desde las instituciones. La idea es ir abriendo y articulando espacios de nuevas sociabilidades, a través de cambios en las subjetividades y en las prácticas.

Con todo, una de las cuestiones principales es precisamente cómo efectivamente acompañar, articular y complementar las múltiples luchas y experiencias dispersas en las distintas partes de México. Y en este punto, quizás, reside uno de los desafíos más grandes que tiene actualmente el movimiento zapatista: justamente tratar de llevar a la práctica su propio proyecto político que, previamente, se había sustentado sobre todo discursivamente. Como advierten las propias y propios zapatistas y otros colectivos y personas en la otra campaña, el problema ahora no está en decir, sino en hacer, en buscar las maneras de plasmar su proyecto político en las prácticas y la construcción concretas.

Bibliografía

- Austin, John (1982), *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona, Paidós.
- Bellinghausen, Hermann (2005), “La lenta digestión de la palabra zapatista”, en *Colectivo Situaciones*, Bienvenidos a la Selva. Diálogos a partir de la Sexta Declaración del EZLN, Buenos Aires, Tinta Limón, pp. 243-251.
- Ceceña, Ana Esther (2001), “El dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla Panamá y no de los derechos indígenas”. Disponible en: <http://www.ezln.org> [Consultado el 28/08/2001]
- Dagnino, Evelina (2004), “La convergencia perversa”, en Alejandro Grimson (comp.), *La cultura en las crisis latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 195-216.
- De la Rosa, Isabel (2006), “¿Qué es el zapatismo? La construcción de un imaginario rebelde (1994-2001)”, en *El Cotidiano* N° 137, vol. 21, México, mayo-junio, pp. 7-17.
- Díaz Polanco, Héctor (2006), “Caracoles: la autonomía regional zapatista”, en *El Cotidiano*, vol. 21, N° 137, México, mayo-junio, pp. 44-51.
- Duhalde, Eduardo y Dratman, Enrique (1994), *Chiapas: la nueva insurgencia. La rebelión zapatista y la crisis del Estado mexicano*, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional.
- Jóvenes en Resistencia Alternativa (2007), “Sobre la estructura de la otra campaña en el DF”, ponencia presentada en la Mesa 3 de las Jornadas por la libertad de las y los presos políticos, México, mayo.
- Le Bot, Yvon (1997), *Subcomandante Marcos. El sueño zapatista*, México, Editorial Plaza & Janés.
- Leyva Solano, Xóchitl (1999), “De las Cañadas a Europa: niveles, actores y discursos del nuevo movimiento zapatista (1994-1997)”, en *Desacatos* N° 1, CIESA, México, pp. 56-87.
- Leyva Solano, Xóchitl y Sonnleitner, Willibald (2000), “¿Qué es el neozapatismo?”, en *Espiral* N° 17, vol. VI, México, enero-abril, pp. 141-160.
- Martínez Espinoza, Manuel (2007), “Democracia en rebeldía: Las Juntas de Buen Gobierno del movimiento zapatista”, ponencia presentada en el V Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas, Bruselas, abril.
- Melucci, Alberto (1999), “Teoría de la acción colectiva”, en *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, México, El Colegio de México, pp. 25-54.
- Muñoz Ramírez, Gloria (2004), *EZLN: el fuego y la palabra*, Tinta Limón, Buenos Aires.
- Pérez Ruiz, Maya Lorena (2006), “El EZLN y el retorno a su propuesta radical”, en *Cultura y representaciones sociales*, año 1, N° 1, México, pp. 33-65.
- Pineda, Enrique (2005), “Tres bifurcaciones para entender al zapatismo”, en *Revista Contracultural*, Buenos Aires, julio.
- Rodríguez Araujo, Octavio (2005), *Mi paso por el zapatismo (Un testimonio personal)*, México, Océano.
- Rojo, C. (2006), “¿Qué pasa con la Otra Campaña?”, en *Zapateando*, 2006. Disponible en: <http://zapateando2.wordpress.com/2006/08/25/%c2%bfque-pasa-con-la-otra-campana/> [Consultado el 17/03/2008]
- Sigal, Silvia y Veron, Eliseo (2004), “Introducción”, en *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*, Buenos Aires, Eudeba, edición revisada y ampliada.
- Subcomandante Marcos (2007), “Balance de la Otra campaña (diciembre de 2006)”, entrevista de Raymundo Reynoso, en *Contrahistorias* N° 8, México, marzo-agosto, pp. 57-72.

Movimientos sociales en Bolivia. Las Juntas Vecinales de El Alto entre la institucionalidad y la rebelión.

Melina Deledicque⁷⁶ y Daniel Contartese⁷⁷

Resumen

En los últimos años el pueblo boliviano ha sido protagonista de grandes luchas cuyo eje central ha sido la “guerra” contra el saqueo de las riquezas naturales. En El Alto las Juntas Vecinales han tenido un papel fundamental como actores centrales de las mismas, en un proceso que combina un movimiento contradictorio entre la institucionalización y normalización conflictiva, por un lado, y la rebelión y confrontación desde la autonomía, por el otro. A partir de una serie de entrevistas semi-estructuradas a protagonistas de ese proceso en El Alto, en este trabajo abordamos esa dinámica particular que involucra a las Juntas Vecinales en su relación con el Estado.

Palabras clave: autonomía, Juntas Vecinales, Bolivia

Abstract

In the last few years the people of Bolivia have been protagonist of great struggles whose main theme has been the “war” against the plundering of natural riches. In El Alto the Juntas Vecinales (neighborhood committees) have had an important role as central actors in those struggles, in a process that combines a contradictory movement between the institutionalization and conflictive normalization, on the one side, and rebellion and confrontation from their autonomy, on the other. From a series of semi-structured interviews to actual participants of this process in El Alto, in this article we analyze this particular dynamics that involves the Juntas Vecinales in their relationship with the State.

Key words: autonomy, Juntas Vecinales, Bolivia

Recibido: 03.08.2009 Aprobado: 24.11.2009

⁷⁶ Estudiante avanzada de la Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Email: melinadele@yahoo.com.ar

⁷⁷ Licenciado en Sociología, Docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Email: contarlari@yahoo.com.ar.

Introducción

Bolivia es un país donde alrededor del 80% de su población tiene ascendencia indígena. Por ello la participación de estos fue y es un ingrediente indispensable en los distintos cambios históricos que se sucedieron. La presencia indígena no se limita solamente a las zonas rurales sino que se ha incorporado de manera importante en los espacios urbanos, manteniendo en la mayoría de los casos sus costumbres ancestrales de organización y lucha.

Esta situación se ve reflejada en las Juntas Vecinales, especialmente en El Alto, punto central de las más importantes rebeliones sociales de este país en los últimos años. Estas organizaciones vecinales, que actualmente tienen un funcionamiento legal e institucionalizado, conservan en un grado importante las prácticas tradicionales, algo que se advirtió claramente en su participación en los distintos levantamientos populares en los que han sido protagonistas. Justamente en este trabajo intentamos analizar este proceso y como las Juntas han participado en distintas luchas contra el neoliberalismo y la colonialidad del poder.

Una de las características importantes con relación a la participación de los movimientos sociales en los últimos años es que a partir de la crisis del movimiento obrero y de la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación se produjo una territorialización de los movimientos, es decir un arraigo de los mismos en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas abiertas o subterráneas, respondiendo a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda. Las Juntas

Vecinales de El Alto son un claro ejemplo de ello (Zibeche, 2006).

Este artículo se basa en un trabajo de campo realizado durante el mes de junio de 2008 en la ciudad de El Alto donde se hicieron observaciones y entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron a presidentes de Juntas Vecinales, Comités de Vigilancia, organizaciones de trabajadores, de la Federación de Juntas Vecinales, del Gobierno Municipal y otros informantes claves. Asimismo se realizaron distintas observaciones no participantes en movilizaciones, seminarios, ampliados, reuniones de presidentes de Juntas Vecinales, entre otras.

La ciudad de El Alto

El territorio que ocupa en la actualidad la ciudad de El Alto tiene una importancia central en la historia contemporánea de Bolivia. Desde este lugar en dos oportunidades se realizaron cercos a la ciudad de La Paz. La primera vez en 1781 dirigidos por Tupac Katari; la segunda, en 1899 en la llamada Guerra Federal. En esta oportunidad El Alto se convirtió –bajo el liderazgo de Pablo Zárate Willka- en una muralla humana para impedir el paso de las tropas constitucionalistas. Por otra parte, la ciudad de El Alto tiene una importancia geoestratégica fundamental ya que está situada a treinta minutos de La Paz, capital de la República de Bolivia, y es la puerta de entrada o salida hacia el altiplano sur y norte y paso obligado hacia las Yungas (donde hay producción de coca y frutas) y la amazonia.

El desarrollo de la ciudad comienza en la década del 30 cuando se instalan los primeros pobladores, pero es en la década del 50 cuando comienza

un crecimiento vertiginoso alimentado por dos grandes procesos migratorios.

El primero ocurrió entre 1956 y 1976 debido a que la Reforma Agraria de 1953 impuso un sistema de minifundios que empequeñeció las parcelas de las unidades productivas familiares. En ese período la población de El Alto se multiplicó quince veces, alcanzando los 95.000 habitantes. Este proceso fue protagonizado especialmente por los campesinos aymaras y quechuas pero también por el desborde de la población más pobre de La Paz que no podía acceder allí a una vivienda (obreros, maestros, empleados) (Puente y Longa, 2007).

En 1985 comenzó la segunda ola migratoria con la implementación del modelo neoliberal: miles de mineros fueron separados de su fuente de trabajo y migran orientándose hacia los sectores del comercio y del transporte. También muchos se trasladan por las sequías que se produjeron en 1982 a causa del fenómeno de El Niño (Arbona, 2002).

La tasa de crecimiento de la población de El Alto es del 6,4% anual, una de las más altas del mundo. Además esta ciudad tiene la mayor densidad de población de todas las secciones de provincia de Bolivia: 1920 habitantes por kilómetro cuadrado, según el Censo de 2001. La migración acelerada y desordenada provocó innumerables problemas de infraestructura: hay problemas con la energía eléctrica, el agua y los servicios más esenciales (Mamani Ramírez, 2005.a). El crecimiento de esta población provocó que en 1988 obtuviera el rango de ciudad independizándose de La Paz en el aspecto político. Es importante señalar que en primer lugar el Parlamento Nacional votó la ley de creación de la cuarta sección municipal y luego se elevó a El Alto al grado de

ciudad. Ambas conquistas fueron logradas gracias a gigantescas movilizaciones y paros cívicos contundentes.

La población de esta ciudad tiene características particulares: el 81,29% de la población alteña se identifica como indígena y el 74% se identifica específicamente como aymara. Por otro lado, es una población muy joven: el 60% son menores de 25 años y sólo un 10% tiene más de 50 años de edad (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001).

En una dimensión identitaria urbana, la relación de El Alto con la ciudad de La Paz y otras ciudades manifiesta situaciones de “racismo latente e indiscriminado”, cuyas imágenes van naturalizando y perpetuando las diferencias sociales al establecer fronteras como fundamento de las prácticas sociales. Es decir, que la relación entre los alteños y los paceños está determinada por la alta tensión que refleja la discriminación étnica y la diferencia económica. Los primeros “son vistos como personas peligrosas, como delincuentes” (Arbona, 2002 y Revilla Herrero, 2006).

Como señala Arbona (2005) “El Alto es prácticamente un emblema de la exclusión racial y económica en Bolivia”. En efecto, la pobreza urbana en el departamento de La Paz afecta al 50,9% de los habitantes y una gran proporción de estos se concentran en El Alto. En El Alto se encuentran los mayores índices de trabajo infantil y el promedio más alto de personas ocupadas por hogar. Según el Censo Nacional de Población 2001, el 83,4% de los hogares está por debajo de la línea de pobreza y la mitad de éstos últimos en la indigencia.

El Ajuste Neoliberal en Bolivia

En 1982 con la recuperación de la democracia en Bolivia se establecieron dos rasgos principales que iban a signar el futuro del país hasta principios del siglo XXI. Por un lado, la democracia formal y por otro, la economía de mercado. En este país, como en el resto de América por esos años, se llevó adelante un ajuste neoliberal, en este caso mediante la aplicación ortodoxa de las políticas del Consenso de Washington que privilegiaron la estabilidad de precios y los intereses del capital antes que el bienestar de la población (Arze Arce, 2005). Debido a ello se agudizó la desigualdad, aumentando la intensidad de los niveles de pobreza. Bajo esta nueva política económica, la protección de la fuerza de trabajo, el nivel de empleo y el nivel salarial fueron reemplazados por un uso flexible de la capacidad de trabajo, eliminando derechos sociales y laborales en favor de la recomposición de la tasa de ganancia y la acumulación del capital (Escóbar de Pabón, 2005).

Una vez recuperada la democracia, el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP) bajo la presidencia de Siles Zuazo no logró éxitos en términos de gobernabilidad. Durante su gobierno, que duró hasta 1985, se produjeron una gran cantidad de protestas y conflictos, un bloqueo parlamentario de las iniciativas del ejecutivo y la más alta inflación en la historia del país (Vargas y Córdova, 2004).

El rápido desprestigio de la UDP amenazó la misma continuidad del régimen democrático y la salida fue el adelanto de las elecciones presidenciales. En 1985 las elecciones dieron la victoria a Banzer de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) pero secundado muy de cerca por Paz

Estenssoro del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); entre ambos alcanzaban el 52% de los votos. Como la diferencia era muy pequeña y Paz Estenssoro contaba con mayoría parlamentaria, por un acuerdo, este último asumió la presidencia.

Este gobierno contó con un importante apoyo de los empresarios. Esto se debió a que los nexos entre la ADN y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia eran fluidos desde la fundación del partido, al punto que podría decirse que la ADN es, en realidad, el partido de los empresarios en Bolivia (Palermo, 1990). El gobierno de Paz Estenssoro llevó adelante la implementación de la Nueva Política Económica (NPE) cuyos ejes centrales fueron los siguientes: la eliminación de subvenciones estatales, el despido masivo de trabajadores (en especial del sector minero), la privatización de las principales empresas estatales, la reorganización del Banco Central y la reforma del sistema de pensiones.

El programa de ese gobierno tiene fundamental importancia para comprender lo que sucedería a partir del año 2000. Éste fue presentado como un plan político dirigido a reestablecer la autoridad del Estado sobre la sociedad. Por ello su primer objetivo fue eliminar el poder social de los sindicatos. La estrategia de confrontación abierta con las organizaciones obreras tuvo mucho éxito, liquidando en la práctica los recursos tradicionales de poder del sindicalismo boliviano. Esto se pudo lograr gracias a que el mismo fue sometido a un nivel de aislamiento social sin precedentes. De allí que la NPE neoliberal deba ser vista ante todo como un momento de refundación de la autoridad del Estado.

La primera consecuencia de ello fue la rápida estabilización de la economía con una reducción del déficit fiscal –que pasó del 27,4% del PBI en 1984 al 2,7% en 1986- y una baja en la inflación del 15000% al 11% en dos años (Ibáñez Rojo, 1993). Pero tras el éxito inicial de la estabilización, el modelo económico se mostró absolutamente ineficaz para superar el persistente estancamiento de la economía y esto produjo un empeoramiento en las condiciones sociales de la población. En efecto, a partir de la aplicación de estas políticas el desempeño del mercado de trabajo y el empleo fueron negativos lo que provocó la expansión sin precedentes del nivel de desocupación (que alcanzó el 13% de la PEA). Las características generales de esa situación pueden ser descritas de la siguiente manera: insuficiencia en la generación de empleos en el sector privado de la economía, baja calidad de los nuevos empleos, deterioro de los salarios reales que nunca recuperaron los niveles previos a la crisis de la década del ochenta, y aumento del empleo bajo contrato civil en sustitución del contrato laboral. Este proceso provocó un fuerte crecimiento de la ocupación en el sector informal y en las actividades terciarias caracterizadas por la baja productividad. En definitiva, se produjo una amplia difusión del trabajo precario.

Las Juntas Vecinales

La cultura política de El Alto está personificada principalmente por dos entidades: los partidos políticos y las llamadas Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), como se denomina formalmente a las Juntas Vecinales. Ambos grupos de instituciones definen los espacios y las formas en que los alteños se relacionan con la política. Representan dos

circuitos entrelazados e interdependientes de poder que establecen cómo los bienes canalizados a través del gobierno municipal se distribuyen, es decir, quiénes se favorecen de los recursos limitados administrados por el gobierno local.

La ciudad es un espacio rico en experiencias de organización social: las juntas vecinales, las organizaciones de trabajadores asalariados, los gremiales, las asociaciones de pequeños empresarios, grupos culturales, estudiantes, etc. Es un espacio urbano complejo y dinámico donde se presenta un proceso de producción de la vida social urbana indígena-popular relacionada con las propias estructuras internas de las organizaciones barriales, las experiencias de la vida cotidiana y los sistemas de interrelacionamiento barrial. Como señala Albó (2006) “prácticamente no hay sector alteño cuyos vecinos no formen parte de alguna asociación de vecinos, aunque después participen poco en sus reuniones”. Esto se encuentra relacionado con la herencia cultural rural.

De esa manera la ciudad se va organizando desde sus viviendas, pasando por los jefes o jefas de calle o de manzana, por la junta de cada zona y barrio, hasta la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto. La intervención de las Juntas en el barrio es muy importante. Así, como sucede en el área rural, la participación en asambleas cuenta como unidad doméstica y no como persona. Es decir que cada vivienda debe estar representada por una persona.

Con relación a la participación de la población, existen dos tipos de reuniones barriales, las que tienen lugar según fechas regulares y las que se convocan con carácter de urgencia. En

las primeras se tratan temas relacionados con infraestructura, equipamiento o servicios para el barrio, la elección de la comisión directiva o delegados a los congresos de la FEJUVE, etc. En cambio, las segundas se convocan para resolver algún conflicto barrial o para intervenir en un conflicto más amplio, departamental o nacional (Flores Vásquez y otros, 2006).

Las Juntas Vecinales nacen en la década del 50 y tienen una larga historia pero es la Ley 1551 de Participación Popular (LPP) de 1994 la que legaliza su funcionamiento. Estas se constituyen como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) con funcionamiento autónomo del Estado y son autosustentadas. En El Alto se distribuyen en los distritos de la región más populosa y combativa de Bolivia.

Los aspectos centrales de la LPP son (Regalsky, 2005; Pérez Mamerto, 2006): define una nueva jurisdicción territorial de los municipios, ampliándola a todo el ámbito de las secciones de provincia, articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país; otorga a las alcaldías el 20% de los ingresos del tesoro nacional en calidad de coparticipación tributaria en los impuestos internos, de los cuales el 90% debe ser utilizado en inversión y no puede usarse en gastos corrientes; reconoce la personería jurídica de las OTBs, que deben elegir un representante por cada distrito o cantón para conformar un Comité de Vigilancia ante el municipio; transfiere al gobierno local la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, etc., con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla; fortalece la democracia participativa,

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades.

El sentido práctico de esta ley fue fortalecer el Estado local intentando neutralizar el mini-Estado paralelo de las comunidades indígenas. Por ello las entidades campesinas vieron en la misma un intento de minar a sus organizaciones y comunidades en sus formas propias de organización y de control del espacio, es decir, un intento por socavar su autonomía. Si bien los movimientos indígenas se opusieron de manera activa a la ley, fracasaron, pese a que la convocatoria a bloqueos fue acatada por buena parte de las comunidades campesinas, sobre todo en la región cordillerana quechua.

Con la LPP se rompe, por primera vez, con el esquema comunitario de control colectivo sustentado en la rotación de autoridades, donde no rige la lógica de la ganancia a la hora de ocupar cargos públicos y donde no es la riqueza económica lo que lleva a obtener réditos políticos. Según Patzi Paco (2006) con el paulatino desmantelamiento del antiguo sistema de autorregulación comunal aparecen las elites rurales que ahora se van a dedicar a la política, trasladando a lo local la lógica de ganancia del sistema liberal, que sustituye la lógica del servicio. Es decir que a partir de la aplicación de la LPP convertirse en administrador público se presenta –cada vez más– como una oportunidad de enriquecimiento y no como un servicio.

Sin embargo, la ley no detuvo el desarrollo de las organizaciones de base. En 1988 El Alto contaba ya con 180 Juntas Vecinales, alrededor de una cada dos mil habitantes; en 2004 esta cantidad ascendía a 540 Juntas, con una densidad de una cada 1.350 habitantes. En la actualidad alcanza a 590 Juntas.

Las luchas contra el ajuste neoliberal

Para Regalsky (2006) la situación que atraviesa Bolivia desde el año 2000 es el resultado de un entramado de procesos, de los cuales pueden citarse tres principales: la emergencia de los pueblos indígenas, sus organizaciones y su lucha por territorios y autonomía desde los años 80; la organización -desde 1995- del instrumento político de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que luego deriva en el MAS, hasta el triunfo en las elecciones de diciembre de 2005; y, un proceso más general referido a la territorialización de los movimientos sociales. A esto es necesario agregar, como señala Oliver (2007/2008), “la descreencia en las promesas del neoliberalismo”.

En el 2000 frente a la percepción del triunfo de la imposición de las políticas económicas liberales, el país “estalla”. Uno de los principales protagonistas de esta sublevación fue el movimiento aymará que realiza su movilización a partir de bloqueos de caminos. Esta es una técnica de lucha que consiste en ocupar los territorios mediante la movilización de las redes comunitarias. En el 2000 –por primera vez en muchos años- los pueblos originarios pusieron en jaque al gobierno paralizando la parte occidental del país. Ese año comenzó la rebelión del pueblo boliviano con sucesivos levantamientos –que tomaron el nombre de “guerras”- contra la dominación neoliberal en un Estado que no había perdido su matriz colonial. Así es que se fueron sucediendo: la guerra contra la privatización del agua en Cochabamba en el año 2000, la guerra en defensa de los plantíos de coca en el Chapare contra el ejército y la policía en enero

de 2003 (con un saldo de más de 30 muertos), la guerra del gas en septiembre y octubre de 2003 (con más de 80 muertos), que finaliza con la toma indígena de La Paz y la caída del gobierno nacional, y la segunda guerra del agua en El Alto (Gilly, 2004). Estas dos últimas tuvieron al pueblo de El Alto y sus Juntas Vecinales como uno de sus principales protagonistas.

En el período 2000/2003 una red de activistas sociales, independientes o ligados a organizaciones comunitarias y corporativas, se movilizó de manera permanente difundiendo información destinada a reforzar la crítica hacia la manera discriminatoria y elitista con que los distintos gobiernos habían encarado la gestión de los recursos naturales. En 2003 este trabajo más invisible, junto con la labor de los líderes opositores y la memoria histórica del despojo marítimo, hizo que la negativa a la exportación de gas por y a Chile, se transformara en una eficaz consigna movilizadora. El levantamiento se inició el 8 de octubre de 2003 exigiendo la no venta del gas por puertos chilenos, pero luego a esto se sumó el pedido de modificación de la Ley de Hidrocarburos y la oposición al ingreso al ALCA, finalizando en la exigencia de renuncia del presidente Sánchez de Losada y la nacionalización del petróleo.

En octubre de 2003 surgió un movimiento urbano multiforme que expresó el gigantesco descontento social. Un rasgo de esa movilización fue el ataque a todos los símbolos y sedes del poder. El gobierno y el propio Estado desaparecieron de la ciudad de El Alto durante los días de la rebelión popular. La situación se agravó cuando se produjo el cerco de La Paz, reeditando en el imaginario popular la epopeya de Tupac Katari. la ciudad

quedó completamente desabastecida; inclusive los organismos de represión carecían de combustible para su movilidad. La Paz quedó bajo el cerco aymara, el cierre de caminos y la huelga general, donde no se permitía la entrada a la ciudad de alimentos ni mercancías ni combustible. Mientras tanto desde el sur, cerraron el cerco y avanzaron sobre la ciudad las comunidades de los valles (los comuneros de Ovejunos).

Para romper el cerco, hacer un escarmiento y permitir el ingreso de mercaderías y combustible, el día 12 de octubre el gobierno nacional decidió la represión militar a las masivas manifestaciones de El Alto provocando decenas de muertos. Esto repercutió en todo el país, donde se multiplicaron las manifestaciones, y provocó la ruptura del frente gubernamental. Finalmente el alzamiento popular triunfa al provocar la caída del presidente Sánchez de Losada. No cabe duda que desde el poder no se veía otra posibilidad que la represión, ya que la ciudad de El Alto se encontraba asombrosamente organizada, con bloqueos de calles y avenidas, juntas vecinales en cada manzana, vigiliadas voluntarias en las esquinas, barricadas, radios independientes transmitiendo las 24 horas, guardias populares para evitar saqueos a los negocios, asambleas en las calles, en los locales sindicales y las parroquias (Gilly, 2004).

En estas movilizaciones fueron las juntas de vecinos y no las organizaciones tradicionales las que articularon el movimiento. Por eso el ejército tuvo que lanzarse contra todos, sin poder ir a buscar las inexistentes cabezas del movimiento.

Luego de la caída de Sánchez de Losada, el rechazo y la deslegitimación se trasladó a todos los partidos políticos tradicionales. El escenario

parlamentario se convirtió en el epicentro de los conflictos y la irritación social debido a que desde el mismo se intentaba reconfigurar el poder de estos partidos. Esto provocó un sentimiento de insuficiencia e inconclusión del proceso por parte de los movimientos sociales, dando lugar a un nuevo ciclo de movilizaciones durante mayo y junio de 2005 que volvió a instalar el bloqueo de La Paz, al cual se sumó el bloqueo de Santa Cruz de la Sierra. Este proceso finalizó con la renuncia de Carlos Mesa (vicepresidente que había asumido en el 2003) y desembocó en una nueva sucesión presidencial, la de Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien la 1ra Guerra del Agua (2000, en Cochabamba) fue el punto de partida de un nuevo ciclo en las luchas populares constituyéndose en la primera gran victoria frente al neoliberalismo, pocos años después se desataría la 2da Guerra del Agua (a fines de 2004) con la participación privilegiada y fundamental de las Juntas Vecinales alteñas. A comienzos de 2005 la 2da Guerra del Agua entró en su etapa de definición. El 10 de enero de 2005 se iniciaba el embate final de la FEJUVE-El Alto exigiendo la salida de Aguas del Illimani (concesionaria de la provisión de agua) de la ciudad. Para ello convocó a un paro por tiempo indefinido, que incluía bloqueos y demostraciones pacíficas. El 13 de ese mes los alteños festejaron la expulsión de la empresa. En esta segunda Guerra del Agua, el paro en la ciudad de El Alto fue total, utilizando nuevamente el sistema de participación vecinal y aplicando formas de justicia comunitaria para los que no se involucraban. En este proceso la FEJUVE cuenta con una importante legitimidad como representante de los sectores populares, principalmente por su autonomía frente a los partidos

políticos y la estructura clientelística (Crespo Flores, 2005).

En ambos conflictos El Alto dio un nuevo impulso a los movimientos sociales, fragmentados y neutralizados por las instituciones políticas. Esto se puede advertir en la capacidad para introducir el tema del agua dentro de la agenda de la futura Asamblea Constituyente como tema estratégico prioritario frente a las propuestas privatistas y mercantilistas.

Juntas Vecinales como microgobiernos barriales

Las Juntas Vecinales cuentan con una larga historia en Bolivia y a partir de la Ley de Participación Popular se las ha intentado institucionalizar. Decimos que ha habido intentos de institucionalizarlas porque si bien por un lado esta ley les da un reconocimiento a la hora de tomar decisiones con respecto a una parte de los recursos que las Alcaldías tienen para realizar obras, por otro lado se convierten en organizaciones autónomas en los momentos más álgidos de la lucha, como pudo advertirse en octubre de 2003 durante la llamada Guerra del Gas.

En los levantamientos las Juntas Vecinales se estructuran como organizaciones locales que se movilizan como cuerpos políticos alternativos al orden dominante, superando incluso a la propia FEJUVE de El Alto y a la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, quienes representan a la población en tiempos “normales”. En momentos de vacío de poder, son las Juntas Vecinales las que ocupan ese lugar.

En los momentos de lucha en cada barrio se erigen microgobiernos barriales en los que se toman decisiones políticas. Como señalamos

anteriormente, en la ciudad de El Alto se congregan más de 500 juntas vecinales. De todas ellas en los sucesos ocurridos en el año 2003, con la Guerra del Gas, se han articulado unas cuatrocientas juntas vecinales como microgobiernos barriales organizados en comités de movilización. Esto fue así porque cada barrio había organizado sistemas de acción y control y toma de decisiones autónomas sin perder de vista la demanda común que era la no exportación del gas por puertos chilenos –entre otras demandas- (Mamani Ramírez, 2005). La movilización fue organizada, en primer lugar, por las Juntas Vecinales en coordinación con otras organizaciones locales. En las asambleas que se realizaron se decidió bloquear las avenidas y calles de entrada a los barrios, la realización de vigiliadas en los puntos de bloqueo centrales, y marchas en el entorno barrial (Flores Vásquez y otros, 2006)

Desde el interior de la ciudad estos hombres y mujeres crean poderes difusos, intermitentes, alternos y mortíferos hacia fuera, especialmente para el gobierno. Cada milímetro de la ciudad es parte de este escenario. De esta manera la ciudad de El Alto se convirtió –en ese momento- en una ciudad minada para el movimiento y la legitimidad del Estado. Éste deja de existir por el vaciamiento de su legitimidad, siendo disuelto de facto. Este vacío de poder es rápidamente rellenado por estos mecanismos de acción colectiva con actos contundentes.

Es en este espacio-territorio se conforman comités de vigilia, grupos de control y seguridad de los movilizad@s. Cada miembro de la familia es parte de esta estructura de organización y movilización social. Unos cuidan las casas, los otros están en las calles, el

resto cocina y los que tienen medicina la llevan para curar a los heridos. Por esto las juntas barriales se transforman en una multitud hecha cuerpo político que tiene la capacidad de traspasar fácilmente las fronteras del poder constituido y las fronteras de la tolerancia social. Bajo estas condiciones se legitiman los microgobiernos barriales. Primero, por la contundencia de su acción y organización colectiva. Segundo, porque son el referente de la seguridad de la vida social de los barrios (Mamani Ramírez, 2005).

A partir de la decadencia de los formatos tradicionales de organización y la inadecuación de los partidos políticos y los sindicatos comienzan a surgir nuevas formas de protesta social (Oliver, 2007/8). Las Juntas Vecinales empiezan a ser preponderantes en Bolivia junto a otros movimientos sociales. Por ejemplo, ellas transforman las formas de lucha incorporando a los paros y las huelgas, las marchas que buscan la autoafirmación del colectivo (pueblo, comunidad, etc.), los levantamientos que nacen en los barrios autoconstruidos, los bloqueos de rutas, etc. El bloqueo aymara es una alfombra de piedras, es una tecnología propia que no necesita la presencia humana, las comunidades se van turnando, aparecen y desaparecen y entorpecen el tránsito sin necesidad de poner el cuerpo.

También cambian las formas de organización: deja de existir una separación entre vida cotidiana y “organización”. Siguiendo las tradiciones del movimiento indígena en las Juntas Vecinales hay una baja división del trabajo. Se replican las formas ancestrales de la comunidad como el turno o la rotación, la reciprocidad, y la asamblea que pasan a formar parte del arsenal de las formas de lucha.

La LPP: autonomía y “normalización conflictiva”

Como ya señalamos, la Ley de Participación Popular ha creado mecanismos que modifican las relaciones entre las Juntas Vecinales y el gobierno municipal de El Alto cambiando los márgenes de la autonomía de las primeras. Con esta Ley se amplió la participación política local canalizada institucionalmente. Kohl y Farthing (2007) señalan que la LPP pretendió canalizar la oposición política, tradicionalmente ingobernable a escala local, a fin de contenerla dentro de límites establecidos. Por su parte Espósito y otros (2006) indican que la LPP permite al Estado, a través del diseño de instrumentos artificiales, definir los procedimientos para la participación: sujetos, momentos, funciones, formas de presentar reclamos y ejercer el control social. Estos instrumentos niegan la tradición colectivista de la historia de la participación social en Bolivia, oponiéndole un modelo en el que el individuo sustituye al actor colectivo. Además, crea un sistema de participación altamente restringido centrado en los espacios locales limitando a las organizaciones sociales su capacidad de incidir en otros niveles estatales.

Según algunos de los entrevistados, las distintas gestiones municipales han intentado cooptar, y a veces lo han logrado, a los representantes elegidos al Comité de Vigilancia (CV). Al no existir un control efectivo, el dinero puede ser utilizado muchas veces de manera corrupta. Por otra parte, el CV se ha vuelto también un ente que aplaca la reacción social, desmovilizando a la población. Sin embargo, en las entrevistas también se pone de

manifiesto que la construcción de la autonomía es un proceso contradictorio. La reforma institucional al crear nuevos canales de participación y decisión, da nuevos grados de autonomía pues permite a las Juntas Vecinales decidir directamente sobre cuestiones y problemas respecto a los cuales carecían de injerencia directa.

Las Juntas ganan poder para decidir sobre las obras que se realizarán en su zona, pero simultáneamente enfrentan la tendencia a la desmovilización impulsada por la institucionalización. Se plantea lo que denominamos “normalización conflictiva” (Dinerstein y otros, 2007). Hay un reconocimiento político de las Juntas Vecinales pero ello no elimina el conflicto sino que genera nuevas tensiones entre estas organizaciones y el Estado. Esta “integración” en el Estado no implica su despolitización ya que la institucionalización no puede tener lugar sin el reconocimiento político de los proyectos alternativos y la búsqueda de autonomía de las OTBs.

A pesar del peso de la institucionalización, la creación de la figura de subalcalde elegido por las Juntas Vecinales ha sido un avance que supera la propia Ley. Es a comienzos de 2005 después de diversas medidas de lucha, que los vecinos de El Alto consiguieron imponer que los subalcaldes de los distritos fueran elegidos en un ampliado (asamblea) de las Juntas. Es decir, que se logró que los subalcaldes fueran elegidos en una instancia asamblearia de las Juntas Vecinales, quitándole esa potestad al alcalde. Esta situación, de todas maneras, no es ideal pues operan sistemáticamente mecanismos de cooptación de los referentes de las Juntas Vecinales.

La figura del subalcalde crea un espacio para una doble y contradictoria representación. Todos los subalcaldes son a su vez presidentes de Juntas Vecinales, de manera que deben actuar como representantes de su zona (presidentes de Junta) y como funcionarios municipales (subalcaldes) con una esfera de intervención en todo el distrito. Además de la figura del subalcalde como espacio de doble representación, hay algunos presidentes de Juntas que se desempeñan en otros cargos públicos.

La dimensión autonómica de las Juntas se manifiesta más claramente en la pervivencia de las distintas instancias asamblearias y se cristaliza en la práctica de la “política de las necesidades vitales” (Cabezas, 2007). Ya sea por una participación concreta en la decisión de qué demandas serán satisfechas o en la autogestión de emprendimientos comunitarios, los vecinos de las distintas Juntas Vecinales de El Alto llevan adelante una particular política de autodeterminación con sus límites y potencialidades.

Las Juntas Vecinales y su “política de necesidades vitales”

Thompson (1995) propone que las respuestas de la población frente a los agravios operan dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas son legítimas y cuáles ilegítimas. Esto a su vez se basa en una visión tradicional consecuente de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad. Estas normas, tomadas en conjunto, constituirían una suerte de “economía moral de los pobres”. Ese en ese marco que un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación o agravio en sí mismo,

constituiría la ocasión habitual para la acción directa.

Como ya señalamos la actividad principal que llevan adelante las Juntas Vecinales se plasma en lo que podría denominarse una “política de las necesidades vitales”. Esto significa que ante la privación o falta de servicios básicos, los vecinos se organizan e interpelan al Estado para que satisfaga sus demandas. En algunos casos ante la inexistente respuesta por parte del Estado o de empresas privadas, se autogestionan la provisión de distintos servicios como el agua, alcantarillado, educación, etc. La resolución de las necesidades vitales como iniciativa comunitaria de las Juntas Vecinales tiene que ver con su cotidianeidad.

Ahora bien, tal cual lo propone Thompson (1995), en algunas circunstancias particulares la motivación de las acciones colectivas que realizan los miembros de las Juntas tienen que ver fundamentalmente con una respuesta a lo que interpretan como agravios que violentan lo que consideran derechos o costumbres tradicionales. Tal fue el caso de la lucha contra la imposición del formulario Maya y Paya. La guerra del gas y la segunda guerra del agua también constituyeron claros acontecimientos donde se intentó vulnerar derechos, se visualizó el “agravio” y, por consiguiente, se realizaron medidas de lucha.

Reflexiones finales

El proceso boliviano en los últimos años está atravesado por la disputa por el creciente intento de saqueo capitalista (imperialista) de las riquezas naturales o bienes comunes. Este saqueo implica la apropiación privada, en general en manos de multinacionales, de esas riquezas para

convertirlas en recursos naturales, es decir en valor susceptible de ser a su vez valorizable.

El avance durante los años ochenta y noventa de las multinacionales sobre la propiedad y usufructo de esas riquezas ha teñido la mayoría de los conflictos sociales en Bolivia. El embate sobre las tierras comunitarias, los desplazamientos de población, la apropiación privada de lo común, son todas modalidades de lo que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005), nueva modalidad del imperialismo. Este proceso reproduce de manera ampliada y recurrente lo que Marx denominó “acumulación primitiva u originaria” de capital y expresa que las poblaciones están siendo desposeídas de aquello que les pertenecía colectivamente. A través de nuevos procesos privatizadores, se les está despojando de lo que era propiedad común, comunitaria o pública.

Las Guerra del Gas y del Agua (tanto en Cochabamba como en El Alto) instalaron la discusión a nivel nacional sobre las formas de propiedad y uso de los recursos vitales e iniciaron la construcción de un nuevo polo popular. Los procesos de privatización de empresas estratégicas, iniciados en 1993, han significado para la economía nacional un empobrecimiento del Estado, no han generado los empleos prometidos y si provocaron una pérdida de soberanía – en especial en el control sobre las riquezas naturales- y un aumento en el costo de ciertos bienes y servicios básicos.

De allí que la acción colectiva llevada adelante por las Juntas Vecinales y otras organizaciones sociales de El Alto esta íntimamente relacionada con la lucha contra la privatización de los servicios básicos y

la emergencia de una nueva generación de derechos humanos como el derecho al agua (Cabezas, 2007). Estos nuevos derechos forman parte –en realidad- de la economía moral de los pobladores de El Alto, con un fundamento en el derecho consuetudinario (basado en usos y costumbres), en una particular cosmovisión sobre la relación entre los bienes comunes y los seres humanos, y –consecuentemente- en una forma específica de entender la gestión de lo colectivo.

El 2003 es un punto de quiebre en El Alto, un hito en el ciclo rebelde iniciado en el 2000 no sólo por saldarse con la huida de un presidente del país sino porque también implicó la consolidación de una agenda nacional de cambios estructurales propuesta desde los movimientos sociales, la “agenda de octubre”.

Las Juntas Vecinales pasaron de la institucionalización impuesta por políticas que intentaban cooptar y debilitar su participación, a luchas de resistencia, para finalizar como “movilizaciones sociales de quiebre y reformas al modelo desde abajo” que frenaron y modificaron decisiones gubernamentales (Espósito y otros, 2006). En este sentido es que hablamos de normalización conflictiva pues esa relación que establecen las Juntas Vecinales con el Estado se encuentra en permanente tensión. Por un lado, las JV ganan en poder de decisión en cuanto a la gestión de recursos del Estado municipal y –de alguna manera- son normalizadas e integradas. Por otra parte, sin embargo, no son completamente absorbidas por la estructura estatal y mantienen su poder de confrontación y autonomía (Dinerstein y otros, 2007: 67), el cual se manifiesta más visiblemente en los momentos de las “guerras”.

A su vez, como plantean Kohl y Farthing (2007) en relación a los efectos de la Ley de Participación Popular, el proceso de “democratización” que allí se inició incluyó dos tendencias potencialmente contradictorias que se advierten en las rebeliones de El Alto. Los esfuerzos por descentralizar las funciones de gobierno no sólo no transfieren competencia a los gobiernos municipales, sino que también fragmentan la oposición potencial a los recortes en los servicios públicos. Al mismo tiempo, los programas de descentralización pueden volver a los ciudadanos más conscientes de sus derechos y crear nuevas oportunidades para el surgimiento de luchas de los movimientos sociales que pueden alcanzar el nivel nacional.

El problema es advertir cómo estos movimientos locales pueden articularse con otros de manera nacional para encontrar una salida democrática a los problemas acuciantes de las clases más postergadas de Bolivia.

Bibliografía

- Albó, Xavier (2006), “El Alto, la vorágine de una ciudad única”, *Journal of Latin American Anthropology*, Vol. 11, N° 2, págs. 329-350.
- Arbona, Juan Manuel (2002), “Ver y hacer política en la ciudad de El Alto. Capacidades políticas y actividades económicas”, *Cuadernos de Trabajo*, Bolivia, PNUD.
- Arbona, Juan Manuel (2005), “Los límites de los márgenes. Organizaciones políticas locales y las Jornadas de Octubre de 2003 en El Alto, Bolivia”, *Nueva Sociedad*, 197, pp. 6-15, Venezuela.
- Arze Arce, Gonzalo Horacio (2005), “Los movimientos sociales en la refundación de la democracia en Bolivia”, *Revista América Latina*, Santiago de Chile, Universidad Arcis.

- Cabezas, Marta (2007), "Caracterización del ciclo rebelde 2000-2005", en Iglesias Turrión, Pablo y Espasandín López, Jesús (coords.), *Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político*, España, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo.
- Crespo Flores, Carlos (2005), "Los factores para la expulsión de Aguas de Illimani de las ciudades de La Paz y El Alto", *Observatorio Conflictos y Movimientos Sociales*, Cochabamba, CESU-UMSS/OXFAM GB.
- Dinerstein, Ana Cecilia, Deledicque, L. Melina y Contartese, Daniel (2007), "La impronta de las organizaciones de trabajadores desocupados en Argentina. Una evaluación de su innovación organizacional e incidencia en la recomposición del tejido social y el cambio institucional y de políticas", Documento de Difusión y Reflexión preparado para el Seminario Debate: Reflexiones sobre una trayectoria: El Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina a diez años de su emergencia, Agosto.
- Escóbar de Pabón, Silvia (2005), "Globalización, trabajo y pobreza. El caso de Bolivia", en Álvarez Leguizamón, Sonia (comp.), *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: Estructura, discursos y actores*, Buenos Aires, CLACSO.
- Espósito Guevara, Carla y Arteaga Aguilar, Walter (2006), "Movimientos sociales urbano-populares en Bolivia: una lucha contra la exclusión social, económica y política", mayo, La Paz (Bolivia), UNITAS / Programa Desarrollo del Poder Local.
- Flores Vásquez, J., Herbas Cuevas, I.H. y Huanca, F. (2006), "Participación política de mujeres alteñas en las acciones colectivas y en la vida cotidiana", Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) (<http://www.pieb.org/imaginario/proyecto.html>; 17/11/2008)
- García Linera, Álvaro (2006), "Los movimientos indígenas en Bolivia", en Ezcarza F. y Gutiérrez, R. (coordinadoras), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Bolivia, Gobierno Federal/Casa Juan Pablos, BUAP, UNAM y UACM.
- Gilly, Adolfo (2004), "Bolivia: Una revolución del siglo XXI", Cuadernos del Sur, N° 37, Buenos Aires.
- Harvey, David (2005), "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión", Panitch, Leo y Leys, Colin (eds.), *El nuevo desafío imperial – Socialist Register 2004*, pp. 99-129, Buenos Aires, CLACSO.
- Ibáñez Rojo, Enrique (1993), "¿Democracia neoliberal en Bolivia? Sindicalismo, crisis social y estabilidad", *Revista del EIAL*, N°2, v.4.
- Kohl, Benjamín y Farthing, Linda (2007), *El bumerán boliviano. Hegemonía neoliberal y resistencia social*, La Paz (Bolivia), Plural Editores.
- Mamani Ramírez, Pablo (2005), *Geopolíticas Indígenas*, El Alto (Bolivia), Centro Andino de Estudios Estratégicos.
- Mamani Ramírez, Pablo (2005a), *Microgobiernos barriales*, El Alto (Bolivia), Centro Andino de Estudios Estratégicos/Instituto de Investigaciones Sociológicas IDIS-UMSA.
- Oliver, Lucio (2007/2008), *Clases virtuales*, CLACSO.
- Palermo, Vicente (1990): "Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia", *Desarrollo Económico*, N°119, Vol. 30, Buenos Aires.
- Patzi Paco, Felix (2006), "Las tendencias en el movimiento indígena en Bolivia", en Ezcarza F. y Gutiérrez, R. (coordinadoras), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia*

y proyecto alternativo, Bolivia, Gobierno Federal/Casa Juan Pablos, BUAP, UNAM y UACM.

Pérez, Mamerto (2006), “La Ley de Participación Popular en una perspectiva indígena”, en Grammont, Hubert (compilador), La construcción de la democracia en el campo latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO.

Puente, Florencia y Longa, Francisco (2007), “El Alto: los dilemas del indigenismo urbano. Entre la insurrección y el clientelismo” en Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (compiladores), Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales, Buenos Aires, CLACSO-El Colectivo.

Regalsky, Pablo (2005), “Territorio e interculturalidad: la participación campesina indígena y la reconfiguración del espacio andino rural”, en L. Enrique López y P. Regalsky (compiladores) Movimientos indígenas y Estado en Bolivia, La Paz (Bolivia), PROEIB Andes / CENDA / Plural Editores.

Regalsky, Pablo (2006), “Bolivia indígena y campesina. El gobierno de Evo Morales”, Revista Herramienta, N°31, Buenos Aires.

Revilla Herrero, Carlos (2006), “Representaciones colectivas sobre desarrollo urbano y legitimación en la gestión del Plan Progreso en la ciudad de El Alto”, El Alto (Bolivia), Programa de Desarrollo del Poder Local / UNITAS.

Thompson, E.T. (1995), Costumbres en Común, Barcelona, Crítica.

Vargas, Humberto y Eduardo Córdova E. (2004), “Bolivia: un país de reconfiguraciones. Por una cultura de pactos políticos y de conflictos”, en José Seoane (coordinador), Movimientos sociales y conflicto en América Latina, Buenos Aires, CLACSO.

Zibechi, Raúl (2006), “Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos

inéditos”, OSAL, Año VII N° 21, Buenos Aires, CLACSO.

Biopolítica habitacional. Una mirada sociológica a los sujetos como blancos de los servicios habitacionales.

*Silvana I. Lado*⁷⁸, *Adriana B. Olivera*⁷⁹

Resumen

En el modo de producción capitalista, la “forma” adecuada de proveerse de una vivienda es a través del mercado de tierra y vivienda, mercado que históricamente ha ido expulsando a vastos sectores de la población. La segmentación histórica del mercado de tierras -en su producción y oferta para los distintos sectores sociales - interviene en las posibilidades de representación colectiva de la ciudad y en la legitimación de las prácticas de apropiación del espacio. En este artículo analizaremos cómo se han producido diferentes políticas habitacionales -cada una de ellas construyendo su propia definición de sujetos destinatarios- y cómo se han ido modificando las prácticas de los sujetos que tienen insatisfecha su necesidad habitacional de acuerdo a su capacidad de demanda y organización.

Nuestro recorrido pretende analizar cómo se ha dado este proceso en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina), que presenta como particularidad la contradicción entre la existencia de excedentes de servicios habitacionales destinados a vivienda secundaria ociosa y de alta renta diferencial en oposición al alto déficit de vivienda e infraestructura de servicios destinados a la reproducción de Fuerza de Trabajo para la población estable de la ciudad. Las cuestiones que orientan el trabajo son: ¿cómo han sido conceptualizados los sujetos destinatarios de los servicios habitacionales por las diferentes fracciones de gobierno que conforman el Estado para la implementación de las políticas habitacionales en el último siglo? y ¿Cuáles son las prácticas sociales y estrategias que los diferentes sujetos despliegan con relación a estos servicios? Este proceso se analiza a partir de una perspectiva socio-histórica periodizada en cuatro momentos asociados a los diferentes modelos de acumulación

Palabras claves: Política habitacional - prácticas sociales - estrategias - estatalidad.

Summary

In the capitalist production way, the adequate “form” to provide housing to one-self is through the land and housing market. Historically this market has been expelling vast population sectors. The historical segmentation of the land market - in its production and supply for the different social sectors - takes part in the possibilities of collective representation of the city and in the legitimation of the appropriation practices of the space. In this article we will analyze how different housing policies have taken place -

⁷⁸ Lic. en Sociología (UBA) investigadora del grupo GISAU (Grupo de Investigación en Socio-Antropología Urbana)- CEDU (Centro de Estudios del Desarrollo Urbano) HIC (código es: ARG-MO-047), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), Prof. Titular de Sociología - Facultad de Humanidades, UNMdP.

⁷⁹ Arquitecta (UNMdP), investigadora del grupo GISAU (Grupo de Investigación en Socio-Antropología Urbana)- CEDU (Centro de Estudios del Desarrollo Urbano) HIC (código es: ARG-MO-047), Docente de Sociología y Urbanismo - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNMdP.

each one constructing its own definition of addressee subject and how have been modified the practices of the dissatisfied housing necessity subjects according to their demand and organization capacities.

Our route tries to analyze how this process took place in the city of Mar del Plata (Province of Buenos Aires, Argentina), which show as special feature the contradiction between the existence of excessive of housing services destined to idle secondary housing and of high differential rent in opposition to the high deficit of housing and infrastructure of services addressed to the reproduction of Labour Force for the stable population of the city. The questions which orient the work are: How the subject addressees of the housing services have been conceptualized by different fractions from the government composing the State for the implementation of the housing policies in the last century?, and Which are the social practices and strategies that the different subjects deploy in relation to these services?. This process is analyzed from a socio-historical perspective at four moments associated to the different accumulation models.

Key words: Housing policy - social practices - strategies - statehood.

Recibido: 09.08.2009 Aprobado: 09.11.2009

Introducción

Consideramos la necesidad de satisfacción de un lugar dónde vivir como una de las condiciones materiales de la reproducción de la vida que ha variado históricamente y que ha tomado diversas formas en tanto su organización y provisión a lo largo del tiempo. Entonces, de qué hablamos cuando hablamos de problema habitacional. Evidentemente, si es una necesidad que debe satisfacerse para garantizar la reproducción de la vida, se transforma en problema cuando no están dadas las condiciones -de acuerdo a un standard “naturalizado” de cómo debe ser satisfecha esa necesidad en un sociedad en un momento determinado de su desarrollo- para satisfacerla. En el modo de producción capitalista, la “forma” adecuada de proveerse de una vivienda es a través del mercado de tierra y vivienda, mercado que históricamente ha ido expulsando a vastos sectores de la población.

Como expusimos en otro trabajo (Lado- Núñez, 2003), una manera de pensar el mercado relacionamente es abordarlo desde el concepto de campo - definido por lo que está en juego- que estará estructurado de acuerdo al capital acumulado -en tanto todo recurso o bien pasible de ser apreciado, producido y consumido- y sus posibilidades de distribución y apropiación. El mercado de tierra y vivienda así entendido, nos permite percibir a la tierra urbana como un bien producido colectivamente en la ciudad, pero apropiado individualmente a partir de la constitución del mercado de tierras. Es decir, en el campo urbano hay, por una parte, un interés genérico - compartido por todos los actores- que es la lucha por la apropiación del espacio; y por otra parte, intereses específicos definidos por la posición que cada uno ocupa en el campo.

Ahora bien, el campo de producción de tierra urbana ofrece continuamente nuevos bienes o nuevas

maneras de apropiarse de los mismos bienes por lo que es de suma importancia ver el papel que juegan los intermediarios: el Estado y el capital incorporador. En este marco, el Estado es conceptualizado como el conjunto dinámico, cambiante y conflictivo de relaciones entre clases que en una determinada sociedad expresan la dominación bajo formas aparentes de consenso, y cuya forma visible son los aparatos del estado en los que esta relación se materializa configurando diferentes estatalidades. (Roze, 2003)

La segmentación histórica del mercado de tierras -en su producción y oferta para los distintos sectores sociales -interviene en las posibilidades de representación colectiva de la ciudad y en la legitimación de las prácticas de apropiación del espacio. Para que el déficit en la satisfacción de esta condición -un lugar para vivir- sea percibido como problema es necesario que haya un colectivo medianamente organizado que demande por su solución, sea este colectivo correspondiente a una organización de las clases privilegiadas para “ordenar” el espacio físico y social o correspondiente a la organización de las clases dominadas que se movilizan para conseguir el corrimiento de los límites de las reglas establecidas en dicho.

En este sentido, y ubicándose en las posibilidades heurísticas del análisis de clases, Ralph Milliband (1991), identifica estos elementos de confrontación con lo que él denomina “presión desde arriba” -como presión de las clases dominantes para mantener el status quo del sistema o para aumentar las condiciones de explotación- y “presión desde abajo”, en tanto lucha de las clases subordinadas que puede adoptar la forma revolucionaria -tendiente al cambio de sistema- o

reformista -mejorar las condiciones de vida dentro del mismo sistema capitalista. Ésta última ha venido siendo la forma privilegiada de la presión desde abajo, fundamentalmente asociada a la ductilidad del capitalismo en su forma democrática y a la caída de los socialismos reales.

En este artículo analizaremos cómo -en la confrontación de estos dos tipos de presión y sus formas de manifestación- se han producido diferentes políticas habitacionales -cada una de ellas construyendo su propia definición de sujetos destinatarios- y cómo se han ido modificando las prácticas de los sujetos que tienen insatisfecha su necesidad habitacional de acuerdo a su capacidad de demanda y organización.

El análisis de las políticas habitacionales y su articulación con las estrategias, nos permite observar, en el sentido foucaultiano de lo anátomo y biopolítico, a los individuos y las poblaciones como blanco del poder, en un intento por desreificar los procesos sociales rompiendo con la visión substancialista de la sociedad que hace del yo, de la sociedad, de las instituciones o los valores substratos más o menos esenciales que pueden deducirse de algún mítico estado de naturaleza que justifica el orden social dado. (Murillo, 1996) En síntesis la construcción de las diferentes subjetividades y las estrategias desplegadas como producto de la confrontación con las distintas estatalidades.

Una de las investigaciones novedosas en su enfoque sobre el problema habitacional en Argentina es la de Yujnovsky (1984:8), quien analiza las políticas de vivienda implementadas por el Estado y el funcionamiento del sistema económico de la vivienda en sus

efectos sociales. (1984:8) El objeto teórico de su trabajo es el de la estructura social argentina, o sea que explica los problemas de la vivienda no en el “sector de la vivienda” sino en la naturaleza del sistema social y la acción del Estado.

Asimismo, este autor ha sido el primero en abordar la cuestión de la vivienda en un sentido más amplio no como vivienda aislada, sino teniendo en cuenta la configuración de servicios habitacionales tendientes a satisfacer necesidades sociales históricamente variables. Por tanto, su objeto de investigación son los “servicios habitacionales”, categoría que permite analizar relacionamente las viviendas entre sí y con los diferentes equipamientos que constituyen los consumos colectivos (salud, transporte, educación, etc.) que deben satisfacer necesidades sociales que varían dependiendo de cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico.

Por otro lado, hemos considerado las estrategias que despliegan los sectores que no pueden acceder al mercado dada la supremacía que en las sociedades capitalistas tiene el derecho de propiedad por sobre el derecho de alojamiento (Gazzoli y otros, 1989:1). Desde esta perspectiva, hemos tomado como antecedentes los trabajos de Grillo, Lacarrieu y Raggio, quienes desde una mirada de tipo antropológico y focalizando en estudios de caso, se han aproximado a las prácticas sociales que los diferentes sujetos despliegan con relación al acceso a la vivienda.

A la luz de estos aportes, nuestro recorrido pretende analizar cómo se ha dado este proceso en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina), que presenta como

particularidad la contradicción entre la existencia de excedentes de servicios habitacionales destinados a vivienda secundaria ociosa y de alta renta diferencial en oposición al alto déficit de vivienda e infraestructura de servicios destinados a la reproducción de Fuerza de Trabajo (FdT) para la población estable de la ciudad. Las cuestiones que orientan el trabajo son: ¿cómo han sido conceptualizados los sujetos destinatarios de los servicios habitacionales por las diferentes fracciones de gobierno que conforman el Estado para la implementación de las políticas habitacionales en el último siglo? y ¿Cuáles son las prácticas sociales y estrategias que los diferentes sujetos despliegan con relación a estos servicios? Este proceso se analiza a partir de una perspectiva histórica periodizada en cuatro momentos asociados a los diferentes modelos de acumulación

Los 4 momentos (o las cuatro estaciones)

En el país la implementación de políticas habitacionales puede agruparse, en distintos momentos, de acuerdo al análisis del accionar estatal. En general la diferenciación temporal se realiza a partir de la interrelación entre: políticas de desarrollo, políticas sectoriales, programas habitacionales y políticas de financiamiento (fuentes y recursos); que dan como resultado la diferenciación de tres momentos: el de modernización que va de mediados de la década del '40 al '70; el de crecimiento con equidad, de la década del '70 y '80; el de ajuste estructural, de la década del '90. La periodicidad marcada se basa en el análisis de variables económicas desarrolladas por Roffman y Romero (1973 y 1995) variables de política habitacional analizadas por Yujnosvsky (1984).

En nuestro caso, el análisis genealógico nos llevó al rastreo de la procedencia -entendida como la herencia- y la emergencia -el acontecimiento que permite que en un determinado momento se produzca la disrupción en la historia- del problema de la vivienda entendido como cuestión social, por lo que hemos delimitado cuatro momentos que podrían solaparse con los modelos de acumulación desarrollados por Torrado (1992, 2004a y 2004b). En cada uno de ellos hemos tomado la forma de estatalidad -entendida como producto de las coaliciones entre las diferentes fracciones de una clase- y los sujetos destinatarios de las políticas habitacionales, en articulación con la forma de adjudicación, las fuentes de financiamiento y los planes impulsados.

Podríamos adelantar que la extensión del modo de producción capitalista se ha desarrollado generando crisis sistemáticas que se han intentado superar a través de la implementación de distintos modelos de acumulación para garantizar la acumulación de capital, y que en dicho proceso, las diferentes fracciones que conforman el Estado han ido adoptando diferentes estatalidades conocidas en su cosificación como Estado liberal, Estado de Bienestar (en su expresión distribucionista y desarrollista) y Estado Subsidiario y Neoliberal.

A cada uno de los modelos de acumulación enunciado por esta autora le asignamos una caracterización general en referencia a la política habitacional resultante de las coaliciones y enfrentamientos descriptos. Los cuatro momentos serían entonces: el del higienismo al control social correspondiente al modelo agroexportador (1870- 1930); el de la cuestión social coincidente con el

modelo sustitutivo de importaciones justicialista (1945- 1955); el de la cuestión mercantil y la dependencia de la financiación con el modelo sustitutivo de importaciones desarrollista (1958- 1972); y el de la intergubernamentalidad de la sociedad civil con el modelo aperturista (1976- 2002).

A continuación se presentarán de manera sucinta las principales características de cada uno de los momentos de análisis enunciados.

Primeros antecedentes en la Política Habitacional. Del higienismo a la cuestión económica y social

El primer momento incluye desde los primeros antecedentes que se impulsan en materia de política habitacional a la cuestión del higienismo al control social, en donde los destinatarios son vistos como sujetos que necesitan ser educados, en lo que debía ser la forma de habitar. En esta etapa el control social es la forma de dominación, en concordancia con el modelo agroexportador que promovía para el país el papel de granero del mundo en la división internacional del trabajo y como forma de inserción en el sistema mundial-, dejando la cuestión de la vivienda individual librada al mercado. (Ver gráfico N° 1)

El tema se va transformando en una cuestión social de transfondo económico (Cravino, Ortecho y Cejas), dado el alto valor que la tierra urbana había adquirido en determinadas áreas centrales, y pasó a ser más “conveniente” en términos económicos demoler este tipo de viviendas y construir casas de renta en los terrenos vacantes; desplazando y segregando los conventillos y sus ocupantes, los obreros, del centro a la periferia. Como contrapartida a estas medidas

impulsadas para “controlar”, se desencadenó en la Ciudad de Buenos Aires un movimiento popular conocido como la huelga de los inquilinos de 1907.

Este es el primer movimiento social territorial organizado que transformó la huelga en un instrumento de lucha como la expresión de una actividad solidaria, sobre todo de mujeres y niños. Ante las demandas de los funcionarios de turno (Intendente Municipal y Ministro del Interior) y como respuesta a la presión desde abajo, el gobierno nacional entendió que: el Estado no debe inmiscuirse en áreas inherentes a la actividad privada ni entorpecer e interferir en el libre juego de la oferta y la demanda. (Suriano; 1983, 17) Finalmente, actuó cuando la propiedad privada estuvo en riesgo.

La financiación del sistema es privada (de crédito en cooperativas socialistas y religiosas) y municipal-estatal. El hábitat privilegiado de los sectores populares era el conventillo, en el que se superponían en un mismo espacio las relaciones de consumo y producción y relaciones de dominio internas y externas. Las relaciones de dominio externas estarían impulsadas desde la acción estatal y de organizaciones sociales de corte religioso que condenaba su forma de vida por cuestiones morales e higienistas. Las relaciones de dominio internas eran ejercidas coercitivamente por los encargados o el inquilino principal (representante de los propietarios) que usufructuaba la mejor habitación.

La ciudad de Mar del Plata no escapa a este modelo. El asentamiento de los primeros pobladores en la ciudad se produce hacia principios del Siglo XIX (Cova, 1994,18) a la vera del

Arroyo Las Chacras, en los alrededores del saladero. A partir de la llegada del FF.CC., en 1886, se transforma la base económica de la ciudad, de puerto saladeril a balneario veraniego. La población dedicada a la pesca se asienta en los alrededores de la Barraca de Luro o en la playa, al costado sur de la Rambla y en un lugar conocido como Los Barraquieri. Pero, la llegada de los primeros turistas produce el “desplazamiento” de estos pobladores de las inmediaciones de la Rambla al barrio de La Pescadilla (Colón y la Terminal Sud) al barrio de la Tierra del Fuego (Güemes y Rawson). Finalmente con el inicio de la construcción del puerto, en su emplazamiento actual, los pescadores serán trasladados violentamente (o relocalizados) definitivamente a esta área. (Nuñez, 2007b) El otro polo de asentamiento de la población local se dará en los alrededores del Hipódromo. (Ver Plano N° 1)

Los “veraneantes” de filiación europeizante de las clases altas porteñas consolidarán el área de La Loma de Stella Maris y playa Bristol, donde construyeron sus viviendas secundarias, en las que residían durante los meses de la temporada estival. Esta etapa ha sido definida como la villa de los porteños. (Cova, 1994) Se consolidó, además otra área, en el Barrio La Perla, destinada a “los nuevos ricos”, familias inglesas y de empleados ferroviarios, de carácter más modesto, ya que se hallaba al otro lado de Santa Cecilia. Asimismo su proximidad se localizarán los conventillos destinados a obreros y empleados (Jujuy, XX de Septiembre, Libertad, Colón y cerca de la estación del FF. CC.); de viviendas muy precarias de barro, madera y zinc, también en las cercanías de la estación. (Nuñez; 2007b)

La cuestión social de la vivienda

El segundo es el de la cuestión social de la vivienda: en el que los destinatarios son considerados a partir de la consolidación de los derechos de los trabajadores. Sólo se adquirirían derechos en tanto se adquiría la condición de trabajador sindicalizado con derechos de ciudadanía. El Estado se ocupa de la cuestión social de los trabajadores -durante el modelo sustitutivo de importaciones justicialista- redistribuyendo los ingresos hacia la FdT. La financiación del sistema es de redescuento, es decir el Estado es quien financia. Las estrategias de los sectores populares en esta etapa son la autoconstrucción en lote propio, la villa miseria y los hoteles pensión. (Ver Gráfico N° 1)

En esta etapa aparece una nueva estatalidad que adquiere la forma de Estado de bienestar en su versión latinoamericana. En ella intervienen como parte del Estado, los sindicatos y organizaciones obreras, desplazando la expresión de la presión desde abajo e incorporándola dentro de la coalición estatal. Como resultado de esa nueva coalición, aparece por primera vez enunciado el tema de la vivienda e incluido dentro de los derechos sociales de los sectores populares, redefinidos como “obreros, descamisados, etc.”

Para la implementación de la política habitacional el gobierno peronista utiliza cuatro instrumentos: los créditos hipotecarios, la construcción directa del Estado que consolidó como forma espacial al pabellón, la liberación de derechos de importación para los materiales de construcción y la prórroga de los contratos de alquiler. (Sánchez) Otras medidas fueron la prohibición de los desalojos urbanos (Ley N° 12.998); la posibilidad de subdivisión dominial en

un mismo lote (Ley de PH N° 13.512/48) que transformaría los grandes centros urbanos; y el congelamiento de los precios de alquiler (Ley N° 13.653).

La ciudad de Mar del Plata, en tanto villa balnearia, presenta desde los primeros años la paradoja de ser una ciudad de destino turístico con alto porcentaje de vivienda secundaria ociosa durante la mayor parte del año y un alto déficit habitacional para la población estable de bajos recursos. Esta tendencia que viene desde los años de su consolidación urbana, se verá fuertemente incrementada a partir de la implementación de la Ley de PH que provocará la renovación urbana de la Av. Colón, luego del área central y a partir de los años '70 consolidará la pantalla edilicia sobre el borde costero. El otro hecho que va a permitir la masividad del ingreso turístico es el traspaso de los hoteles a los sindicatos, junto a la promoción de otros beneficios sociales impulsados y el crecimiento del parque automotriz.

Los primeros tres complejos habitacionales que tienen prefactibilidad para su construcción en la ciudad; uno es de origen cooperativo y los otros dos están vinculados a Sindicatos. En total estos complejos determinan un parque habitacional de 501 viviendas destinados a 1.768 hab. Con relación a su emplazamiento, se encuentran en zonas alejadas de lo que hasta el momento era considerada como el área consolidada de la ciudad. Ninguno de los complejos llega a materializarse en esta etapa, algunos de ellos demorando en casi 40 años su construcción. (Ver Plano N° 2)

En la década del '40 se inicia el proceso de conformación de la que más tarde será conocida como Villa de Paso e inicialmente denominado “Villa del

Divino Rostro”, sobre tierras de dominio privado dentro de lo que era la jurisdicción del barrio Playa Grande (popularmente conocido como barrio Los Troncos). Constituía un área de 4 manzanas, cuyos límites estaban delimitados por las calles: Almafuerte, Lamadrid, Matheu y Arenales. La zona, por sus características de emplazamiento correspondía a un área de renta diferencial elevada, aunque no contaba con los servicios básicos de infraestructura. Los primeros ocupantes fueron migrantes de zonas rurales del noroeste argentino, principalmente de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, que se desempeñaban, tanto en sus lugares de origen como en la ciudad, como trabajadores estacionales de la gastronomía y de la construcción. Con el auge del turismo social fueron estableciéndose y convocando a otros coterráneos hacia la ciudad. De esta manera se fueron produciendo migraciones en cadena, familiares y por redes, que llevaron a la expansión del asentamiento entre los años '60 y '70 en concordancia con el crecimiento y expansión de la ciudad.

La cuestión mercantil de la vivienda

El tercer momento es el de la mercantilización y la financiarización del capital externo. El Estado se moderniza, reorganizándose y descentralizando sus aparatos de acción para ajustarse a la demanda de los organismos internacionales. Este hecho verticaliza las instituciones: en el nivel superior estaba la Comisión Nacional de Vivienda y el Planeamiento, le sigue el BHN quien financiaría la vivienda para sectores de ingresos con cierta afluencia, en el marco del Ministerio de Hacienda; y por último, la Dirección de Préstamos Personales y con Garantía Real (en adelante DPPGR) “institución financiera de la vivienda de interés

social” cuyo ámbito de funcionamiento sería el Ministerio de Trabajo. La financiación del sistema es de ahorro, es decir es el trabajador quien financia todo el sistema. Las políticas públicas no consideraron la posibilidad de brindar otras soluciones, como crédito para tierra y materiales de construcción. Por el contrario, los gobiernos implementaron normas restrictivas para la producción de tierra urbana al tiempo que no establecía regulación alguna para el funcionamiento del mercado. Paralelamente, hacia fines de la década del '70 las normas urbanísticas se hacen más restrictivas con la sanción del Decreto Ley PBA N° 8.912 sobre Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, norma que en su concepción tiene en cuenta sólo los objetos y que no contempla a la población comprendida dentro de la planificación en tanto sujetos de derechos. El costo social de la modernización estatal recae en los sectores populares que además quedan excluidos de la posibilidad de acceso al mercado laboral e inmobiliario. Ante la modificación de las condiciones objetivas de acceso a la vivienda y al trabajo, las estrategias de estos sectores son la toma de tierra y la ocupación ilegal de edificios. Aparecen en esta etapa los asentamientos que se diferencian de las villas en que corresponden a sectores urbanos excluidos, mientras que éstas últimas tenían su origen en la migración interna y de países limítrofes que se asienta en la grandes urbes, cuya base social generalmente era de origen rural. (Ver Gráfico N° 1)

En Mar del Plata la política habitacional no escapa a las restricciones impuestas a nivel nacional para el acceso a la vivienda de los sectores populares. Sólo se registra el pedido de prefactibilidad para 7 conjuntos habitacionales (2 de origen

cooperativo y 5 de sindicatos) en los límites o fuera del área ejidal consolidada, áreas que no contaban con servicios básicos de infraestructura, y que en total constituyen un parque de 949 viviendas destinadas a 5.612 habitantes. (Ver Plano N° 3)

Como planteamos en el punto anterior, la Villa de Paso continúa un fuerte proceso de expansión como consecuencia de las migración en red de las familias ya asentadas. Si bien para esos años seguían sin contar con servicios básicos de infraestructura, la localización privilegiada y la proximidad a los lugares de trabajo afianzaban su necesidad de continuar asentados en el mismo lugar.

Sobre finales de los `60`se producen los primeros reclamos para la relocalización del asentamiento por parte de la AVF del barrio San Carlos por impedir el “progreso y la consolidación de la zona” (Núñez, 2000b). El asentamiento no tenía representación barrial, pero lo más llamativo es que tampoco figuraba dentro de la representación política: en el estudio de la evolución de la Planta Urbana Construida el área de estudio permanece siempre como si fuera un área de terrenos vacantes. Su visibilidad política comienza a partir de los reclamos por la relocalización. Los diferentes actores utilizan los medios de prensa para instalar su visión sobre cómo debería ser el “uso correcto” del espacio de acuerdo a la posición y competencia de cada uno de los actores involucrados (municipio, vecinos propietarios de los barrios involucrados y habitantes de la villa). La visibilidad de lo que ahora comienza a ser un problema para el municipio hace que éste decida tomar cartas en el asunto.

La intergubernamentalidad de la sociedad civil

El cuarto momento o de la intergubernamentalidad de la sociedad civil (Murillo, 2006), en el que la atención de las políticas habitacionales se dirigen a los sectores desprotegidos como sustento de una actitud paternalista que a la vez que educa, brinda protección y mantiene el control bajo formas aparentes y consensuadas, por eso es que se viabilizan a través de instituciones intermedias de control como las organizaciones religiosas y los sindicatos y otras figuras como las ONGs y los municipios. En la segunda etapa de la modernización estatal se produce la descentralización hacia los gobiernos locales que son vistos como garantes de las relaciones más próximas y como forma de asegurarse el control de los recursos. (Ferrero, 1990: 5). La financiación del sistema es de redescuento, es decir es el Estado quien financia, no obstante lo cual muchas veces los destinatarios no llegan a iniciar los pagos de las viviendas ya que no se les otorga la tenencia definitiva, lo que termina llevando a un desfinanciamiento del sistema se desfinancia, necesitando una permanente inyección de capital para su mantenimiento. El sistema produce inclusión, pero de corte paternalista y como forma de control social y la estrategia privilegiada de los sectores populares continúa siendo la toma de tierras y los asentamientos. (Ver Plano N° 4)

En la ciudad de Mar del Plata es el período en el cual se construyen la mayor cantidad de conjuntos habitacionales, con un total de 29.857 viviendas destinadas a 103.187 habitantes, que siguen conservando -en la concepción espacial- la intervención tipo “pabellón”. A la vez se implementan Programas como el Procasa y Protierra, que en mayor medida son intervenciones a muy

pequeña escala, con un número de viviendas casi siempre de menos de 30 unidades. Asimismo se sanciona la Ley de Regularización Dominial, conocida como Ley Pierri y cuyo objetivo principal fue el de reducir el período para legalizar la tenencia de la tierra.

Este momento, además, comprende los actuales proyectos del Plan Federal del 2004 y 2005 y los nuevos anuncios presidenciales que contemplan la implementación de mayor cantidad de planes a través de cooperativas, como un intento de combatir el déficit habitacional y de empleo en un solo programa.

En la ciudad el PF desembarcó con tres tipos de operatorias, las que prevén la construcción de un total de 3.049 viviendas. Al 30-dic-2008 estaban en construcción 677 viviendas y esperaban su aprobación otras 534 viviendas. En la actualidad el Plan se encuentra paralizado por falta de fondos, siendo factible para su reactivación el uso de fondos provenientes del ANSSES (el costo social sigue recayendo en la familia trabajadora). Este tipo de operatoria coincide con otras implementadas desde la Provincia de Buenos Aires, como el Plan Dignidad, destinado en esta ciudad, a la relocalización del asentamiento de la Villa de Paso. El Programa incluía la construcción de 500 viviendas, 400 de las cuales estarían destinadas a los pobladores de la villa.

En la concepción original de la propuesta de relocalización se contemplaba ubicar desde dos hasta 10 familias por barrio de acuerdo a la densidad poblacional de los mismos. Oscar Pagni, por entonces Presidente del HCD, decía en 1997 a los representantes de las Sociedades de Fomento: “Seguimos manteniendo la idea de que se instalen en numerosos

lugares; estamos haciendo un relevamiento para determinar quién es quién, de modo de no perjudicar a nadie.” Siempre bajo la consigna de que los que en cada barrio se asienten tendrán “certificado de buena conducta y averiguación de antecedentes de la policía”. La Propuesta, desde sus inicios fue la de no trasladar en bloque el asentamiento. Al ampliar conceptos sobre el proyecto de trasladar los asentamientos de emergencia de Vértiz y Paso el entonces intendente, Daniel Katz, expresó "hemos enviado a la Provincia una carpeta con el detalle de las tierras que tenemos disponibles; queremos un esquema atomizado y no el traslado en bloque".

El Proyecto de erradicación ya había sido presentado en la legislatura de la PBA. La ley de Expropiación delimita un área de 6 manzanas en las que habita una población estimada en 1.500 y 1.900 personas. Se trata de unas 336 familias con un promedio de 5 integrantes por grupo familiar. La edad promedio es de 16 años y medio, dado que el 48% de la población tiene menos de 20 años y el 35% menos de 8 años. Otros datos en cambio establecen que los terrenos involucrados son 76 y que allí se asientan 192 familias. Las viviendas fueron construidas en tres barrios de la ciudad, estos son: El Martillo, Juan Gregorio Las Heras y Don Emilio. (Ver Plano de área de localización y de traslado).

En ese mismo período, se produce el conflicto de lo que es conocido como el Complejo Habitacional de las 1500 viviendas. El Complejo incluía 3 barrios y un total de 1.500 viviendas. Para tener acceso a este Plan los habitantes de la ciudad se inscribieron en el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano (IMDUR) allá por los años `94. Había anotadas 6.500

personas y se llegaron a construir 167 viviendas. Uno de los problemas era que la gente no tenía cómo demostrar ingresos en blanco por \$1.200 para acceder a un dúplex de tres ambientes y para “la casita común” \$900, según nos relatará Mirta.

Mirta es empleada municipal y la presidenta de la ONG Plan Habitacional 1.500 viviendas formada en el año 1996. Esta ONG se origina por el reclamo de regularización de la situación dominial sobre las viviendas otorgadas las que se habían entregado sin ningún tipo de equipamiento. Ni bien comenzaron a mudarse a las viviendas, los vecinos manifestaron que era una estafa porque no les otorgaban la tenencia. Corrieron rumores sobre la inundabilidad de los terrenos y se sospechaba que había un “negociado” detrás de la compra. Con el fin de reclamar por la regularización dominial, un sector de los beneficiarios se constituyeron en una Agrupación Barrial, con el objetivo de analizar las medidas a tomar. La primera medida que surge de las reuniones es la de “no pagar más las cuotas”. Mirta piensa, y así lo manifiesta, que con ellos “quisieron hacer un programa piloto de integración”, ya que para la distribución de las casas se estableció que hubiera empleados municipales, al menos “uno por manzana”, mezclados con otros de diferentes ocupaciones. Respecto de la causa judicial, nos comenta “que quieren dejar morir la causa, a pesar de que el intendente Katz nos prometió la escritura”.

Reflexiones finales

El tema de la vivienda popular se problematiza cuando ésta adquiere carácter social. Este hecho recién ocurrirá durante el gobierno de Perón, cuando se percibe a los servicios habitacionales como parte de los

derechos del trabajador. Así la vivienda adquirirá un carácter de social, masiva y sistémica –planificada- (acción de tipo sms). En el siguiente momento planteado, y como producto de la incorporación del capital extranjero, se pasará a una concepción mercantil, individual y no sistémica (acción de tipo mins) de la vivienda popular, consolidando su accionar de acuerdo con los requerimientos internacionales.

En los países centrales la cuestión de la vivienda masiva no había sido un problema y surge como una cuestión social a partir de las condiciones en que habitaban los obreros migrantes (del campo a la ciudad) como consecuencia de la Revolución Industrial y posteriormente como consecuencia de la 1ª post GM. La respuesta a este problema vino de manos del movimiento moderno (Le Corbusier). Esta teoría sostuvo que la vivienda no es un problema individual sino del Estado; que la cuestión de las formas, de la financiación y del estilo de vida deseado desde la concepción urbanística imperante, iban a verse garantizados (y así fue en muchos países desarrollados) a partir de la eficiente ejecución por parte de los responsables (Ferrero, 1990). En América Latina este concepto se implementa con la construcción de pabellones o “monoblocks”, pero sin el sentido original en el que habían sido concebidos (vivienda masiva, como elementos prefabricados, de rápida ejecución).

Con relación a la política de financiamiento en el segundo momento la forma de accionar estatal era de redescuento, es decir el que sostenía el sistema era el Estado; mientras que en el tercero era el ahorro la base. Es decir que el sistema era sostenido por la capacidad del ahorro del trabajador. En

el primer caso, es el Estado el que invierte y recupera la inversión sosteniendo el sistema en beneficio de la RFT, mientras que durante los gobiernos militares la RFT es el que sostiene el sistema, y el funcionamiento queda liberado al libre mercado. Si bien las propuestas se presentaban como de aplicación gradual, la librición al mercado se realizó de manera violenta. Por último, en el cuarto momento se combinan las dos formas de financiamiento. Durante los gobiernos de Menem, de neto corte neoliberal, la política de financiamiento se asemeja al periodo anterior (librado al mercado). Mientras que durante los actuales gobiernos de extracción peronista el sistema es de redescuento y de financiación por intermedio del BHN para los sectores de clase media.

Las políticas de vivienda impulsadas desde el Estado conceptualizan a los sujetos destinatarios como una forma de materializar sus acciones. Así es que éstos sujetos pasan a ser considerados: como sujetos que deben ser educados; como ciudadanos con derechos en tanto trabajadores, como sujetos frente al mercado; como sujetos desprotegidos (pobres merecedores). Como síntesis de los cuatro momentos señalamos.

a) Primer momento, del higienismo al control social: los destinatarios son vistos como sujetos que necesitan ser educados en lo que debía ser la forma de habitar en lo que se reconoce como el traspaso del higienismo al control social como forma de dominación.

b) Segundo momento, de la cuestión social de la vivienda: en el que los destinatarios son considerados a partir de la consolidación de los derechos de los trabajadores. Sólo se adquirirían derechos en tanto se adquiriría la condición de trabajador sindicalizado.

c) Tercer momento, de la mercantilización y la financiarización del capital externo. El estado se moderniza, reorganizándose y descentralizando sus aparatos de acción para ajustarse a la demanda de los organismos internacionales.

d) El cuarto momento, de la intergubernamentalidad de la sociedad civil, en el que la atención de las políticas habitacionales se dirigen a los sectores desprotegidos como sustento de una actitud paternalista que a la vez que educa, brinda protección y mantiene el control bajo formas aparentes y consensuadas, por eso es que se viabilizan a través de instituciones intermedias de control.

Desde el punto de vista de la Reproducción de la Fuerza de Trabajo (RFT) planteamos la vivienda como una de las condiciones materiales necesarias para su realización. La no satisfacción de esta condición nos lleva al análisis de las estrategias que despliegan las familias en relación al mercado inmobiliario y su posibilidad/imposibilidad de acceso al mismo. La vivienda pierde su sentido original como valor de uso y como condición para la reproducción de satisfacer una necesidad humana; y se transforma en un instrumento de dominación, poder, control y asistencialismo político. La existencia de este accionar estatal diferenciado, solo puede contrarrestarse a partir del accionar y la organización de los sectores menos favorecidos.

En este caso, las estrategias variarán de acuerdo a que sean considerados o no destinatarios de las políticas habitacionales. En el primer supuesto, deben someterse y no plantear cuestionamientos (en caso de que los tuvieran) a la conceptualización estatal. En el segundo supuesto, la inclusión vendrá de la mano de la capacidad de

organización y movilización de sectores próximos en el espacio social (relación entre RFT y toma de conciencia). Pero en ambas situaciones, la construcción de la subjetividad deberá constituirse teniendo en cuenta la definición que de ellos tiene la estatalidad en cada momento. Esta relación puede resultar en la redefinición de la conceptualización que de ellos se tiene o en la redefinición de sus estrategias para adecuarse a las políticas de turno. La perversión del sistema lleva a que muchas veces organizaciones colectivas que comienzan con reclamos de tipo colectivista de acceso a la vivienda, terminen reclamando por la propiedad privada individual del lote y de la vivienda, cuestión que es aprovechada desde la estatalidad perpetuando las formas de dominación y control.

Bibliografía

- Aboy, Ana (2005): *Viviendas para el pueblo*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Arella, Felipe (2006): “La vivienda popular. Aspectos Antropológicos y sociales de las cooperativas de viviendas”, en Documento de Trabajo N° 136, Área de Estudios en Cooperativismo y Mutualismo. Abril. Universidad de Belgrano. Disponible en: http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/136_arella.pdf. Consultado: 22- jun- 2009.
- Bourdieu, Pierre (1997): *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Anagrama, Barcelona.
- Bourdieu, Pierre (1993): *Cosas dichas*, Gedisa, Barcelona.
- Bourdieu, Pierre (1990): *Sociología y cultura*, Grijalbo, México.
- Cova, Roberto (1994): *Apuntes para una historia de la Arquitectura marplatense*. Área Editorial Sur Ediciones. Secretaría de Extensión Universitaria. FAUD- UNMdP. Mar del Plata.
- Cravino, Ana (2008): “Una historia sobre la transformación de la habitación popular en Buenos Aires El debate sobre los conventillos”. Ponencia presentada en el Seminario “Ciudad y programas del hábitat”, Universidad Nacional de General Sarmiento. Disponible en www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm. Consultado: 15- may 2009.
- Grillo, Oscar; Lacarrieu, Mónica y Raggio, Liliana (1995): *Políticas Sociales y Estrategias Habitacionales*. Editorial Espacio. Buenos Aires.
- Gutiérrez, Leandro (1992). “Cultura popular y casa propia”, en Luna, Félix (Director de la obra): *La vida proletaria. 1900 a 1914. Historia de la vida Argentina. Nuestro siglo. Crónica*. Editorial Sarmiento S. A. Buenos Aires.
- Ferrero, Aurelio (1990): “Actores y Roles en la Vivienda Popular”, en *Revista IFDA Dossier N° 78, Vol. Julio/Sept. 1990*. Suiza. (1990). Ed. IFDA. pp. 03- 10. Disponible en <http://www.ceve.org.ar>. Consultado: 3-mar- 2009.
- Foucault, Michel (1976), *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Ediciones Siglo XXI, México.
- Foucault, Michel (1979): “Nacimiento de la biopolítica”, en *Revista Archipiélago, N° 30*, pps. 119- 124. El texto traducido de *Naissance de la biopolitique*, resumen del Curso en el Colegio de Francia, publicado en *Annuaire du Colege de France, Paris, 1979*, pp. 367-372.
- Foucault, Michel (1991): *La verdad y las formas jurídicas*. Editorial Gedisa, Barcelona.
- Girbal Blacha, Noemí (2000) *La huelga de inquilinos de 1907 en Buenos Aires; Historias de la Ciudad, Una Revista de Buenos Aires, Año I, N° 5, agosto*, pps. 6 a 17.

- Lado, Silvana; NÚÑEZ, Ana y Verón Ana Lía (2000): Fragmentación institucional del campo urbano y poder simbólico, en Actas de Congreso, VI Congreso Argentino de Antropología Social “Identidad Disciplinaria y Campos de Aplicación”, Colegio de Graduados de Antropología, UNMDP, Mar del Plata, 14 al 16 de septiembre.
- Lado, Silvana y Núñez, Ana (2003) De la Comisión Por Mar del Plata a la Comisión de Desocupados. Transitando la relación Estado, sociedad civil y mercado en la gestión del desarrollo urbano. Trabajo presentado en el Seminario de Doctorado La Crisis en la Crisis, dictado por el Prof. Delich, Flasco, Argentina. Inédito.
- Lado, Silvana y Olivera, Adriana (2009): “Estrategias de Autogestión, Ciudadanía y Representación: O la lucha por la definición del “morador pleno” en un barrio marplatense”, en Revista I+A N° 11. FAUD. UNMDP. Mar del Plata.
- Lado, Silvana y Olivera, Adriana, (2010): Biopolítica habitacional. Una mirada sociológica a los sujetos destinatarios de los servicios habitacionales. Trabajo presentado en el XI Coloquio Internacional de Geocrítica: La planificación territorial y el urbanismo desde el diálogo y la participación, Buenos Aires, del 3 al 7 de mayo. (En evaluación)
- Martínez de Jiménez, Lydia Mabel (1997): Informe de la Actualización del Diagnóstico de Situación Habitacional. Versión Preliminar. Dirección Nacional de Políticas Habitacionales. Subría. de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sría. de Obras Púb. Mrio. de Infraestructura y Viv.
- Miliband, Ralph (1991): “Análisis de clases”, en: Giddens, A. (comp.) La Teoría Social Hoy, Alianza Editorial, México.
- Murillo, Susana (1996): El discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción del individuo moderno. Universidad de Buenos Aires, CBC, Buenos Aires.
- Murillo, Susana (coord.): (2006) “Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestión social” en Cuadernos de Trabajo N° 70. Ediciones del CCC. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires, Junio.
- Núñez, Ana (2000a): Morfología Social. Mar del Plata, 1874-1990. Tandil. Editorial Grafikart.
- Núñez, Ana (2000b): Los unos y los otros en la lucha por la apropiación del espacio. Publicado en página web de naya.org.ar.
- Núñez, Ana (2007a): “Política urbana y proceso de estatalidad”, en Revista Confluências. Revista interdisciplinar de Sociologia e direito, N° 9, Univ. Fed. Fluminense, Brasil, octubre.
- Núñez, Ana (2007b): Lo que el Agua (no) se llevó. Política urbana, Estado del poder, violencia e identidades sociales. Mar del Plata, entre siglos. Tesis Doctoral, FLACSO, Sede Académica Argentina, 2006. Disponible en: http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Tesis_Ana_Nunez.pdf
- Ortecho, Enrique. Cejas, Noelia (2007): “Nuevas Políticas, Nuevas Prácticas”, en Revista Savia, Sonora. México, Noviembre de 2007. N° 5, pp. 55- 58.
- Plan Nacional de Vivienda 1984- 1989 (1984). Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Ambiental. Diagnóstico de la Situación Habitacional. República Argentina.
- Rofé, Julia Virginia; Carlevino, Graciela; Buccafusca, Sandra (2005): “El Hogar Obrero y su Propuesta Habitacional a Principios del Siglo XX”, publicado en INFOESYS, Boletín de Economía social y solidaria. Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Año 1, N° 4, febrero.

Disponible en:
<http://www.elhogarobrero1905.org.ar>.

Consultado: 22- jun- 09.

Roze, Jorge Próspero (2003).
Inundaciones recurrentes: ríos que
crecen, identidades que emergen.
Ediciones al Margen. Colección Entasis.
La Plata. Argentina. Febrero.

Sánchez, Matilde: La ciudad que el
Peronismo imaginó. Disponible en: La
política de vivienda de los gobiernos
peronistas 1945/52 y 1952/55.
[http://www.adiatz.com.ar/vivienda/vivir.
htm](http://www.adiatz.com.ar/vivienda/vivir.htm). Consultado: 22- jun- 09.

Seminario Internacional: La ciudad para
todos. El desafío de la pobreza para la
Planificación y Gestión Urbano
Ambiental. (2004) Buenos Aires 6, al 8
de octubre. Presidencia de la Nación.
Comisión de Tierras Fiscales
Nacionales. Programa Arraigo.

Torrado, Susana (1992): Estructuración
social de la Argentina, 1945- 1983.
Editorial de la Flor. Buenos Aires.

Torrado, Susana (2004): “Ajuste y
cohesión social. Argentina: el modelo
para no seguir”, en Revista Tareas, N°.
117, mayo- agosto. CELA, Centro de
Estudios Latinoamericanos, Justo
Arosemena, Panamá, pp. 15- 24.
Disponible en:
[http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/li
bros/tar117/torrado.rtf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/tar117/torrado.rtf). Consultado: 20-
mar- 2007.

Suriano, Juan (1983): Movimientos
sociales. La huelga de inquilinos de
1907. Historia Testimonial Argentina.
Centro Editor de América Latina S.A.
Buenos Aires.

Yujnovsky, Oscar (1984): Claves
Políticas del Problema Habitacional
Argentino 1955 -1981. Grupo Editor
Latinoamericano. Buenos Aires.

Gráfico N° 1- Las cuatro estaciones

Fuente: elaboración propia.

Plano N° 1- Del higienismo a la
cuestión social

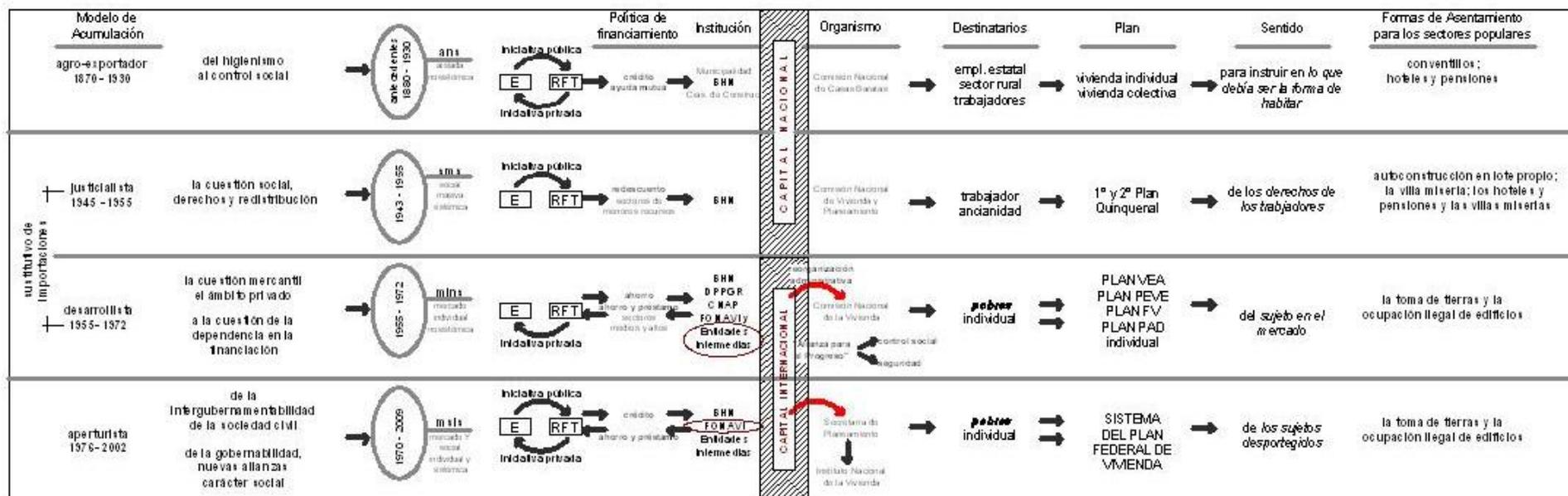
Plano N° 2- La cuestión social de la
vivienda

Plano N° 3- La cuestión mercantil

Plano N° 4- De la
Intergubernamentalidad de la sociedad
civil

Fuente: elaboración propia en base a datos de
Conjuntos Habitacionales y Ordenanzas
Municipales de la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon y de Torres Cano y Otros
(2001): Rehabilitación de Conjuntos
Habitacionales. UNMDP, y UNNE. Mar del
Plata. Pps. 63 a 6

Gráfico N° 1- Las cuatro estaciones

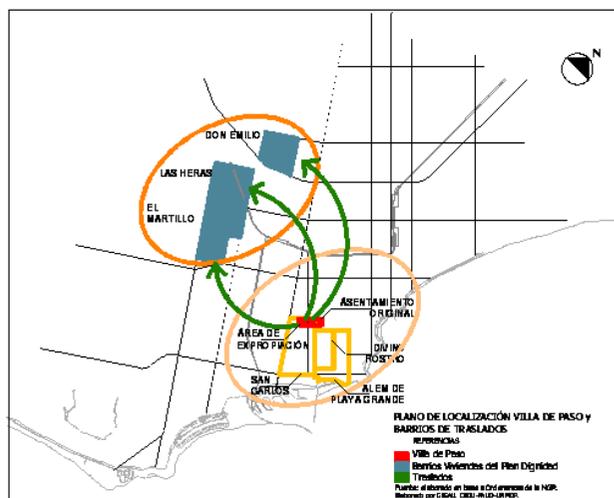


Cuadro N° 1- Total de Viviendas en Conjuntos Habitacionales de la ciudad de MdP.

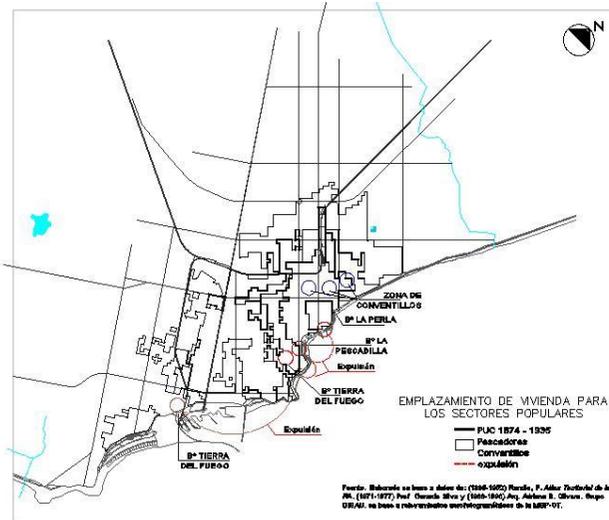
DATOS GENERALES	SUPERFICIE DE	TOTAL DE			
	parcela (m2)	viviendas	%	habitantes	%
antes 1970	54.252,62	501	1,46	1.768	1,60
1970 a 1974	175.034,08	949	2,76	5.612	5,08
1975 a 1979	1.646.060,17	6.402	18,63	7.372	6,68
1980 a 1984	1.826.122,20	12.566	36,58	46.849	42,44
1985 a 1989	8.423.996,58	5.978	17,40	26.637	24,13
1990 a 1994	48.665.079,99	3.472	10,11	13.840	12,54
1995 a 1999	561.493,73	1.439	4,19	8.489	7,69
previstos del 2000 en adelante	s/ datos	3.049,00	8,87	12.196,00	11,05
	61.331.801,38	34.356		110.380	

Fuente: elaboración propia en base a datos de Conjuntos Habitacionales y Ordenanzas Municipales de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón; de Torres Cano y Otros (2001); *Rehabilitación de Conjuntos Habitacionales*. UNMDP, y UNNE. Mar del Plata. Pps. 63 a 65; y páginas web del Plan Federal de Viviendas, con datos actualizados al 31- dic- 2008.

Fuente: elaboración propia.

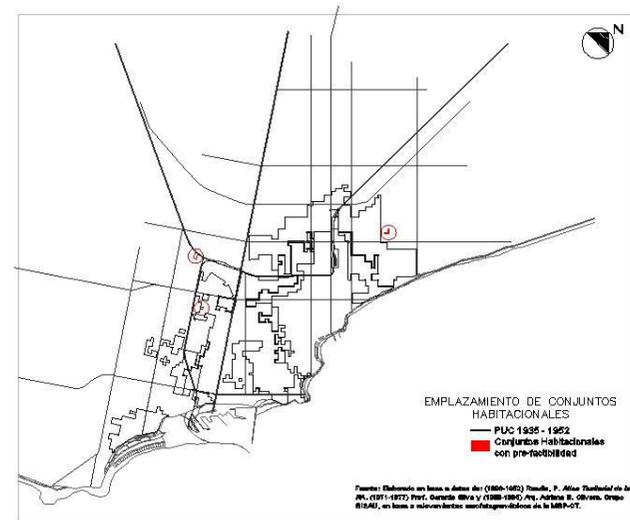


Plano N° 1- Del higienismo a la cuestión social

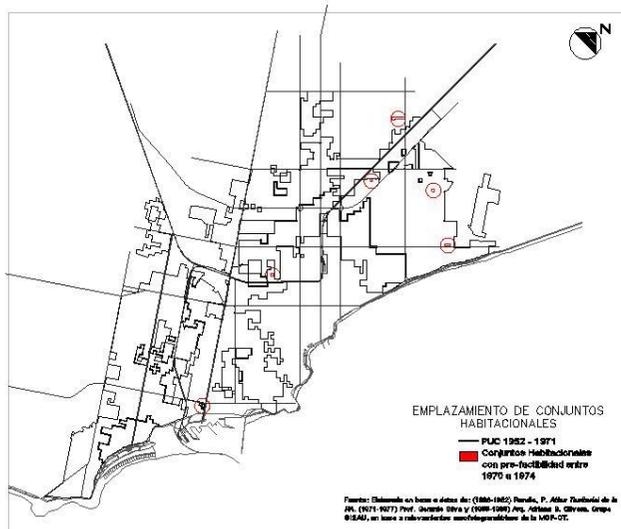


Plano N° 2- social de la

La cuestión vivienda



Plano N° 3- La cuestión mercantil



Plano N° 4- De la Intergubernamentalidad de la sociedad civil

